

CRÍTICA DE LA RAZÓN ARQUEOLÓGICA

Arqueología de contrato y capitalismo

Cristóbal Gnecco y Adriana Schmidt Dias

Compiladores

Colección

Perspectivas Arqueológicas

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CRÍTICA DE LA RAZÓN ARQUEOLÓGICA
Arqueología de contrato y capitalismo

CRÍTICA DE LA RAZÓN ARQUEOLÓGICA
Arqueología de contrato y capitalismo

Compilado por:
Cristóbal Gnecco
Adriana Schmidt Dias

Gnecco Cristóbal y Schmidt Dias Adriana.
Crítica de la razón arqueológica: arqueología de contrato y capitalismo. / Cristóbal Gnecco y
Adriana Schmidt Dias, (Compiladores). – Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2017.

312 páginas; ilustraciones; 23,5 x 16,5 cm - (Perspectivas arqueológicas).

ISBN: 978-958-8852-41-6

1. Capitalismo. / 2. Arqueología industrial. / 3. Patrimonio cultural - Protección. /
4. Trabajo calificado. / 5. Contratos de trabajo. / I. Gnecco, Cristóbal. / II. Schmidt Dias
Adriana. / III. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

306.36 SCDD 20

Catalogación en la fuente: Biblioteca Especializada ICANH



Ernesto Montenegro
Director general

Marta Saade
Subdirectora científica

Juan Manuel Díaz
Coordinador del grupo de Arqueología

Cristóbal Gnecco y Adriana Schmidt Dias
Compiladores

Nicolás Jiménez Ariza
Responsable de Publicaciones

Ivón Alzate Riveros
Coordinación editorial

Rodrigo Díaz Losada
Corrección de estilo

Patricia Montaña Domínguez
Diseño y diagramación

Primera edición, mayo de 2017
ISBN 978-958-8852-41-6

©Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017

Calle 12 n.º 2-41

Teléfono: (57 1) 4440544

Bogotá, D. C., Colombia

www.icanh.gov.co



El trabajo intelectual contenido en esta obra se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons del tipo "Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional". Para conocer en detalle los usos permitidos consulte el sitio web <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

Impreso por: Imprenta Nacional de Colombia,
carrera 66 n.º 24-09, Bogotá D. C.

CONTENIDO

Sobre arqueología de contrato	9
<i>Cristóbal Gnecco, Adriana Schmidt Dias</i>	

Arqueología y capitalismo

25-94

La arqueología como capitalismo del desastre.....	29
<i>Rich Hutchings, Marina La Salle</i>	

La arqueología y la lógica del capital: activando el freno de emergencia	59
<i>Yannis Hamilakis</i>	

Contratiempo. Arqueología de contrato o una trinchera en la batalla por los muertos	79
<i>Alejandro Haber</i>	

Arqueología de contrato: una perspectiva global

95-216

Arqueología de contrato en Sudáfrica: teoría viajera, memoria local y diseños globales.....	101
<i>Nick Shepherd</i>	

Arqueología de contrato, megaminería y patrimonialización en Argentina	123
<i>Ivana Carina Jofré</i>	

El multiculturalismo neoliberal y la arqueología de contrato en el norte de Chile	143
<i>Patricia Ayala</i>	

Arqueología distópica: la implementación de la lógica del capital en el manejo del patrimonio	163
<i>Nicolas Zorzin</i>	

La arqueología de gestión en Madrid. Atrapados en el
modelo de especulación capitalista del territorio 189
Carlos Marín Suárez, Eva Parga Dans

Arqueología de contrato en Brasil

215-307

Proyectos de desarrollo, violación de derechos
humanos y el silencio de la arqueología en Brasil..... 221
Loredana Ribeiro

En el borde. Arqueología, educación patrimonial
y derechos humanos en la Amazonía brasileña..... 239
Marcia Bezerra

Arqueología de contrato y pueblos indígenas:
reflexiones sobre el contexto brasileño 255
Fabiola Andrea Silva

Arqueología de contrato, colonialismo
interno y pueblos indígenas en Brasil.....271
Jorge Eremites de Oliveira

De la responsabilidad social de antropólogos y arqueólogos:
sobre contratos, represas y algunas otras cosas..... 291
Carlos Fausto

Sobre los autores

307-311

SOBRE ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO

*Cristóbal Gnecco y
Adriana Schmidt Dias*

LA RELACIÓN ENTRE ARQUEOLOGÍA Y DESARROLLO ES DE LARGA DATA, PERO HA ADQUIRIDO UNA nueva cara al tiempo que la expansión mundial del capitalismo aumentó su ritmo en las últimas tres décadas. Esa nueva cara —conocida como *cultural resource management* (CRM) en Estados Unidos y como *cultural heritage management* (CHM) en otras partes del mundo angloparlante— ha sido etiquetada como *arqueología de contrato* (AC, de aquí en adelante), una forma de relación en la cual la arqueología ofrece servicios profesionales a los proyectos de desarrollo (carreteras, oleoductos, líneas de conducción eléctrica, represas). Con el fin de hacer frente a los efectos previstos de la expansión capitalista, muchos países promulgaron legislaciones encaminadas a prevenir la eventual pérdida del patrimonio arqueológico. Las empresas responsables de esos proyectos fueron obligadas a pagar por evaluaciones profesionales que indicarían si hay evidencias arqueológicas presentes en las áreas objeto de intervención; si es así, tendrían que ser investigadas tanto como fuera posible. Como consecuencia, hoy en día la AC domina la práctica arqueológica en todo el mundo.

La AC es justificada por sus practicantes con cuatro argumentos: (a) amplía el mercado de trabajo de los arqueólogos al ofrecer una gran cantidad de oportunidades profesionales; (b) expande la comprensión del pasado mediante la investigación de un registro arqueológico desconocido hasta su exposición por los proyectos de desarrollo, a veces en zonas de frontera donde la investigación convencional no se había aventurado, por un sinnúmero de razones; (c) salva de la pérdida definitiva un patrimonio en peligro inminente e inevitable; y (d) educa en cuestiones patrimoniales (protección, administración, etc.), especialmente a las poblaciones locales que viven cerca o alrededor de los proyectos de desarrollo. Sin embargo, estos argumentos son débiles y problemáticos si se examinan en su modernidad, es decir, si se consideran contextualmente.

La expansión del mercado de trabajo es innegable porque la AC ha aumentado la disponibilidad de puestos de trabajo profesionales y no profesionales en un número

significativo. Puesto que su crecimiento es exponencial (como la expansión capitalista), necesita más arqueólogos dispuestos a trabajar bajo contrato. Este hecho ha tenido efectos colaterales dañinos. Para empezar, los planes de estudio arqueológicos (sobre todo a nivel de pregrado) son transformados o creados para satisfacer las necesidades contractuales. La AC ha fomentado profundas transformaciones curriculares, algo que no había logrado ningún otro evento en la historia de la disciplina. Así se han creado o se están creando nuevos programas de pregrado, caracterizados por su corta duración y su énfasis técnico¹, para producir en masa los arqueólogos que requieren las empresas contratistas. En ese proceso los lazos entre arqueología y antropología, ya débiles, han sido cortados; además, ha disminuido la posibilidad de que la disciplina reconstruya su aparato metafísico y ontológico, ya jerárquico y neocolonial, con lo cual se neutraliza su postura crítica con respecto al orden global. A pesar de esta formación, no es raro que los estudiantes de arqueología abandonen sus estudios para ingresar a las empresas contratistas (donde los salarios son relativamente buenos). En el caso (no inusual) de empresas de contrato dirigidas por arqueólogos que trabajan en contextos académicos, usualmente como profesores, sucede que la fuerza de trabajo es reclutada, sobre todo, entre los estudiantes; se les paga, es cierto, pero la parte del león va a los propietarios de las empresas y esto crea una situación obscena en la cual estos se convierten en empresarios capitalistas que apropian la plusvalía producida por sus estudiantes. Esta situación extraordinaria ha transformado, desvergonzadamente, lo que antes era una relación puramente académica en una relación capitalista.

Hay más sobre este tema y tiene que ver con la existencia del mercado como un acontecimiento inevitable. Es un hecho histórico bien conocido que el capitalismo se convirtió en la formación económico-social dominante en el mundo, debido a la creación generalizada de mercados (mercado de tierra, de trabajo, de materias primas). Su creación fue un acto histórico deliberado, no un acontecimiento inevitable. Fue tan deliberado que exigió transformaciones inmensas y rápidas, magistralmente representadas por Karl Polanyi (1997). Los gobiernos nacionales se comprometieron con la expansión capitalista mediante la adopción de políticas que transformaron el panorama

1 Ese énfasis técnico, a expensas de una educación contextual, no solo está orientado a una intervención más “científica” de la arqueología en las operaciones de contrato. En una operación verdaderamente moderna sirve la producción de trabajadores no críticos, aptos para insertarse en la parte media de una estructura piramidal en la que solo proporcionan un servicio neutral y objetivo, determinado y evaluado por administradores situados muy por encima de ellos.

político, social y económico de sus comunidades². Así se forjó un nuevo pacto social —entre la sociedad y el capitalismo— que reemplazó el pacto tan apreciado por los teóricos políticos de los siglos xvii y xviii —entre la sociedad y el Gobierno—. En fin, el argumento de la expansión del mercado de trabajo es tautológico: se expande porque las actividades contractuales necesitan arqueólogos pero también promueve actividades contractuales que proporcionan arqueólogos —cada vez más numerosos por la existencia del mercado de contrato—.

La promoción de lo “bueno” que la AC hace al mercado de trabajo —¿no debería expresarse al revés, evitando la hipocresía: lo “bueno” que el mercado hace a la AC?— usualmente es complementada por efectos menos mundanos y con intenciones superiores: la comprensión ampliada de un pasado en peligro de extinción y el fomento de la educación patrimonial. En cuanto a lo primero, el argumento postula que el desarrollo, sin duda, pone en peligro el pasado, al amenazar sus evidencias materiales —creando así un *pasado en peligro de extinción*—, pero también ofrece una oportunidad sin precedentes para investigar un pasado que, de lo contrario, permanecería sin exponer. El argumento es, por supuesto, también tautológico: el desarrollo crea un pasado en peligro de extinción que puede ser estudiado de manera rentable pero que no tendría que ser estudiado si no hubiera sido puesto en peligro por el desarrollo. Además, no enfrenta el origen de que el pasado esté en peligro (es decir, el desarrollo), sino que acepta como un hecho que ocurre y entonces busca sacar provecho de la situación. Así, la AC se convierte en una socia oportunista y cómplice del desarrollo. En una larga cadena de naturalización la AC acepta que el desarrollo amenace el registro arqueológico (el *sopORTE* naturalizado del pasado) porque es un hecho inevitable —así como es inevitable, natural, que la economía crezca de la mano de la expansión del capital—. El argumento es de una naturalización tan grosera que daría risa si no tuviera consecuencias tan devastadoras: si el desarrollo pone al pasado en peligro, mejor lo estudiamos antes de que desaparezca.

El argumento sobre la educación patrimonial postula que las evidencias del pasado expuestas por el desarrollo pueden convertirse en patrimonio y, después, enseñadas a las poblaciones locales. Los programas de educación patrimonial vinculados a la AC están en auge como medio de contrarrestar las críticas recibidas desde el mundo aca-

2 Irónicamente, esa transformación debilitó el sentido de *comunidad* en tanto que afianzó el de individuo, por lo general en desacuerdo con la primera con respecto a derechos legales y valores morales básicos como la solidaridad y el bien común.

démico, especialmente en cuanto a la inaccesibilidad de los hallazgos relacionados con los contratos y su aislamiento de las diversas partes interesadas, en su mayoría locales. La educación patrimonial ha permitido a la AC volverse *socialmente responsable* —una expresión antes reservada a las empresas—, un síntoma de que la arqueología ha entrado en una fase corporativa. La arrogancia, la colonialidad y la modernidad absoluta de la educación patrimonial vinculada a proyectos de AC son obvias: pretenden que las poblaciones locales son ignorantes acerca de sus pasados, que solo pueden existir si son expuestos por la disciplina³; y hacen de los educadores patrimoniales redentores del pasado, de la historia e, incluso, de las culturas de las poblaciones locales. La política compensatoria que la AC está adoptando a través de la educación patrimonial no es una política para el bien común, sino una política corporativa, monda y lironda. La responsabilidad social corporativa, vale la pena recordar, es una acción de una vía por medio de la cual el capitalismo “devuelve” a la gente (normalmente poblaciones locales afectadas por proyectos de desarrollo) lo que considera digno de dar —usualmente migajas sin importancia, que están lejos de compensar los daños sociales y ambientales que producen esos proyectos—. La responsabilidad social, como acción altruista, actúa junto con la resistencia local; mientras que la primera es ampliamente publicitada como buena, la segunda es rutinariamente criminalizada y silenciada. La coexistencia de la responsabilidad social y la resistencia local y el trato desigual que reciben —en los medios, en los ordenamientos jurídicos, en el aparato administrativo— destaca que la primera apoya y reproduce el capitalismo, desdeñoso de las luchas locales que desafían su operación.

Al ver de esta forma los argumentos que sustentan la AC y convencidos de que necesitaban una evaluación exhaustiva, capaz de sacudir un consenso (y silencio) profesional sospechoso, convocamos un simposio sobre el tema en Porto Alegre (Brasil) en junio del 2013. Financiado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y el Congreso Mundial de Arqueología (WAC), el simposio fue diseñado para evaluar, abiertamente, la relación entre la AC y el capitalismo. Nuestra invitación a participar, ampliamente difundida en la lista de correo del WAC, fue intencionalmente provocativa e hizo hincapié en la falta de reflexión crítica por parte de los arqueólogos de contrato, debido, principalmente, al hecho de que su práctica se ha convertido en un negocio. Los mensajes agresivos y negativos no se hicieron esperar y señalaron que nuestra invitación atacaba a la AC (¡y lo hacía!)

3 En el sentido moderno de desenterrar, descubrir, desnudar, es decir, excavar.

y que era elitista, sesgada y poco profesional. Tratamos de entender qué había provocado un estallido de rabia tan concertado y llegamos a la conclusión de que se debió a que mencionamos el lado comercial de la AC y su funcionalidad acrítica con los proyectos de desarrollo y porque pensamos que el hecho de que la mayoría de los arqueólogos en el mundo trabaje bajo contrato ha llevado a la disciplina a un *cul-de-sac* irreflexivo en el que las responsabilidades sociales y políticas son raras, por decir lo menos.

Desde el principio tuvimos claro que no queríamos un simposio balanceado. Queríamos posicionarnos ante una práctica que creemos perjudicial para la arqueología, por no decir para la vida de mucha gente y para el destino de la naturaleza. Por eso los ponentes que invitamos (muchos de los cuales escribieron artículos para este libro) no ofrecieron una visión balanceada, sino la perspectiva posicionada que mejor sirve a una reflexión crítica y transformadora de la arqueología actual. Por la misma razón, este libro no es una evaluación equilibrada de la AC. Está claramente sesgado porque ninguno de los artículos incluidos la defiende, sino que toma posiciones críticas contra ella, algunas bastante radicales. Estas páginas no incluyen visiones celebradoras de la AC porque conocemos bien los argumentos que esgrimen y los rechazamos.

Elegimos Porto Alegre como sede del simposio por una razón simbólica poderosa: la ciudad fue la sede del primer Foro Social Mundial en el 2001 (así como de otras cuatro ediciones posteriores), una reunión anual de organizaciones sociales para discutir y ofrecer alternativas al desarrollo a través de una globalización contrahegemónica. El primer principio de su Carta establece:

El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.⁴

En consecuencia, el ambicioso objetivo del simposio fue convertirse en un foro donde la complicidad de la arqueología con la expansión capitalista fuera impugnada y donde se pudieran ofrecer alternativas a esa relación. Esperamos que este libro pueda cumplir un papel similar.

4 Véase <https://alterglobalizacion.wordpress.com/foro-social-mundial-wsf/>

SOBRE ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO: NOTAS MÍNIMAS

El primer asunto que sale a la palestra cuando se sondea la AC es la relación entre la disciplina y la modernidad. La arqueología como disciplina surgió con el fin de hacer trascendente el tiempo (objetivo, neutral), para llevar una colectividad (la sociedad nacional) y una singularidad (el individuo moderno) a reconocerse mutuamente como totalidad y parte y unirlos en un espacio ceremonial, mnemónico. El tiempo moderno sirvió tres funciones: fue una medida de progreso (la sociedad supo dónde estaba, hacia dónde iba y de dónde venía); fue un medio de control (los sujetos tuvieron que ajustarse a un comportamiento temporal que estableció un origen, un camino y un destino); y fue signo de un intercambio simbólico (entre la sociedad y el conocimiento experto). La arqueología y la modernidad están estrechamente vinculadas; el origen de la primera está entrelazado con el destino de la segunda. Su camino común ha sido forjado por dos fundamentos filosóficos occidentales, la teleología y el evolucionismo, en virtud de los cuales el tiempo se ha universalizado con una sola dirección y un solo significado.

El lazo manifiesto de la AC con el desarrollo, el descendiente contemporáneo de la teleología del tiempo occidental, profundiza la larga relación de la arqueología con la modernidad. No la traiciona. Además, existe una preocupación puramente disciplinaria que las une: el registro arqueológico. El compromiso casi exclusivo de la AC con el registro arqueológico —a pesar de su relación problemática con el “público”— opera como el pretexto ético y ambiental para la destrucción de hábitats y comunidades” (Hamilakis 2007:29). El registro arqueológico —y no las personas, las comunidades, la naturaleza— es la justificación última de la AC y un interés de larga data de la temporalidad moderna.

Otro vínculo es la mercantilización del pasado. Varios académicos —desde Fredric Jameson hasta Zygmunt Bauman, de David Harvey a Beatriz Sarlo— han planteado desde hace tiempo que la mercantilización del pasado es una marca de la posmodernidad, una de sus diferencias con cualquier lógica cultural anterior. En ese sentido, la antigua relación de la arqueología con la modernidad ha cambiado en las últimas tres décadas: de ser instrumental en el suministro de datos empíricos para apoyar una temporalidad progresiva y un sentido de identidad, independientemente de su definición, se ha convertido en “una forma mercantilizada de práctica, donde los valores materiales, de conocimiento y patrimoniales son traducidos al valor económico” (Ferris y Welch 2014:78). Esta forma mercantilizada de la práctica está perfectamente plasmada en la AC: todo lo involucrado en el negocio (del arqueólogo al registro arqueológico, del informe al programa de educación patrimonial) circula bajo la forma de mercancía.

Por último, la relación de la arqueología con la política de la identidad es tan antigua como el Estado-nación. Eso significa que el conocimiento arqueológico (científico y de otro tipo) nunca ha sido neutral, sino políticamente comprometido con alguna forma de proyecto político-social. El vínculo de la arqueología con el desarrollo que crea la AC es solo otra forma que toma el compromiso político de la arqueología. La diferencia es que en este giro contractual el compromiso no es principalmente con una entidad trascendente que representa al pueblo (la nación), sino con una entidad trascendente (el mercado) que controla la política y la sociedad.

La AC es una descendiente tardía, pero legítima, de la arqueología académica contemporánea, no su producto bastardo, como ha sido retratada de forma rutinaria. De hecho, la AC ha sido criticada desde la academia, que fustiga su falta de rigor profesional⁵ y de estándares científicos, la pobre accesibilidad de sus hallazgos y las publicaciones casi insignificantes que resultan de sus trabajos. Estas críticas han creado un cisma: por un lado, están los arqueólogos académicos (reales, serios y profesionales); por el otro, los arqueólogos de contrato (meros oportunistas dedicados al negocio). El cisma también se puede ver desde otra perspectiva: por un lado, los arqueólogos de contrato (pragmáticos y devotos, comprometidos con el patrimonio); por otro lado, los arqueólogos académicos (elitistas, habitantes anacrónicos de una torre de marfil). De cualquier forma que se vea, el cisma reformula hasta la saciedad el relato del bueno y el malo. Más importante aún, el cisma ha tenido un efecto duradero: ha desdibujado la íntima relación entre la arqueología académica y la de contrato, ocultando que participan de la misma lógica. Después de todo, no hay muchas diferencias entre las dos, a pesar de sus publicidades divergencias. Parece, pues, que el énfasis en sus diferencias solo busca aislar a la arqueología académica de la lógica del capital, arrojando el agua sucia sobre la AC, que así se ha convertido en un señuelo —muy útil, para el caso, ya que también presta servicios adicionales, como la ampliación del mercado de trabajo—. El carácter deliberado de este aislamiento también es evidente cuando se considera la gran cantidad de hipocresía involucrada en el asunto. Es frecuente que los arqueólogos académicos hagan AC por los lados, sobre todo como un medio para obtener un ingreso adicional, como si nada estuviera en juego. Esta aparente ingenuidad, sin embargo, dificulta su posibilidad de

5 Esta afirmación es paradójica porque la ola de profesionalización que se ha extendido por el establecimiento arqueológico en las dos últimas décadas, especialmente en los países metropolitanos, está claramente relacionada con el crecimiento y la diseminación de la AC (véase Wylie 2002:229).

hablar sobre (¿contra?) la AC, ya que sus manos están sucias (y no precisamente por tratar con tierra).

Sorprendentemente, la mayoría de los análisis de la AC no ha abandonado este escenario maniqueo, sin importar que su impacto sobre la disciplina en la mayoría de los países es abrumador. Desde el lado académico (y, a veces, incluso también desde dentro de la AC) los reclamos urgen la adopción de mejores estándares (científicos) en la investigación de AC, la democratización del mercado de contrato (evitando el monopolio desenfrenado disfrutado por grandes empresas) y la adopción de regulaciones severas a nivel institucional. Un reclamo mucho menos frecuente pide que la AC, especialmente la que se realiza en tierras indígenas, cumpla con mandatos internacionales, como el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige la consulta previa⁶. Sin embargo, todas estas afirmaciones están dentro de los límites de la práctica disciplinaria, es decir, la AC se mide y se juzga por lo que es (o no es) desde una perspectiva disciplinaria, incluso profesional, por lo general vinculada a la retórica de la ciencia⁷. Rara vez (o nunca) es medida y juzgada desde una perspectiva contextual, como hacen los artículos reunidos en este libro.

La complicidad irreflexiva de la mayoría de los arqueólogos con la AC ha creado un espacio público en el cual el desarrollo necesita experticia arqueológica —como una forma de apaciguar la vigilancia de los protectores del patrimonio (ellos mismos proveedores de productos capitalistas / humanistas)— y los arqueólogos de contrato la proporcionan, fácilmente, a cambio de dinero. En esta perspectiva la relación entre la arqueología y la expansión capitalista aparece como una instrumentalidad inocente, como un mero servicio técnico. Esta inocencia puede ser vista, simplemente, como otro paso en la

6 Aunque puede ser considerada un paso en la dirección correcta —la dirección de la justicia social—, la consulta previa no es una panacea. Cuando se implementa en proyectos de desarrollo en los que circulan grandes cantidades de dinero —y en los que están involucradas grandes corporaciones transnacionales—, la consulta puede ser una simulación de respeto y democracia, pero solo es una formalidad asediada por la corrupción y las amenazas. Aun así, los gobiernos están empezando a considerar que la consulta es un obstáculo para el desarrollo acelerado que requieren; sin embargo, debido a que es una obligación internacional para los firmantes del Convenio 169 de la OIT —países de América Latina, sobre todo—, están encontrando maneras para volver expedita su realización, transformándola en un mero requisito burocrático que se puede acomodar o eludir con facilidad.

7 Este es el caso, incluso, cuando en la práctica de la AC está en juego la ética, usualmente discutida dentro de límites disciplinarios y en el ámbito de un registro arqueológico reificado.

adopción generalizada de procedimientos técnicos en arqueología, ofrecidos como medios disciplinarios para lograr certeza en la representación. Pero esta pretensión disciplinaria ayuda a ocultar que esos procedimientos están vinculados a una cosmología omnipresente y poderosa: la modernidad. Al presentar los procedimientos de investigación como meras operaciones técnicas en un vacío cultural los arqueólogos crean una alienación deliberada. Al convertirse en simples proveedores de servicios técnicos, supuestamente autónomos (universales, neutrales, objetivos) con relación al contexto, los arqueólogos han perdido cualquier rastro de estatus ontológico —se han convertido, cómo no, en apéndices inanimados de un aparato que excede en técnica lo que oculta de ideología—. En la AC esta alienación es aún peor porque busca separar a los arqueólogos de las consecuencias inmediatas de su trabajo en los ámbitos sociales y políticos —a diferencia de los arqueólogos académicos, las consecuencias de cuyo trabajo a menudo se diluyen en el tiempo y son, por lo tanto, bastante abstractas—.

Aunque la arqueología de contrato y la arqueología académica están mucho más estrechamente relacionadas de lo que normalmente se admite, hay una diferencia importante entre las dos: la AC ha movido la disciplina de una preocupación fundamental por el tiempo a una preocupación fundamental por el espacio. Al deshacerse de las evidencias del tiempo en el espacio, liberándolo para el desarrollo, la AC ha creado fricciones que ni siquiera existían antes. Esta diferencia no invalida sino que fortalece la relación íntima entre las dos clases de arqueología, un análisis que se hizo en el simposio de Porto Alegre —con Brasil como sede y, también, como foco principal porque experimenta la mayor parte de los graves problemas que genera la AC—. Un análisis basado en la experiencia de los acontecimientos relacionados con la AC en Brasil arroja abundante luz sobre los problemas que ocurren en otros lugares. Es por eso que la última sección de este libro se dedica a Brasil. Los problemas relacionados con la AC en ese país se replican en otros lugares, aunque en diferentes escalas. Por lo tanto, los análisis puntuales presentados por los autores de los artículos que componen esa sección son un buen lugar para articular reflexiones más amplias.

ACERCAMIENTO: BRASIL

El fin de la guerra fría produjo la dominación de la globalización neoliberal en la década de los noventa. En el nuevo orden mundial en transición, los países en desarrollo con proyectos políticos autónomos y grandes territorios y poblaciones (como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, agrupados bajo la sigla BRICS) comenzaron a ser considerados potencias emergentes. Los BRICS ahora tienen el 26% del territorio del planeta

y el 15% del PIB mundial. Según las estimaciones económicas, en el 2050 serán más ricos que los países del G6 —Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón— y concentrarán el 45% de la población y el 25% del PIB mundial. Las tendencias actuales en el capitalismo global indican que China e India serán los proveedores dominantes de tecnología y servicios, mientras que Brasil y Rusia serán los mayores proveedores de materias primas y alimentos (O'Neill 2001; Wilson 2003).

Desde el comienzo del nuevo milenio, la política exterior brasileña ha sufrido transformaciones orientadas a hacer frente al agotamiento de la matriz neoliberal de inserción internacional. El optimismo neoliberal fue sustituido en el gobierno de Lula da Silva (2003-2011) por la crítica a la globalización asimétrica y la búsqueda de socios estratégicos. Para hacer frente a esta nueva coyuntura internacional, el Gobierno brasileño puso en marcha en el 2007 el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para impulsar el crecimiento económico. El componente básico del PAC es la infraestructura (saneamiento, vivienda, transporte, energía y recursos hidroeléctricos), además del crédito, la mejora del sistema tributario y la adopción de medidas fiscales de largo plazo. Entre el 2007 y el 2010 el PAC recibió 250 billones de dólares con el objetivo de lograr un crecimiento anual del PIB de 5% (Silva 2013; Visentini 2013; Visentini y Silva 2010). Aunque la actual crisis económica mundial ha desacelerado las economías emergentes no ha afectado el programa de desarrollo llevado a cabo en la última década. Como en la mayoría de los países, los proyectos de desarrollo del PAC tienen que obtener licenciamiento ambiental, uno de cuyos componentes es la evaluación arqueológica de las zonas que van a ser intervenidas. Por eso los proyectos del PAC han ampliado el mercado de trabajo para los arqueólogos brasileños en una forma sin precedentes. Actualmente más del 95% de los arqueólogos activos en Brasil trabaja en proyectos de contrato. Los arqueólogos contratados, vinculados a un capitalismo en auge y a sus obras de infraestructura resultantes, han perdido independencia y capacidad crítica y trabajan con proyectos de desarrollo que afectan negativamente a las poblaciones humanas y a los derechos de la naturaleza. Además, la AC está transformando rápidamente los planes de estudio e incluso traza los caminos disciplinarios.

Al igual que en otras partes del mundo, en Brasil la AC está vinculada a la expansión capitalista; como en otras partes del mundo, su crecimiento exponencial solo se puede entender contextualmente. Bajo la ideología del crecimiento, que implica que la economía se comporta como un organismo vivo, los proyectos relacionados con el PAC han sido impulsados sin tener en cuenta lo que encuentran en su camino. En el proceso han sido violados los derechos de los pueblos y la naturaleza. En un país ávido de desarrollo y dispuesto a acelerar su ritmo de crecimiento económico no es de extrañar que

una de las preocupaciones más acuciantes sea aumentar la producción de energía. Como resultado se han construido o están en fase de construcción inmensas plantas hidroeléctricas⁸. Las grandes áreas que inundarán están, sobre todo, en territorios indígenas y campesinos y en la cuenca del Amazonas. Su construcción, por lo tanto, afecta gravemente a miles de personas y a miles de hectáreas del frágil ecosistema amazónico. Esta situación fue denunciada hace algunos años por Zhouri y Oliveira (2007), quienes destacaron la enorme desigualdad de las fuerzas que luchan a favor o en contra de las represas, creando una situación en la que “se perpetúan políticas socialmente injustas y ambientalmente insostenibles, ya que las comunidades ribereñas luchan contra una lógica reificada que las convierte en objetos en el paisaje ‘natural’” (Zhouri y Oliveira 2007:120). La violencia ha estallado con frecuencia porque las comunidades afectadas reaccionan en contra de las obras de los proyectos, con la consiguiente intervención de las fuerzas policiales para “proteger” el interés del sector eléctrico. Los proyectos relacionados con el PAC han estado plagados de conflicto y violencia. En este escenario las disciplinas académicas han sido llevadas a primer plano. Mientras que algunas (como la antropología y la ciencia política e, incluso, ciencias duras como la biología) toman partido por la defensa de la vida, la solidaridad y el bienestar, la arqueología no lo ha hecho. Su elocuente silencio surge, en su mayor parte, de su relación acrítica e instrumental con el desarrollo.

El caso más significativo ocurrió a mediados de la primera década de este siglo en torno a una enorme represa que se estaba construyendo en el río Culuene, en la cuenca amazónica. Además del efecto devastador sobre el medio ambiente resultante de la construcción de la represa se violaron los derechos (tradicionales y de otro tipo) de los pueblos indígenas que habitan en la zona. En el 2004 los habitantes indígenas locales notaron que la represa estaba ya en construcción, sin haber sido consultados, con lo cual se violó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Brasil en el 2002⁹. Ante ese hecho se movieron con rapidez y se apoderaron de las obras, con el argumento de que un sitio sagrado iba a ser inundado y se iban a ver afectados los recursos pesqueros (de los que dependen en gran medida). Después de largas batallas legales para detener o impulsar la construcción Culuene recibió la aprobación de la agencia ambiental

8 Una de ellas, Belo Monte, acosada por conflictos de toda clase que paralizaron su construcción por varios años, ahora se está construyendo a toda marcha. Cuando se termine será una de las hidroeléctricas más grandes del mundo en términos de capacidad instalada.

9 Esta parece ser una práctica frecuente del gobierno brasileño. La construcción de Belo Monte también inició sin consultar a la población indígena local. Véase, en este sentido, <http://otramera.com/radar/la-oit-denuncia-que-brasil-violo-el-convenio-169-en-el-ingu/1667>

brasileña y la represa finalmente fue construida. En la aprobación fue determinante el concepto emitido por una empresa de AC que indicó que el sitio sagrado por el cual estaban luchando los indígenas estaba en otra parte. El antropólogo Carlos Fausto (este volumen) censuró la aprobación de Culuene, por motivos ambientales y culturales, y también el concepto emitido por la empresa de AC, con respecto al cual señaló profundas deficiencias, cuando no errores manifiestos. Además, preguntó: “¿Cuáles son los mecanismos públicos que impiden la producción de un círculo vicioso entre los empresarios y las empresas de consultoría? ¿Cuál debe ser el papel de los órganos públicos y de las asociaciones científicas en este proceso?” (Fausto, este volumen). Después de considerar respuestas a sus propias preguntas, declaró: “Así, sólo puedo concluir, una vez más, que en la ciencia de contrato lo más importante es el contrato y no la ciencia... ¿O es que en Brasil el contrato se convirtió en un fin en sí mismo?” (Fausto, este volumen). El caso Culuene expuso la tautología insalvable en la que, usualmente y por razones de conveniencia económica, está atrapada la AC: la compañía constructora necesitaba demostrar en los tribunales que ningún sitio sagrado indígena iba a ser afectado por el proyecto. A este efecto contrató a una empresa de AC para que proporcionara la información necesaria para sustentar su reclamo. Entonces la empresa de AC manifestó que in ningún sitio sagrado indígena iba a ser afectado por el proyecto! Esto es así porque las empresas de AC con frecuencia se acomodan a las presiones y los intereses de la parte para la que trabajan. Al hacerlo no solo violan los derechos de diferentes comunidades y de la naturaleza, sino también el “interés supremo” que, supuestamente, se esfuerzan por proteger: el registro arqueológico. Este último se ve comprometido cuando y donde el desarrollo está presente, lo cual revela que es el desarrollo el que establece el destino del registro arqueológico —pero raramente al revés, como a menudo argumentan los practicantes de la AC al defender su independencia y su integridad profesional—. El desarrollo se convierte en el árbitro final y en la entidad trascendente / inmanente que decide el destino de seres animados e inanimados —incluidos los arqueólogos, el registro arqueológico y el pasado que supuestamente encarna—.

A raíz de estos acontecimientos Fausto (s.f.) pidió a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) y a la Sociedad de Arqueología Brasileña (SAB) “iniciar una profunda discusión” sobre lo que llamó “ciencia de contrato” y sus múltiples implicaciones. Sorprendentemente, la SAB ha mantenido un llamativo silencio hasta la fecha¹⁰. Esto

10 Hay excepciones, como la “Nota de posicionamiento en solidaridad con los pueblos de la cuenca del Tapajós”, aprobada en el encuentro de la Regional Norte realizado en Macapá en agosto

puede estar relacionado con el hecho de que las empresas de AC y las corporaciones de desarrollo para las que trabajan patrocinan las reuniones bianuales de la SAB y otras de sus actividades, con lo cual en cierta medida influyen en su contenido, y también con que varios miembros de la SAB trabajan para empresas contratistas. Los hallazgos relacionados con AC se presentan, con frecuencia, en los congresos de la SAB —que se convierten, de esta manera, en foros académicos que legitiman las prácticas contractuales—, pero las reflexiones críticas sobre las implicaciones sociopolíticas de la AC están conspicuamente ausentes.

Otra área en la que la AC ha dejado su impronta en Brasil es la educación patrimonial, ampliamente promovida como una forma de “abrir y legitimar” espacios académicos para que la disciplina se articule con la comunidad y como una manera de educar al público en asuntos que, se supone, solo la arqueología es capaz de fomentar. Sin embargo, “abrir y legitimar” espacios académicos a la arqueología articulada con la comunidad y, al mismo tiempo, prestar servicios profesionales a empresas de desarrollo que violan todo tipo de derechos no es una actitud contradictoria sino cínica¹¹. También es una manifestación de la fase corporativa en la que ha ingresado la arqueología, en la cual sobresale la “responsabilidad social”. Este cinismo, mezclado con la ideología corporativa, ha pasado desapercibido o ha sido recibido con un silencio complaciente, sobre todo porque algunos de sus perpetradores han logrado infiltrarse en espacios institucionales y académicos. De hecho, la complicidad entre el mundo académico y las empresas de contratos es notoria en Brasil. A pesar de las críticas que la AC recibe de los círculos académicos, el hecho es que algunos propietarios, socios o empleados de empresas consultoras también trabajan en el ámbito académico. La situación empeora cuando esos mismos individuos también ocupan puestos en las instituciones encargadas de establecer las políticas académicas a escala nacional. El resultado de esta mezcla perversa es simple: Brasil ha sido testigo de una explosión de nuevos programas de pregrado, bási-

del 2014. A pesar de que es concreta y no comprensiva, quizás indique un cambio de rumbo en la conciencia política de la SAB. Véase http://www.sabnet.com.br/informativo/view?TIPO=1&ID_INFORMATIVO=247. También han ocurrido movidas inesperadas de la SAB en los últimos meses, como señalamos en la introducción a la última sección del libro.

11 Belo Monte es, una vez más, el escenario que ilustra esta paradoja, debido a la reciente promoción de un “sitio-escuela” en la obra para entrenar estudiantes en arqueología de campo, muy criticada en una carta abierta firmada por varios arqueólogos académicos. Véase <http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/a-destruicao-em-belo-monte-virou-atracao-o-sitio-escla-3109.html>

camente técnicos (Bezerra 2008; Schaan 2009), claramente destinados a capacitar a los muchos arqueólogos que el mercado de contrato necesita con ansiedad.

En este nuevo contexto profesional, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) es responsable de asegurar la mediación entre los intereses de los empresarios y su conformidad con la legislación patrimonial. Sin embargo, el “control de calidad” de la AC (es decir, la arqueología gobernada por la lógica del capital) se realiza de acuerdo con los criterios de eficiencia de las empresas contratistas, usualmente comprometidas con el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos para los cuales fueron contratadas. La importancia de la AC para el desarrollo es tan sensible (porque puede detener la construcción de infraestructura) que su manejo por el IPHAN está bajo una cuidadosa vigilancia gubernamental, especialmente en relación con las investigaciones que se realizan en los proyectos de desarrollo que el Gobierno considera cruciales. Más aún, en los últimos años la agenda desarrollista creó una máquina tecnocrática que controla la investigación arqueológica y consolidó prácticas institucionales autoritarias, entre ellas el surgimiento de vacíos legales que permiten a las empresas prescindir de la AC, delegándoles la decisión final sobre lo que debe ser preservado¹².

DESENREDANDO LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO

La situación de la AC en Brasil que acabamos de describir sirve para ampliar nuestros argumentos; sirve para que sean generales. Para empezar, pide desenredar la relación de la AC con el contexto más amplio en el que opera. Para desenredar la AC necesitamos realizar su vivisección; por ello queremos decir, exactamente, lo que dice de ese término el diccionario en línea de la Real Academia Española (RAE): “Disección de los animales vivos, con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones patológicas”. La arqueología es un animal vivo y la tarea que nos hemos propuesto busca exponer sus patologías, entre las cuales su complicidad con el capitalismo y el desarrollo ocupa un lugar destacado. Una característica de esta patología es la reificación y mercantilización del registro arqueológico y, por extensión epistemológica, del pasado que encarna.

12 En ese sentido véanse en la página del IPHAN (<http://portal.iphan.gov.br>) la Resolución Interministerial n.º 60 del 24 de marzo del 2015 y la Instrucción Normativa n.º 01 del día siguiente. El gobierno interino de Michel Temer, además, está discutiendo modificaciones a la legislación ambiental que relajarían, aún más, las intervenciones arqueológicas.

El pasado (en su *locus* espacial) se convierte en una cosa y una mercancía que se negocia, mide, encajona y dispone.

La ingenua peligrosidad de retratar a la AC como un mero servicio técnico —que pone de relieve el hecho de que las transformaciones curriculares diseñadas para satisfacer las necesidades de contrato están orientadas a aspectos técnicos de todo tipo— disfraza su compromiso con el desarrollo. Incluso podemos extremar el argumento para afirmar que la AC pretende ser autónoma con relación a las condiciones contextuales, puesto que ofrece, simplemente, una experticia técnica. Sin embargo, como el caso de Brasil lo muestra, la investigación de la AC responde, sobre todo, a las necesidades del desarrollo, lo que compromete su independencia y su pretendida autonomía académica. Además, se crea una distorsión ideológica cuando “la sostenibilidad socioambiental” (que incluye la “sostenibilidad temporal”, por decirlo de alguna manera) realmente es “sostenibilidad capitalista”, en la cual la responsabilidad social empresarial desempeña un papel clave y cuenta con un importante apoyo en la AC a través de la educación patrimonial.

Desenredar la AC es un primer paso para deshacer los males que ha contribuido a producir a la arqueología, sin duda, pero también a la sociedad y a la naturaleza. Este paso necesario se puede complementar con un activismo político destinado a hacer frente a la concepción del desarrollo como un tropo maestro ahistórico y de la AC como una actividad técnica descontextualizada. Este llamado al activismo se articula con lo que Gustavo Esteva llamó “formas poseconómicas” basadas en redes de conocimiento y acción, “coaliciones de ciudadanos para implementar los controles políticos en la economía con el fin de reinsertar las actividades económicas en el tejido social” (Esteva 1996:73), de donde fueron extraídas, retóricamente, con el fin de que no tuvieran que rendir cuentas a nadie. Ya es hora de que la AC rinda cuentas a la sociedad y a la naturaleza, por no decir a la arqueología y a sus practicantes.

REFERENCIAS CITADAS

Bezerra, Marcia

2008 Bicho de nove cabeças: os cursos de graduação e a formação de arqueólogos no Brasil. *Revista de Arqueologia* 21(2):139-154.

Esteva, Gustavo

1996 Desarrollo. En *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*, editado por Wolfgang Sachs, pp. 52-78. Pratec, Lima.

Fausto, Carlos

s.f. Ciência de contrato e o contrato da ciência: observações sobre o laudo da empresa Documento sobre a PCH Paranatinga II (rio Culuene, MT). <http://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2317>, consultado el 23 de agosto del 2016.

- Ferris, Neal y John Welch
 2014 New Worlds: Ethics in Contemporary North American Archaeological Practice. En *Ethics and Archaeological Praxis*, editado por Cristóbal Gnecco y Dorothy Lippert, pp. 69-92. Springer, Nueva York.
- Hamilakis, Yannis
 2007 From Ethics to Politics. En *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*, editado por Yannis Hamilakis y Philip Duke, pp. 15-40. Left Coast Press, Walnut Creek.
- O'Neill, Jim
 2001 *Building Better Global Economic BRICS*. Global Economics, Paper 66.
- Polanyi, Karl
 1997 *La gran transformación*. La Piqueta, Madrid. [1944].
- Schaan, Denise
 2009 A arqueologia brasileira nos trinta anos da SAB. En *Construindo a arqueologia no Brasil: a trajetória da Sociedade de Arqueologia Brasileira*, editado por Denise Schaan y Marcia Bezerra, pp. 277-295. SAB / GK Noronha Editora, Belém.
- Silva, André
 2013 Brasil, potência emergente: desafios do desenvolvimento e da inserção internacional. En *BRICS: as potencias emergentes*, editado por Paulo Visentini, Gabriel Adam, Maíra Vieira, André Silva y Analúcia Pereira, pp. 123-161. Editora Vozes, Petrópolis.
- Visentini, Paulo
 2013 *A projeção internacional do Brasil (1930-2012)*. Elsevier, Río de Janeiro.
- Visentini, Paulo y André Silva
 2010 Brazil and the Economic, Political, and Environmental Multilateralism: The Lula Years (2003-2010). *Revista Brasileira de Política Internacional* 53:54-72.
- Wilson, Dominic y Roopa Purushothaman
 2003 *Dreaming with BRICS: The Path to 2050*. Global Economics, Paper 99.
- Wylie, Allyson
 2002 *Thinking from Things. Essays in the Philosophy of Archaeology*. University of California Press, Berkeley.
- Zhourí, Andréa y Raquel Oliveira
 2007 Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas. *Ambiente & Sociedade* X(2):119-135.

ARQUEOLOGÍA Y CAPITALISMO

ARQUEOLOGÍA Y CAPITALISMO. CAPITALISMO Y ARQUEOLOGÍA. DE CUALQUIER FORMA QUE SE BARAJE, permanece la relación. Una relación bicentenaria, o más, si pensamos que la arqueología es moderna y la modernidad es la (onto)lógica cultural del capitalismo. Que la relación entre los dos permanezca no quiere decir, sin embargo, que no haya cambiado: en las tres últimas décadas adquirió nuevos matices porque la disciplina afinó su maquinaria filosófica para dar cabida a los cambios multiculturales y a las crecientes necesidades de las expansiones capitalistas —que generalmente ocurren en las fronteras donde los *otros* de la modernidad aún viven—. Estos últimos cambios han sido cobijados con el nombre genérico —y acertado— de arqueología de contrato, porque la disciplina ahora opera bajo términos contractuales que predeterminan sus actuaciones, sus hallazgos y sus silencios. Hoy, con las políticas disciplinarias redefinidas alrededor del multiculturalismo y en el contexto de la posmodernidad y el neoliberalismo, la práctica de la arqueología ha seguido un camino básicamente instrumental, manifiesto en la manera como el pasado con el que trata, y del que se sabe su guardiana más estimada, circula bajo la forma de mercancía y en la manera como es consumido por públicos ávidos de un contacto con el tiempo acontecido —desde la experiencia corporal directa de los parques históricos temáticos hasta la nostalgia promovida por la publicidad—. También ha ocurrido la mercantilización del arqueólogo (que vende su trabajo al mejor postor en el mercado de contrato) y de sus productos (los informes técnicos por cuya producción se paga) en los contextos contractuales en los cuales los practicantes disciplinarios satisfacen las necesidades del capital y el desarrollo. El impacto de la arqueología de contrato ha sido tan grande que un porcentaje mayoritario de los practicantes disciplinarios en el mundo trabaja para ese mercado creciente. La magnitud de ese movimiento, sin embargo, no ha estado acompañada de una reflexión sobre sus razones y sus consecuencias. Mientras en el campo académico el consenso disciplinario fue hecho añicos desde los años ochenta por la aparición de reflexiones interpretativas, no positivistas, en el campo de contrato reina un silencio preocupante, señal de que el consenso positivo ha sido rehecho alrededor de lo gerencial, lo técnico, lo neutro. Los reportes de los proyectos de contrato son rechazados por el campo académico, pero

también son generosamente agradecidos, aunque nunca se diga; al fin y al cabo, es en ellos donde reina el empirismo despreocupado (y, por contera, pagado) que tanto gusta a la disciplina.

Este libro, no solo esta sección en particular, quiere dejar en claro que la arqueología de contrato es un tema sobre el que se debe hablar, y en abundancia, porque el establecimiento disciplinario ha callado al respecto. La ha criticado, sí, por sus estándares laxos y fáciles, pero no la ha fustigado por su complicidad, profunda y perversa, con el desarrollo. No la ha criticado, porque también se lucra de los contratos. La institucionalidad disciplinaria celebró (y aún celebra) la llegada de la dimensión contractual como un evento redentor, como si allí estuvieran encarnadas las incumplidas promesas de financiación y trabajo para todos; pero esa celebración está contenida en los límites disciplinarios y castiga cualquier posibilidad de reflexión contextual. Por eso la arqueología calla. Silencia una violencia no dicha de la que participa la arqueología de contrato de manera complaciente: la violencia del desarrollo, de la ontología de la modernidad. Los artículos que componen este libro son una manera de decir la arqueología de contrato, de hablar sobre sus consecuencias. Son una manera de hablar sin eufemismos. Por eso no hablan de arqueología de rescate, de urgencia, preventiva, manejo de recursos culturales; la llaman, como debe ser, arqueología de contrato, porque es la relación contractual con las empresas —y el lucro resultante del servicio prestado— la que define la naturaleza específica de su práctica.

LA ARQUEOLOGÍA COMO CAPITALISMO DEL DESASTRE

Rich Hutchings y

Marina La Salle

Traducido del inglés por Cristóbal Gnecco

El negocio de la arqueología es el presente.

Olivier (2013)

INTRODUCCIÓN: EL NEGOCIO DE LA ARQUEOLOGÍA

LA MEDIDA EN QUE EL NEGOCIO DE LA ARQUEOLOGÍA ES EL PRESENTE TAMBIÉN ES EL NEGOCIO DEL Estado y del capitalismo moderno tardío. En este ensayo deconstruimos las reacciones a tres eventos directamente relacionados con el proyecto de “desenredar” la arqueología (Gnecco y Dias, este volumen). Los tres eventos que nos interesan son:

1. La publicación del artículo “Commercial Archaeology in British Columbia” (La Salle y Hutchings 2012);
2. El anuncio del Inter-Congreso del Congreso Mundial de Arqueología (WAC, por sus siglas en inglés) “Desenredando la arqueología de contrato” (Gnecco y Dias 2013); y
3. Nuestra participación en el congreso anual de la Asociación Arqueológica de Canadá (Hutchings 2013; La Salle 2014) en el 2013.

Lo que estos tres eventos tienen en común, aparte de nuestra participación en ellos, es que tienen que ver con el negocio de la arqueología. Para analizar las reacciones a estos eventos empleamos el esquema clasificatorio desarrollado por Paul Graham (2008), que se muestra en la figura 1. La “jerarquía de desacuerdo” de Graham es piramidal e ilustra que la mayoría del desacuerdo cae dentro de las categorías inferiores, porque son más fáciles de formular y son respuestas emocionales —“Para verdaderamente refutar algo se requiere refutar su punto central o, al menos, uno de ellos. Eso significa que uno tiene que comprometerse, explícitamente, con lo que es el punto central” (Graham 2008)—. La jerarquía de Graham es útil porque el tema de la influencia del capitalismo en la sociedad contemporánea puede ser psicológicamente inquietante y el debate a menudo se vuelve emocional y personal. Es esencial entender la razón de ser de estas emociones, puesto que abarca la “cultura” de la arqueología (Kahan *et al.* 2011; Shanks

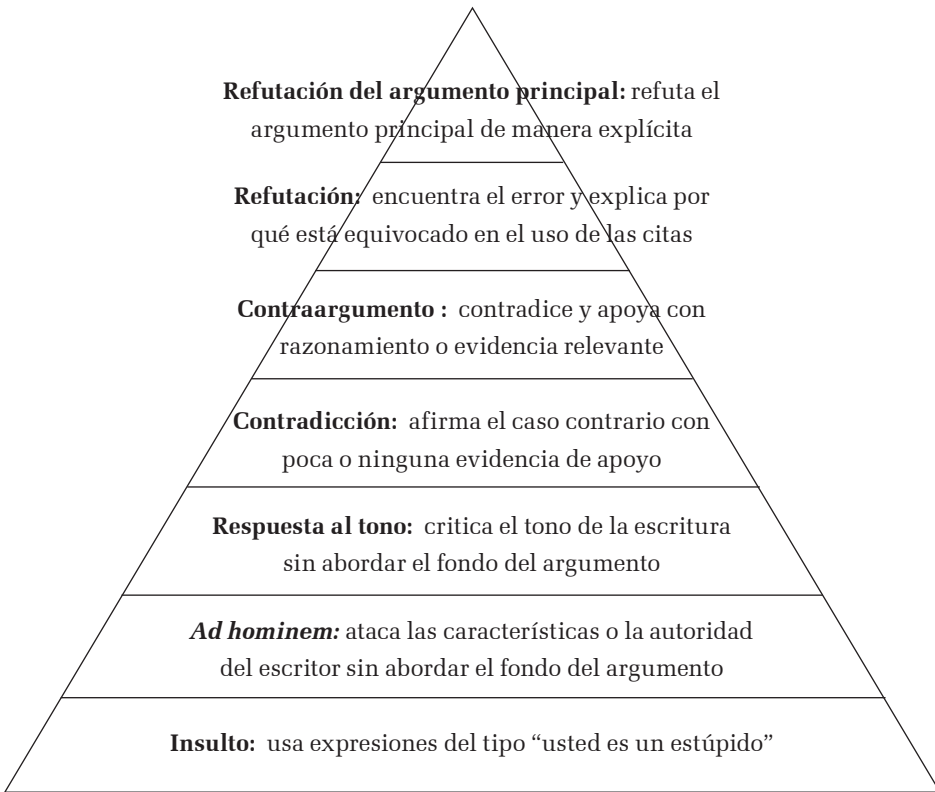


Figura 1. La “jerarquía de desacuerdo” de Paul Graham que ilustra el significado de diferentes tipos de respuestas, que van desde las injurias (abajo) hasta la refutación del punto central de un argumento (arriba). Solo los tres primeros de arriba constituyen contraargumento y refutación.

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Graham (2008) y Wikimedia, imagen de dominio público.

y Tilley 1987). La disciplina / práctica del manejo de recursos arqueológicos / culturales (CRM) puede ser “desenredada” a través de un examen de las respuestas a su crítica.

Nuestro análisis de la práctica arqueológica contemporánea la sitúa como un arte de gobierno neoliberal. La comprensión del papel de los arqueólogos en esta estructura requiere pensar y hablar sobre la arqueología en términos de ideología, burocracia y capitalismo moderno tardío, es decir, globalización y neoliberalización. La arqueología representa una forma de capitalismo del desastre que se caracteriza por el despojo y la violencia —una dura realidad que está activamente “olvidada” en la cultura de la arqueología—.

TRES INTERCAMBIOS

Primer intercambio: arqueología comercial en Columbia Británica

En comparación con los artículos académicos, libros y congresos que publicitan las proyectos arqueológicos se ha escrito poco sobre el lado comercial de la práctica.

La Salle y Hutchings (2012)

Nuestro estudio del negocio de la arqueología (La Salle y Hutchings 2012) estuvo motivado por la observación de que la arqueología de contrato —conocida como CRM (*cultural resource management*) en el mundo angloparlante— representa la mayoría del trabajo de campo arqueológico donde vivimos, pero, comparativamente, poco se publica sobre el tema. Usando información publicada por la Oficina de Arqueología de Columbia Británica, Canadá, encontramos un aumento del 3.000% en los permisos gubernamentales emitidos entre 1960 y el 2011, lo que sugiere que el negocio ha estado en auge, sobre todo para sectores industriales fundamentales para la economía de extracción de recursos de la provincia: silvicultura, petróleo, gas y energía. Calculamos que el 97% de la arqueología emprendida en Columbia Británica es comercial (figura 2).

A pesar de ello pocas instituciones educativas locales contemplan la arqueología de contrato en su plan de estudios, por lo cual los arqueólogos que trabajan en el sector reciben poco entrenamiento en preparación para ser manejadores del patrimonio. Lo que

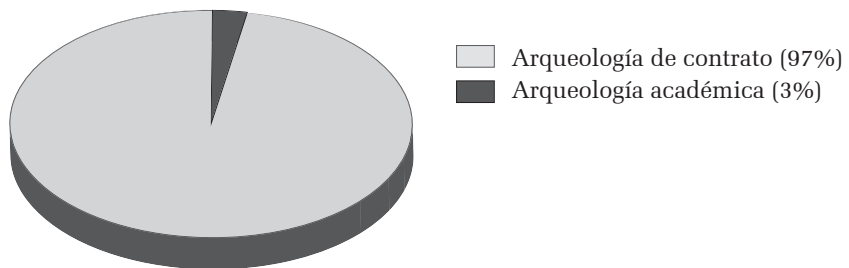


Figura 2. Arqueología en Columbia Británica. Prácticamente toda la arqueología es arqueología de cumplimiento, por lo menos como fue medida en el 2011 en Columbia Británica, Canadá

Fuente: La Salle y Hutchings (2012:10).

los estudiantes aprenden en lugar de ese 97 % es problemático, como discutimos en otro lugar (Hutchings y La Salle 2014). Los arqueólogos comúnmente firman acuerdos de confidencialidad con las corporaciones y los empresarios para los que trabajan, lo que limita su capacidad de informar sobre el trabajo realizado. Por lo tanto, hay poca oportunidad para decir la verdad.

Nuestras conclusiones desestabilizaron cuatro tropos convencionales que aprendimos en nuestra educación formal en arqueología:

1. La arqueología no tiene que ver con la preservación de sitios y materiales; más bien, facilita la destrucción de paisajes patrimoniales;
2. La arqueología no se lleva a cabo en nombre de la investigación para conocer sobre el pasado; se lleva a cabo para cumplir con obligaciones legales y reglamentarias en el presente;
3. Los arqueólogos no tienen la responsabilidad de diseminar sus resultados, excepto a sus clientes y al Gobierno; y
4. La arqueología no se realiza por el bien común; más bien, es una empresa privada con ánimo de lucro.

Respuesta

Aunque nuestra crítica de la arqueología de contrato se centró en las grandes corporaciones, la única respuesta escrita provino de cuatro arqueólogos contratados por una firma de consultoría indígena —representando a la abrumadora minoría de los arqueólogos de la provincia—. Natasha Lyons *et al.* (2012:6-7) criticaron “el tono” de nuestro artículo como “denigrante y desdeñoso”, “innecesariamente divisivo” y carente de “soluciones”. Contrastaron la “naturaleza densa y compleja” de la política y de la arqueología de contrato con lo que consideraron un academicismo elevado en nuestro artículo, de tal manera que “parece que estamos sobre un pedestal y criticamos desde arriba en lugar de entrar en la refriega”. Señalaron que los pueblos indígenas de Columbia Británica han sido “el motor más importante en la trayectoria histórica de la arqueología de contrato”, más que la industria, y siguen teniendo “una influencia considerable sobre su práctica”.

Los autores consideraron que retratamos a los arqueólogos de contrato como “un grupo de adoradores del dinero, éticamente cuestionados y de bajo rendimiento, incapaces de obtener trabajos académicos”. En lugar de una “comunidad [que] intencionalmente vende recursos por dinero”, ellos respondieron que quienes hacen contrato “generalmente son sujetos que actúan de manera ética y con mentalidad profesional y están comprometidos con el interés superior de los recursos arqueológicos” y solo “ganan un salario sólido de clase media”. Concluyeron, cambiando la conversación:

[...] aunque no podemos cambiar el funcionamiento más amplio de este entorno macro *estamos* en condiciones de examinar la(s) estructura(s) de nuestro ambiente y relaciones de trabajo para generar observaciones, crítica, discusión y debate. En lugar de preguntar quién está haciendo dinero sugerimos establecer más alto nuestras miras y preguntar cómo nosotros, como colectivo, podríamos trabajar juntos de una mejor manera para manejar los recursos arqueológicos que aún existen en Columbia Británica.

Análisis de los argumentos

Con referencia a la jerarquía de Graham (figura 1), Lyons *et al.* (2012) se basaron en las siguientes formas de argumentos:

Ad hominen

- Descartar el argumento, porque no somos arqueólogos de contrato que *trabajan en la provincia* o juzgamos desde un “pedestal” académico.
 - No desacredita los argumentos o la evidencia usada para sostenerlos. Aún más, la experiencia de contrato de Hutchings en Estados Unidos fue ignorada.

Respuesta al tono

- El “tono”, descrito como “denigrante y desdeñoso”, fue el principal asunto que Lyons *et al.* (2012:6) atacaron en el artículo.
 - El tono —una cualidad inconmensurable y percibida de cualquier artículo— no niega los argumentos o la evidencia.

Contradicción / contraargumento

- Sugerir que los pueblos indígenas han sido el motor principal de la arqueología de contrato.
 - No se mostró evidencia en este sentido. Sin embargo, esta afirmación no niega nuestra idea de que el clima económico de la provincia y la industria y el desarrollo resultantes han conducido a la arqueología y a los permisos emitidos. Este contraargumento, por lo tanto, está dirigido a un tema diferente.

Refutación

- Contraataca diciendo que los arqueólogos solo obtienen un “modesto salario de clase media”.
 - Esta refutación no corresponde a ninguna afirmación hecha en nuestro artículo y está dirigida a un asunto diferente. La “modestia” de este salario en comparación con los promedios nacionales, sin embargo, será discutida más adelante.

En suma, Lyons *et al.* no abordaron nuestros puntos centrales. Sin embargo, este análisis argumental aclara las motivaciones y las emociones que provocaron su respuesta: *los autores entendieron nuestra crítica de la estructura de la arqueología y de la corporatización como una crítica de las personas empleadas en esa estructura.* Al percibir

un ataque a los arqueólogos comerciales como “adoradores del dinero” y “éticamente cuestionados”, los autores contraatacaron, humanizándolos como “sujetos con mentalidad profesional”.

También minimizaron la relevancia y la cantidad de dinero en juego. El deseo de ignorar los aspectos económicos, en favor de discusiones “superiores” sobre ética, indica malestar con la naturaleza de la arqueología bajo el capitalismo. También da la sensación de que estas estructuras están fuera de “nuestro control” y son, por lo tanto, inevitables. Como los autores expresan, el papel de las personas dentro de este sistema es, pues, “trabajar juntos de una mejor manera”, para tratar de “evitar ‘morder la mano que nos alimenta’” (Lyons *et al.* 2012:7-8).

Al año siguiente el arqueólogo de Columbia Británica Robert Muckle (2013a) reseñó nuestro artículo en *Anthropology News* de la American Anthropological Association, y habló de la ética de conservación promocionada en la arqueología y los “potenciales conflictos de interés” de los arqueólogos que “trabajan para las grandes corporaciones que están orientadas al desarrollo”. A pesar de que su reseña fue “compartida” digitalmente más de quinientas veces, no hubo comentarios en el sitio web.

Segundo intercambio: desenredando la arqueología de contrato

La relación entre la arqueología y la expansión capitalista aparece como una instrumentalidad inocente, como un mero servicio técnico.

Gnecco y Dias (2013)

En abril del 2013 fue anunciado el Inter-Congreso de WAC sobre arqueología comercial o de contrato (Gnecco y Dias 2013). El anuncio inició con una descripción de la arqueología de contrato como “la forma como la disciplina se articula con la expansión capitalista, sacrificando su postura crítica” y sugirió que los arqueólogos que trabajan para este creciente mercado “han abandonado cualquier posible intervención en los asuntos contemporáneos para bailar al ritmo de dinero”. Las preocupaciones incluían el cambio de currículos para beneficiar ese mercado, trabajar por la justicia social mientras se era cómplice de los mandatos del mercado, la mercantilización de la administración del patrimonio y la influencia del capitalismo en las filosofías arqueológicas.

Respuestas

Las respuestas al anuncio en la lista de correos del WAC fueron inmediatas. Las personas describieron “el tono” como “hiperbólico”, “muy cargado emocionalmente”, “pre-

juiciado”, “desequilibrado” y carente de una “manera profesional”. Escribieron que retrataba “suficiencia”, “elitismo” y “una agenda egoísta”. Algunos pensaron que era “ofensivo”, “acusatorio” y que “ponía en duda la ética de la mayoría de los arqueólogos practicantes”, poniéndolos en una “luz provocadoramente negativa”; una persona tildó el anuncio de “xenófobo”.

Otros sugirieron que la arqueología de contrato no se está “vendiendo” y se ha utilizado para “ampliar la investigación y la educación”; además, enfatizaron que el capitalismo también produce “bienes” sociales. Una persona escribió: “Corrupto o no, el sistema es lo que es; no hay necesidad de que lo juzguemos de una manera u otra”. Respondimos a la vorágine con nuestro breve ensayo “Cinco pensamientos sobre arqueología comercial” (Hutchings y La Salle 2013).

Muchos otros felicitaron a los organizadores del simposio por hacer frente a un tema sensible y oportuno y destacaron las experiencias negativas de los pueblos indígenas con la arqueología, la falta generalizada de consulta previa y la presión de los empresarios para “hacer el trabajo”. Las personas mencionaron que los arqueólogos académicos y de contrato albergan “una poderosa falta de moral y ética”. Unos pocos lamentaron las restricciones en “política” como la fuerza principal que “regula” la práctica arqueológica.

Unos cincuenta correos electrónicos circularon por la lista del WAC. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre cuál era el problema o sobre cómo hacer mejor las cosas.

Análisis de los argumentos

Las emociones estaban exaltadas después de la circulación por la red del anuncio del Inter-Congreso y las respuestas ilustraron la manera personal como los arqueólogos sintieron su crítica. Los comentarios cayeron en dos categorías:

Ad hominen

- Rechazar el anuncio porque sus autores no son arqueólogos de contrato o juzgan desde una posición de “elite” (es decir, un “pedestal” académico).
 - La posición académica de los autores no desacredita, inherentemente, las sugerencias hechas en el anuncio.

Respuesta al tono

- Descrito como “ofensivo”, “acusador”, “negativo” y “no profesional”.

El tono no niega la validez de las afirmaciones hechas en el anuncio y tiene que ver, más bien, con la manera como se *sienten* las personas después de haberlo leído.

Estas respuestas se hacen eco de las que tuvo nuestro artículo del 2012 y se caracterizan por una reacción emocional abrumadora que provocó la crítica de lo que la gente

sentía que se estaba diciendo —que los arqueólogos comerciales están motivados por “finés de lucro” y no son éticos—. De esta manera, se personaliza la crítica de la estructura.

Como resultado, la gente sintió que el anuncio y sus autores eran “poco profesionales”, recordando la defensa que Lyons *et al.* hicieron de los arqueólogos de contrato como “sujetos con mentalidad profesional”. La afirmación de profesionalismo apela a la autoridad y a la moral de la clase media educada e infiere un conjunto de valores conservadores interrelacionados, entre ellos evitar la confrontación, buscar posiciones equilibradas y rehuir posiciones políticas abiertas. La arqueología como “profesión” participa de estos valores de grupo (Trigger 1989), expresados sucintamente por una persona que sintió que “Corrupto o no, el sistema es lo que es; no hay necesidad de que lo juzguemos de una manera”. De manera similar a lo expresado por Lyons *et al.* (2012:7), el énfasis fue puesto en la búsqueda de soluciones que funcionen *dentro* del capitalismo.

Tercer intercambio: Asociación Arqueológica de Canadá

¿A dónde ha ido la Ley de Conservación del Patrimonio?

Yellowhorn (2013)

Cuando la conversación en la lista de correos del *wac* concluyó asistimos al congreso de la Asociación Arqueológica de Canadá del año 2013, celebrado en Whistler, Columbia Británica —sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010—. Aunque presentamos ponencias en simposios distintos, cada uno de nosotros abordó la relación entre colonialismo, capitalismo y arqueología, lo cual provocó respuestas variadas.

La plenaria

En la sesión plenaria titulada “¿A dónde ha ido la *Ley de Conservación del Patrimonio*: renovación o funeral?”, hubo pueblos indígenas que hablaron contra la destrucción continuada de su patrimonio. Los panelistas hablaron apasionadamente sobre las tácticas del Gobierno para “borrar la cultura”, mediante “la destrucción de nuestro patrimonio”, y enfatizaron que los “lugares no se pueden reemplazar” y que lo que estaba en juego era la “preservación de una forma de vida”. Pidieron a los arqueólogos ayuda para “detener el desarrollo”. Como comentarista de la plenaria, Hutchings (2013) argumentó que, desde sus orígenes hasta su práctica actual (McNiven y Russell 2005; Smith 2004), la arqueología es un proyecto colonialista firme, impulsado por el capitalismo para producir narrativas elitistas y racistas y a favor del crecimiento, el desarrollo y el progreso.

Respuesta

La respuesta del público a la ponencia de Hutchings fue mínima, con una excepción. Un conocido profesor de arqueología desafió a Hutchings por “meterse con los arqueólogos”, señalando que las cuestiones que planteó se han discutido “durante décadas”, es decir, que esto era “una noticia vieja”. Al hacer referencia al desarrollo emprendido en Whistler para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010, sugirió que las comunidades indígenas locales se habían beneficiado con la construcción de un nuevo centro cultural.

Después de la sesión dos personas se acercaron a Hutchings, le ofrecieron apoyo y añadieron su frustración por la falta de un diálogo significativo. El salón quedó vacío después de solo un par de preguntas: el silencio fue la respuesta principal.

Arqueología orientada a la comunidad

La Salle (2014) expandió los argumentos expuestos en un trabajo publicado (La Salle 2010) para argumentar que la colaboración en la arqueología es ideológica y que se utiliza para connotar amistad, cooperación, igualdad y ética, pero el “éxito” se define como acumulación y aumento de capital. Las desigualdades entre los arqueólogos y las comunidades que colaboran siguen existiendo y la colaboración es, en última instancia, un compromiso —una “baratija de intercambio” para asegurar la continuidad del proyecto arqueológico con la mínima objeción de los pueblos indígenas—. La Salle concluyó: “Los arqueólogos, al igual que la Oficina de Arqueología, tienen el poder de detener la máquina de desarrollo que es responsable de la destrucción de estos lugares significativos, y es simple: ¡Solo dejen de excavar!”.

Respuesta

El comentarista de la sesión, George Nicholas, señaló que la crítica de La Salle era “importante” y agregó que la cuestión de la protección del patrimonio era un “asunto urgente”. Después del congreso Muckle (2013b) publicó una reseña de la presentación de La Salle, donde preguntó si los arqueólogos que hacen investigación colaborativa “están motivados, necesariamente, por factores personales, profesionales y económicos”, y sugirió que “solo dejar de excavar es un poco fuerte y más que arriesgado”. Muckle explicó:

Si bien puede ser bueno pensar que muchos arqueólogos colaboran con los pueblos indígenas, debemos darnos cuenta de que la ideología no es compartida por todos en la profesión. La arqueología en América del Norte es una industria de más de mil millones

de dólares al año. Sinceramente dudo que un número importante de arqueólogos pondrá en peligro sus carreras, como La Salle indica, “solo dejando de excavar”.

Aunque este artículo fue visto cientos de veces en la red, nadie lo comentó.

Análisis de los argumentos

En conjunto, estos artículos sugieren que la arqueología constituye una violencia social responsable de la destrucción del patrimonio, a pesar de “blanquearla” (King 2009) como una práctica ética preocupada por el bienestar de las comunidades descendientes. Por eso es sorprendente la falta de respuesta. Estas son críticas graves que socavan los ideales y la práctica de la disciplina, académica y de consultoría por igual —sin embargo, el silencio es abrumador—.

Los que respondieron públicamente ofrecieron pocos “argumentos”, cayendo en las siguientes categorías:

Respuesta al tono

– Hutchings: descrito por “meterse con los arqueólogos”.

- Transmite malestar con el tema en lugar de un argumento en contra.

Contradicción

– La Salle: sugiere que los arqueólogos no están “motivados por factores personales, profesionales y económicos”.

- No se allega evidencia para apoyar esta afirmación; por el contrario, Muckle sugiere que los arqueólogos “pondrán en peligro sus carreras” si ayudan a los pueblos indígenas.

Contraargumento

– Hutchings: sugiere que los pueblos indígenas se han beneficiado del desarrollo.

- Esto no niega el impacto del desarrollo sobre los sitios patrimoniales o el papel de la arqueología en permitirlo; este es un contraargumento dirigido a otro asunto.

Estas transacciones transmiten un profundo malestar con el papel de la arqueología en la alienación de tierras y recursos, históricamente y en la actualidad. En este congreso nacional solo hubo unos pocos simposios dedicados a la arqueología de contrato; casi todos eran “académicos”. En este sentido, estuvo ausente el 97% de la arqueología que se realiza en la provincia; en cambio, la disciplina estuvo representada solo por el 3%. Es significativo que, en gran parte, ese 3% no esté involucrado con (ni interesado en) la arqueología comercial.

DESENREDANDO LAS RESPUESTAS

Las personas convencionales se ponen furiosas cuando alguien se aleja de lo convenido, sobre todo porque consideran que ese alejamiento las critica.

Russell (1930)

Haríamos bien en recordar que la preservación del patrimonio y la presentación del pasado son procesos que borran el pasado de la misma manera que lo hacen la guerra, el saqueo y el desarrollo.

Arnold (2014)

Nuestros tres intercambios representan modos típicos de acción entre los arqueólogos: escribir un artículo para una revista, enviar un correo electrónico y presentar una ponencia en un congreso. El tema en cada intercambio era similar y los puntos en común en las respuestas indican un patrón:

1. Las personas sienten que los arqueólogos comerciales, de contrato, de cumplimiento o CRM están siendo atacados, juzgados como poco éticos, motivados por el lucro y “menos que” sus contrapartes académicos.
 - Esto produce una oleada de ira que impulsa respuestas “viscerales” inmediatas a la crítica.
2. Las personas sugieren que el capitalismo es inevitable: no podemos cambiarlo y no debemos juzgarlo —de hecho, deberíamos ignorar “el dinero” y hablar sobre cómo “trabajar mejor” dentro de él y ser “profesionales”.
 - Esto sitúa el capitalismo fuera del control de los arqueólogos y racionaliza la práctica de la arqueología de contrato.
3. Las personas argumentan que la arqueología comercial es realmente beneficiosa, tanto para la arqueología y la ciencia como para los pueblos indígenas que se están beneficiando de ella y, en muchos aspectos, están impulsando la industria.
 - Esto justifica la arqueología de contrato como una práctica éticamente responsable.

Estas respuestas son defensivas: protegen a los arqueólogos y su práctica, señalando en otra dirección para racionalizar y justificar su complicidad con lo que se considera perjudicial. En estas respuestas es central la personalización de la crítica (Hutchings y La Salle 2013:2).

Esas reacciones se han discutido en términos de cognición cultural con referencia a “la tendencia de los individuos a formar percepciones de riesgo que son valores agradables” (Kahan *et al.* 2011). En resumen, las personas tienden a adoptar creencias comunes a su grupo (o profesión). El bienestar individual está ligado a la pertenencia al grupo, a través de la cual se genera estatus y autoestima. Los desafíos a las creencias del grupo, por tanto, socavan el bienestar de sus miembros y amenazan con pérdida personal. En defensa propia, las personas están de acuerdo con argumentos que refuerzan sus creencias y descartan los que las contradicen porque tienen un “tono negativo”, sobre todo si se originan desde fuera del grupo.

Esta dinámica se ilustra en la naturaleza de las respuestas a las críticas de la arqueología bajo el capitalismo. En general, los arqueólogos permanecen en silencio cuando se trata el tema del capitalismo. Este silencio puede ser visto como una forma de olvido o “amnesia” —por parte de los arqueólogos académicos y de contrato— de aspectos de la disciplina que se consideran desfavorables. En esta dinámica las observaciones que (re)afirman los ideales de la arqueología, salvar o proteger el pasado, refuerzan las creencias de grupo y, por tanto, se aceptan sin duda. No sucede lo mismo con las críticas al dinero y al poder.

La (re)producción de esta cultura es visible en cómo las personas articulan la estructura (por ejemplo, como algo inevitable e inmutable) y su papel dentro de ella (por ejemplo, cómo tratan de hacer lo mejor que pueden). Mientras que las personas parecen sentir que no tienen control para realizar el cambio, la relación entre las estructuras y los agentes es recursiva y dialéctica. Para entender cómo se desenvuelve esta dinámica en la sociedad en general, el resto de este artículo sitúa la arqueología en sus contextos sociales, políticos y económicos más amplios.

LA ARQUEOLOGÍA COMO CAPITALISMO DEL DESASTRE

La concesión de permisos para construir fábricas u otras estructuras en los lugares donde se encuentran los sitios [del patrimonio indígena] [...] debe estar subordinada a que las partes interesadas aporten fondos para la investigación de dichos sitios antes de que comience la construcción. No podemos evitar la expansión urbana y el desarrollo industrial pero por medio de legislación inteligente pueden pasar de ser una maldición a una bendición para la arqueología.

Borden (1950)

Yo llamo “capitalismo del desastre” a estos ataques orquestados en la esfera pública en la estela de eventos catastróficos, combinados con el tratamiento de los desastres como emocionantes oportunidades de mercado.

Klein (2007)

Naomi Klein acuñó el término “capitalismo del desastre” para definir cuando se “hace plata de la miseria”. El concepto es la pieza central de su influyente libro publicado en el 2007, *La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre* [*Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*], que examina los “Estados corporativistas” y sus “desastres capitalistas”. El enfoque de Klein sobre el neoliberalismo tiene relevancia directa para la arqueología contemporánea; esto se demuestra en la noción del desarrollo económico como una “bendición” para la profesión, de acuerdo con los comentarios de Charles Borden.

Borden (1905-1978), reconocido como el “padre” de la arqueología de Columbia Británica, es un nexo histórico en el relato de origen (Carlson 1979; Matson y Coupland 1995) o “invención” (Hobsbawm 1992) de la arqueología canadiense. El historiador Robert West (1995:II) sugirió que “los arqueólogos profesionales controlan, firmemente, la prehistoria de Columbia Británica”, debido a los esfuerzos que hizo Borden en la posguerra para profesionalizar la disciplina:

En el contexto de destrucción de sitios arqueológicos, durante la década de 1950, Borden fue capaz de atraer a su causa a muchos habitantes de Columbia Británica, incluyendo funcionarios provinciales [...] arqueólogos aficionados y aborígenes que carecían de los medios para crear las poderosas alianzas de Borden y, por lo tanto, los aficionados y los nativos fueron incapaces de ofrecer una alternativa convincente a su autoridad.

Por tanto, quienes no son arqueólogos deben “poner su fe” en los expertos “y asumir que el conocimiento que producen es veraz y válido” (West 1995: II). La profesionalización y privatización de la arqueología tiene, pues, una importancia fundamental, especialmente para los pueblos indígenas, debido a su relación con el desarrollo y su papel en la regulación del acceso a los recursos (Bodley 2008; Mander y Tauli-Corpuz 2006).

La idea de que los arqueólogos se benefician de la crisis de la modernidad (industrialización, corporativización, [sub]urbanización, globalización, neoliberalización, etc.) se extiende mucho más allá de Columbia Británica a mediados del siglo xx. Hoy esta sensibilidad es evidente en la idea de que “el calentamiento global está demostrando ser una especie de bendición para la arqueología” (Doyle 2013) —“Es preocupante que los

glaciares se estén derritiendo pero es emocionante para nosotros los arqueólogos [...] Esto es solo el comienzo”—.

Otro ejemplo de capitalismo del desastre en la arqueología está en “la colaboración con la industria” (Flemming 2004). Un requisito previo para este tipo de relaciones es la casi certeza de que los arqueólogos deben abandonar o ignorar, en última instancia, los agudos problemas éticos presentes en este tipo de uniones (e.g., Flatman 2007, 2012). Según Joseph Schuldenrein (2013), las presiones para “colaborar” (es decir, corporativizar) se ven agravadas por crisis más grandes de financiación:

Sin embargo, este descenso es casi inversamente proporcional a la función ampliada de la arqueología aplicada y la aceleración concomitante de la influencia del sector privado [...] En la arqueología actual los mayores presupuestos y las tecnologías de investigación más avanzadas son proporcionados por la construcción de gasoductos. Los esfuerzos colaborativos entre los ingenieros de petróleo y gas y los profesionales de CRM se han traducido en saltos cuánticos en el descubrimiento y entendimiento del registro arqueológico.

Schuldenrein describe la privatización creciente y sugiere que la extracción de petróleo y gas —la causa última del derretimiento de los glaciares— ha sido una bendición para la profesión, lo que resulta en saltos hacia adelante en la ciencia del pasado.

Hoy en día la arqueología es una industria. La American Cultural Resources Association reportó que en el 2012 habían aproximadamente 1.300 empresas de arqueología de contrato en Estados Unidos, las cuales empleaban a unas 10.000 personas y generaban más de mil millones de dólares en ingresos (ACRA 2013:2). En Columbia Británica el rango de ingresos de los arqueólogos de contrato está entre 25 y 40 dólares canadienses por hora, entre 2,5 y 4 veces más que el actual salario mínimo provincial. Los profesores de arqueología en la provincia ganan entre 110.000 y 115.000 dólares canadienses por año, aproximadamente cuatro veces más que el ingreso promedio de la mayoría de los canadienses y casi seis veces más que el ingreso promedio de la población aborigen (La Salle 2014). Por tanto, existe una enorme disparidad de ingresos entre los arqueólogos (académicos y de contrato) y la población promedio, así como con respecto a las comunidades indígenas cuyo patrimonio está siendo lentamente desmantelado.

La arqueología es, en efecto, un gran negocio que depende de la extracción de recursos y del desarrollo comercial y residencial para su subsistencia, lo que resulta en la destrucción de paisajes patrimoniales, naturales y culturales, a escala local y global. La arqueología, por tanto, se puede considerar una forma de capitalismo del desastre, una industria creada por y al servicio del Estado neoliberal.

La arqueología como arte de gobierno neoliberal

Los Estados-nación, o sus partidarios, controlan y asignan recursos simbólicos como un medio para legitimar el poder y la autoridad y en búsqueda de sus objetivos e ideologías nacionalistas.

Fowler (1987)

Hoy en día la mayoría de las investigaciones de CRM son llevadas a cabo por negocios privados, tanto para la industria privada como para los gobiernos federal, estatal y local, para que estas organizaciones puedan cumplir eficazmente sus obligaciones legales bajo la Ley Nacional de Preservación Histórica y las leyes y regulaciones relacionadas.

ACRA (2013)

Está bien establecido que la arqueología es una forma de arte de gobernar (Trigger 1989; Smith 2004); sus fundamentos capitalistas también han sido indagados (Shanks y Tilley 1987; Hamilakis y Duke 2007). Sin embargo, los lazos de la arqueología con el neoliberalismo han sido menos estudiados. Puesto que el neoliberalismo es la clave para entender el capitalismo del desastre, proponemos que también es la clave para entender la arqueología.

El neoliberalismo, arraigado en el capitalismo y los principios del *laissez faire*, refiere a un nuevo acuerdo político, económico y social que enfatiza las relaciones de mercado, la disminución de los Estados y la responsabilidad individual (Springer 2010:1025). Entendido como un proyecto hegemónico ideológico, el neoliberalismo sostiene que los “grupos de élite, organizados en torno a alianzas transnacionales de clase, tienen la capacidad de proyectar y difundir a los demás un programa coherente de interpretaciones del mundo” (Springer 2010:1032). Las opiniones del geógrafo David Harvey, de gran prestigio por su trabajo sobre el neoliberalismo, fueron resumidas por Simon Springer (2010:1032):

La principal afirmación de Harvey es que el logro más importante del neoliberalismo ha sido la redistribución de la riqueza a las élites en lugar de la generación real de nueva riqueza. En otras palabras, el neoliberalismo representa la continuación de lo que Marx (1867-1976) llamó “acumulación originaria”, que Harvey (2003:145) ha renombrado como “acumulación por desposesión” para significar su continua relevancia en el capitalismo

contemporáneo como mercantilización y privatización de la tierra y expulsión forzada de las poblaciones campesinas; conversión de diversas formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos; supresión de los derechos a los bienes comunes; mercantilización de la fuerza de trabajo y supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; [y] procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos (incluidos los recursos naturales).

Además del poder de clase, Springer enfatizó la formación burocrática y su formación política. La primera representa el neoliberalismo como política y la segunda el neoliberalismo como gubernamentalidad. Ambas son elementos centrales de nuestro nuevo modelo de la arqueología, que discutimos a continuación.

Para entender la relación de la arqueología con el Estado, el capitalismo y el Estado neoliberal, ofrecemos un nuevo modelo de la arqueología (figura 3). En cierto sentido, el modelo es una arqueología “desenredada” y representa la convergencia de los “mecanismos de control estatales” de Benedict Anderson (2006 [1983]) y la visión de Laurajane Smith (2004:11-12) del CRM como mecanismo de gobierno de la identidad cultural indígena.

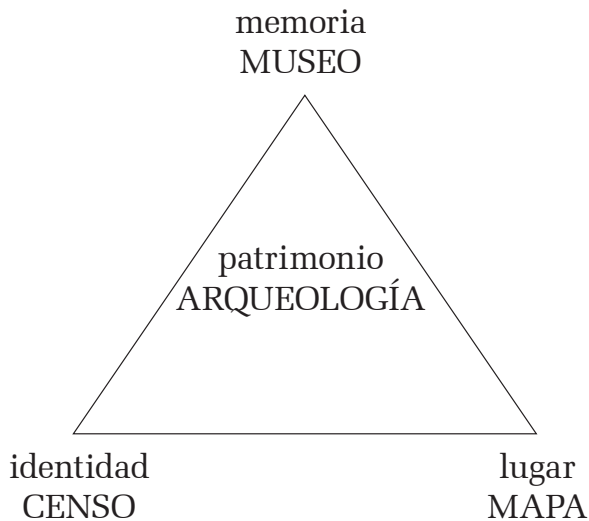


Figura 3. Una nueva visión de la arqueología: la convergencia de los “mecanismos de control estatales” de Benedict Anderson y la visión de Laurajane Smith del CRM como mecanismo de gobierno de la identidad cultural indígena

Fuente: Elaboración propia.

Anderson (2006:163-164) describió los mecanismos de control estatales como “el censo, el mapa y el museo; juntos dieron forma a cómo los estados coloniales imaginan sus dominios —la naturaleza de la gente que gobierna, la geografía de su dominio y la legitimidad de su ascendencia—. También se puede pensar que estas tres características esenciales de la autoridad del Estado controlan la identidad, los lugares y la memoria de un pueblo —los elementos que componen el patrimonio—. Juntas producen una “parrilla total de clasificación que [puede] ser aplicada con flexibilidad infinita a cualquier cosa bajo el control real o previsto del Estado: personas, regiones, religiones, idiomas, productos, monumentos, etcétera”. El efecto de la parrilla es “que siempre puede decir de cualquier cosa que [es] esto, no lo otro; que pertenece aquí, no allí” (Anderson 2006:184).

Una demostración prominente y poderosa de la parrilla de clasificación total en la arqueología de Canadá es la “Parrilla Borden” (figura 4). Esto se debe, ante todo, a su fundamento cartográfico —es el “mapa” en el “censo, mapa, museo” de Anderson—. Como Kathryn Sampeck (2014) sugiere, los colonos se hacen con el control de una región a través de la cartografía, que es “la herramienta definitiva para la implementación de la hegemonía del Estado”, pues permite a los funcionarios “dictar una percepción autorizada del paisaje”.

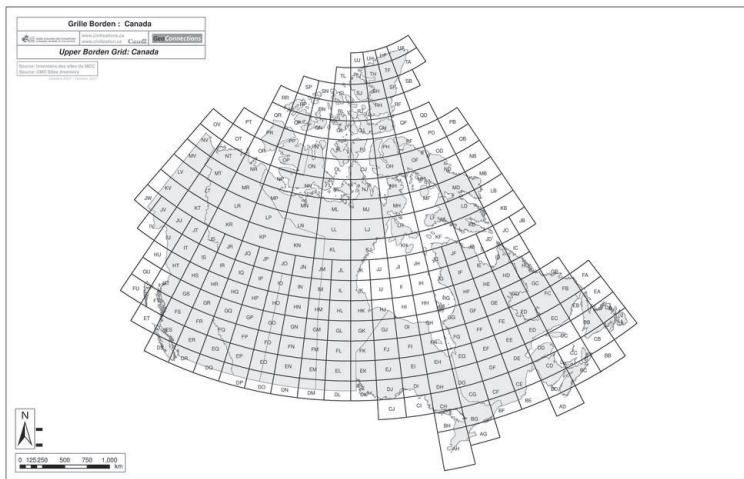


Figura 4. La Parrilla Borden (*Grille Borden*), diseñada por Charles E. Borden a principios de la década de los cincuenta y adoptada en el ámbito nacional desde entonces, ejemplifica la cuadrícula clasificatoria total, es decir, es colonialismo en acción.

Fuente: Imagen de dominio público

El sitio web educativo *Artifacts B.C* (s.f.), financiado por el Estado, describe el origen y significado de la Parrilla o “Sistema Borden”, utilizando como ejemplo la antigua aldea indígena de Kosapsom en la isla de Vancouver:

En Canadá todos los sitios arqueológicos están codificados por medio de lo que se conoce como “Sistema Borden”. Asigna a cada lugar una secuencia de 4 letras (DcRu) y un número (4), relativa a un código de mapa fijo. Los números Borden fueron inventados por Charles E. Borden en la Universidad de Columbia Británica en 1954. Canadá fue dividida en una parrilla de unidades principales de mapeo con una altura de 2° de latitud y un ancho de 4° de longitud. Las coordenadas latitudinales tienen letras mayúsculas de la A a U de sur a norte y la longitud se designa con letras mayúsculas de la A a V de este a oeste. Cada unidad principal de 2° x 4° (192 kms x 300 kms) está subdividida en subunidades de 10' designadas con letras minúsculas de sur a norte (latitud) y de este a oeste (longitud). Por ejemplo, en DcRu4 las dos primeras letras indican que el sitio está en uno de los cuadrados de 16 kms en el cuadrado latitudinal D; las últimas 2 letras, del mismo modo, muestran la posición en la parrilla de la longitud. El número 4 después de las cuatro letras significa que fue el cuarto sitio encontrado dentro de una unidad de 16 kms x 16 kms.

De esta manera (enrevesada), los paisajes culturales indígenas (Kosapsom) son apropiados por la ciencia (DcRu-4), transformados en “sitios” y “recursos” arqueológicos genéricos registrados por el Estado y, por tanto, listos para el mercado. El Sistema Borden —y otros en el mundo (en Estados Unidos, el Trinomio del Smithsonian)— opera a través del proceso de cambio de nombre. Esta es la técnica principal que usa el Estado para colonizar paisajes patrimoniales indígenas, y la arqueología está —y, *por tanto*, *los arqueólogos están*— directamente implicada en este proceso.

Para Lawrence Berg (2011:13-14), el proceso de nombrar es un medio para “solidificar, simbólica y materialmente, los procesos actuales (e históricos) de la acumulación capitalista por desposesión”. Específicamente, “las formas *banales e incuestionadas* de nombrar ayudan a ocultar las relaciones socio-espaciales de desposesión”. En vista de la “desposesión de los pueblos aborígenes y su continua marginación a través del colonialismo en marcha”, Berg ofrece un punto de vista importante para considerar la “violencia” de la arqueología. El despojo y su subproducto, el desplazamiento, son fundamentales para el segundo componente de nuestro modelo de la arqueología. La crítica de Laurajane Smith (2004:11) al CRM sugiere que la práctica surgió de la necesidad de “ayudar a gobernar una serie de problemas sociales”, especialmente los planteados por los pueblos indígenas en contextos coloniales, como Australia y Canadá. Como Smith (2004:11) señaló:

Todo el proceso del CRM, que hace hincapié en la aplicación técnica del conocimiento y la experticia, trabaja con eficacia para despolitizar los debates más amplios sobre la legitimidad de los reclamos culturales y sociales sobre el pasado [...] Esto hace que el “patrimonio”, y los reclamos que se hacen sobre él, sea más fácilmente “gobernable”. La gobernabilidad del patrimonio facilita la despolitización de las reclamaciones indígenas sobre la identidad cultural. Esto tiene consecuencias importantes para los pueblos indígenas.

La arqueología opera como una tecnología de gobierno, produciendo y movilizándolo conocimiento en apoyo de los intereses del Estado, económicos y de otro tipo. Esta idea está bien establecida: como Don Fowler (1987:241), presidente de la Society for American Archaeology entre 1988 y 1991, señaló hace décadas, las “interpretaciones, o usos, del pasado rara vez tienen valor neutral”:

En varios Estados nacionales en distintos momentos algunos arqueólogos han analizado e interpretado el pasado para adaptarse a sus exigencias ideológicas. Ese es un extremo del espectro. El otro es la aceptación implícita y, por lo tanto, incuestionable de principios y valores ideológicos desde dentro de la cultura del arqueólogo y cómo influyen en su uso del pasado.

Históricamente, la preocupación era sobre cómo funcionaba “al servicio del Estado” la interpretación del pasado hecha por los arqueólogos académicos. Pero Fowler y otros (e. g., Trigger 1989) no abordaron la arqueología en su versión de contrato o comercial. Esta omisión es crítica porque la arqueología académica (teoría) y la arqueología de contrato (práctica) son dos mitades de un todo, filosófica e institucionalmente. Por eso los arqueólogos académicos no pueden desvincularse de la arqueología de contrato.

Los estudiosos del manejo de recursos piensan que las instituciones burocráticas contienen las “semillas del fracaso” (Acheson 2006:124; véase King 2009). La socióloga Sylvia Hale (1990:518-519) describe un importante defecto de diseño:

La lealtad de los funcionarios no está con el público o los electores sino con la burocracia. Su vocación es servir sus funciones oficiales [...] Quienes trabajan como empleados en la burocracia están aún más rígidamente sujetos a sus regulaciones. Funcionan como engranajes en la máquina. El requisito principal de su posición es la adhesión incondicional y estricta a las regulaciones escritas dentro de sus áreas de jurisdicción, estrechamente definidas. Su individualidad no tiene lugar dentro de un sistema de ese tipo porque alteraría el orden calculado.

A los arqueólogos que operan en este sistema —llamados “arqueoburócratas” por Joshua Dent (2012)— “se les paga por evaluar proyectos, solicitar permisos, hacer trabajo de

campo, escribir informes técnicos y, en efecto, ‘manejar’ recursos” (Lyons *et al.* 2012:8). La crítica de este sistema es desalentada, implícitamente, por la afiliación con esta comunidad imaginada, por compartir sus creencias y por derivar identidad de ella. De hecho, como demuestran las respuestas mencionadas anteriormente, los arqueoburócratas *sienten* que no tienen ningún control sobre el sistema, pero lo reproducen todos los días.

Por esta razón la arqueología de contrato representa una forma muy poderosa (y muy peligrosa) del arte de gobernar, racionalizada y justificada por la academia y llevada a cabo y reforzada por la industria. Como forma de capitalismo del desastre que opera de acuerdo a intereses neoliberales, el impacto de este proyecto es significativo.

Arqueología como violencia

En las últimas etapas de una lucha épica a nivel mundial las fuerzas del desarrollo económico Occidental están asaltando a los pueblos indígenas sobrevivientes del planeta, cuya presencia obstruye su progreso.

Mander (1991)

Los arqueólogos han creado un mundo de pensamiento que sirve para sostener su poder y su privilegio, perjudica los intereses de los pueblos indígenas y contribuye al actual genocidio cultural de los nativos americanos.

Custer (2005)

¿Existe un valor de mercado para la limpieza étnica y el daño ambiental?

Tommasino *et al.* (citados por Funari 2001)

El racionalismo neoliberal está vinculado a la pobreza, la desigualdad y la violencia (Springer 2011; cfr. Giroux 2014). Los resultados del neoliberalismo están a nuestro alrededor, observa Henry Giroux, “desde la devastación ecológica y el empobrecimiento económico generalizado hasta el creciente encarcelamiento de grandes segmentos de la población marginada por raza y clase” (Polychroniou 2013). El neoliberalismo, que Giroux llama la “última etapa del capitalismo depredador”, es un proyecto político y económico que constituye una ideología, una forma de gobierno, una política y una forma de pedagogía pública (Polychroniou 2013). Al reconocer que la violencia estruc-

tural del neoliberalismo está en todas partes, las “experiencias ‘locales’ de violencia que ocurren, aparentemente, en forma aislada de la matriz de espacio más amplia están, de hecho, vinculadas a lo ‘global’, lo que hace de la violencia algo ‘cotidiano’” (Springer 2011:95).

La arqueología como arte de gobierno neoliberal es propensa a la violencia. Dentro de los procesos del colonialismo y el capitalismo, la arqueología como tecnología de gobierno opera para “despejar” los paisajes patrimoniales indígenas (Blaser *et al.* 2004; Smith 2008) y abrir sus recursos para la extracción y el desarrollo. A cambio de acceso, las comunidades indígenas son aplacadas con “migajas culturales” (Gnecco 2012) como informes, videos, folletos escolares o museos locales e, incluso, a veces con el “privilegio” de poder participar en el “manejo” de su propio patrimonio. Los arqueólogos se benefician directamente de este desastre —la fuerza impulsora detrás de la creación de la profesión, en primer lugar— y el resultado es la pérdida del patrimonio natural y cultural (Foster *et al.* 2010).

Nuestro objetivo no es “sondear” que el neoliberalismo (o el capitalismo) es violento, ni que la arqueología, como consecuencia de ser un arte de gobierno neoliberal, también es inherentemente violenta. Esto ya se ha hecho en una variedad de contextos y muchas veces a nivel local, nacional y global. Más bien, nuestra preocupación es que la arqueología —y, por tanto, los arqueólogos— sigue “olvidando” este legado continuo de violencia.

La violencia arqueológica se manifiesta en lo que Bruce Alexander (2008) llamó “desplazamiento” y Glenn Albrecht (2005) “solastalgia”. Alexander trabajó en un barrio pobre con una alta población indígena en Vancouver, Columbia Británica, y demostró que las políticas neoliberales desplazan a los indígenas de su pasado y de su presente, lo que a menudo resulta en adicción, falta de vivienda y violencia. Albrecht (2005) utilizó el término *solastalgia* para caracterizar la aflicción causada por el desplazamiento del entorno propio, incluyendo dolor, pérdida e incapacidad de obtener consuelo en el presente, lo que produce graves problemas de salud, físicos y mentales. Esta condición es frecuente en las comunidades indígenas, que están fuertemente conectados con el “campo”. En su estudio de *solastalgia* y arqueología de contrato en Australia colonial, Mary-Jean Sutton *et al.* (2013:7-8) describieron “el apego indígena al entorno como una conexión espiritual íntima; los impactos de la minería del carbón, por lo tanto, no solo destruyen ese entorno sino que dañan, irremediabilmente, las conexiones de la gente con el campo”.

La destrucción del patrimonio indígena no solo está directamente implicada con *ecocidio*, sino también con *etnocidio* y *genocidio*. Sin embargo, el problema en la iden-

tificación de la *solastalgia* en el contexto de la destrucción del patrimonio es que es un proceso “lento”, y por tanto difícil de ver (Nixon 2011a). Como señaló Rob Nixon (2011b), la violencia lenta “no es ni espectacular ni instantánea sino gradual; sus calamitosas repercusiones se posponen por años o décadas o siglos”. La arqueología es una violencia lenta porque la pérdida de los paisajes patrimoniales es gradual y raramente de interés periodístico. La arqueología, como aparato del Estado, está envuelta en el proceso lento, pero constante, de la colonización.

Dentro de la arqueología esta violencia es vista como una externalidad —como algo “fuera” de la institución—. Por eso está fuera de “nuestro control” y es parte de la estructura permanente dentro de la cual operan los arqueólogos. Esto es lo que Hutchings (2013a) llamó *siloing*, por el cual los arqueólogos ven los problemas “en forma aislada y no se ve el cuadro completo” (Homer-Dixon 2006:17). Así, el papel de los arqueoburocratas en la reproducción de la estructura se vuelve invisible: es en lo cotidiano y en la banalidad de simplemente hacer el trabajo que corresponde (Arendt 1963) donde esa estructura se sedimenta y la violencia lenta se desarrolla.

CONCLUSIÓN: LA ARQUEOLOGÍA Y LA BANALIDAD DEL MAL

Lo más peligroso de la violencia es su racionalidad. La violencia misma es terrible, desde luego. Pero la raíz más profunda de la violencia y su permanencia provienen de la forma de racionalidad que usamos.

Foucault (1996)

La triste verdad es que la mayor parte del mal es hecha por gente que nunca decidió ser buena o mala.

Arendt (1978)

Desenredar la arqueología es comprender su racionalidad: una amnesia institucional acerca de su práctica cotidiana como arqueología comercial, de contrato o de cumplimiento. Sugerimos que la energía o inercia de la arqueología como forma de capitalismo del desastre se deriva, principalmente (> 97%), de la acumulación por desposesión o violencia neoliberal. En América del Norte (Canadá y Estados Unidos) esa violencia se dirige, casi en su totalidad, hacia los pueblos indígenas y su patrimonio, lo que refleja un componente racial evidente, pero rara vez discutido, de la arqueología de contrato en entornos coloniales.

Hoy en día la arqueología es un proyecto de mil millones de dólares en América del Norte. Por eso proponemos adoptar el término de *industria del patrimonio* para resaltar el carácter corporativo y la escala industrial de la institución arqueología / CRM. La arqueología, como arte de gobierno moderno tardío, es capitalismo del desastre por excelencia y se caracteriza por gestores especializados (arqueoburócratas) que “despejan” el patrimonio indígena del paisaje, lo cual permite el desarrollo económico. Esto se logra mediante la conversión de los paisajes de patrimonio cultural en sitios arqueológicos y después, cuando el desarrollo va a ocurrir, mediante la conversión de los sitios arqueológicos en cajas e informes.

Los arqueólogos consideran racional la destrucción del patrimonio indígena porque los actos de violencia están cubiertos por el velo sacrosanto (y, por tanto, dado por sentado) de la ciencia y la neutralidad científica. De esta manera, el papel de los académicos en la violencia de la arqueología se extiende mucho más allá del hecho de que disciplinan a los arqueólogos profesionales en el conjunto de habilidades del contrato. En su enseñanza y en su silencio los arqueólogos académicos legitiman la arqueología de contrato y validan los discursos “autorizados” y “oficiales” sobre el patrimonio que emanan de y (re)producen la ideología del capitalismo.

Ver la arqueología como violencia tiene consecuencias importantes para la profesión. En el 2013 WAC aprobó la siguiente resolución: “No es ético que los arqueólogos profesionales y las instituciones académicas lleven a cabo trabajo arqueológico profesional y excavaciones en áreas ocupadas por la fuerza”. En los lugares colonizados u ocupados como Columbia Británica esta resolución presenta un dilema aparentemente insoluble para los practicantes disciplinarios, académicos y de contrato.

Terminamos con una predicción y un nuevo punto de partida. Predecimos que las afirmaciones que hemos hecho en este artículo serán poco o nada impugnadas. Desde luego, no creemos que nadie “refutará el punto central” de que la arqueología es un arte de gobierno neoliberal y de capitalismo del desastre. La razón, en parte, se debe a que realmente comprometerse con el problema significa “comprometerse de manera explícita” con los temas en cuestión. Otra razón, totalmente relacionada con la primera, es que decir la verdad es una tarea extraordinariamente difícil, sin duda para el individuo y, más aún, para toda una cultura. Este reconocimiento constituye nuestro nuevo punto de partida, un reto establecido por Ian Angus (2013): “El primer paso es contar la verdad —sobre el peligro que enfrentamos, sobre sus causas y sobre las medidas que deben adoptarse para hacer retroceder la amenaza—. En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario”.

REFERENCIAS CITADAS

- Acheson, James
2006 Institutional Failure in Resource Management. *Annual Review of Anthropology* 35:117-134.
- Alexander, Bruce
2008 *The Globalization of Addiction: A Study in Poverty of the Spirit*. Oxford University Press, Nueva York.
- Albrecht, Glenn
2005 Solastalgia, a New Concept in Human Health and Identity. *Philosophy Activism Nature* 3:41-44.
- American Cultural Resources Association (ACRA)
2013 The Cultural Resources Management Industry: Providing Critical Support for Building our Nation's Infrastructure through Expertise in Historic Preservation. http://c.ymcdn.com/sites/www.acra-crm.org/resource/resmgr/pdf/acra_updated_govt_affairs_ha.pdf
- Anderson, Benedict
2006 *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, Londres. [1983].
- Angus, Ian
2013 The Myth of "Environmental Catastrophism." *Monthly Review* 65(4). <http://monthlyreview.org/2013/09/01/myth-environmental-catastrophism>
- Arendt, Hannah
1963 *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin, Nueva York.
- Arnold, Bettina
2014 Erasure of the Past. En *Encyclopedia of Global Archaeology*, editado por Claire Smith, pp. 519-520. Springer, Nueva York.
- Artifacts B.C.
s.f. Labels. http://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/301/ic/can_digital_collections/artifacts/kosapsom/labels.htm
- Berg, Lawrence
2011 Banal Naming, Neoliberalism, and Landscapes of Dispossession. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies* 10(1):13-22.
- Blaser, Mario, Harvey Feit y Glenn McRae (editores)
2004 *In the Way of Development: Indigenous Peoples, Life Projects and Globalization*. Zed Books-International Development Research Center, Londres.
- Bodley, John
2008 *Victims of Progress*. AltaMira, Lanham.

Borden, Charles

1950 Carta enviada a Harry B. Hawthorn, 10 de noviembre. Royal British Columbia Museum, Victoria.

Carlson, Roy

1979 C. E. Borden's Archaeological Legacy. *BC Studies* 42:3-12.

Custer, Jay F.

2005 Ethics and the Hyperreality of the Archaeological Thought World. *North American Archaeologist* 26(1):3-27.

Dent, Joshua

2012 Past Tents: Temporal Themes and Patterns of Provincial Archaeological Governance in British Columbia and Ontario. Tesis de maestría, Department of Anthropology, University of Western Ontario, London. <http://ir.lib.uwo.ca/etd/717/>

Doyle, Alister

2013 Pre-Viking Tunic Found by Glacier as Warming Aids Archaeology. *Reuters*, 21 de marzo. <http://uk.reuters.com/article/2013/03/21/us-climate-archaeology-idUKBRE92KoV320130321>

Flatman, Joe

2007 The Origins and Ethics of Maritime Archaeology, part II. *Public Archaeology* 6(3):163-176.
2012 What the Walrus and the Carpenter Did Not Talk about: Maritime Archaeology and the Near Future of Energy. En *Archaeology in Society: its Relevance in the Modern World*, Marcy Rockman y Joe Flatman, pp. 167-192. Springer, Nueva York.

Flemming, Nicholas (editor)

2004 *Submarine Prehistoric Archaeology of the North Sea: Research Priorities and Collaboration with Industry*. CBA Research Report 141. English Heritage; Council for British Archaeology, Bootham.

Foster, John, Brett Clark y Richard York

2010 *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*. Monthly Review Press, Nueva York.

Foucault, Michel

1996 *Foucault Live: Collected Interviews, 1961-1984*. Semiotext(e), Nueva York.

Fowler, Don

1987 Uses of the Past: Archaeology in the Service of the State. *American Antiquity* 52(2):229-248.

Funari, Pedro Paulo

2001 Public Archaeology from a Latin American Perspective. *Public Archaeology* 1(4):239-243.

Giroux, Henry

2014 *The Violence of Organized Forgetting: Thinking beyond America's Disimagination Machine*. City Lights, San Francisco.

Gnecco, Cristóbal

2012 Europe and the People Without Archaeology. En *European Archaeology Abroad: Global Settings, Comparative Perspectives*, editado por Sjoerd van der Linde, Monique van de Dries, Nathan Schlanger y Corijanne Slappendeland, pp. 387-399. Sidestone Press, Leiden.

Gnecco, Cristóbal y Adriana Schmidt Dias

2013 Anuncio del Inter-Congreso del WAC “Disentangling contract archaeology”. <https://www.facebook.com/wacscprofile/posts/436963356389704>

Graham, Paul

2008 How to Disagree. <http://www.paulgraham.com/disagree.html>

Hale, Sylvia

1990 *Controversies in Sociology: A Canadian Introduction*. Copp Clark Pitman, Mississauga.

Hamilakis, Yannis y Philip Duke (editores)

2007 *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Left Coast Press, Walnut Creek.

Harvey, David

2003 *The New Imperialism*. Oxford University Press, Nueva York.

Hobsbawm, Eric

1992 Inventing Traditions. En *The Invention of Tradition*, editado por Eric Hobsbawm y Terence Ranger, pp. 1-14. Cambridge University Press, Cambridge.

Homer-Dixon, Thomas

2006 *The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilization*. Vintage Canada, Toronto.

Hutchings, Rich

2013 “Hard Times Bring Hard Questions”. Is Archaeology Pro-Development? Is it Classist? Colonialist? Imperialist? Racist? Ponencia presentada en el congreso de la Canadian Archaeological Association, Whistler, BC, del 15 al 19 de mayo. <http://ubc.academia.edu/RichardHutchings>

Hutchings, Rich y Marina La Salle

2013 Five Thoughts on Commercial Archaeology. https://www.academia.edu/3688649/Five_Thoughts_on_Commercial_Archaeology, 28 de abril del 2013.

2014 Teaching Anti-Colonial Archaeology. *Archaeologies* 10(1):27-69.

Kahan, Dan, Hank Jenkins-Smith y Donald Braman

2011 Cultural Cognition of Scientific Consensus. *Journal of Risk Research* 14(2):147-174.

King, Thomas

2009 *Our Unprotected Heritage: Whitewashing the Destruction of Our Cultural and Natural Environment*. Left Coast Press, Walnut Creek.

Klein, Naomi

2007 *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Henry Holt and Company, Nueva York.

La Salle, Marina

2010 Community Collaboration and Other Good Intentions. *Archaeologies* 6(3):401-422.

2014 The Trouble with “co”. *Institute for Critical Heritage and Tourism Bulletin* 2.

La Salle, Marina y Rich Hutchings

2012 Commercial Archaeology in British Columbia. *The Midden* 44(2):8-16.

Lyons, Natasha, Ian Cameron, Tanja Hoffmann y Debbie Miller

2012 Many Shades of Grey: Dispelling some Myths about the Nature and Status of CRM in British Columbia, a Response to La Salle and Hutchings. *The Midden* 44(3-4):6-8.

Mander, Jerry

1991 *In the Absence of the Sacred: The Failure of Technology and the Survival of the Indian Nations*. Sierra Club Books, San Francisco.

Mander, Jerry y Victoria Tauli-Corpuz (editores)

2006 *Paradigm Wars: Indigenous Peoples' Resistance to Globalization*. Sierra Club Books, San Francisco.

Marx, Karl

1976 *Capital. A Critique of Political Economy*. Tomo 1. Vintage Books, Nueva York. [1867].

Matson, R. G., y Gary Coupland

1995 *The Prehistory of the Northwest Coast*. Academic Press, San Diego.

McNiven, Ian y Lynette Russell

2009 *Appropriated Pasts: Indigenous Peoples and the Colonial Culture of Archaeology*. AltaMira Press, Lanham.

Muckle, Robert

2013a Perceived Conflicts in Archaeology-for-Profit. *Anthropology News* 54(9):1-13.

2013b Reflecting on Collaborative Archaeology with Indigenous Peoples. *Anthropology News* 54(5):1-11

Nixon, Rob

2011a *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press, Cambridge.

2011b Slow Violence: Literary and Postcolonial Studies Have Ignored the Environmentalism that Often Only the Poor Can See. *The Chronicle of Higher Education* 2, junio. <http://chronicle.com/article/Slow-Violence/127968/>

Olivier, Laurent

2013 The Business of Archaeology is the Present. En *Reclaiming Archaeology: beyond the Tropes of Modernity*, editado por Alfredo González-Ruibal, pp. 117-129. Routledge, Londres.

- Polychroniou, Chronis
 2013 Neoliberalism and the Politics of Higher Education: An Interview with Henry A. Giroux. *Truthout*, 26 de marzo. <http://truth-out.org/news/item/15237-predatory-capitalism-and-the-attack-on-higher-education-an-interview-with-henry-a-giroux>
- Sampeck, Kathryn
 2014 From Ancient Altepeltl to Modern Municipios: Surveying as Power in Colonial Guatemala. *International Journal of Historical Archaeology* 18(1):175-203.
- Russell, Bertrand
 1930 *The Conquest of Happiness*. George Allen & Unwin, Londres.
- Schuldenrein, Joseph
 2013 The Growth, and Influence of the Oil and Gas Industry on Contemporary Archaeology. *Voice of America*, 13 de febrero. <http://www.voiceamerica.com/episode/67438/the-growth-and-influence-of-the-oil-and-gas-industry-on-contemporary-archaeology>
- Shanks, Michael y Christopher Tilley
 1987 *Re-Constructing Archaeology: Theory and Practice*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Smith, Angele
 2008 Landscapes of Clearance: Archaeological and Anthropological Perspectives. En *Landscapes of Clearance*, editado por Angele Smith y Amy Gazin-Schwartz, pp. 13-24. Left Coast Press, Walnut Creek.
- Smith, Laurajane
 2004 *Archaeological Theory and the Politics of cultural Heritage*. Routledge, Londres.
- Springer, Simon
 2010 Neoliberalism and Geography: Expansions, Variegations, Formations. *Geography Compass* 4(8):1025-1038.
 2011 Violence Sits in Places? Cultural Practice, Neoliberal Rationalism, and Virulent Imaginative Geographies. *Political Geography* 30:90-98.
- Sutton, Mary Jean, Jillian Huntley y Barry Anderson
 2013 “All Our Sites are of High Significance”: Reflections from Recent Work in the Hunter Valley. Archaeological and Indigenous Perspectives. *Journal of the Australian Association of Consulting Archaeologists* 1:1-15.
- Trigger, Bruce
 1989 *A History of Archaeological Thought*. Cambridge University Press, Cambridge.

West, Robert

- 1995 Saving and Naming the Garbage: Charles E. Borden and the Making of B.C. Prehistory. Tesis de maestría, Department of History, University of British Columbia, Vancouver.

World Archaeological Congress (WAC)

- 2013 *Newsletter* 42, diciembre. <http://worldarch.org/blog/wac-december-2013-e-newsletter-volume-42>

Yellowhorn, Eldon

- 2013 Whither the *Heritage Conservation Act*: Renewal or Funeral? Sesión plenaria, Congreso de la Asociación Arqueológica de Canadá, Whistler, del 15 al 19 de mayo. <http://canadianarchaeology.com/caa/sites/default/files/page/Whistler2013Programme-may-3.pdf>

LA ARQUEOLOGÍA Y LA LÓGICA DEL CAPITAL: ACTIVANDO EL FRENO DE EMERGENCIA

Yannis Hamilakis

Traducido del inglés por Cristóbal Gnecco

LA ARQUEOLOGÍA Y LA LÓGICA DEL CAPITAL: VIDAS PARALELAS

COMIENZO CON UNA CITA DE WALTER BENJAMIN TOMADA DE SU *LIBRO DE LOS PASAJES*, SU INACABADA *magnum opus* escrita entre 1927 y 1940, una exploración genealógica de los espacios, los flujos y los procesos de la modernidad europea, en la que toma al París del siglo XIX como caso de estudio:

Hay relaciones entre almacenes por departamentos y museos y el bazar proporciona un vínculo. La acumulación de obras de arte en el museo las pone en comunicación con las mercancías que —donde se ofrecen en masa a los transeúntes— despiertan en él la idea de que alguna parte de todo esto también debería caer sobre él. (Benjamin 2002:415)

Objetos bien ordenados, a menudo detrás de vitrinas, que se ofrecen a los transeúntes en el bazar, el almacén por departamentos, el museo. Posesiones privadas en potencia, mercancías o mercancías en potencia. Casi fetiches, enmascaradas y mal reconocidas las condiciones de su producción como entidades arqueológicas modernas y su proyección como objetos de museo. Sin embargo, en la mayoría de los casos los museos, al menos, presentaban un poco de información sobre el contexto arqueológico de estos artefactos: nos enteramos de que estas son vasijas de Atenas del siglo VIII a. C. o glifos de Palenque del siglo VII, por ejemplo. Pero estoy hablando de otra cosa: la transformación de huellas materiales multitemporales en objetos arqueológicos monocrónicos y, muy a menudo, en mercancías arqueológicas. Estoy hablando de las condiciones y relaciones de trabajo, las transcripciones ocultas de explotación que acompañan la génesis y el desarrollo de la arqueología modernista profesionalizada en Europa en el siglo XIX. Son estos conocimientos y relaciones los que están enmascarados y mal reconocidos en el fetichismo de la mercancía arqueológica de la arqueología moderna.

Pero dejemos a Benjamín y al París del siglo XIX por un momento y vayamos a Grecia, siguiendo el rastro de algunas mercancías arqueológicas. Introduzcamos al arquitecto y anticuario inglés Charles Robert Cockerell, quien junto con sus colaboradores intentó,

con éxito, retirar las esculturas del templo clásico de Atenea Afaya, en la isla de Egina, en la primera década del siglo XIX:

No era de esperar que nos permitieran llevar, sin oposición, lo que habíamos encontrado. Aunque mucha gente puede descuidar sus posesiones, comienzan a valorarlas tan pronto como ven que otros las codician. Los primates de la isla llegaron a nosotros en grupo y leyeron una declaración hecha por el consejo de la isla en la que nos rogaban que desistiéramos de nuestras operaciones porque sólo el cielo conocía las desgracias que podían caer sobre la isla, en general, y sobre la tierra circundante, en particular, si continuábamos con ellas. Esa estúpida pretensión de temor supersticioso era, obviamente, una mera excusa para extorsionarnos y como sentimos que era justo que pagáramos enviamos a nuestro guía con ellos al pueblo para establecer la cantidad; mientras tanto llegó un barco que habíamos pedido a Atenas, embarcamos los mármoles sin demora y los mandamos [...] Puesto que los mármoles ya se habían ido fue más fácil tratar con los primates. (Cockerell 1903:53-54)

Si leemos cuidadosamente el pasaje de Cockerell y otros relatos de viajes desde los siglos XV y XVI hasta el siglo XIX, encontraremos una arqueología indígena (cfr. Hamilakis 2011 y Bahrani *et al.*, eds. 2011): objetos de diversos tiempos, incrustados en el tejido de la vida diaria, interactuados de una manera completamente multisensorial; estos eran fragmentos significativos encontrados al trabajar la tierra y después reunidos y reubicados en casas, mezquitas, iglesias. Desempeñaban, por lo tanto, roles distintivos, a veces apotropaicos, otras veces curativos y milagrosos; en ocasiones, incluso, como encarnaciones de fuerzas feroces. Su saqueo y apropiación por parte de los actores y de los aparatos de la arqueología modernista, como si fuera poco, los invistieron con un valor económico (como se ve en el pasaje anterior) e iniciaron el proceso de su mercantilización. Finalmente, fueron reubicados en los entornos “apropiados” de los museos occidentales. Su posterior apreciación, a través de los lentes de la estética (o anestética) de la desencarnación y de la desensorialización, ofreció un refugio a salvo de la mera mercantilización, la ilusión reconfortante de que son su información artística y su valor estético lo que importa, por encima de las transacciones enmascaradas que se requirieron para que pudieran haberse dado admiración y reflexión estéticas desinteresadas (cfr. Hamilakis 2013).

La mercantilización también estuvo involucrada, desde el principio, en el proceso de nacionalización de la sociedad: la imaginación nacional no solo produjo Estados-nación, sino también arqueologías modernistas nacionales que, a su vez, garantizaron la reproducción continua de imaginaciones nacionales (Díaz-Andreu 2007; Hamilakis 2007). El nacionalismo ha sido y es un proyecto de la clase media y su magia descansa en su capacidad para presentarse por encima y más allá de la clase y de otras divisiones,

solo reconociendo la división entre el yo nacional y el otro nacional. Sin embargo, uno de sus principales contradictores, como lo es Partha Chatterje (1993), ha demostrado que la tensión entre el capital y la comunidad también se encuentra en la arqueología nacional: las huellas materiales constituidas como objetos arqueológicos por la arqueología modernista a menudo son adoradas como los íconos sagrados de la comunidad imaginada de la nación e, incluso, pueden ser personificadas como los propios ancestros. En muchos contextos nacionales, pero no en todos, las antigüedades han sido declaradas reliquias sagradas que pertenecen a la comunidad nacional en su conjunto. Sin embargo, al mismo tiempo son involucradas en relaciones de propiedad (incluso si es propiedad nacional) y en varias transacciones y operan como capital simbólico; de ahí la tensión. Es por ello que cualquier intercambio financiero o simbólico está enmascarado y es mal reconocido (cfr. Hamilakis 2007).

Aún más, muchas estructuras institucionales establecidas de la arqueología modernista, incluyendo la mayoría de las organizaciones profesionales de todo el mundo, insisten en el carácter no comercial de los objetos arqueológicos y con frecuencia se oponen a la circulación privada de antigüedades, sobre todo de excavaciones recientes. Es raro, sin embargo, ver una oposición concertada y vociferante a la mercantilización del pasado en los museos, en el sector del “patrimonio” y en diversos acuerdos de patrocinio que los arqueólogos y los profesionales de los museos han forjado con grandes corporaciones, algunas de ellas con un desagradable y dudoso historial medioambiental y de derechos humanos. Casos recientes incluyen a las corporaciones petroleras que financian al Museo Británico de Londres, Shell y Visa que actúan como los principales patrocinadores de la excavación de Çatal Hüyük en Turquía (cfr. Hamilakis 1999) o la corporación minera Río Tinto que financia congresos y reuniones del Congreso Mundial de Arqueología (cfr. Shepherd y Haber 2011; Shepherd, este volumen).

Mi argumento es simple: antes de empezar a analizar el fenómeno bastante reciente de la arqueología financiada por empresarios, que surgió bajo el capitalismo neoliberal, tenemos que examinar y analizar la génesis de la arqueología oficial como uno de los muchos dispositivos colaterales de la modernidad capitalista occidental. La lógica del capital estaba instalada en el proceso de constitución de la arqueología modernista, desde el primer momento.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUEOLOGÍA COMERCIAL

Hoy en día la arqueología comercial y la mercantilización del pasado material, por supuesto, toman formas diferentes en comparación con el siglo XIX, a pesar de algu-

nas similitudes. El nacionalismo y el neocolonialismo siguen siendo los imaginarios dominantes en la mayor parte del mundo. El capitalismo neoliberal puede llegar a dismantelar las estructuras nacionalizadas del patrimonio material que quedan e imponer la doctrina del mercado en todas partes (con unas pocas excepciones esperanzadoras, como sucede en algunos contextos de América del Sur), pero la imaginación nacional y colonial / neocolonial aún es fuerte y adopta nuevas formas. Las tensiones existentes entre la comunidad nacional y el capital siguen haciendo sentir su impacto, pero las fuerzas del capital han demostrado que pueden mercadear, muy provechosamente, las ideas e imaginarios nacionales y coloniales.

Examinemos, por un momento, un caso de arqueología comercial, el caso que, quizás, representa la más temprana transformación de una operación arqueológica financiada, fundamentalmente, con fondos públicos en una entidad totalmente mercantilizada y comercializada. El régimen de la arqueología comercial en el Reino Unido se desarrolló como resultado de la dominación del thatcherismo y del neoliberalismo. Hasta 1990 la arqueología de rescate fue hecha, principalmente, con fondos públicos y operada por una combinación de arqueólogos (del Estado y de las autoridades locales) y muchos voluntarios y aficionados de asociaciones locales, motivados por su amor a la arqueología (Everill 2007, 2012). Un programa estatal destinado a reducir el desempleo también canalizó millones de libras hacia la arqueología de rescate y proporcionó formación y empleo significativo a miles de personas. El programa fue abolido en 1987 y dejó un déficit de financiación que tuvo que ser cubierto por los empresarios. En 1990 se implementó un nuevo régimen de política de planificación que postuló que los empresarios debían permitir la realización de trabajos arqueológicos antes de cualquier actividad de desarrollo. Ese régimen opera bajo el principio de “quien contamina paga” en otras palabras, que la empresa que lleva a cabo el proyecto tiene que mitigar cualquier destrucción causada, mediante la financiación de trabajos arqueológicos. Sin embargo, es el empresario (es decir, la empresa privada) quien elige el equipo arqueológico que lleva a cabo el trabajo arqueológico o de rescate. La elección está basada en licitaciones competitivas (conocidas como “subastas” en Estados Unidos). Como resultado de esta orientación política de planificación se crearon firmas privadas de consultoría arqueológica para ofertar por el trabajo arqueológico que tenía que hacerse antes de cualquier actividad de desarrollo. El empresario, entonces, escoge una empresa, teniendo en cuenta la relación costo-efectividad, es decir, con base en gastos y tiempos. Las consultoras arqueológicas, por lo tanto, intentan aumentar la rentabilidad de su oferta mediante la reducción de costos y la promesa de hacer este trabajo en el menor tiempo posible. Existe un mecanismo de inspección establecido por entidades semiprivadas y semipúblicas, como

English Heritage o los arqueólogos de los condados, pero su ámbito de competencia y sus recursos son bastante limitados y su personal no es adecuado para inspeccionar la enorme cantidad de actividad arqueológica en el país. Más aún, los organismos de este tipo, especialmente English Heritage, están siendo aún más debilitados y convertidos en entidades privatizadas y comercializadas. De acuerdo con la filosofía del neoliberalismo, se cree que el mercado, que adquiere las propiedades sensibles de una persona sabia, se regulará a sí mismo.

Como resultado de estas acciones, el número de consultoras y empresas arqueológicas y sus empleados aumentó dramáticamente desde la década de los noventa hasta, aproximadamente, el 2007, cuando comenzó su declive debido a la crisis del capitalismo global. Hasta ese momento la alabanza de este régimen comercial era casi universal, con algunas voces disidentes. Incluso hoy en día los defensores de este fundamentalismo de mercado solo tienen alabanzas para lo que ven como la “edad de oro” de la arqueología o, para usar la expresión de uno de sus defensores más apasionados, la era de la “fiebre del oro” (Aitchison 2009). ¿En qué basan esos elogios? Su argumento principal es el aumento de la actividad arqueológica y el número de personas que estaba y está empleado en la arqueología de contrato bajo el nuevo régimen. Entre 1990 y el 2000, por ejemplo, se duplicó el número de arqueólogos profesionales empleados en el Reino Unido (la gran mayoría en el sector comercial), que pasó de 3.000 a casi 7.000 (Aitchison y Edwards 2008). Estos números se mantuvieron en esos niveles hasta el 2007, cuando comenzó el declive; en 2012-2013 el número estimado se situaba en 4.792 (de los cuales el 60% trabajaba en el sector comercial), una disminución del 30% desde el 2007 (Aitchison y Rocks-Macqueen 2013:10). Sin embargo, el aumento inicial en la primera década de la arqueología totalmente comercializada no fue resultado de la comercialización y del régimen de competencia neoliberal. Fue, más bien, resultado de la Guía de Planificación (PPG16) emitida por el Gobierno en 1990 y que estableció que todo vestigio arqueológico o patrimonial debía ser evaluado e investigado antes de cualquier actividad de desarrollo. Esta guía se emitió debido a la presión pública y a la indignación que siguió a la inminente destrucción de hallazgos arqueológicos de alto perfil, especialmente los restos del Rose Theatre de Shakespeare en Londres, encontrados en 1989. Además, como Gnecco y Dias señalan en su introducción a este libro, el énfasis en el aumento de puestos de trabajo como resultado positivo de la comercialización es tautológico: los puestos de trabajo creados son esenciales para mitigar la destrucción causada por el desarrollo, pero, al mismo tiempo, el aumento en el número de mano de obra disponible dispuesta a trabajar en condiciones contractuales perpetúa y promueve, aún más, la arqueología comercial como régimen. No hay garantía, por supuesto, de que esta mano

de obra seguirá siendo empleada; como señalé, a raíz de la recesión económica de 2007-2008 el descenso en el número de puestos de trabajo ha sido dramático.

Otro argumento que apoya la arqueología comercial es que ha elevado los estándares en el trabajo arqueológico, una tesis basada en el principio ingenuo de que las empresas que compiten por los contratos tienden a “entregar” mejores “productos”. Lo que ha ocurrido, de hecho, es un proceso de estandarización y homogeneización bajo la rúbrica de profesionalismo y profesionalización. Desde los primeros años del establecimiento de la arqueología comercial en el Reino Unido sus críticos plantearon serias preocupaciones (e. g., Chadwick 1997; Cumberpatch y Blinkhorn 2001; Graves-Brown 1997). Esta es una cita que captura la situación, siete años después de la introducción del nuevo régimen:

Los arqueólogos profesionales ahora son empleados con contratos a muy corto plazo, incluso semanales. Las incapacidades y permisos se están volviendo raros y probablemente no ha habido ninguna mejora apreciable en las tasas salariales y en las condiciones del servicio desde 1990, mientras que los salarios han caído cada vez más por debajo de la inflación y de otras profesiones [...] Las licitaciones competitivas y la introducción del PPG16 en lugar de aumentar los salarios y mejorar las condiciones han colocado a los arqueólogos en una situación peor de la que estaban en 1990. La alta rotación de personal y el énfasis en la eficiencia de costos en muchas unidades contractuales puede dar lugar a que los excavadores sean considerados como poco más que obreros cuyas opiniones en el sitio pueden ser ignoradas por los gerentes de los proyectos. Algunos empresarios ahora consideran la presencia de yacimientos arqueológicos en un área de desarrollo como un problema contaminante que los arqueólogos pueden resolver mediante la eliminación rápida, eficiente y barata de esta estratigrafía [...] Un estudio reciente de los procedimientos de evaluación arqueológicos ha usado una metáfora médica para describir las metodologías de evaluación [...] ¿Esto significa que los depósitos arqueológicos deben ser considerados como un tejido infectado y enfermo que, en última instancia, debe ser “curado” o extirpado? (Chadwick 1997)

En años más recientes una serie de estudios sistemáticos y exhaustivos ha demostrado que estas preocupaciones estaban bien fundadas y que, de hecho, todo el sistema es perjudicial para la práctica arqueológica y para el público. Estos estudios recientes son etnografías de abajo hacia arriba basadas en relaciones a largo plazo con los arqueólogos que trabajan en el sector comercial; no solo con los gerentes de las unidades, sino también con los numerosos “excavadores”, usualmente marginados y descontentos. Han empleado métodos etnográficos cualitativos como la observación participante

y las entrevistas informales, y no solo datos estadísticos cuantitativos y cuestionarios formales, como suele ser el caso de las encuestas realizadas por las organizaciones de empleadores y otras estructuras verticales. Uno de estos proyectos fue conducido por Paul Everill en el Reino Unido, titulado acertadamente *Los excavadores invisibles* [The Invisible Diggers] (Everill 2007, 2012); otro fue realizado por Nicolas Zorzin en Quebec, Victoria (Australia) y Japón (Zorzin 2011, 2014, este volumen). Los diversos estudios de caso presentados en este libro se suman a este corpus valioso e importante.

Estos estudios, entre otros, han demostrado que las licitaciones competitivas y la necesidad de reducir las ofertas para ganar contratos se han traducido en proyectos apresurados, mal diseñados y ejecutados, y en un conocimiento arqueológico inadecuadamente registrado, a pesar de los heroicos esfuerzos de la mayoría de los arqueólogos de contrato. Aún más, las estrategias de reducción de costos han hecho que la mayoría de los trabajadores del sector esté mal pagada, con salarios muy por debajo del promedio nacional; sus contratos son temporales y carecen de perspectivas profesionales serias. Puesto que las empresas privadas y las consultoras compiten por trabajo en todo el país, o incluso en el extranjero, los trabajadores tienen que llevar un estilo de vida itinerante, lejos de casa durante semanas o meses, alojados en hoteles baratos; de esta manera, ingresan al *precarizado*, que algunos describen como la clase social emergente en el capitalismo neoliberal (cfr. Standing 2011). Aparte de los efectos sobre la vida personal de los individuos, esto también dio lugar a la pérdida de experticia arqueológica local y regional, acumulada a través de la participación sostenida y profunda con la cultura material de una región específica.

La arqueología llevada a cabo como parte de este proceso, en casi todos los casos, no incluye el financiamiento para el análisis posterior a la excavación y el estudio del material excavado. El resultado es un informe técnico breve, el requisito mínimo para que el empresario pueda proceder. Los museos locales se llenan de material que nadie va a estudiar, a menos que se interese un estudiante o un académico. Los productos arqueológicos más importantes de esta actividad son los breves informes técnicos que se convertirán en parte de la "literatura gris". Las únicas ocasiones en que estos informes técnicos entran en la discusión arqueológica ocurren cuando un académico obtiene financiación para dar sentido y analizar los datos registrados (cfr. Bradley 2006). En las raras ocasiones en que se alcanza esa síntesis los resultados son muy útiles e informativos, pero para que esto suceda se necesitan iniciativa y financiación que vengan de fuera de este sistema empresarial.

Debido a la presión del tiempo el proceso arqueológico se ha convertido en un procedimiento tecnicalizado e instrumentalizado, una producción homogeneizada y simpli-

ficada, casi fordista, pero que mantiene aspectos claves del posfordismo con respecto a las relaciones laborales, como la precariedad y la incertidumbre extrema, el cortoplacismo y la fragmentación. Es revelador que los arqueólogos que trabajan en el sector tengan baja autoestima y se describan con etiquetas como técnicos arqueológicos, “excavadores” o “peones”. Sus tareas simplificadas de excavación y de llenado de formatos en esta línea de producción arqueológica, y su exclusión del análisis, estudio y proceso de publicación, han conducido a un profundo sentido de alienación de los resultados de su trabajo y de la experiencia arqueológica. De hecho, la sensación de extrañamiento y alienación analizada por Marx (1977:61-74) como característica de todas las relaciones económicas capitalistas encuentra su expresión directa, vívida y extrema en la arqueología de contrato financiada por los empresarios. Las tres formas de alienación esbozadas por Marx en sus *Manuscritos económicos y filosóficos* de 1844 se pueden encontrar aquí: alienación de los productos y los resultados del trabajo, en este caso el conocimiento y el entendimiento sintético e interpretativo de los contextos y sitios arqueológicos y de las huellas y rasgos materiales que, en la mayoría de los casos, son destruidos o sepultados por las obras; alienación del proceso de trabajo debido a la instrumentalización, simplificación y tecnificación de la práctica arqueológica; y extrañamiento y alienación del “cuerpo inorgánico del hombre” (Marx 1977:67), la naturaleza, los paisajes naturales y los rasgos que son radicalmente alterados y destruidos en el proceso de “desarrollo”, del cual forma parte la arqueología de contrato. Ante este triple extrañamiento y alienación los arqueólogos que trabajan en este sector son alienados de su propia vida porque “aparece sólo como *un medio de vida*” (Marx 1977:68) y, también, de sus compañeros de trabajo y de los demás seres humanos.

No es de extrañar, por tanto, que la gran mayoría de los arqueólogos que trabaja en este sector abandone la arqueología de contrato y comercial al cabo de unos años e intente volver a la universidad o, más comúnmente, deje la arqueología por completo. Según los datos más recientes del Reino Unido, el 24% de los empleados permanece en el sector por menos de un año, el 41% por menos de cinco años y el 65% por menos de diez años. Solo el 13% se mantiene por más de veinte años (Aitchison y Rocks-Macqueen 2013), y es más probable que esté en puestos directivos, bien pagados. Las mujeres permanecen por menos tiempo en el sector, mientras que las minorías étnicas están casi ausentes —una característica de la arqueología británica en su conjunto (Everill 2012)—. En palabras de Paul Everill (2012), hoy en día el empleado típico de la arqueología comercial en el Reino Unido es un hombre blanco de 38 años. La arqueología de contrato, el mayor sector de actividad arqueológica, se basa en un ejército de trabajadores alienados bien calificados (todos graduados y muchos de ellos con títulos

de posgrado) pero mal pagados, infravalorados y desafectos; una fuerza de trabajo fungible que se utiliza y luego se remueve, mientras la “sangre nueva”, recién salida de la universidad, espera en la puerta. La arqueología comercial conduce a la descalificación de los arqueólogos y a la pérdida de graduados calificados, generación tras generación.

Al mismo tiempo, y como varios artículos en este libro señalan, el sector comercial, con su poder de números y capital financiero, ejerce una enorme presión sobre la arqueología en su conjunto, incluyendo la docencia universitaria. Una consecuencia de esta presión es la transformación del currículo tradicional en uno basado en habilidades de campo que proporciona, en otras palabras, capacitación a la fuerza de trabajo que va a ser empleada en la arqueología comercial —a pesar de que solo una pequeña minoría de estudiantes de arqueología, por lo menos en el Reino Unido, desea trabajar en arqueología comercial o, incluso, seguir una carrera profesional como arqueólogo (cfr. Hamilakis y Rainbird 2001)—. Esta presión ha tenido algún impacto en volver los currículos arqueológicos más instrumentalizados, un conjunto de habilidades técnicas homogeneizadas, y en hacer de la educación en arqueología un proceso de transferencia mecánica de conocimientos, en lugar de una experiencia exploradora, crítica, reflexiva y capaz de transformar la vida (Cobb y Croucher 2014; Croucher 2010; Hamilakis 2004; Hamilakis y Rainbird 2001; véase la revista digital *Research in Archaeological Education Journal*). La instrumentalización de la enseñanza de la arqueología, por supuesto, es el resultado de procesos adicionales, pero relacionados y similares, como el predominio del paradigma neoliberal en la academia británica y la mercantilización y burocratización de las relaciones alumno-profesor como resultado de diversos procedimientos de auditoría (Shore y Wright 1999; Strathern 2000). Estos acontecimientos reflejan los cambios que han ocurrido en la arqueología comercial y, también, los cambios en las sociedades occidentales, incluyendo la británica.

En la mayoría de los casos, sino en todos, los trabajos arqueológicos en el sector comercial se realizan lejos de los ojos del público, en lugares vallados y cerrados. Por eso hay poca participación pública y comunitaria, ya sea en el proceso o en los informes resultantes, a pesar de algunos esfuerzos recientes por cambiar esta situación. Más aún, la arqueología, debido a sus connotaciones de preservación y valores ambientales, puede funcionar como “hoja de parra”, pretexto verde y coartada ambiental de grandes proyectos, destructivos y altamente polémicos, como obras de carreteras y aeropuertos. Sin embargo, ¿cómo se justifica esta operación en lo que se refiere a las huellas materiales del pasado? Los principios fundamentales en los que se basa este sistema son la conservación *in situ* y la llamada preservación por registro. Este último principio es anterior a la arqueología comercial, pero fue bajo ella que se convirtió en una idea predominante.

No obstante, como es bien conocido, la preservación *in situ* de huellas materiales inmóviles en la ubicación de una gran obra de desarrollo es, en la mayoría de los casos, difícil o imposible, porque el desarrollo tiene prioridad. Las huellas son cubiertas por el concreto, para nunca ser vistas de nuevo, si es que no son completamente destruidas en el proceso, o, en raras ocasiones, se conservan si el empresario cree que añaden al valor comercial de su proyecto, operando como una atracción turística, por ejemplo. En la mayoría de los casos, sin embargo, el principio que opera es “la preservación por registro”: este es un eufemismo, por supuesto, de la completa destrucción de las huellas materiales para dar paso al centro comercial o al aeropuerto de turno, con el pretexto de que su registro arqueológico en papel y en formato digital garantiza su preservación.

Estos cambios dramáticos en la arqueología de rescate y de campo han sido descritos como un proceso de profesionalización, un concepto que ha sido invocado por agentes y grupos numerosos y diversos, a menudo con significados opuestos o diferentes. En los primeros años del régimen de la arqueología comercial el término fue entendido como un llamado a emplear arqueólogos calificados y entrenados formalmente, en vez de aficionados y voluntarios. En años más recientes el término ha sido invocado por empleados no administrativos con salarios bajos para indicar la necesidad de una remuneración justa, adecuada a sus habilidades y cualificaciones; perspectivas profesionales adecuadas; y estándares elevados de registro arqueológico (Everill 2012). Sin embargo, parece que en el régimen actual la “profesionalización” ha dado lugar, más bien, a un proceso de homogeneización y simplificación de la formación, el trabajo y la producción, ahogando la innovación y la creatividad (Lucas 2002). Esta “profesionalización”, sin embargo, permite funcionar al capitalismo neoliberal mientras los trabajadores / excavadores son constantemente relocalizados bajo un régimen de extrema precariedad o “flexibilidad”. Edward Said (1994) nos ha recordado que “profesionalismo” puede significar competencia, pero también puede tener otros significados siniestros: no solo hiperespecialización, sino, de manera más problemática, la renuencia a cuestionar las estructuras y los regímenes de verdad y autoridad, la vacilación (o, incluso, la incapacidad, a través de medios contractuales o legales) ante la posibilidad de ser productores culturales independientes y autónomos con voz propia. En ese sentido Said alabó el “amateurismo” como la encarnación del cuidado, el afecto y el amor por el trabajo y por las cosas materiales, los ambientes y las entidades con las que interactuamos (Shanks y McGuire 1996). Este tipo de amateurismo, que se acerca a sus raíces etimológicas, es activamente desalentado en el régimen comercial de la arqueología actual.

Sin embargo, una y otra vez se ha demostrado que los arqueólogos que trabajan en este sector soportan esas adversidades porque aman lo que hacen y porque han desa-

rollado una camaradería basada en el proceso físico de la excavación (son los auto-proclamados excavadores, después de todo) y la dureza que lo acompaña. Esto explica la reacción de algunos de ellos cuando se critica la arqueología comercial, sobre todo cuando esa crítica proviene de los académicos. Algunos han interiorizado una falsa división entre el mundo académico y el sector comercial —una división homóloga a la que se postula entre teoría y práctica y entre trabajo intelectual y manual— y han optado por este último. Esta es una falsa conciencia que enmascara las enormes desigualdades y la explotación en el sector —no todos los empleados en arqueología comercial están “en el mismo barco” y los salarios administrativos son mucho más altos que los de los “excavadores”—. Los académicos que critican el régimen comercial han pasado años trabajando en el sector (y tienen conocimiento y experiencia de primera mano de los procesos que describen), o también han criticado y combatido la mercantilización de la universidad, adoptando una posición antineoliberal y anticapitalista. En lugar de reconocer esa crítica política e intentar establecer alianzas con la academia contra el capitalismo neoliberal, los arqueólogos en el sector comercial a menudo tratan esta crítica como una guerra de facciones entre académicos y “excavadores” y optan por cerrar filas detrás de su identidad profesionalizada. Olvidan que la academia todavía ofrece un espacio de respiro temporal para la reflexión y el análisis, un espacio atacado por el mercado; no el espacio aislado, la torre de marfil mítica desde donde se lanzan piedras a los colegas en el campo, sino otro campo de batalla que todavía proporciona —pero ¿por cuánto tiempo?— un elemento de libertad y anima a la crítica, algo que es casi imposible en el sector comercial.

Estas observaciones se derivan, principalmente, del caso del Reino Unido, tal vez el país con el sector arqueológico más comercializado en el mundo y con una legislación de protección extremadamente débil. Vale la pena subrayar que la Guía de Planificación (PPG16) aprobada en 1990, el texto que marcó el desarrollo de la arqueología comercial en el país, no era un documento centrado en asuntos patrimoniales, sino que regulaba la planeación y los procesos de desarrollo. Ni siquiera era un acto jurídico, porque no tenía poder legal. Desde el 2010 fue reemplazado por documentos similares (el último es del 2012). Los más recientes tratan de incluir el paisaje y otras características en el proceso, no solo monumentos aislados o sitios arqueológicos, pero la filosofía básica es la misma: la entidad principal es el “bien patrimonial”, una terminología reveladora de la mentalidad de instrumentalismo y mercantilización que sustenta el discurso de protección del patrimonio y sus prácticas asociadas.

Sin embargo, hay una percepción general, incluso entre los arqueólogos que trabajan en el sector comercial, de que la arqueología comercial está en una crisis profunda

(Schlanger y Aitchison 2010; Everill 2012), sobre todo desde 2007-2008, el principio de la crisis financiera. Como señalé antes, esta crisis se ha traducido en una disminución del 30% en los trabajos en arqueología, la gran mayoría de ellos en el sector comercial. Irlanda, que en los años del llamado “tigre dorado” vio aumentar el número de arqueólogos de 650 en el 2002 a 1.700 en el 2007, experimentó una caída aún más dramática: una reducción del 82% en el número de arqueólogos comerciales entre julio del 2008 y enero del 2009¹. La evidencia anecdótica indica que en el último año algunas partes del Reino Unido (Londres y el sur) experimentaron un aumento de la actividad de la construcción y, por lo tanto, una renovada demanda de trabajos de arqueología, pero es poco probable que compense el descenso anterior. Por otra parte, miles de arqueólogos calificados y experimentados pueden ya haber abandonado el sector, profundizando con ello la descualificación de la arqueología británica.

Un resultado interesante de esta crisis es la reapertura de la discusión sobre alternativas. Everill (2012), por ejemplo, cree que la única solución para el Reino Unido es la creación de un servicio arqueológico nacional —en el sentido público—, financiado por impuestos a los empresarios. La idea de un impuesto de este tipo ha sido presentada por profesionales de la arqueología comercial y por académicos (Cumberpatch y Blinkhorn 2001; Everill 2012). Aboga por el mantenimiento del principio “quien contamina paga” mientras la operación arqueológica se independiza de los empresarios. El impuesto no está ligado a un contrato específico, sino que se utiliza, más bien, para financiar la actividad arqueológica en un área por parte de una entidad independiente, una unidad arqueológica que puede operar a nivel regional como parte de la administración local o como parte de un servicio arqueológico nacional. De esa manera, los arqueólogos mantienen su autonomía: no son escogidos por los empresarios, no están sometidos a su presión y no son responsables ante ellos. Son responsables ante el público, a través de la autoridad local, regional o nacional pública que coordina los trabajos arqueológicos. Así se mantiene la experticia regional y las unidades arqueológicas pueden idear planes a largo plazo y utilizar fondos para el análisis y el estudio del material arqueológico, así como abrir al público el trabajo arqueológico. En el clima actual en el país, sin embargo, con la mentalidad neoliberal que domina en la academia y en el sector comercial, esas ideas tienen pocos partidarios, aun entre los arqueólogos. Además, incluso si estos cambios fuesen implementados, ¿podrán romper el vínculo entre la arqueología (modernista) y la lógica del capital, dada su larga genealogía?

1 Véase <http://www.bajrfed.co.uk/archive/index.php/t-1702.html>

Tal vez un rápido vistazo a un caso diferente puede ayudarnos a responder esa pregunta. Grecia es un contexto nacional donde dicho sistema operado por el Estado sigue en pie, a pesar de que ha sido objeto de críticas recientes y ya se han iniciado planes para semiprivatizarlo, especialmente los principales museos. Los intentos de mercantilización abierta son resistidos —en parte debido al importante papel de la arqueología en la imaginación nacional (cfr. Hamilakis 2007)—, a pesar del hecho de que ocurren transacciones financieras encubiertas e intercambios simbólicos explícitos desde el siglo XIX. En general, sin embargo, y en términos comparativos, la arqueología griega ha logrado hacer valer su autoridad sobre los empresarios y priorizar el rescate de los restos materiales del pasado a expensas del lucro. Los empresarios están obligados a financiar los trabajos arqueológicos, pero la elección de los arqueólogos, la duración del proyecto y el tipo de trabajo necesario son decididos, exclusivamente, por el servicio arqueológico. Por eso los arqueólogos, sobre todo en grandes proyectos de infraestructura, han podido dedicar el tiempo necesario para el trabajo y utilizar parte de los fondos para el análisis y el estudio del material. Aunque también allí “la preservación por registro” se aplica con demasiada frecuencia, en varias ocasiones los arqueólogos pudieron preservar huellas materiales e incorporarlas en el proyecto terminado o, incluso, desviar la ruta de una carretera o una línea de ferrocarril para rescatar y preservar las antigüedades.

Por ejemplo, en los últimos dos años se está librando una batalla en Salónica (la segunda ciudad griega en población) entre los arqueólogos y la empresa que construye el sistema de metro de la ciudad. Al encontrar una sección increíblemente preservada de la fase medieval (bizantina) de la ciudad, la compañía propuso dismantelar y transportar a otra parte las estructuras desenterradas y amenazó con abandonar el trabajo en esa estación y en todo el proyecto si su propuesta no era aceptada. Incluso obtuvo el apoyo de muchos en el Ministerio de Cultura, incluyendo al Consejo Arqueológico Central y 28 sectores del liderazgo arqueológico del país. Pero las asociaciones de arqueólogos y otras personas lograron movilizar al consejo de la ciudad y lanzaron una campaña nacional e internacional, con participación de especialistas y no especialistas, y han logrado detener el dismantelamiento, al menos temporalmente. Cada vez gana más apoyo un plan para la conservación *in situ* y la incorporación de los hallazgos en la estación del metro.

Incluso en este contexto nacional, sin embargo, la lógica del capital logra imponerse a través de diversos medios. La arqueología nacional fue, después de todo, al igual que el proyecto nacional en su conjunto, un proyecto de la clase media y fueron las nuevas fuerzas del capital las que la abrazaron desde el siglo XIX (cfr. Díaz-Andreu 2007;

Hamilakis y Duke, eds. 2007; McGuire y Walker 1999). Hoy en día, la mercantilización del pasado se expresa a través de las entradas a los museos y a los sitios arqueológicos, de los privilegios especiales que disfrutaban los ricos coleccionistas privados y sus museos y de la creciente destrucción de paisajes y sitios históricos para dar paso al turismo de “vía rápida” y otros “desarrollos”, una tendencia que se ha acelerado desde el inicio de la crisis financiera más reciente. Más aún, toda la estructura arqueológica descansa en unas pocas personas empleadas de forma permanente y relativamente segura, a quienes se paga apenas por encima del promedio nacional —pero que en la actualidad están siendo duramente golpeadas—, y en un vasto ejército de empleados contratados, que están tan alienados de los resultados de su trabajo como los arqueólogos en Gran Bretaña o Irlanda. He aquí un extracto de un discurso de protesta que leyeron en un congreso académico en Salónica el 21 de marzo del 2013:

Somos los arqueólogos de contrato con una fecha de caducidad, los arqueólogos [que excavan] material que nunca estudian y analizan y que nunca ven sus nombres en publicaciones. Somos los arqueólogos fungibles que fueron despedidos repentinamente, junto a obreros y guardias, para que puedan ser sustituidos por otros que son más baratos y están dispuestos a firmar nuevos contratos [...] Somos los jóvenes graduados en arqueología que, sin un título de posgrado, no tienen ninguna esperanza de trabajo. Somos los poseedores de títulos de posgrado que no tienen la oportunidad de luchar ni siquiera por un contrato de dos meses. Nosotros somos los titulares de un doctorado que no pueden encontrar trabajo. Nosotros somos los que estudiaron durante diez años para trabajar solamente por 60 meses. Somos los no tan jóvenes arqueólogos que tienen que cambiar de empleo. Somos sus estudiantes, y estamos enojados [...] [Debemos añadir] que la empresa que lleva a cabo el proyecto para el que trabajamos actualmente ha prohibido a los arqueólogos que aún trabajan allí que asistan a este congreso y escuchen las ponencias científicas sobre los hallazgos que ellos y sus colegas despedidos han excavado. (Declaración de SEKA, Asociación de Arqueólogos Temporales, publicada en su página de Facebook)

¿ACTIVANDO EL FRENO DE EMERGENCIA?

UNA ARQUEOLOGÍA SENSORIAL DE FLUJOS

Es claro, por lo tanto, que se necesita algo más que cambios cosméticos y algo más que la implementación de un servicio nacional de arqueología. ¿Qué debemos hacer? Comencé este artículo con una cita de Walter Benjamin. Vuelvo a él para finalizar e intentar ofrecer algunas ideas sobre cómo podemos desenredar la arqueología de la lógica

del capital. La cita que sigue proviene de un ensayo titulado *Paralipomena a “Sobre el concepto de historia”*, escrito en 1940:

Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia mundial. Pero tal vez es de otra manera. Tal vez las revoluciones son un intento de los pasajeros de este tren —a saber, la raza humana— para activar el freno de emergencia. (Benjamin 2003:402)

Al invocar la poderosa metáfora de los pasajeros en un tren en movimiento, una metáfora que se utiliza, a menudo, en el discurso político para describir la gran marcha del progreso, Benjamin golpea las bases de la metanarrativa modernista del desarrollo. No solo la mitología de la inevitabilidad del capitalismo sino, más aún, la inevitabilidad del “desarrollo” como un proceso continuo de transformación de la tierra por los humanos, logrado, principalmente, a través de la destrucción continua de los paisajes naturales y antropogénicos. El *Antropoceno* ha sido recientemente propuesto como el término más apropiado para reemplazar al holoceno como la era geológica actual. Los defensores de este cambio buscan poner de relieve el impacto inmenso y cada vez más perjudicial de los seres humanos sobre la Tierra. Otros critican el uso del término alegando que eleva, arrogantemente, el papel de una especie a expensas de todas las demás (cfr. Klingan *et al.* 2015; para algunas exploraciones arqueológicas del concepto véase *Journal of Contemporary Archaeology* 1(1), 2014). Si aceptamos, al menos por el momento, la rúbrica del *Antropoceno* por razones argumentales y de conveniencia, las afirmaciones de Benjamin hacen sonar la alarma. Él nos pide alcanzar una ruptura y engendrar un *evento* verdaderamente transformador y revolucionario (cfr. Žižek 2014), en lugar de seguir siendo los pasajeros somnolientos de ese tren en movimiento llamado “desarrollo”.

Esto es particularmente útil en el contexto de este debate. Nuestro “evento” no será nada menos que la reconstitución y la reinención del campo de la arqueología, no simplemente de la arqueología comercial, sino de la arqueología en general. Nuestra ruptura será resistir la transformación en otra faceta del “desarrollo”, la hoja de parra arqueológica que lleva a la aceleración de la destrucción del planeta. Los actuales procesos decoloniales de naturaleza genealógica, reflexiva y política son, por supuesto, importantes: la exploración de la economía política de la arqueología modernista y la exposición de las desigualdades de clase y de otras jerarquías de género y edad; la historización de su constitución como disciplina profesional y autónoma dentro de imaginaciones coloniales y nacionales en la modernidad; la exploración de formas alternativas de arqueología, desarrolladas antes de la modernidad capitalista occidental —o a pesar de y en los márgenes de ella—, como las diversas formas de arqueologías indígenas; el

actual intento de reformar la estructura de la arqueología comercial a través de medidas como la implementación de impuestos a los empresarios y de un servicio arqueológico público y comunal dirigido por el Estado.

Todo esto es bueno y útil y, quizás, es el primer paso, pero no es suficiente. La lógica fundacional de la arqueología modernista la hace parte del marco del capital: su fetichización de las cosas y su consideración como objetos autónomos, divorciados de las relaciones, los flujos y las conexiones que llevaron a su constitución; su dependencia de una concepción lineal del tiempo como un proceso irreversible de desarrollo, que se ha traducido en los esquemas habituales del evolucionismo cultural, los discursos sobre la civilización, el progreso y el desarrollo y la naturalización del actual *statu quo*; su antropocentrismo, que ha denigrado y devaluado el papel de otros seres sintientes en la *co*-formación de la historia y los ha convertido en recursos explotables; por encima de todo, sin embargo, su consideración de las cosas como entidades mercantilizadas objetivables y cuantificables que pueden ser circuladas, negociadas e intercambiadas como encarnaciones de valor monetario, nacional o estético o reemplazadas por y transformadas en entidades inmateriales de información, igualmente mercantilizables, sobre todo en el mundo actual del infocapitalismo; en otras palabras, la transformación y la metamorfosis de las cosas en equivalencias.

Sin embargo, una arqueología reconstituida, altermoderna, una disciplina indisciplinada (Haber, este volumen), valoriza el proceso tanto como, sino más, que el resultado, contrarrestando con ello el instrumentalismo. Este es un proceso de compromiso colaborativo y colectivo con —la reelaboración y el cuidado de— las cosas, los ambientes y los paisajes de diversas épocas. Tal empeño ve el proceso arqueológico como una práctica mnemónica, una experiencia profundamente afectiva que puede no resultar en información abstracta, sino en diversos tipos de saberes experienciales, algunos discursivos, otros sensoriales, tácitos y encarnados y, por lo tanto, no fácilmente traducibles a palabras y narrativas. Esta arqueología no es, exclusivamente, sobre el pasado, ni sobre el presente, sino sobre tiempos múltiples que coexisten simultáneamente; es una arqueología multitemporal; son las propiedades de la materia y sus efectos mnemónicos los que encarnan la duración y la simultaneidad temporal. Valoriza cosas, así como entornos y paisajes, y no permite que sean reducidos a información cuantificable y mercantizable; se opone, así, a la reducción de las cosas, los entornos y los paisajes a un registro de papel o digital, antes de su destrucción, para dar paso al “desarrollo” específico. Se opone a la “preservación por registro” que es operada por la arqueología comercial, que no es rescate, ni arqueología, en el sentido del compromiso encarnado con

las huellas materiales de diversos pasados. Las experiencias mnemónicas necesitan la concreción, la fisicalidad y la diversidad material y sensorial de las cosas, los entornos y los paisajes para ser activadas. La obliteración de las huellas materiales a través del eufemismo de la preservación por registro nos priva de estas experiencias mnemónicas en marcha y con múltiples facetas.

Al mismo tiempo, sin embargo, esta arqueología contramoderna que acepta la vitalidad y las cualidades agentivas de la materia (cfr. Bennett 2010) no trata a las cosas como entidades autónomas, casi fetichistas, que pueden caer fácilmente en el estado mercantil. En otro lugar (Hamilakis 2013, 2015) he argumentado, y quiero reiterarlo aquí, que una arqueología de ese tipo no está basada en una ontología de las cosas, sino de los flujos y de los movimientos sensoriales; no de los cuerpos, sino de los paisajes corporales, de la transcorporeidad; no de las acciones individuales, sino del movimiento continuo y la interanimación. Este cambio del cuerpo y la cosa al campo sensorial y el flujo hace redundantes las dicotomías mente-cuerpo y sujeto-objeto: el campo sensorial y los flujos sensoriales abarcan sustancias materiales, ondas de radio, rayos de luz, gestos y movimientos, tanto como discursos, afectos, recuerdos e ideas que, en cuanto se refiere a la sensorialidad, tienen el mismo estatus ontológico. Es, pues, una arqueología que reside en los espacios intermedios y no en entidades objetivadas, reificadas y, por lo tanto, fácilmente mercantilizadas. Esta arqueología altermoderna e indisciplinada de los flujos, de la afectividad, del cuidado y de lo intermedio resistirá, continuamente, la lógica del capital.

AGRADECIMIENTOS

Estoy agradecido con Cristóbal Gnecco y Adriana Schmitd Dias por la amable invitación a participar en la muy inspiradora reunión de Porto Alegre y con mis compañeros participantes por sus intervenciones y debates, que ayudaron a dar forma a este artículo. Christina Vona también hizo comentarios y sugerencias útiles a un borrador anterior.

REFERENCIAS CITADAS

Aitchison, Kenneth

2009 After the "Gold Rush": Global Archaeology in 2009. *World Archaeology* 41(4):659-671.

Aitchison, Kenneth y Richard Edwards

2008 *Archaeology Labour Market Intelligence: Profiling the Profession 2007-08*. Institute for Archaeologists, Reading.

Aitchison, Kenneth y Doug Rocks-Macqueen

2013 *Archaeology Labour Market Intelligence: Profiling the Profession*. Landward Research Ltd, Londres.

Bahrani, Zainab, Zeynep Çelik y Edhem Eldem (editores)

2011 *Scramble for the Past: A Story of Archaeology in the Ottoman Empire 1753-1914*. Salt, Estambul.

Benjamin, Walter

2002 *The Arcades Project*. Harvard University Press, Cambridge.

2003 *Selected Writings*, vol. 4: 1938-1940. Harvard University Press, Cambridge.

Bennett, Jane

2010 *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Duke University Press, Durham.

Bradley, Richard

2006 Bridging the Two Cultures: Commercial Archaeology and the Study of Prehistoric Britain. *The Antiquaries Journal* 86:1-13.

Chadwick, Adrian

1997 Archaeology at the Edge of Chaos: Further Towards Reflexive Excavation Methodologies. *Assemblage* 3. <http://www.assemblage.group.shef.ac.uk/3/3chad.htm>

Chatterjee, Partha

1993 *The Nation and its Fragments*. Princeton University Press, Princeton.

Cobb, Hannah y Karina Croucher

2014 Assembling Archaeological Pedagogy: A Theoretical Framework for Valuing Pedagogy in Archaeological Interpretation and Practice. *Archaeological Dialogues* 21(2):197-216.

Cockerell, Charles Robert

1903 *Travels in Southern Europe and the Levant, 1810-1817: The Journal of C.R. Cockerell, R.A.* Longmans, Londres.

Croucher, Karina

2010 The Past in the Present: Issues, Perspectives and Challenges in Teaching and Learning Archaeology in the UK. En *Heritage Values in Contemporary Society*, editado por George Smith, Phyllis Mauch Messenger y Hilary Soderland, pp. 177-195. University Press of Florida, Gainesville.

Cumberpatch, Chris y Paul Blinkhorn

2001 Clients, Contractors, Curators and Archaeology: Who Owns the Past? En *The Responsibilities of Archaeologists: Archaeology and Ethics*, editado por Mark Pluciennik, pp. 39-45. Archaeopress, Oxford.

Díaz-Andreu, Margarita

- 2007 *A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past*. Oxford University Press, Oxford.

Everill, Paul

- 2007 *British Commercial Archaeology: Antiquarians and Labourers, Developers and Diggers*. En *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*, editado por Yannis Hamilakis y Philip Duke, pp. 119-136. Left Coast Press, Walnut Creek.
- 2012 *The Invisible Diggers: A Study of British Commercial Archaeology*. Oxbow, Oxford.

Graves-Brown, Paul

- 1997 *S/he who Pays the Piper... Archaeology and the Polluter Pays principle*. *Assemblage* 2. <http://www.assemblage.group.shef.ac.uk/2/2gb2.html>

Hamilakis, Yannis

- 1999 *La trahison des archéologues? Archaeological Practice as Intellectual Activity in Post-Modernity*. *Journal of Mediterranean Archaeology* 12(1):60-79.
- 2004 *Archaeology and the Politics of Pedagogy*. *World Archaeology* 36(2):287-309.
- 2007 *The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece*. Oxford University Press, Oxford.
- 2011 *Indigenous Archaeologies in Ottoman Greece*. En *Scramble for the Past: A Story of Archaeology in the Ottoman Empire 1753-1914*, editado por Zainab Bahrani, Zeynep Çelik y Edhem Eldem, pp. 49-69. Salt, Estambul.
- 2013 *Archaeology and the Senses: Human Experience, Memory, and Affect*. Cambridge University Press, Cambridge.
- 2015 *Arqueología y los sentidos: experiencia, memoria y afecto*. IAS Arqueología, Madrid.

Hamilakis, Yannis y Philip Duke (editores)

- 2007 *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*. Left Coast Press, Walnut Creek.

Hamilakis, Yannis y Paul Rainbird (editores)

- 2001 *Interrogating Pedagogies: Archaeology in Higher Education*. Archaeopress, Oxford.

Klingan, Katrin, Ashkan Sepahvand, Christoph Rosol y Bernd Scherer (editores)

- 2015 *Textures of the Anthropocene: Grain, Vapor, Ray*. MIT Press, Cambridge.

Lucas, Gavin

- 2002 *Critical Approaches to Fieldwork: Contemporary and Historical Archaeological Practice*. Routledge, Londres.

Marx, Karl

- 1977 *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Progress Publishers and Lawrence and Wishart, Moscú-Londres.

- McGuire, Randall y Mark Walker
 1999 Class Confrontations in Archaeology. *Historical Archaeology* 33(1):159-183
- Said, Edward
 1994 *Representations of the Intellectual. The 1993 Reith Lectures*. Vintage, Londres.
- Schlanger, Nathan y Kenneth Aitchison (editores)
 2010 *Archaeology and the Global Economic Crisis*. Culture Lab, Tervuren.
- Shanks, Michael y Randall McGuire
 1996 The Craft of Archaeology. *American Antiquity* 61(1):75-88.
- Shepherd, Nick y Alejandro
 2011 What's up with wAc? Archaeology and "Engagement" in a Globalized World. *Public Archaeology* 10(2):96-115.
- Shore, Cris y Susan Wright
 1999 Audit Culture and Anthropology: Neoliberalism in British Higher Education. *Journal of the Royal Anthropological Institute* 5:757-775.
- Standing, Guy
 2011 *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury, Londres.
- Strathern, Marilyn (editora)
 2000 *Auditing Cultures: Anthropological Studies on Accountability, Ethics, and the Academy*. Routledge, Londres.
- Žižek, Slavoj
 2014 *Event: Philosophy in Transit*. Penguin, Londres.
- Zorzin, Nicolas
 2011 The Political Economy of a Commercial Archaeology - A Quebec Case-Study. Disertación doctoral, University of Southampton. http://eprints.soton.ac.uk/344777/1.hasCoverSheetVersion/thesis_final.pdf
 2014 Archaeology and Capitalism. Successful Relationship or Economic and Ethical Alienation? En *Ethics and Archaeological Praxis*, editado por Cristóbal Gnecco y Dorothy Lipert, pp. 115-139. Springer, Nueva York.

CONTRATIEMPO. ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO O UNA TRINCHERA EN LA BATALLA POR LOS MUERTOS

Alejandro Haber

EN LA ÉPOCA EN LA QUE ERA ESTUDIANTE DE PREGRADO LA MERA POSIBILIDAD DE QUE LA ARQUEOLOGÍA tuviera éxito comercial, eficacia mercantil, era tan improbable que ni siquiera era pensada. Así, solo los más viejos entre los lectores pueden compartir conmigo algún tipo de sorpresa. Es aún un misterio que los Estados nacionales regulen las intervenciones profesionales en cautela de ciertos objetos del pasado y el conocimiento de ese pasado —siendo que este es previo a ellos mismos—, mientras al mismo tiempo ignoran sus deberes de protección de los derechos de aquellos que habitan en esas mismas tierras. Aún más, es común que los habitantes sean descendientes de los objetos de cuyo esquema de protección se deriva la arqueología como una profesión liberal con un desempeño mercantil exitoso. Mi primer reacción a la sorpresa fue la de lidiar con la lógica de los procedimientos de estudio de impacto con estándares de calidad tan altos y estrictos como para estar seguro de que el principio de cautela de la evaluación de impacto sería aplicado precisa y confiablemente. El contexto de la frontera capitalista, no obstante, muy rápidamente se mostró no solo bastante flexible, sino incluso demandante de estándares de calidad deprimidos (Haber 1997). Los proyectos megamineros en relación con los cuales fui llamado a intervenir se basaban en tan inmensos desequilibrios de poder que acababa siendo estúpido, en esos contextos de la práctica, sustentar independientemente un principio ético. Bueno..., como todos saben, y como eventualmente llegué a saber, nadie contrata a un estúpido. Y este es el fin de mi historia de vinculación personal por ese lado. Es tan gigantesca la desproporción de poder entre las corporaciones megamineras y los Estados nacionales y provinciales que estos terminaron siendo, y aún lo son, defensores de los intereses corporativos. A su vez, la gente local experimentaba ya incomodidad, ya negociación, ya resistencia. Me quedé con la docencia, tratando de inculcar en los estudiantes una firme adherencia a los estándares de calidad que la lógica de la evaluación de impacto requería (pero que el mercado rechazaba). Pero a la larga incluso la lógica fue confrontada, cuando mi estudiante Daniela Fernández, ella misma habitante de una ciudad fuertemente impactada por una megaminera y a punto de ser intervenida por otra aún mayor, me enseñó acerca del principio de la vida: ella cuestionaba el significado de tomar parte en un procedimiento

de evaluación de impacto de un proyecto que ponía en riesgo su vida y la de su familia. “Intervenir en cautela de los efectos de un proyecto sobre el patrimonio arqueológico no tiene sentido si las vidas de los herederos de ese patrimonio quedan comprometidas por ese mismo proyecto”. El enunciado de Daniela era tan sencillo como profundamente certero. Pero si lo pensamos, sus consecuencias no son tan sencillas como profundas. En primer lugar, ella introduce el valor de la vida local como preeminente sobre los valores de la verdad, el desarrollo y la utilidad. De acuerdo a esto, ella establece su domicilio de enunciación en su domicilio de habitación, en lugar de en la academia. Al mismo tiempo, consolida sus intereses con el movimiento local por la vida y contra la minería tóxica, un movimiento que yo también apoyo.

Se ha dicho mucho de las cuestiones técnicas y metodológicas de la intervención arqueológica en proyectos de inversión y desarrollo. Se ha debatido mucho acerca de consideraciones éticas y de la necesidad de orientaciones de gestión. Comparativamente, se ha ignorado el trabajo teórico sobre las razones para una alianza entre el capital, el Estado y la arqueología. Ese era el foco del Inter-Congreso del WAC (Congreso Arqueológico Mundial, por sus siglas en inglés) realizado en Brasil en el 2013, que tan pronto como fue anunciado en la lista de correo electrónico del WAC recibió una feroz resistencia de muchos colegas. Yo no solo felicito a Adriana Dias y a Cristóbal Gnecco por organizar un foro con el objetivo de llevar el trabajo teórico a aquellos rincones de nuestra práctica que han quedado ignorados, sino que también pienso que debe hacerse alguna teorización sobre la resistencia a la teoría de parte de un sector importante del colectivo disciplinario. La arqueología de contrato se ha reconvertido en una tecnología de manera tan ovina que los arqueólogos se resisten a ser algo distinto que instrumentos. Para oponerme, aunque sea en una pequeña fracción, a tan decisiva despedida al pensamiento quisiera proponer un *contratiempo*. Un *contratiempo* es un obstáculo, por lo que propongo que el pensamiento sea un obstáculo a la instrumentalización. Pero un *contratiempo* es también un tiempo contrario, un tiempo otro, que tiene otra forma y transcurre de alguna otra manera. Quisiera que este texto contribuya al doble significado del *contratiempo*. En las páginas siguientes escruto tanto los aspectos epistémicos que constituyen a la arqueología como conocimiento disponible para la intervención como los supuestos epistémicos del contexto político y cultural más amplio que gobierna las intervenciones en los territorios de frontera, para mostrar cómo ambos conjuntos de supuestos no son tan solo compatibles, sino que se requieren mutuamente. Espero ser capaz de mostrar las complicidades epistémicas con base en las cuales son posibles las alianzas epistémicas y políticas, incluso más allá de los compromisos previos con la ética, la ciencia y el profesionalismo. También quisiera transmitir la idea de un sentido

contrahegemónico de la teoría de frontera, tal como está siendo pensada en los movimientos por la vida y contra la minería tóxica; un sentido que tiene ecos en mi propuesta de la arqueología indisciplinada (Haber 2012).

SUPUESTOS EPISTÉMICOS DISCIPLINARIOS

La disciplina arqueológica pretende conocer el pasado a partir de sus restos materiales. Cualesquiera sean las definiciones específicas de conocimiento, pasado y materialidad que se elijan, algo debe ser dicho acerca de un tiempo pasado, con base en algún tipo de observación de cosas. Presuntamente, estas cosas se originan en un tiempo pasado, el mismo acerca del cual habla la disciplina arqueológica. A partir de una comprensión tan pedestre de la disciplina arqueológica, parece conveniente escrutar cómo se relacionan mutuamente los distintos términos incluidos en ella.

La disciplina arqueológica codifica una serie de transformaciones interrelacionadas: desde el tiempo pasado al tiempo presente, desde la facticidad al discurso, desde la percepción a la escritura y desde el otro al yo. La codificación disciplinaria admite solo algunos modos específicos de relación entre el pasado y el presente, la cosa y el discurso, la percepción y la escritura y el otro y el yo. Cuando las relaciones entre esos términos son diferentes a las disciplinadas se las considera conocimiento imperfecto o maneras ilícitas de tratar con las cosas arqueológicas. Esto es así debido a que la disciplina, antes de la percepción de los hechos, ya atribuye al mundo ciertos valores concernientes a la materia, la percepción, el tiempo y el otro. De allí que no sea realmente sorprendente hallar esos valores en el mundo. Esa atribución de valores constriñe el territorio para el debate ético y político ulterior.

El objeto arqueológico, es decir, tal como este es comprendido por la disciplina arqueológica, era una cosa. Su cosidad fue traducida en facticidad a través de la atribución de valores arqueológicos a la cosa. Esa atribución sucede cuando la cosa es designada por el lenguaje disciplinario; en ese punto cesa de ser una cosa y se transforma en un caso dentro de una categoría de hechos. Esa categoría de hechos tiene un nombre, por lo que puede ser dicha y escrita. La primera atribución es la del valor de la mudez: el objeto arqueológico no es una pieza de escritura ni de habla (contemporánea); la arqueología obtiene especificidad e independencia de sus vecinas la historia y la etnografía. Esa diferencia con el vecindario define al objeto arqueológico como la ausencia (tachadura) de la comunicación lingüística. El etnógrafo se comunica con su objeto-gente a través de algún tipo de comunicación lingüística, ya sea directa o mediata. El historiador se comunica con su objeto-gente a través de una comunicación lingüística inscrita en

la escritura. La gente le dice algo a los etnógrafos y a los historiadores (usualmente, aunque no siempre, con palabras). Ese no es el caso con los arqueólogos, cuyos objetos no les dicen nada. Los objetos materiales no hablan. Incluso aunque algunos arqueólogos dicen que leen los restos arqueológicos (e. g., Hodder 1989), ese enunciado es comprendido como una metáfora, es decir, como una extensión a los objetos arqueológicos de los tipos de relación usuales en la comunicación no verbal, el lenguaje verbal o los textos escritos. Los restos materiales son, entonces, considerados análogos al texto, y pueden ser leídos como *si fuesen* textos, es decir, una extensión metafórica del significado del que los objetos materiales *real o literalmente* carecen.

La carencia esencial de lenguaje debe ser transformada en discurso lingüístico. Lo que sea que la arqueóloga diga acerca de su objeto, es acerca de una cosa que no dice nada. Aquello que la dice, cualquiera fuese el significado de la cosa, no es dicho por la cosa (debido a su mudez), sino por la arqueóloga con base en lo que ella ve. La relación entre el objeto mudo pero visible y la arqueóloga parlante y vidente solo puede tener una forma: la arqueóloga percibe el exterior de la cosa y habla y escribe acerca de la cosa. La cosa no puede replicar ni una sola palabra a la arqueóloga, que dice palabras acerca de la cosa. Cualquiera haya sido el tipo de relación entre la gente en el pasado y sus objetos, estos permanecen encerrados en el presente de la arqueóloga debido a su capacidad material, es decir, no lingüística. Queda excluida, entonces, la comunicación con la gente en el pasado; la relación con ellos queda caracterizada como una particular mirada arqueológica fija y unidireccional. El significado atribuido a los objetos, los sitios, los contextos, etc., depende del consenso disciplinario intersubjetivo. Ya sea que esta cosa sea una lasca, una casa o un depósito ritual, ello le será atribuido al objeto mediante la aceptación implícita de que esta cosa es un caso dentro de esa categoría designada con un nombre. La designación lingüística disciplinaria de objetos mudos atribuye valores de los cuales carecen los objetos, dada su natural mudez; y tal atribución de valores se traslada a la gente en el pasado arqueológico: los hacedores y usuarios de lascas, habitantes de casas y devotos practicantes de depósitos rituales (Haber y Scribano 1993). (El conocimiento sobre / la gente de) el pasado depende de la atribución disciplinaria de valor a la materia muda, una vez que esa cosa ya fue atribuida con los valores de la materialidad y la mudez. Cualquiera fuera la relación entre gente y lascas, el lenguaje disciplinario arqueológico ya decide que esas cosas sean lascas y que esa gente sea hacedora / usuaria de lascas. Una vez que se ha decidido que el mundo de la cosa es mudo, y que toda comunicación con las cosas es imposible con excepción de la percepción visual externa, se abre un amplio camino hacia la atribución unilateral de valores. Tal atribu-

ción no es casual ni azarosa, sino que depende del respaldo y del lenguaje del colectivo disciplinario que les da nombres a las cosas.

Esas decisiones no fueron inventadas de la nada por la arqueología. Una larga tradición historiográfica ofreció la base que luego fue adoptada y adaptada por la arqueología. En su obra historiográfica pionera del siglo v a. C., Heródoto acopló las distintas operaciones que más tarde se consolidaron en la tradición historiográfica occidental. Así, vinculó una común clasificación griega de gentes con una clasificación de las fuentes del conocimiento histórico. Los griegos clasificaban a la gente de acuerdo a su posesión o carencia de verdadero lenguaje (y los griegos consideraban que su lengua, la griega, era la verdadera) (Santiago 1998). Los griegos y los bárbaros (es decir, los pueblos no grecoparlantes) fueron clasificados a ambos lados de una diferencia lingüístico-cultural respecto al escritor (en el caso comentado, el mismo Heródoto). Las fuentes del conocimiento se clasificaban de acuerdo a un espectro de cercanía / distancia a la verdad, desde el testimonio visual de los hechos (cerca de la verdad) hasta las leyendas de segunda mano y el conocimiento tradicional (cerca de la falsedad). Las fuentes de conocimiento del pasado le fueron comunicadas lingüísticamente a Heródoto, como texto oral o escrito. El propio Heródoto no fue testigo ocular de hechos pasados, pero los conocía ya puestos en palabras en sus fuentes (documentos). Cualquier tipo de gente podía poner hechos en palabras, incluso la gente que luchó en ambos bandos de las guerras médicas. Pero solo el testimonio ocular de los hechos por grecoparlantes tenía la oportunidad de ser comunicado al historiador como un conocimiento de alto rango cercano a la verdad. La memoria colectiva, el conocimiento tradicional y el conocimiento bárbaro fueron clasificados en los más bajos rangos de la jerarquía de conocimiento, incluso si ese conocimiento era acerca de esos mismos bárbaros. La alterización cultural fue así acoplada con la idea de que los hechos son cognoscibles mediante una observación externa luego puesta en palabras en el lenguaje del historiador. El otro cultural / lingüístico no tenía oportunidad para las palabras, ni siquiera para retornar la mirada. Esas decisiones fueron luego consolidadas en la tradición historiográfica occidental, en el duradero marco de la disciplina histórica como el conocimiento experto del pasado (Garrahan 1946; Gottschalk 1950; Shafer 1974). Las comprensiones ontológicas del conocimiento y del pasado fueron correspondientemente naturalizadas.

Ver y tocar la materia iban a resultar el principal vehículo para un acercamiento racional a la verdad en el mundo occidental. A partir de los siglos v y vi d. C. aparecería en Italia el tema artístico, luego popularizado durante el Barroco, conocido como “la incredulidad de Santo Tomás”, que ilustra a Santo Tomás Apóstol poniendo sus dedos

en las heridas al costado de Jesús. El episodio es narrado de la siguiente manera en el Evangelio de Juan (Jn 20, 24-29):

24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.

25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.

26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.

27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!

29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

El texto bíblico, en el que se prefiere la fe —creer sin ver— al escepticismo —la necesidad de ver y tocar por uno mismo para aceptar el hecho—, reproduce la previa jerarquía de fuentes de conocimiento, aunque la jerarquía es invertida en favor de la fe. Es interesante, de todos modos, el foco en el tacto, y no solo en la vista, con que se ilumina a Tomás, ya que trae a un primer plano la relación entre la preferencia de la vista como el órgano de la percepción de los hechos y la comprensión de los hechos en términos de materia; de allí la necesidad de tocar. También es interesante que en la tradición occidental Tomás sea considerado el patrono de la justicia (en el sentido de la exigencia de pruebas materiales de los hechos) y no del escepticismo (en el sentido del rechazo a la fe).

La disciplina arqueológica extiende esa ontología desde los otros culturales (incluso los enemigos) al pasado arcaico, es decir, el pasado que no puede ser mediado por el lenguaje. La operación completa de la mirada unidireccional junto con la textualización en intimidad lingüística / cultural occidental, acaba siendo gobernada por las operaciones metodológicas arqueológicas. La arqueóloga comprende la cosidad como facticidad material muda y luego escribe las palabras que la hacen comunicable / interpretable / explicable en sus propios términos, siendo que ya les había atribuido significado. Al ser transformada en hecho, la cosa es atribuida con el valor de ser incapaz de devolver la mirada o la palabra. Aún más, tan cerca como ahora estamos de la cosa, advertimos que, incluso antes de ser percibida o nombrada, la cosa ya es atribuida de su falta de relación: la cosa es la mera cosa tal como sería sin sus relaciones constitutivas, incluso las relaciones que tenía con el perceptor.

Esa es la razón por la cual la arqueología no solo precomprende a la cosa como lingüísticamente carente, sino que no le reconoce capacidad semiótica o lingüística alguna. Esto es válido, al menos, desde una perspectiva ontológica y epistemológica, ya que luego la arqueología “interpreta” significados no lingüísticos de las cosas, ejemplo de los cuales son los significados prácticos. No obstante, por el momento debemos enfatizar la gran importancia que para la arqueología tiene la represión del sentido de las cosas. Las cosas son extirpadas de las relaciones en las cuales son. Las relaciones en las cuales las cosas son, son separadas de las cosas.

La historia —lo que se dice que sucedió— es, sin embargo, como una representación textual de la historia —lo que sucedió—. La textualidad representa la facticidad; recordemos que la facticidad ya estaba codificada en intimidad cultural con el historiador, lo que implica que ambos, el historiador y el autor del documento (el textualizador original de la facticidad), comparten (o asumen que comparten) ciertas comprensiones con respecto al tiempo, el conocimiento y la materia. La alteridad cultural (otras ontologías diferentes a la del historiador) es excluida de los documentos o considerada descartable (en este sentido vale la pena leer acerca del carácter decolonial de la historia oral; cfr. Rivera 2010). El método arqueológico de la jerarquía de fuentes codifica una violencia epistémica, dado que excluye la potencial alteridad constitutiva de otras fuentes y, en general, a otras epistemes como carentes de verdad y constituidas en la falsedad (Troiuillot 1995).

La disciplina arqueológica también textualiza la facticidad, pero dentro de su propia metodología: es la arqueóloga la que escribe acerca de los hechos (informes de campo, registros, esquemas, formularios, artículos, etc.), en lugar de ‘descubrir’ textos ya escritos por otros en repositorios documentales. La textualización arqueológica se hace en la intimidad del colectivo social disciplinario y del lenguaje disciplinario. El lenguaje disciplinario introduce una violencia epistémica antes de la metodología. Una vez que la cosa ya fue considerada un objeto arqueológico, se le atribuye todo un conjunto de relaciones con esa cosa, que al mismo tiempo queda excluida de todo un conjunto de otras relaciones posibles que se le extirpan. Como expliqué más arriba, ello implica una previa violencia ontológica que extirpa las cosas de las relaciones en las que son. Toda atribución de significado o interpretación ocurre luego de una original represión de sentido.

Cuando la arqueología estudia restos materiales, implícitamente descarta tanto la materia no restante como los restos no materiales. Es decir, la posibilidad de que algo pertenezca a una categoría tal como ‘restos materiales’ implica una tachadura de las otras dos posibilidades. Ambas tachaduras son consideradas diferentemente en la disciplina arqueológica. La primera tachadura, la materia no remanente hasta el tiempo presente, puede ser considerada una crítica externa de fuentes; en la disciplina arqueol-

lógica funciona bajo el título de los procesos de formación de sitios y la tafonomía. La segunda tachadura, los restos inmateriales, puede ser considerada parte de una crítica interna, aunque aún no ha recibido mucha atención por parte de la disciplina arqueológica, sino mediante su exclusión. Dado que las relaciones con la cosa fueron previamente excluidas del hecho, la descendencia y la memoria como fuentes de conocimiento son excluidas del marco disciplinario que define al objeto y al método. La descendencia y la memoria de los objetos arqueológicos no pueden sucederle a uno en su capacidad de sujeto disciplinado. La descendencia y la memoria no son relaciones que puedan ser vistas externamente, sino que son internamente constitutivas de la subjetividad. Solo de manera ocasional, una consideración coherente de la crítica interna, como en algunos casos de arqueología indígena, es capaz de romper los límites restrictivos de la disciplina. Mucho más a menudo la estrategia de objetivación disciplinaria ha sido resistente a la crítica interna; en tales situaciones la arqueología indígena se ha sujetado al lenguaje disciplinario, o se ha reducido a un maquillaje de los marcos disciplinarios para conservarlos incuestionados (Gnecco y Ayala, eds. 2010).

El tiempo occidental está dentro de la matriz de la disciplina arqueológica así como dentro de la de la historiografía. Casi se puede decir que Occidente es, principalmente, una teoría de la historia. El tiempo occidental tiene una forma lineal: una línea recta que va desde el pasado hasta el presente. Con un punto de origen y una magnitud, el tiempo occidental es un vector. Desde la aparición de las religiones abrahámicas, el tiempo se origina en el acto divino de la creación y se orienta hacia la resurrección de los muertos. Aun cuando distintos puntos de origen y magnitudes han replicado los originales, la forma del tiempo permanece virtualmente igual. El colonialismo renacentista europeo occidental se orientaba hacia la salvación de las almas; los colonialismos europeos decimonónicos hacia la civilización (Thomas 1994); y desde mediados del siglo xx el tiempo se orienta hacia el desarrollo (Escobar 1999). Los puntos de origen han cambiado desde la Creación al *Big Bang*, con sus otras réplicas (el nacimiento de Cristo, el descubrimiento de América, la independencia nacional, etc.), señalando puntos de origen particulares para colectivos específicos. El tiempo vectorial admite localizar a cada persona, pueblo y nación a lo largo de una línea, en una secuencia de magnitud creciente desde el origen. Los españoles de los siglos xvi y xvii (aún más si cristianos varones y propietarios) estaban más cerca que los andinos a la salvación de sus almas, es decir, tenían mayor magnitud. Los ingleses del siglo xix estaban más cerca de la civilización que los gauchos. Los Estados Unidos del siglo xx estaban más cerca del desarrollo que la Argentina. El tiempo vectorial también implica que la historia esté espacialmente distribuida, en el sentido de que a lo largo del tiempo la historia se mueve de acuerdo a

la progresión del vector. Entonces, cada punto en el vector tiende a moverse en dirección a la magnitud. Se espera que un andino se mueva en dirección al cristianismo, un gaucho hacia la civilización y la Argentina hacia las formas estadounidenses del desarrollo y el capitalismo. Las categorías interpretativas comunes en la disciplina arqueológica (complejidad, diferenciación política, domesticación, etc.) están acuñadas en esta misma forma vectorial, y cuando el pasado no occidental es interpretado de acuerdo a estas categorías, se naturaliza la ontología occidental del tiempo vectorial. Una de las principales tareas de la disciplina arqueológica parece ser la expansión de (la ontología de) Occidente sobre tiempos y pueblos que están más allá de sus fronteras.

Ninguna otra disciplina está mejor equipada que la arqueología para ubicar a cada pueblo, incluso el más distante y arcaico, dentro de la forma ya establecida del tiempo occidental. Mientras que la teoría occidental de la historia no está delimitada por la disciplina arqueológica, su particular acoplamiento con la epistemología de la mirada unidireccional y la antropología de la alteridad, la hace un cuerpo de conocimiento especialmente útil para naturalizar y universalizar la ontología occidental; y esto es de fundamental importancia en contextos de expansión de la frontera, como el actual.

Tal utilidad sistémica no tiene nada que ver con las decisiones éticas, aunque incluye y oculta fundamentales decisiones con respecto a la práctica. Aquello que usualmente es considerado dependiente de decisiones éticas individuales en contextos de la práctica, ya está sobredeterminado por decisiones epistémicas adoptadas durante los procesos de disciplinamiento. Se pueden describir dos de esos procesos. El disciplinamiento ontogenético ocurre durante los años de exposición institucionalizada y conversión al lenguaje, epistemología y ontología disciplinarias. El disciplinamiento filogenético ocurre en la medida en que la disciplina se desarrolla y adopta su propio lenguaje, se institucionaliza, y en el caso de la disciplina arqueológica, deviene el medio hegemónico para tratar con los ancestros de los pueblos derrotados y sus descendientes colonizados. Ambos procesos de disciplinamiento están suficientemente maduros cuando el lenguaje disciplinario es adoptado como si fuese el propio, y cuando los marcos disciplinarios están a salvo de la crítica interna de la descendencia y la memoria. De hecho, usualmente ocurre que la descendencia y la memoria, en otras palabras, el significado relacional de la cosa, son reprimidas. Una vez disciplinado, todo un menú de métodos y teorías aparece y se multiplica; no obstante, más allá de esa variabilidad, los marcos disciplinarios permanecen sólidos y a resguardo.

La violencia epistémica ya está codificada en el marco disciplinario. Una vez que el sujeto se disciplina, y que la disciplina deviene el medio autorizado para tratar con una región particular de la realidad (los ancestros de los derrotados, el patrimonio ar-

queológico, etc.), ya no hay otra opción real, dentro de los límites del marco, sino la de reproducir la violencia epistémica. En tal contexto, las evaluaciones éticas de la práctica, incluso asumiendo que los individuos involucrados tienen la mejor de las intenciones decoloniales, cuando mucho ofrecen la apariencia de una práctica decolonial —lo que se conoce como práctica políticamente correcta—. A pesar de su apariencia, tales prácticas reproducen el mismo marco epistémico que codifica la violencia sobre otros conocimientos. Esa es la razón por la cual una consideración decolonial de la arqueología debería evaluar los supuestos epistémicos y ontológicos que informan los lenguajes (como el disciplinario) que dan significado al mundo y lo hacen disponible a la expansión de relaciones coloniales.

Llegados a este punto, debo reconocer la virtual inexistencia en su forma pura de un paisaje como el descrito, aunque espero que, el presentar de manera simplificada un conjunto de relaciones sea útil para el argumento. Las premisas acerca del funcionamiento del mundo y la axiología de la disciplina arqueológica han atravesado grandes transformaciones durante las últimas décadas, y debo desarrollar algo más para ponerle algo de carne a un paisaje tan esquelético como el que presenté hasta ahora.

POSDISCIPLINA

En los últimos veinte años el capitalismo entró en una nueva etapa expansiva. Volvieron a considerarse territorios previamente ignorados por la inversión del capital. Nuevas tecnologías de explotación y procesamiento se aplican a recursos antes no explotados. Aspectos de la realidad previamente ignorados por el mercado se desarrollan en nuevas mercancías. El mercado tardocapitalista se ha expandido a cada rincón del planeta, cada lado del mundo, cada fragmento de conocimiento, tradición o curiosidad. Hasta la propia expansión occidental ha sido desarrollada en mercancía capitalista, capturando la alteridad, el exotismo, la tradición, las regiones interiores, las aventuras y las fronteras. Las ruinas, la historia, el pasado, y cualquier signo de la diferencia con respecto al mundo capitalista es un objetivo privilegiado para el desarrollo mercantil. Los proyectos de desarrollo rural y urbano extraen sedimentos que contienen restos del pasado en casi cada punto del mundo poscolonial. Las reconstrucciones de vidas pasadas hechas por la arqueología disciplinaria son transformadas en atracciones para públicos crecientes, siempre listos para consumir esas mercancías. La diversidad se celebra universalmente y, por cierto, también es convertida en mercancía turística. Los territorios agenciados localmente por generaciones de pueblos indígenas, campesinos, habitantes rurales y trabajadores urbanos, son intervenidos por el capital. El capital es

ahora mucho más flexible, fluido, sobreabundante y sediento de renta, y grandes cantidades de intermediarios se movilizan por todo el mundo en busca de oportunidades de inversión. Ejércitos de desarrolladores están a cargo de la apertura de esas oportunidades, haciendo que el conocimiento académico, tradicional, indígena, etc., esté disponible para la creación de nuevas mercancías. Los Estados nacionales invierten fondos públicos para la construcción de infraestructura que sostiene las operaciones de inversión de capital: caminos, vías fluviales, puertos marítimos, pasos montañosos y puentes se construyen por todo el mundo poscolonial para entregar los productos primarios extraídos: minerales, combustibles, cultivos y cualquier tipo de mercancía que pueda fluir desde los territorios hacia los centros industrializados. El proyecto para la Integración de Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA, www.iirsa.org) es un ejemplo de los marcos internacionales acordados por los Estados nacionales. Estos movilizan fondos públicos para esos proyectos, e intervienen en todo territorio local ubicado dentro del alcance del proyecto. Los acuerdos transnacionales como el mencionado son ecos de la sincronizada reforma de las legislaciones mineras en decenas de Estados nacionales en Suramérica y África durante la década de los noventa, ocurridas bajo presión del sindicato de corporaciones megaminerías (Machado 2011). Además de la escala global del capital y la escala multilateral regional de las políticas estatales, cada uno de estos proyectos interviene territorialmente en localidades específicas. Es en esos territorios localmente agenciados que el capital, el Estado y los habitantes locales se encuentran entre sí. No es sorprendente que la arqueología pueda hallarse en esos entramados poscoloniales de diversos objetivos e intereses de capital, vida y conocimiento. El capital, el Estado y los movimientos sociales luchan por sus propios regímenes de cuidado de esos territorios. Los entramados territoriales implican estrategias de conocimiento en contextos de hegemonía y subalternidad. La arqueología no es un observatorio neutral de esos entramados, puesto que ya es la disciplina del conocimiento hegemónico a cargo del tratamiento de los restos territorializados de los ancestros de los subalternos. Y es usualmente llamada a intervenir en los campos de batalla ya estructurados epistémicamente. La disciplina arqueológica ha atravesado profundas transformaciones para ser capaz de afirmar otros valores además de la verdad. Esos valores adicionales, tales como la justicia social, el mercado, la renta de capital, etc., operaron una reconversión tecnológica de una disciplina académica / científica previamente orientada a la sola búsqueda del conocimiento verdadero. Algunos de los nombres de las reconversiones tecnológicas de la arqueología posdisciplinaria son la gestión de recursos culturales, la arqueología indígena, la arqueología forense y el turismo arqueológico.

Piezas particulares de legislación (principalmente legislación patrimonial e indígena) modulan las especificidades de las intervenciones arqueológicas en los entramados territoriales. El medio usual para regular las relaciones con los materiales (cosas) y las gentes es la evaluación ética profesional de la intervención. Muchas veces la ética de las consecuencias de las intervenciones territoriales arqueológicas tiene, en la posdisciplina, un lugar equivalente al que la epistemología tenía en contextos disciplinarios. Se definen protocolos para formalizar los contextos de intervención; se oye a las partes interesadas para que identifiquen sus diversas posiciones con respecto al registro arqueológico; los reclamos indígenas por los restos son modulados por la ley y la burocracia del Estado. La legislación patrimonial (así como las convenciones internacionales y multilaterales) incluye tanto las definiciones disciplinarias de los restos arqueológicos como los regímenes disciplinarios de su cuidado. Lo mismo se puede decir de las intervenciones posdisciplinarias en los entramados territoriales. La posdisciplina recapitula los supuestos disciplinarios con respecto a los restos, es decir, con respecto a las relaciones territoriales constitutivas entre pueblos y cosas / agentes específicos. Por ello, aun considerando la usual importancia de la evaluación ética de las eventuales consecuencias de las intervenciones, y también asumiendo las mejores intenciones de los profesionales involucrados, las intervenciones arqueológicas posdisciplinarias ya están inclinadas estructuralmente.

Los supuestos ontológicos acarreados en los marcos disciplinarios son coherentes con la ontología occidental hegemónica del tiempo, la materia y el conocimiento. Esta ontología se basa en un estatus epistémico hegemónico. Por ello, más que un conjunto de enunciados sobre la realidad, es una plataforma epistémica, el principio de realidad que alinea el pasado, el presente y el futuro en el discurso hegemónico. Dado que se trata del tiempo en el que los actores actúan, no es necesario presumir que actúan cínicamente. Ese tiempo, el tiempo vectorial occidental, ya tiene un origen y una magnitud. Entonces, quien vive en ese tiempo vive con el mismo origen y la misma orientación, y también actúa en el mundo con el mismo activismo implicado en la transposición de tiempo en espacio. Los regímenes subalternos de cuidado tienen poco espacio para negociar y casi ninguno para salir de la subalternidad. Los tiempos otros no son siquiera percibidos (como tales) por la mirada hegemónica. A veces son reducidos a muestras fosilizadas arcaicas, restos inertes del otro, folklore que estimula la cromática de la diferencia. A veces ocurre que los movimientos sociales contra el desarrollo / conocimiento disputan las intervenciones guiadas por principios y protocolos pensados ética y políticamente. Los arqueólogos involucrados en esos entramados se ven política y epistémicamente alineados con el capital y el Estado y contra las localidades territorializadas.

Esas situaciones suelen mover a los arqueólogos a reforzar sus posiciones hegemónicas en la episteme occidental, pero alternativamente pueden ser oportunidades para reconocer la perversidad y la persuasión de los supuestos disciplinarios que constituyen la subjetividad ética y política de los sujetos (disciplinados) más allá de sus propias decisiones éticas y políticas en la vida.

El tiempo vectorial recapitula previas teorías de la historia en la tradición occidental. El desarrollo es la orientación del actual tiempo hegemónico. El tiempo vectorial es idéntico al tiempo arqueológico; esa es la razón de la complicidad entre arqueología y desarrollo. Cuando la arqueología posdisciplinaria interviene en el estudio de los efectos de un particular desarrollo o proyecto de inversión, la arqueología asume una particular ontología del tiempo, la materia y el conocimiento ya moldeada en su propio marco disciplinario. El tiempo lineal implícito en el informe arqueológico es el mismo tiempo lineal implicado en la inevitabilidad de la expansión capitalista (en la forma de ese particular desarrollo). Otros tiempos codificados en otros conocimientos son excluidos de la evaluación del proyecto. La evaluación ética de la práctica correcta solo puede decidir dentro de los márgenes dejados por la protocolización (modulación) de la expansión de la ontología occidental más allá de sus fronteras. La arqueología posdisciplinaria está incluida en esquemas que modulan la expansión capitalista, en el sentido de que el capitalismo nunca es opuesto ni cuestionado, como si fuese un fatal destino metafísico en lugar de ser un fenómeno sociohistórico. El proyecto de la intervención territorial es guiado por un procedimiento burocrático que lo traduce en una posibilidad real. La intervención territorial por el capital nunca piensa en el agenciamiento territorial local. Los intermediarios financieros evalúan las intervenciones territoriales en términos de ecuaciones de costo, renta, riesgo y plazo. El patrimonio arqueológico es algo bastante difícil de anticipar o definir cuantitativamente sin la arqueología. El rol de las intervenciones arqueológicas posdisciplinarias es el de traducir en valor monetario equivalente las incertidumbres en el patrimonio arqueológico de un proyecto de inversión; las entidades principalmente cualitativas, invisibles e impredecibles son vueltas disponibles para su inclusión en las ecuaciones financieras que el capital necesita hacer para evaluar la viabilidad del proyecto. Incluso si la intervención arqueológica aumenta los costos y plazos, es la única manera de reducción del riesgo con respecto a algo tan incierto como lo arqueológico.

CONTRATIEMPO

Con el objeto de terminar este ya largo texto quisiera pedir al lector que piense en la posibilidad de un contratiempo, un tiempo contrahegemónico en favor del cual he

escrito previamente en relación con una arqueología indisciplinada (Haber 2012). Aquí solo voy a enfatizar los agenciamientos territoriales locales en la frontera capitalista como lugares de teoría. Estos son los territorios señalados por la dinámica de frontera para la extracción de conocimiento. Cómo recorrer el territorio en prospecciones de baja intensidad, cuáles plantas son útiles para qué, las tradiciones locales, los sitios arqueológicos, cómo cuidar el territorio, son algunos de los conocimientos extraídos y disponibilizados en desarrollos mercantiles alimentados por los proyectos de inversión de capital. Nuestras ciencias han buscado informantes, datos etnográficos, apoyo local (bienes, permisos y fuerza de trabajo), datos etnográficos y etnoarqueológicos; en resumen, los conocimientos locales han sido y son usados, pero raramente han sido considerados conocimientos por derecho propio. Sin embargo, las resistencias contra-hegemónicas a las intervenciones territoriales se basan en estos conocimientos. Los territorios locales no son agenciados ni habitados en aislamiento de la episteme hegemónica, sino que establecen diversos modos de relación con ella. Habitar la frontera es siempre habitar una duplicidad epistémica, hablar dos lenguas, pensar con dos corazones. Los colectivos territoriales que desean confrontar la hegemonía epistémica siempre tienen una enorme tarea teórica que realizar: pensar la hegemonía a contrapelo y desprenderse de su lenguaje. También tienen una gran ventaja. Reconocen su lugar de vivienda como el lugar de enunciación y teoría, y se movilizan teóricamente en defensa de la vida. Guiados por un principio de esperanza y prontos a luchar por sus muertos, deben leer a contrapelo los discursos académicos movilizados para las intervenciones territoriales.

Esos son los lugares de la teoría decolonial, y es en conversación con esos lugares de frontera que la arqueología se indisciplina. Indisciplinar la arqueología es insubordinarse de sus supuestos disciplinarios, aquellos que he anatomizado en la primera parte de este texto. La arqueología suele estar presente en los territorios de la frontera del capital, y usualmente está en medio del campo de batalla. Nadie puede ser neutral en un campo de batalla. Una vez allí, uno puede ser contratado en servicio del capital y evaluar los efectos en el patrimonio del proyecto de inversión y traducirlos en equivalente de valor para ser incluidos en una ecuación financiera, o bien puede desarrollar solidaridades con los agenciamientos territoriales locales prontos a luchar por sus muertos. Uno puede habitar el tiempo hegemónico y disfrutar del mucho o poco éxito mercantil, o habitar una trinchera, un contrat tiempo.

AGRADECIMIENTOS

Cristóbal Gnecco y Adriana Dias me invitaron, gentilmente, a la reunión en Porto Alegre. Daniela Fernández me ofreció su perspectiva situada sobre la arqueología de contrato. Mucha gente contribuyó de diversas maneras, entre ellos Felipe Criado, Leandro D'Amore, Adriana Dias, Daniela Fernández, Cristóbal Gnecco, Yannis Hamilakis, Horacio Machado y Nick Shepherd.

REFERENCIAS CITADAS

Escobar, Arturo

1999 *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá.

Garraghan, Gilbert

1946 *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press, Nueva York.

Gnecco, Cristóbal y Patricia Ayala (editores)

2010 *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*. FIAN-Universidad de los Andes, Bogotá.

Gottschalk, Louis

1950 *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Alfred A. Knopf, Nueva York.

Haber, Alejandro Fabio

1999 *Informe de impacto arqueológico de la fase de exploración (plan de perforación) del área de reserva minera Antofalla Este*. Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.

2012 Un-disciplining Archaeology. *Archaeologies* 8:55-66.

Haber, Alejandro Fabio y Adrián Scribano

1993 Hacia la comprensión de la construcción científica del pasado: ciencia y arqueología en el noroeste argentino. *Alteridades* 3(6):39-46.

Hodder, Ian

1989 This Is Not an Article about Material Culture as Text. *Journal of Anthropological Archaeology* 8:250-69.

Machado, Horacio

2011 El auge de la minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo. En *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, editado por Héctor Alimonda, pp. 135-179. Clacso; Ciccus, Buenos Aires.

Rivera, Silvia

2010 *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Retazos; Tinta Limón, Buenos Aires.

Santiago, Rosa-Araceli

1998 Griegos y bárbaros: arqueología de una alteridad. *Faventia* 20(2):33-45.

Shafer, Robert Jones

1974 *A Guide to Historical Method*. The Dorsey Press, Illinois.

Thomas, Nicholas

1994 *Colonialism's Culture: Anthropology, Travel, and Government*. Princeton University Press, Princeton.

Trouillot, Michel-Rolph

1995 *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Beacon Press, Boston.

**ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO:
UNA PERSPECTIVA GLOBAL**

LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO NO ES UN PROBLEMA DE UN SOLO PAÍS; ES UN PROBLEMA GLOBAL, Y un problema muy serio. Un problema que también debería ser enfrentado globalmente (a través de redes virtuales de activismo, por ejemplo), en vez de dejar que los arqueólogos de cada país y las comunidades afectadas tengan que lidiar con él de manera particular y, quizás, desinformada.

Los cinco artículos de esta sección analizan los efectos devastadores de la arqueología de contrato en siete países: Sudáfrica, Argentina, Chile, Canadá, Australia, Japón y España. Alguien pensaría que podrían ser más los países analizados, así que la elección final quizás haya sido tan arbitraria como la composición de cualquier libro editado. Pero no es así. Salvo unos cuantos análisis hechos en otros lugares, parciales y bastante complacientes, la discusión contextual de la arqueología de contrato ha sido un tema silenciado por un consenso gremial tácito muy fuerte. Aunque los siete países presentados aquí no agotan la posibilidad de discutir la arqueología de contrato, sí son buenos ejemplos para hacerlo porque, entre otras cosas, son el centro de atención de los pocos arqueólogos que han pensado el asunto a nivel global.

Los análisis emprendidos en estos artículos tratan cuatro asuntos predominantes: (a) la relación de la arqueología de contrato con la patrimonialización; (b) su relación con la arqueología académica; (c) la privatización de la “investigación” arqueológica en el marco de los proyectos de contrato; y (d) la coocurrencia de multiculturalismo y economía neoliberal, uno de cuyos vástagos es la arqueología de contrato.

La protección del patrimonio y el conocimiento del pasado se vuelven excusas, otras más, para la aparición desafortunada y desestructurante del desarrollo en la vida cotidiana de la gente; así la arqueología de contrato es la idiota útil, pero no inocente, de la expansión del capitalismo, aun en fronteras que antes no eran de su interés o estaban fuera de su alcance. No puede alegar inocencia, desde luego, porque forma parte principalísima del entramado gubernamental y empresarial que se ejerce, con violencia, sobre las poblaciones afectadas por los proyectos de desarrollo y que busca, y generalmente consigue, someterlas a los imperativos del mercado y de la libertad liberal.

La diferencia entre arqueología de contrato y la “otra”, la académica, es más bien espuria. Ambas participan de la ontología moderna y ambas están estrechamente relacionadas con el desarrollo —ya sea como proveedoras de su racionalidad teleológica o como facilitadoras instrumentales de sus proyectos—. La separación entre las dos es distractora y cumple el papel de alejar el escrutinio de la primera y enfocarlo en la segunda, donde, ya se sabe, tiene pocas posibilidades de prosperar. Los arqueólogos que no operan bajo contratos, pocos en cualquier cuenta, exigen a quienes sí lo hacen estándares de investigación que no se pueden cumplir bajo las presiones de las empresas y que son perdonados por el aparato burocrático. La arqueología académica cumple con cierto deber moral, la crítica de las operaciones disciplinarias bajo la forma contractual, pero lo hace desde criterios profesionales que, en cualquier caso, son meros saludos a la bandera. Una crítica contextual de la arqueología de contrato toca, entonces y necesariamente, a su doble más respetada, la arqueología académica, al mostrar las conexiones que las unen, las alimentan y las sostienen. Eso sí, la arqueología de contrato profundiza y perfecciona el giro técnico y descontextualizado que ya había emprendido la disciplina desde la década de los sesenta, incluso alejándose de los caminos teóricos transitados con anterioridad —aunque limitados, asépticamente, por las necesidades disciplinarias—.

Más arriba pusimos “investigación” entre comillas porque lo que se hace en los proyectos de contrato se relaciona más con la aplicación técnica de protocolos para liberar el suelo con fines comerciales que con la búsqueda de conocimiento; si este aparece, cuando aparece, lo hace como un efecto colateral (y poco sofisticado) de la operación técnica. La privatización de la actividad arqueológica (sea o no investigativa en términos académicos) tiene consecuencias nefastas en la sociedad, en lo arqueológico y en eso que la modernidad llama naturaleza, porque (a) subordina la arqueología a las necesidades gerenciales de los contratantes, eliminando con ello la autonomía disciplinaria que antes, acaso, podía tener cierta relación de dependencia con las políticas de la identidad; (b) transforma asuntos verdaderamente contenciosos (como todos los que pone en marcha la aplanadora del desarrollo: desposesión, desplazamiento, vulneración de la autonomía y la dignidad) en meros asuntos burocráticos, mediados por la intervención disciplinaria, profesional y técnica; (c) establece un alejamiento creciente entre la disciplina y lo público, con su sentido de responsabilidad solidaria y cuidado de los bienes comunes; y (d) establece nuevos criterios de relación, acercando a la arqueología al mercado y alejándola de la sociedad; en este proceso de alejamiento la arqueología opera como intermediaria eficaz entre las necesidades globales del mercado y las necesidades locales de la gente, con el resultado neto de que su lenguaje técnico

y profesional, pagado y definido por las empresas, privilegia las primeras a expensas de las segundas, aunque venda la idea de que solo opera como mediadora imparcial de buena fe. Esa intermediación es también un acto de traducción por medio del cual la ininteligibilidad de lo local es leída (y legislada) en términos globales.

Multiculturalismo y economía neoliberal son términos inseparables y productivos, tanto así que han regado hijos por el mundo, como la arqueología pagada y diseñada por las empresas de desarrollo. La arqueología de contrato participa de su racionalidad porque apuntala el gobierno de la diversidad a través de su vinculación al desarrollo, gerenciando su propio patrimonio; naturalizando sus efectos y consecuencias, por perversos que puedan ser; santificando las operaciones disciplinarias en un campo objetivo, neutral y técnico, lejos de cualquier posibilidad de transformación política; y abanderando la intervención del capital en nuevas fronteras.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO EN SUDÁFRICA: TEORÍA VIAJERA, MEMORIA LOCAL Y DISEÑOS GLOBALES

Nick Shepherd

Traducido del inglés por Cristóbal Gnecco

TEORÍA VIAJERA

ES POSIBLE FECHAR CON PRECISIÓN LA LLEGADA DE LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO A SUDÁFRICA. En junio de 1988 el arqueólogo de la Universidad de Stellenbosch, Hilary Deacon, publicó un editorial en *South African Archaeological Bulletin* con el título “¿Qué futuro tiene la arqueología en Sudáfrica?” Deacon estaba escribiendo en previsión de una nueva legislación ambiental (debidamente aprobada en 1989 como Ley de Conservación del Medio Ambiente) y señaló que...

[...] con la introducción de legislación que prevé la conservación del medio ambiente natural ocurrirá una nueva demanda de servicios arqueológicos [...] El concepto de la legislación propuesta tiene serias implicaciones potenciales para la arqueología en este país porque las declaraciones de impacto, incluyendo las de recursos culturales, se necesitarán para los proyectos de desarrollo [...] Sudáfrica está haciendo un inicio tardío en lo que se conoce como manejo de recursos culturales en otras partes. (Deacon 1988:3)

Deacon escribió estas palabras cuando se estaba restringiendo el gasto público en las universidades. Por eso especuló que el manejo de recursos culturales vendría al rescate de la arqueología y extendería su auge: “¿Está la arqueología entrando en otro período de auge como en la década de los setenta, cuando había puestos por cubrir?” (Deacon 1988:4).

Al año siguiente Martin Hall publicó un editorial en la misma revista y sugirió (Hall 1989:63): “La arqueología de contrato —en la que el arqueólogo trabaja, por una tarifa profesional, de acuerdo con arquitectos, planificadores, departamentos gubernamentales, agencias municipales o similares— es un nuevo concepto emocionante en este país”. En ese momento las universidades de Ciudad del Cabo y Witwatersrand tenían divisiones de contrato adjuntas a sus departamentos de arqueología y los departamentos de arqueología en las universidades de Stellenbosch y Pretoria estaban haciendo

contratos, al igual que varios arqueólogos que trabajaban en museos. Hall escribió su artículo cuando había mucho entusiasmo sobre el potencial de la arqueología de contrato y señaló que la cifra de negocios de las divisiones de contrato ligadas a las universidades era más alta que la financiación para investigación que recibían del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas, su principal benefactor anterior.

Un evento catalizador clave en esta evolución fue la visita, en 1989, del arqueólogo de Sanoma State University, Dave Frederickson. En 1984 Frederickson había organizado y presidido un congreso regional sobre manejo de recursos culturales en California para la Society for American Archaeology; también había sido fundamental en la creación del Centro de Estudios Antropológicos de su universidad, que, hacia 1992, estaba generando más de un millón de dólares anuales en contratos arqueológicos. La visita de Frederickson fue financiada por una subvención del Consejo de Investigación en Ciencias Humanas de Sudáfrica para “familiarizar a los profesionales de Sudáfrica con la conducción del manejo de recursos culturales en Estados Unidos” y “para dar recomendaciones que puedan estimular el desarrollo de un programa activo de manejo de recursos culturales” (Hughes 1993:6). En esa época yo era estudiante de pregrado en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Ciudad del Cabo. Recuerdo el seminario de Frederickson y la clara sensación entre los participantes de que estábamos mirando el futuro de la arqueología en el país. Pero este no era el futuro que algunos habíamos imaginado.

Edward Said (1983:226) comenzó su ensayo sobre “teoría viajera” señalando que “Las ideas y las teorías, como las personas y las escuelas críticas, viajan de una persona a otra, de una situación a otra, de un período a otro”. Said estaba interesado en temas de desplazamiento, recepción y contextos locales. ¿Qué sucede cuando la teoría y las ideas metropolitanas aterrizan en contextos locales particulares? ¿Cómo se transforman a través de este acto de traducción? ¿Qué consecuencias locales involuntarias pueden tener? El final de la década de los ochenta fue un periodo de intensa crisis política en Sudáfrica. Las revueltas populares de mediados de la década se habían estancado, debido a una concertada represión estatal, mientras el Estado del *apartheid* experimentaba desafíos sin precedentes: fracaso económico y derrota militar en sus fronteras. Los dramáticos acontecimientos de febrero de 1990, cuando el primer ministro Frederik de Klerk anunció el levantamiento de la proscripción del Congreso Nacional Africano y la liberación de Nelson Mandela, no estaban todavía en el horizonte. La arqueología, por su parte, enfrentaba su propia crisis de legitimidad.

La arqueología había sido institucionalizada y profesionalizada en Sudáfrica en la década de los veinte como una disciplina basada en museos y universidades. El arqueó-

logo John Goodwin (1900-1959) desempeñó un papel central en este proceso. Fue el primero en tener un cargo universitario en arqueología, fue miembro fundador de la Sociedad Arqueológica de África del Sur y fue el primer editor del *South African Archaeological Bulletin* (Shepherd 2002, 2015). Entre las décadas de los veinte y los cuarenta la arqueología operó como una empresa fundamentalmente anglófila, blanca y de clase media. Estaba cerca de los centros de poder e influencia del Estado, gracias al apoyo del estadista Jan Smuts. También tenía muchos seguidores aficionados. Los arqueólogos estaban en contacto con sus colegas de África central, oriental y occidental, gracias al transnacionalismo del imperio británico, y con la metrópoli disciplinaria en Gran Bretaña (sobre todo con la Universidad de Cambridge).

La victoria electoral de los nacionalistas afrikaner en 1948 y la formalización del *apartheid* cambiaron, significativamente, esta imagen (Shepherd 2002). Un efecto inmediato fue la retirada del patrocinio estatal. La financiación de la arqueología se secó a medida que murieron o se retiraron figuras claves. Los imaginarios populares sobre el tiempo profundo, articulados en torno a los restos del *Australopithecus africanus* y las edades de piedra Temprana, Media y Tardía, fueron reemplazados por los relatos sagrados de la historia popular afrikaner: la llegada a estas costas de colonizadores holandeses, la Gran Marcha al interior y la batalla del Blood River. No fue sino hasta finales de la década de los sesenta que la arqueología resurgió como una disciplina viable, debido a dos factores. El primero fue el fenomenal crecimiento de la economía del *apartheid* en la década de los sesenta, construido a partir del Estado de seguridad y de una intensa represión política. El segundo fue un conjunto de desarrollos en teoría arqueológica (Shepherd 2003).

Colin Bundy, uno de los más importantes historiadores revisionistas de Sudáfrica, tituló su relato del periodo 1962-1972 como “Decenio de la dominación” y lo comenzó así: “Habían vuelto los días felices —si usted era partidario del gobierno, empresario capitalista, inversor en la bolsa de valores, dueño de una casa y consumidor en el *boom* de la economía—” (Bundy 1986:80). La economía sudafricana reanudó el impresionante crecimiento que había demostrado en la década de los cincuenta, pero de manera forzada. El producto nacional bruto creció a una tasa real de más de 6% anual, cifra igualada por solo un puñado de otras economías en el mismo periodo. Íntimamente relacionado con esta economía renaciente estaba el Estado fuerte, personificado por John Vorster (ministro de Justicia y, desde 1966, primer ministro): “El aumento de gasto en las fuerzas de seguridad; nuevos y amplios poderes para la policía de seguridad; un aluvión de leyes punitivas de seguridad; detenciones sin juicio; tortura; y el encadenamiento de los tribunales —estos fueron los acontecimientos políticos a principios de la década de los sesenta—.” (Bundy 1986:81).

La arqueología sudafricana se benefició de este momento en el desarrollo del capitalismo racial. El Gobierno, ansioso por acrecentar el aparato cultural de un Estado moderno y con dinero en la mano, aumentó su gasto en museos y universidades. En 1967 el cuasigubernamental Consejo de Investigación Científica e Industrial financió el establecimiento de un proyecto de registro de arte rupestre y un laboratorio de datación por radiocarbono. Se crearon departamentos de arqueología en el Museo de Transvaal en 1969 y en el Museo de Natal en 1972. El crecimiento del empleo arqueológico fue exponencial. En 1960 había un solo cargo universitario y dos cargos en los museos. En 1970 había seis cargos universitarios y diez en los museos. Hacia 1987 había treinta cargos universitarios y veintiocho en los museos, casi sesenta cargos profesionales en arqueología (Deacon 1990).

Un segundo desarrollo clave fue disciplinario y se debió a una reorientación teórica. La arqueología practicada por Goodwin y sus contemporáneos era histórico-cultural e hizo hincapié en el análisis formal de los artefactos de piedra, en el desarrollo de tipologías y en el mapeo de la distribución de las “culturas” arqueológicas. La prehistoria fue concebida como la sucesión de esas culturas en el paisaje; las nuevas culturas surgían a través de la difusión de las ideas y la migración de personas, que dejaban sus tipos de artefactos en el registro arqueológico. A comienzos de la década de los sesenta un desafío convincente surgió en Norteamérica, la nueva arqueología (también llamada procesualismo), asociada con la obra de Lewis Binford (Trigger 1989), que enfatizó las relaciones ecológicas, los procesos de formación de sitios (tafonomía) y los “procesos” culturales más que la historia cultural. También combinó el positivismo lógico con un método deductivo de investigación (“deductivismo hipotético”) para crear una noción particular de la disciplina como la ciencia del pasado.

A principios de 1970 la reorientación de la arqueología de Sudáfrica estaba en marcha. Aaron Mazel, un crítico perspicaz de los estudios sobre la Edad de Piedra Tardía, usó listas de citas para demostrar que “a principios de 1970 [...] la fuente de inspiración principal de la arqueología sudafricana cambió de Gran Bretaña a [Norte] América” (Mazel 1987:512). El arqueólogo John Parkington se refirió a Binford como “el más destacado pensador arqueológico del siglo” (Mazel 1987:508). La tradición humanista, histórica y romántica anterior fue sustituida por el cientificismo y el desencanto de la nueva arqueología. El informe científico se convirtió en el formato estándar para representar el pasado arqueológico, dejando atrás los géneros anteriores: el artículo anecdótico o especulativo, el manual, la historia cultural. Esto tuvo consecuencias de gran alcance sobre la manera como la disciplina concebía su audiencia por su sentido

de responsabilidad y por su relación con el Estado del *apartheid* y con la sociedad contemporánea.

La redefinición de la arqueología como la “ciencia de la prehistoria” y la manera como abandonó a sus seguidores aficionados significó que estaba menos dispuesta a comprometerse con los contextos políticos del *apartheid*. Esto también tuvo el efecto de redefinir las nociones de responsabilidad. Mientras Goodwin y sus contemporáneos pensaban que escribían, al menos en parte, para un público general —“el hombre de la calle”— formalizado en el número de miembros de la Sociedad Arqueológica, los arqueólogos que trabajaron en la tradición procesual se dirigieron a un grupo de compañeros de profesión definido de manera más estrecha. Entendieron la arqueología, cada vez más, como una intervención esencialmente técnica destinada a abordar los problemas presentados por ciertas formas de evidencia material (Shepherd 2003). Estos acontecimientos —el estrechamiento de la influencia, una noción restringida de la responsabilidad y el alejamiento de una tradición histórica y narrativa— resolvieron el dilema central de la arqueología bajo el *apartheid*, es decir, la cuestión de cómo una disciplina orientada a la explicación de los pasados africanos podía prosperar como un proyecto patrocinado por el Estado del *apartheid*.

La respuesta tomó dos formas. En primer lugar, al autodefinirse como una intervención principalmente técnica, las preguntas sobre cultura, historia y experiencia fueron menos importantes que la experticia y la capacidad de hacer bien el trabajo. En segundo lugar, mediante la redefinición de las nociones de público y responsabilidad, los arqueólogos asumieron como un derecho su acceso a las culturas materiales y a los sitios en el paisaje, sin hacer referencia a las luchas históricas y contemporáneas por la tierra, la historia y la cultura en las que esos sitios se encontraban. Por su parte, el Estado tenía poco que temer de una disciplina tan profundamente desconectada de la sociedad contemporánea y la política del presente. En términos generales, la arqueología pasó las décadas turbulentas de los setenta y los ochenta lejos de la política, mientras su capacidad técnica y su infraestructura se volvieron más sofisticadas. Las referencias aisladas a los acontecimientos contemporáneos que aparecieron en los números anteriores del *Bulletin* dieron paso a un silencio concertado. Los momentos claves de resistencia y represión —Soweto, en 1976; las revueltas de los asentamientos, a mediados de la década de los ochenta; los estados de emergencia; la prohibición de las restantes organizaciones políticas; el levantamiento de su proscripción y la liberación de presos políticos— fueron pasados por alto, en un conjunto de omisiones cada vez más difícil de sostener a medida que los eventos que ocurrían en el país se volvieron visibles (Shepherd 2003).

Un momento crucial para la arqueología bajo el *apartheid* se produjo en 1983 durante el congreso de la Asociación de Arqueólogos del África Meridional en Gaborone, Botswana. La Asociación del África Meridional había sido rebautizada a partir de su nombre original, Asociación Sudafricana de Arqueólogos, y sus miembros incluían arqueólogos de Zambia, Zimbabue, Botswana, Lesoto, Suazilandia y Mozambique. Como Martin Hall señaló:

Los delegados de Mozambique presionaron para que se adoptara una resolución que condenara el *apartheid* y otras formas de discriminación. Aunque la mayoría de los delegados, sobre todo de Sudáfrica, se oponía, abiertamente, a las políticas raciales del gobierno sudafricano no quería que la disciplina participara, de manera explícita, en el ámbito político. (Hall 1990:75)

Durante este periodo Sudáfrica se involucró en guerras activas de desestabilización en Angola, Mozambique y Namibia. El costo de su oposición al *apartheid* fue pagado por los Estados fronterizos con la muerte de decenas de miles de sus ciudadanos. La resolución mencionada por Hall no fue sometida a votación. Los delegados de Mozambique y Zimbabue renunciaron a la Asociación “y muchos otros salieron del congreso sintiendo que los ideales internacionalistas ya no eran alcanzables” (Hall 1990:75).

En los años siguientes la crisis política se profundizó. Desde agosto de 1984 ocurrieron violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado en todas las principales áreas metropolitanas. El país y la lucha contra el *apartheid* adquirieron protagonismo en los medios de información del mundo. Como resultado de esta atención internacional los arqueólogos sudafricanos y namibios no fueron admitidos en el congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas celebrado en Southampton en 1986. Los acontecimientos que condujeron a la formación del Congreso Mundial de Arqueología (WAC, por sus siglas en inglés) dividieron a los arqueólogos del mundo. Una serie de debates acalorados atrajo académicos, políticos, comentaristas de los medios y activistas de derechos humanos (Ucko 1987). La cuestión de la relación entre la arqueología y el *apartheid* en Sudáfrica se convirtió en un momento álgido para la disciplina porque permitió debatir sobre ética y responsabilidad.

A finales de la década de los ochenta la arqueología de Sudáfrica estaba en crisis. Cada vez más aislada en casa y en el extranjero, el consenso general entre los profesionales de no hablar en contra de la política del *apartheid* pareció cada vez más gastado ante el resplandor de la atención mundial y a medida que el Estado del *apartheid* infligía salvajes represalias a la disidencia popular de mediados de la década. El argu-

mento de una noción de ciencia que operara al margen de la sociedad se hacía cada vez más difícil de defender. En la arqueología angloestadounidense la teoría posprocesual emergió como un reto articulado al positivismo y el cientificismo de la nueva arqueología. En dos libros innovadores, basados en el trabajo de Ian Hodder, Michael Shanks y Chris Tilley (1987a, 1987b) defendieron la idea de una arqueología social y políticamente comprometida. “El negro y el rojo” se colaron en los departamentos de arqueología en Sudáfrica, donde los estudiantes los circularon de mano en mano.

Inspirado por estos acontecimientos un pequeño número de arqueólogos sudafricanos comenzó a articular un proyecto alternativo. En 1985 Aaron Mazel y sus colegas fundaron el Taller de Arqueología para articular una arqueología más comprometida pública y políticamente. En 1988 yo era parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo que fundó un capítulo local del Taller de Arqueología. Durante cuatro años organizamos programas con los estudiantes del sistema escolar público de Ciudad del Cabo. Gabrielle Ritchie y Rushdie Nackerdien, basados en las ideas del Taller de Historia de la Universidad de Witwatersrand, abogaron por la noción de “arqueología del pueblo” para que coincidiera con el movimiento “Historia del pueblo” que había impactado tan profundamente en la conciencia popular sobre el pasado (Nackerdien 1994).

En ese contexto apareció la arqueología de contrato en Sudáfrica, a fines de la década de los ochenta, y significó el rescate financiero de una disciplina que empezaba a sentir los efectos de los recortes en el gasto público. Más significativamente, dio a los arqueólogos sudafricanos un lenguaje para negociar la transición política. En la terminología codificada y formalizada del discurso del manejo del patrimonio, con su noción de “partes interesadas” y sus protocolos de “consulta”, los arqueólogos encontraron un lenguaje que articuló una noción de sociedad y definió los términos de su relación con ella. Desde su punto de vista, era útil que el discurso del manejo de patrimonio no tuviera nada que decir sobre términos históricos de compromiso y legados de lucha ni sobre la distinción entre las demandas de los diferentes grupos de interés. En este sentido, el discurso del manejo del patrimonio era tan ahistórico y descontextualizado como el de la nueva arqueología.

Aunque el discurso del manejo del patrimonio amplió la participación de la arqueología en la sociedad, en la práctica se perdió en la burocratización del proceso de consulta. Ese discurso tuvo dos efectos. El primero fue un cambio en la base económica de la disciplina, alejada de la financiación pública y cerca de una creciente dependencia de la financiación privada, a través del capital especulativo invertido en proyectos de construcción. Un segundo cambio relacionado tuvo que ver con la noción de responsabilidad.

La noción previa, articulada en torno a la responsabilidad disciplinaria hacia mejores prácticas y la verdad del pasado, se amplió para incluir los intereses de una clase de gestores profesionales del patrimonio y los principios de una práctica empresarial justa. En la época de la transformación política, cuando las nociones de emancipación popular y responsabilidad pública se estaban escribiendo en la nueva constitución, los arqueólogos sudafricanos se movieron en la dirección de una mayor privatización. En una repetición de los acontecimientos ocurridos veinte años atrás, echaron mano de la teoría metropolitana para rearticular su propósito y para redefinir los términos de su relación con la sociedad, incluso mientras actuaban para delimitar las exigencias de responsabilidad pública.

La arqueología de contrato apareció en Sudáfrica bajo el signo de una ironía particular: coincidió con un periodo de transición política dramática y adoptó una versión del futuro en vez de otra. Más aún, lo hizo como un acto de virtud, en nombre de “mejores prácticas” globales. Así vindicó y dio nueva vida a una tradición de la arqueología colonial, transformada por el tecnicismo y el empirismo de la nueva arqueología, a través de los principios de la arqueología de contrato y del manejo de recursos culturales. Estas formas históricas de la disciplina comparten características en común. La primera es que son antiteóricas: la teoría se define como cualquier cosa que se encuentra fuera del ámbito estrecho y principalmente técnico y metodológico de un conjunto de discusiones. La segunda es una fuerte antipatía hacia las relaciones sociales y políticas. Uno de los tropos de la arqueología colonial fue que era necesario mirar a través y más allá del presente, con su desorden de aspiración política, para encontrar los restos de un pasado imaginado (Shepherd 2002). La genialidad de la arqueología de contrato es que presenta estas características como sus opuestas —como sistematización del diálogo y ampliación de la responsabilidad y como un intento continuo por relacionarse con los reclamos de la comunidad—, incluso mientras establece el marco en el que podrían desarrollarse ese diálogo y esos reclamos.

MEMORIA LOCAL

Ese fue el momento de inicio de la arqueología de contrato en Sudáfrica, pero ¿cuáles fueron sus consecuencias? En la segunda parte de este artículo quiero examinar un caso que nos llevará a entender las consecuencias políticas y epistémicas de la arqueología de contrato como un proyecto de conocimiento y como un conjunto de prácticas. Puesto que ya he publicado este caso en detalle (Shepherd 2007, 2013a, 2013b), solo quiero extraer un conjunto de conclusiones relacionado con la arqueología de contrato y con el discurso sobre el manejo de los recursos culturales. Mi estudio de caso se refiere a la

exhumación impugnada de un cementerio de la época colonial en la calle Prestwich, en Ciudad del Cabo, entre el 2003 y el 2005, y los acontecimientos subsiguientes. La calle Prestwich fue la instancia de trabajo arqueológico más impugnada en Sudáfrica después de 1994. Un extraordinario conjunto de eventos enfrentó a arqueólogos de contrato y gestores profesionales del patrimonio con activistas de la comunidad, líderes religiosos, descendientes de esclavos y víctimas de desalojo forzado que se organizaron como movimiento social para proteger el sitio y sus restos. Usando tácticas de “lucha” antiapartheid desafiaron a la arqueología disciplinaria y al discurso sobre manejo de recursos culturales, abordando cuestiones fundamentales sobre valores y responsabilidad social.

El relato de la calle Prestwich comienza en el periodo de la ocupación holandesa, cuando en el área al norte y al oeste de la ciudad en crecimiento ocurrieron enterramientos formales e informales, entre ellos los famosos White Sands. Las personas enterradas en los cementerios informales pertenecían a las clases bajas de Ciudad del Cabo en la época colonial: esclavos, negros libres, artesanos, pescadores, marineros, empleadas domésticas, lavanderas y sus hijos, así como criminales ejecutados, suicidas, indigentes y víctimas no identificadas de naufragios (Hart 2003). En la tercera década del siglo XIX esta área —Distrito Uno— fue dividida con fines inmobiliarios y rebautizada Green Point. Más tarde se asentaron industrias ligeras y la zona se deterioró. A finales de los años sesenta y principios de los setenta los residentes negros y de color¹ del barrio obrero de Green Point fueron desplazados por la fuerza con base en la Ley de Áreas de Grupo, una forma de limpieza étnica. Entre el año 2000 y el 2008 durante el *boom* inmobiliario, Green Point renació como De Waterkant, parte de la ostentosa área internacional de la ciudad y centro de la “zona rosa”. En mayo del 2003, durante trabajos de construcción en la calle Prestwich, se descubrieron huesos humanos. El constructor Styleprops Ltd., lo notificó a la Agencia Sudafricana de Recursos Patrimoniales (SAHRA, por sus siglas en inglés), de conformidad con la Ley Nacional de Recursos Patrimoniales recientemente aprobada, y la construcción fue detenida. Un contratista arqueológico fue nombrado para manejar el lugar y para organizar un proceso de consulta pública. Se celebraron tres reuniones públicas en las que fue evidente que había una considerable oposición a las exhumaciones. Las personas preguntaron quién se beneficiaría de las exhumaciones y por qué los protocolos arqueológicos tenían prioridad en el manejo

¹ “Negros” y “de color” (*coloured*) fueron categorías raciales distintas usadas en Sudáfrica en la época del *apartheid*. [N. del T.]

del sitio. Por ejemplo, Mavis Smallberg, del Museo de la Isla Robben, señaló en un correo electrónico enviado a Antonia Malan:

Mi sugerencia firme es cubrir las tumbas [...] Aparte [del] recientemente renombrado Alojamiento de Esclavos, no hay otro espacio público que marque o conmemore con respeto la presencia de esclavos y pobres en la sociedad de la Ciudad del Cabo [...] Solo los científicos van a beneficiarse del estudio de estos huesos.

El 9 de agosto el sínodo de la diócesis de la Iglesia Anglicana de Ciudad del Cabo, bajo el liderazgo del arzobispo Njongonkulu Ndungane, sucesor de Desmond Tutu, aprobó por unanimidad una resolución que condena las exhumaciones y pide “[a nuestro] gobierno, a través de su agencia de patrimonio [...] mantener la integridad del sitio como cementerio” (Wheeder 2003:1). En la segunda reunión pública un encuestado no identificado dijo:

Hay múltiples implicaciones de este cementerio y su apertura desnuda en el centro de la ciudad [...] en esta ciudad nunca ha existido la voluntad de discutir [la cuestión del genocidio y] la destrucción de las comunidades humanas que fueron traídas de todo el mundo [...] Esta es una oportunidad para llegar al fondo de esto y el tiempo significa diferentes cosas para diferentes personas, instituciones, grupos de interés. Es la hora de los muertos: tenemos que considerar lo que eso significa. (SAHRA 2003:17-18)

Michael Wheeder, quien más tarde desempeñaría un papel central en el Comité La Calle Prestwich No Se Toca (Hands Off Prestwich Street Ad Hoc Committee), anotó:

Muchos de nosotros, descendientes de esclavos, no podemos decir: “Aquí está mi certificado de nacimiento”. Somos parte de la plebe de Ciudad del Cabo [...] Las personas de raza negra nos apresuramos a llegar a la ciudad en taxis y tenemos que salir corriendo de ella. Hace un tiempo, hace muchas décadas, vivíamos y amábamos y trabajábamos aquí. Nada [nos recuerda esa historia] [...] así que dejen [el sitio] como un monumento de recuerdo al Sr. González que vivía aquí, a la señora de Smidt que vivía allí. Los pobres de la zona —los pescadores, los trabajadores domésticos, los barrenderos—. Recuerden eso. Dejen los huesos allí [...] Ese sitio es su propiedad por primera vez en su vida, *het hulle stukkie grond* (tienen un pequeño pedazo de tierra). Déjenlos en ese terreno. ¿Por qué encontrar ahora en la gentileza de este nuevo dispensario un lugar con el que no tienen conexión? (SAHRA 2003:18-19)

El 1.º de septiembre, a pesar de que la opinión pública se oponía a las exhumaciones, Pumla Madiba, director de SAHRA, anunció la reanudación de los trabajos arqueológicos en el sitio y señaló: “Muchas de las personas que se opusieron lo hicieron emocionalmente y no dieron razones reales para impedir que los esqueletos sean reubicados (*sic*)” (Kassiem 2003:1). El 4 de septiembre se puso en marcha el Comité La Calle Prestwich No Se Toca (HOC, por sus siglas en inglés). En ese momento la oposición a las exhumaciones se desplazó del proceso de consulta pública, aprobado oficialmente, a la sociedad civil y a la política de la acción de masas. El 12 de septiembre HOC interpuso un recurso ante SAHRA pidiendo un alto a las exhumaciones y “un proceso completo y extenso de consulta a la comunidad” (HOC 2003). El documento de apelación sostiene que:

[...] la [exhumación] impide una serie de identificaciones de las personas con ese espacio físico específico en la ciudad. Esa remoción recuerda, aunque de forma involuntaria, los desplazamientos forzados de la misma área que realizó el régimen del apartheid. (HOC 2003:8)

HOC organizó vigiliyas con velas en el sitio de la calle Prestwich los domingos por la noche. Se puso una cartelera fuera de la catedral de San Jorge, un lugar simbólico de protesta contra el *apartheid*, con el lema “¡Detengan las exhumaciones! ¡Detengan la profanación!”. Se hicieron piquetes a la hora del almuerzo en el centro de la ciudad. La apelación a SAHRA fue rechazada, al igual que un recurso posterior ante el ministro de Arte y Cultura. Se dice que Terry Lester, de HOC, expresó “Estamos haciendo de putas en esta instancia, inclinándonos ante el dios del desarrollo y vendiendo un segmento de nuestra historia” (Gosling 2004:1).

Más de dos mil cuerpos fueron exhumados del sitio en la calle Prestwich. Inicialmente se almacenaron en el hospital Woodstock Day, en el otro lado de la ciudad; después fueron llevados a un “osario” especialmente diseñado, a medio kilómetro del sitio. Con la construcción del estadio de Ciudad del Cabo en Green Point, como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA en el 2010, este sitio poco prometedor fue reconfigurado por su adyacencia a la “ruta de los aficionados”, diseñada desde el centro de la ciudad hasta el nuevo estadio. Los muertos de la calle Prestwich, en su tránsito agitado por la ciudad del *posapartheid*, fueron incluidos en un nuevo conjunto de relaciones, esta vez con las decenas de miles de aficionados al fútbol que caminaron en procesión masiva a ver los partidos importantes (Shepherd 2013b).

Con mi análisis de los acontecimientos en la calle Prestwich busco hacer hincapié en tres puntos. El primero se refiere al grado en que actuó como un “punto de fractura” (Edwards 2001; Hayes *et al.* 2001) a través del cual hemos podido vislumbrar la constitución

de fuerzas e intereses en la sociedad *posapartheid* relacionados con cultura, identidad y memoria y, también, con temas de ciudadanía, con las posibilidades y las limitaciones de la política participativa y con la forma emergente y la naturaleza de una esfera pública *posapartheid*. En este sentido, en la calle Prestwich estaba en juego mucho más que el destino definitivo de los muertos. Un segundo punto se refiere a la aparición de discursos opuestos en el transcurso de estos eventos. El primero, y más conocido, fue un discurso disciplinario articulado en términos de nociones del derecho de acceso de la ciencia, el valor de los restos como una fuente de “historias ocultas” y la capacidad de la arqueología para entregar “la verdad del pasado”. En el proceso emergieron tropos que fueron reciclados por los arqueólogos. En la segunda reunión pública la arqueóloga Belinda Mutti argumentó a favor de la exhumación “para devolver la historia a la gente” (Malan 2003:12). Liesbet Schiettecatte argumentó que “[dejar] los huesos impide conocer la información. Su estudio los trae de regreso a la vida [...]” (Malan 2003:13). Sin embargo, más interesante para mí fue la manera como los activistas del Comité La Calle Prestwich No Se Toca articularon y movilizaron un contradiscurso para conceptualizar su relación con los restos y para hacer un desafío público y legal a las exhumaciones. En declaraciones públicas, presentaciones y apelaciones enfatizaron el lenguaje de la memoria, la experiencia y la identificación empática. Trataron de articular un conjunto alternativo de valores y nociones de espacio y tiempo, incluyendo el sitio como lugar de memoria y conciencia (en vez de un sitio arqueológico) y, en una intervención memorable, la noción de “hora de los muertos”. Por encima de todo, impugnaron la noción de un pasado distante y objetivado, cuya relación con el presente está mediada por el conocimiento experto. En su versión más compleja de esta relación, el resurgimiento de los muertos de la calle Prestwich al mundo de los vivos no es descrito con el tropo del descubrimiento (como en los relatos disciplinarios) sino, más bien, como un “momento de aprendizaje”.

Como parte de un contradiscurso en torno a la calle Prestwich vi algunas propuestas de gran alcance con respecto a formas de memoria, como la idea de dejar el lugar de inhumación con sus restos en el suelo como un espacio abierto para la reflexión en un paisaje urbano cada vez más densamente construido. He escrito en favor de la idea de una “arqueología del silencio” (Shepherd 2007), partiendo de la premisa de que nuestra generación —la primera generación después del *apartheid*— puede aprender más si se dejan los restos en el suelo y se conversa sobre las implicaciones de su “apertura desnuda en la ciudad” que si se exhuman y se someten a procedimientos disciplinarios. Para nosotros la “oportunidad de aprendizaje” no tiene que ver con pasados imaginados, atrapados en el tiempo profundo, sino con el asunto más urgente y difícil de cómo nos

encontramos, unos a otros, los sudafricanos que estamos parados en los lados opuestos de una historia dividida.

Un tercer punto tiene que ver con temas de historia y representación. Tengo frente a mí un folleto en papel satinado de “El Rockwell: vivienda de lujo en De Waterkant” (Dogon y Gavrill 2005). El Rockwell, que fue construido en el sitio de la calle Prestwich, se compone de 103 apartamentos de estilo “Nueva York”, además de plazas de estacionamiento, un gimnasio privado, un restaurante, una tienda de *delicatessen* y una piscina. El punto histórico de referencia de este proyecto inmobiliario es el llamado Renacimiento Harlem o, como dice el folleto, la “Edad del Jazz” de Nueva York. Según el folleto: “Inspirado por los edificios hechos a inicios de la década de 1900 en el centro de Manhattan El Rockwell exhibe una riqueza y calidez inherentes”. Esto se debe a que “A inicios del siglo pasado se diseñaba correctamente. No sólo porque era clásico en forma y función [...] sino porque se hacía con el alma” (Dogon y Gavrill 2005:1). Hacerlo “con alma” se convierte en un estribillo, y el resto del folleto hace referencia a *rock & soul*, *pure soul*, *rich soul*, *style & soul* y *rhythm & soul*. Las imágenes acompañantes muestran interiores limpios y despoblados, sin el polvo de la historia, las asociaciones no deseadas y la mancha de la tierra que se encuentra abajo. ¿Cómo interpretamos esto sin aludir a la aniquilación de la historia y la memoria local? La fuerza de la frase “traslados forzosos” adquiere sentido. En la calle Prestwich vemos la creación de un nuevo tipo de imaginario histórico *posapartheid*, en el que la historia es imaginada por los vencedores y los beneficiarios y en el que las víctimas no tienen lugar por fuera de las fronteras de los parques conmemorativos y los recintos patrimoniales.

Si el Rockwell sugiere un relajamiento de las formas de representación histórica y los lazos de obligación que unen el presente y el pasado, o los vivos y los muertos, los acontecimientos posteriores lo confirman. Ante el reto de hacer un edificio conmemorativo (el New Prestwich Memorial Building) económicamente sostenible, la alcaldía entregó la mayor parte de su espacio público para la creación de un café. El sitio web *Bizcommunity.com* reportó: “El carismático líder y evangelista del café, David Donde, lanzó su nueva marca de café y su café, Truth Coffeecult, el miércoles 24 de marzo de 2010 en el Memorial Prestwich”. El sitio web de Truth Coffeecult invita “a disfrutar de la elegancia simple de microlotes de cafés artesanales tostados, preparados por baristas frikis [...] No todos los cafés son iguales. Nosotros evitamos el amargo horror del café demasiado tostado [...] Experimente la Verdad. El café como religión”. Los baristas en Truth Café usan camisetas con la leyenda “Verdad”. En la caja registradora uno está invitado a dar “consejos para la verdad”. Una reciente promoción invitaba a “una taza gratis de verdad”. En un juego más directo de referencias, los molinillos que se venden en Truth

Café llevan la imagen de un cráneo humano atravesado por la letra “T” y las cajas de cartón con granos de café están apiladas y hacen referencia a las cajas apiladas de restos humanos que están en la bóveda de al lado. Visite Truth Café en un día cualquiera y encontrará los *hipsters* del centro de la ciudad, turistas y miembros de la elite *boho* de Green Point tomando café, aprovechando el wifi gratuito y disfrutando el tiempo voluble de Ciudad del Cabo.

DISEÑOS GLOBALES

En esta parte quiero ofrecer algunas conclusiones. Aunque los contextos que exploro son específicos de Sudáfrica, las conclusiones tienen una aplicación más amplia. Un primer punto obvio es que la arqueología de contrato y el discurso del manejo de recursos culturales ponen la arqueología al servicio del desarrollo. Esto incluye un amplio espectro de actividades, pero, por lo general, implica grandes proyectos extractivos y de infraestructura con mucha inversión de capital que impactan paisajes históricos: actividades mineras, oleoductos y gasoductos, carreteras y presas, silvicultura y explotación forestal, y proyectos de construcción urbana, como el de la calle Prestwich (La Salle y Hutchings 2012). Estas actividades causan un impacto significativo en las ecologías y formas de vida locales y, con frecuencia, son controvertidas. La arqueología y el discurso del manejo de recursos culturales son parte de esas tecnologías, cuya función es facilitar la relación vertical entre el capital global, los intereses multinacionales y las comunidades, los territorios y los recursos locales; justo el tipo de incursiones agresivas de lo global en lo local que Walter Mignolo (1999) llamó “diseños globales” (véase Shepherd y Haber 2011).

La manera como la arqueología facilita esta relación vertical es sutil e interesante y requiere mayor explicación. En pocas palabras: lo local —lo profundamente local— es a menudo opaco para la mirada global; es, a menudo, resistente y difícil de leer. La función de los discursos disciplinarios, como la arqueología y el manejo de recursos culturales, es traducir lo local en términos globales, reconfigurando sitios, subjetividades y valores en términos reconocidos por la ley y el mercado. Este acto de traducción se convierte en una condición necesaria para la incursión de lo global en lo local. Así operaron los creadores de los mapas coloniales y los misioneros y ahora lo hace un pequeño ejército de especialistas en desarrollo, antropólogos y arqueólogos. Los discursos globales del desarrollo y del manejo de recursos culturales actúan como tecnologías de traducción, reconfigurando y reacondicionando lo local para proporcionar puntos de compra para los diseños globales. Las “comunidades” son nombradas.

Los “representantes” son identificados. El trabajo de transvaloración de los paisajes sociales y materiales comienza (es decir, con frecuencia ese algo invaluable adquiere valor). El trabajo de la arqueología dentro de un complejo de este tipo es bastante específico: la captura epistémica de paisajes sagrados y simbólicos y de muertos ancestrales, de tal manera que las relaciones con estos materiales (reconfigurados como “restos”) se presentan como relaciones de conocimiento mediadas por las tecnologías disciplinarias apropiadas. Regímenes complejos y polivalentes de cuidado “de la vida” son sustituidos por regímenes disciplinarios de cuidado basados en el empirismo, el encasillamiento tipológico y la lógica aséptica del depósito del museo o del archivo (Shepherd y Haber 2014). Los activistas del Comité La Calle Prestwich No Se Toca lucharon por encontrar un lenguaje expresivo para articular su relación con el sitio y sus muertos, pero, al final, fueron engullidos por el discurso del manejo de recursos culturales refractado por medio de la ley, la Agencia Sudafricana de Recursos Patrimoniales y formas inflexibles de práctica disciplinaria.

Con los crecientes precios de las materias primas y la disminución de los recursos, las multinacionales energéticas y mineras (por ejemplo) buscan explotar zonas antes marginales o no disponibles, como zonas ecológicamente sensibles y territorios bajo control indígena. Un compromiso previo con el “patrimonio cultural” es uno de los medios con los que esos intereses “abren la conversación” y se introducen en esas zonas. En los intercambios que se producen entre los intereses de las multinacionales y las comunidades locales, los derechos culturales y los títulos con frecuencia sustituyen a los beneficios socioeconómicos; el compromiso de fomentar y preservar el patrimonio cultural se convierte en una cortina que oculta la degradación del medio ambiente y la destrucción de formas de vida. Alejandro Haber y yo hemos documentado un notable ejemplo de la reutilización contemporánea de la arqueología al servicio del capital global y los intereses multinacionales. En el 2007 la multinacional minera Rio Tinto Limited “se acercó” al Comité Ejecutivo del Congreso Mundial de Arqueología para proponer una alianza preferencial:

A mediados/finales de 2007 nos dijeron que había financiación para una reunión del Comité Ejecutivo en Melbourne, Australia, que sería precedida por un breve simposio (sobre “Globalización ética”) y una serie de reuniones con Rio Tinto. Los líderes de WAC nos dijeron que existía la posibilidad de una importante financiación de Rio Tinto, pero no nos dijeron qué implicaba. Cuando llegamos a la reunión con Rio Tinto encontramos un salón lleno de abogados y una astuta presentación corporativa. Una confusión en el hotel hizo que ninguno de nosotros hubiera visto la documentación. Hubo agitación mientras

tratábamos de asimilar lo que se proponía. Rio Tinto trabaja a través de lo que llama “intermediarios de confianza” con la sociedad civil, normalmente involucrados con asuntos del medio ambiente o educación pero Rio Tinto necesita, cada vez más, acceder a recursos minerales en territorios bajo control indígena o donde hay claros intereses patrimoniales. Rio Tinto pidió a los miembros de WAC y al Comité Ejecutivo que actuaran como intermediarios para facilitar la relación entre la empresa y estos grupos e intereses locales. Rio Tinto carece de redes locales creíbles en muchas partes del mundo. WAC pondría sus redes a disposición de Rio Tinto, junto con el capital simbólico de su historial y reputación como defensor de las causas indígenas. A cambio Rio Tinto podría proporcionar una gama de financiación, incluyendo los fondos para pagar una secretaria asalariada a tiempo completo para WAC. WAC se convertiría en una organización arqueológica/científica cuyos funcionarios asalariados serían pagados por Rio Tinto y cuyos miembros estarían disponibles para facilitar a Rio Tinto su relación con los intereses locales y con los gestores del patrimonio. (Shepherd y Haber 2011:102-103)

El hecho de que la mayoría del Comité Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claire Smith, estuviera a favor de la propuesta es característico del reposicionamiento de la arqueología en las últimas dos décadas y de la silenciosa apropiación de una organización como WAC. Haber y yo nos encontramos en medio de una pequeña minoría de voces disidentes. Todo esto fue registrado, tanto como el posterior intento de Smith por manejar y dirigir el debate dentro de la organización y la eventual retirada de Rio Tinto del acuerdo (véase Hollowell y Herrera 2012). Lo que quiero comentar aquí es la respuesta al artículo que Alejandro Haber y yo publicamos en la revista *Public Archaeology* con la intención de abrir el debate sobre el asunto. Nuestro artículo fue recibido con rabia y con una campaña virtual de vilipendio. El vicepresidente de WAC, Bayo Folorunso, nos acusó de traicionar a la organización y de morder la mano que nos alimentaba. Folorunso (2012) y la tesorera de WAC, Inés Domingo (2012), escribieron que la participación en los debates del Comité Ejecutivo era un “privilegio” y no un derecho. Folorunso (2012:191) escribió:

Puedo percibir que la presidenta fue demasiado amplia y toleró los excesos de algunos individuos en nombre de un debate abierto. Aunque no estoy en contra del debate creo en el estricto apego a las normas, las regulaciones, los procedimientos y el debido proceso.

Smith (2011) escribió para “corregir” lo que llamó “errores de hecho y errores de representación.” Haber y yo estábamos, claramente, fuera de sintonía con el sentimiento de WAC o, al menos, del Comité Ejecutivo. Mi sensación en ese entonces fue la de la

presencia palpable del dinero, de su poderoso atractivo, pero también del daño que los miembros del Comité Ejecutivo estaban haciendo a WAC al alinearse con los protocolos y deseos corporativos.

Recordé estos eventos cuando leí los airados correos electrónicos que recibió la invitación que hicieron Cristóbal Gnecco y Adriana Schmidt Dias a un simposio sobre “arqueología de contrato” que organizaron en Porto Alegre, Brasil en junio del 2013. Gnecco y Dias se encontraron en el extremo receptor de una cadena de respuestas muy fuertes. Varios colegas en el sector de contrato expresaron conmoción, indignación, actitud defensiva y desconcierto. La indignación siempre es interesante como respuesta, no solo por el excedente de afecto, sino también porque sugiere una ventaja moral: “¿cómo se atreve...?”. Esto me lleva a un segundo punto amplio sobre la arqueología de contrato y es que tiene una justificación potente en el lenguaje de la mitigación y la mediación. Aunque, en sentido estricto, los arqueólogos de contrato trabajan para las empresas y organismos del Estado que los contratan, una fuerte cadena normativa en el discurso sugiere que, *en realidad*, trabajan en nombre de las comunidades locales y de los medios ambientes amenazados. “Si no fuera por nuestra intervención las cosas serían aún peores”, podría ser la letra de su estribillo. La genialidad del discurso del manejo de recursos culturales es que pone a la arqueología en el lado de los ángeles. O podría decir que la arqueología de contrato implica una comprensiva reinscripción moral del campo disciplinario, de manera que se convierte en su propia justificación. Este es un punto importante porque explica cómo la disciplina abrazó tan rápida y completamente a la arqueología de contrato, con tan poca discusión sobre sus consecuencias sociales, políticas, ambientales y epistémicas. ¿Qué se puede discutir sobre un bien tan evidente? Un subconjunto de esta reinscripción moral es el lenguaje del realismo. En las respuestas a nuestro artículo sobre Río Tinto nos dijeron, en repetidas ocasiones, que la minería es “un hecho de la vida”, que está “aquí para quedarse” y que la única alternativa es “relacionarse” con ella. Por eso es mejor hacerlo desde WAC antes de que lo haga otra organización menos “ética” y “responsable”.

Un tercer punto: la arqueología de contrato no es un desarrollo paralelo a la arqueología disciplinaria o “académica”; es una completa reorientación y reutilización de la arqueología que incide en el significado fundamental y el propósito de la disciplina. Dicho de otra manera: la arqueología de contrato es una intervención decisiva en el futuro de la arqueología y actúa en todas las direcciones. En los años posteriores a los acontecimientos en la calle Prestwich se ha presentado una reorientación notable del Departamento de Arqueología de la Universidad de Ciudad del Cabo, la institución más estrechamente involucrada en los eventos que ocurrieron en ese sitio. Esta reorien-

tación se ha alejado de la arqueología histórica, la teoría arqueológica y los estudios sobre la Edad de Piedra Tardía y se ha acercado a los estudios sobre las edades de piedra Temprana y Media, la paleoantropología y la arqueometría. El Departamento está ahora menos involucrado en cuestiones de teoría, política, patrimonio y contextos contemporáneos de la práctica que en cualquier momento desde principios de la década de los ochenta. Sin duda en este hecho intervienen muchos factores, pero es difícil no leer este giro hacia un pasado cada vez más profundo y más evanescente como una huida de la política del presente.

Un cuarto y último punto se refiere a la reducción radical del alcance, el debate y las preocupaciones disciplinarias bajo la influencia de la arqueología de contrato. Áreas enteras de debate son relegadas a formulaciones banales sobre “grupos de interés” y “valores” y a protocolos sobre “consulta a la comunidad” de la gestión de patrimonio. Las cuestiones sobre propiedad, acceso, derechos y autoridad, que eran consideradas políticas e impugnadas, ahora son vistas, cada vez más, como meros asuntos de “gestión” que deben ser manejados a través de lenguajes técnicos y procedimientos administrativos. Los arqueólogos por contrato que trabajaron en el sitio de la calle Prestwich comentaron, en repetidas ocasiones, sobre la injusticia fundamental de las críticas que les hizo el Comité La Calle Prestwich No Se Toca. Ellos estaban allí como “técnicos”, haciendo un trabajo para un cliente. Cualquier discusión sobre ética y sobre los derechos de las comunidades descendientes estaba fuera de su área de responsabilidad y experticia.

Los arqueólogos de mi generación hemos sido testigos de la mayor transformación de la disciplina en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos quedado perplejos al darnos cuenta de que la disciplina a la que habíamos ingresando ya no es la que ahora existe. La instrumentalización de la arqueología al servicio del capital global, en contra de las comunidades, las ecologías y las formas de vida locales, ha significado que he tenido que repensar mi relación con la disciplina. He tenido que emprender el interesante viaje de volver a imaginar lo que significa ser arqueólogo y hacer arqueología. Esto ha implicado, por un lado, hacer mi trabajo como una forma de contrapráctica que impugna las posturas acríticas en la disciplina. En pocas palabras: ya no tengo el privilegio de hacer lo que la disciplina me dice que haga. Por otro lado, ha implicado conversaciones llevadas a cabo “en resistencia”. El resultado ha sido un maravilloso conjunto de interlocutores repartidos por todo el mundo, especialmente en el sur global, donde las contradicciones de la globalización neoliberal se sienten con más fuerza. Ahora me dedico a estas conversaciones mientras la arqueología de contrato revela la quiebra de las fuentes tradicionales de la teoría arqueológica.

REFERENCIAS CITADAS

- Bundy, Colin
1986 *Re-making the Past: New Perspectives in South African History*. University of Cape Town, Ciudad del Cabo.
- Deacon, Hilary John
1988 Guest Editorial: what Future Has Archaeology in South Africa? *South African Archaeological Bulletin* 43(147):3-4.
1990 Weaving the Fabric of Stone Age Research in Southern Africa. In *A History of African Archaeology*, editado por Peter Robertshaw, pp. 39-58. James Currey, Londres.
- Dogon, D. y Gail Gavrill
2005 *The Rockwell: Luxury De Waterkant Living*. Dogon Gavrill Properties, Ciudad del Cabo.
- Domingo, Inés
2012 wAC Matters: A Different View to that of Shepherd and Haber. *Archaeologies* 8(1):2-11.
- Folorunso, Adebayo
2012 Putting the Record Straight: “What’s up with wAC?” *Archaeologies* 8(2):188-195.
- Gosling, Melanie
2004 Exhumation of Prestwich Street Skeletons Has Been given Go-Ahead, Says Developer. *Cape Times*, 23 de julio. <http://www.iol.co.za/news/south-africa/exhumation-of-skeletons-to-proceed-217868>
- Hall, Martin
1989 Contract Archaeology in South Africa. *South African Archaeological Bulletin* 44(150):63-64.
1990 “Hidden history”: Iron Age Archaeology in Southern Africa’. In *A History of African Archaeology*, editado por Peter Robertshaw, pp. 59-77. James Currey, Londres.
- Hart, Tim
2003 Heritage Impact Assessment of West Street and Erf 4721 Green Point, Cape Town. Reporte preparado para Styleprops 120 (Pty) Ltd., University of Cape Town, Ciudad del Cabo.
- HOC
2003 Sustentación de la apelación enviada por Hands Off Prestwich Street Ad Hoc Committee, Ciudad del Cabo.
- Hollowell, Julie y Alexander Herrera
2012 “Terms of Engagement”: A wAC Drama in Multiple Acts and Scenes, Acts Three through Five and a Call for Public Participation. *Archaeologies* 8(1):18-40.

Hughes, Richard

1993 Society for California Archaeology Lifetime Achievement Award: David Allen Fredrickson. *Society for California Archaeology Newsletter* 27(3):6-7.

Kassiém, A.

2003 Slaves' Skeletons to be Relocated. *Cape Times*. 3 de septiembre. P. 6

La Salle, Marina y Rich Hutchings

2012 Commercial Archaeology in British Columbia. *The Midden* 44(2):8-16.

Malan, Antonia

2003 Prestwich Place. Exhumation of Accidentally Discovered Burial Ground in Green Point, Cape Town [Permit n.º 80/03/06/001/51]. Proceso de consulta pública entre el 9 de junio y el 18 de agosto. Cultural Sites and Resources Forum, Ciudad del Cabo.

Mazel, Aaron

1987 The Archaeological Past from the Changing Present: Towards a Critical Assessment of South African Later Stone Age Studies from the Early 1960's to the Early 1980's. En *Papers in the Prehistory of the Western Cape, South Africa*, editado por John Parkington y Martin Hall, pp. 504-529. BAR, Oxford.

Mignolo, Walter

1999 *Local Histories / Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*. Princeton University Press, Princeton.

Nackerdien, Rushdie

1994 *Archaeology and Education in South Africa: towards a Peoples' Archaeology*. University of Cape Town, Ciudad del Cabo.

SAHRA

2003 Actas de la consulta pública de la South African Heritage Resources Agency realizada el 29 de agosto en St Andrew's Presbyterian Church, Ciudad del Cabo.

Said, Edward

1983 *The World, the Text, and the Critic*. Vintage, Londres.

Shanks, Michael y Christopher Tilley

1987a *Social Theory and Archaeology*. Polity Press, Cambridge.

1987b *Re-Constructing Archaeology. Theory and Practice*. Cambridge University Press, Cambridge.

Shepherd, Nick

2002 Disciplining Archaeology: The Invention of South African Prehistory, 1923-1953. *Kronos* 28:127-145.

2003 State of the Discipline: Science, Culture and Identity in South African Archaeology. *Journal of Southern African Studies* 29(4):823-844.

- 2007 Archaeology Dreaming; Postapartheid Urban Imaginaries and the Bones of the Prestwich Street Dead. *Journal of Social Archaeology* 7(1):3-28.
- 2013a Contemporary Archaeology in the Postcolony: Disciplinary Entrapments, Subaltern Epistemologies. En *The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World*, editado por Paul Graves-Brown, Rodney Harrison y Angela Piccini, pp. 425-436. Oxford University Press, Oxford.
- 2013b Ruin Memory: A Hauntology of Cape Town. In *Reclaiming Archaeology: Beyond the Tropes of Modernity*, editado por Alfredo González-Ruibal, pp. 233-243. Routledge, Londres.
- 2015 *The Mirror in the Ground: Archaeology, Photography and the Making of a Disciplinary Archive*. Centre for Curating the Archive, Ciudad del Cabo.
- Shepherd, Nick y Alejandro Haber
- 2011 What's up with wAc? Archaeology and "Engagement" in a Globalized World. *Public Archaeology* 10(2):96-115.
- 2014 The Hand of the Archaeologist: Historical Catastrophe, Regimes of Care, Excision, Relationality, Undisciplinarity. En *Courature*, editado por Carolyn Hamilton y Pippa Skotnes, pp. 111-123. Jacana Media, Ciudad del Cabo.
- Smith, Claire
- 2011 Errors of Fact and Errors of Representation: A Response to Shepherd and Haber's Critique of the World Archaeological Congress. *Public Archaeology* 10(4):223-234
- Trigger, Bruce
- 1989 *A History of Archaeological Thought*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ucko, Peter
- 1987 *Academic Freedom and Apartheid: The Story of the World Archaeological Congress*. Duckworth, Londres.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO, MEGAMINERÍA Y PATRIMONIALIZACIÓN EN ARGENTINA

Ivana Carina Jofré

*Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores*

Calle 13, Latinoamérica

INTRODUCCIÓN

ESTE ARTICULO EXPLORA LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE PATRIMONIO CULTURAL Y MEGAMINERÍA, minería transnacional o minería a gran escala, con el propósito de mostrar de qué manera la arqueología de contrato (ligada a los proyectos megamineros a gran escala) forma parte, a través de su participación activa en los procesos de patrimonialización de lugares de memoria, de una compleja red de actores hegemónicos que contribuyen a la institucionalización y naturalización de un modelo global neoextractivista de desarrollo (Alimonda 2011). La producción arqueológica es un discurso científico-técnico con impacto social y cultural, puesto al servicio de la megaminería, que enlaza seguridad, territorio y población (Antonelli 2012). A partir de estos antecedentes, mi trabajo aborda la intervención cultural de la megaminería en San Juan, en el centro-oeste cordillerano de Argentina; en esa provincia hoy operan 43 proyectos mineros en distintas fases de trabajo. El caso de estudio está centrado en el norte de la provincia de San Juan, en el departamento Iglesia. Allí se asientan los proyectos de extracción de oro y plata más grandes de la región: Veladero y el controversial proyecto minero transnacional Pascua-Lama (Pascua del lado chileno, en la provincia de Huasco; Lama del lado argentino, en San Juan), operados por la transnacional canadiense Barrick Gold Corporation.

PATRIMONIO, MINERÍA Y DIFERENCIA COLONIAL

Los conflictos económicos, ecológicos y culturales son parte de una dinámica relacionada, imposible de pensar por separado, cuya historia encuentra un punto de partida y de imbricación en la diferencia colonial (Escobar 2011). Los mitos de la universalidad del pensamiento europeo y de su superioridad cultural siguen teniendo vigencia y siguen siendo los rasgos sobresalientes del sistema mundial del colonialismo moderno en el siglo XXI (Dussel 1992; Escobar 2011). Los procesos de patrimonialización arqueológica a los que asiste la arqueología —como eficaz productora de narrativas patrimonialistas— se llevan a cabo en el campo de luchas hegemónicas por la instauración de significados que construyen una realidad sobre los pilares históricos de la colonialidad-modernidad. La manera como operan estas luchas hegemónicas responde a relaciones de escisión constitutiva entre particulares y universales (Laclau 2004). El compromiso colonial de la universalidad del discurso hegemónico del patrimonio es un “lugar vacío inerradicable”. No es una condición *a priori* o una lista de los particularismos compartidos que deben ser unificados; paradójicamente, es la ausencia de ese contenido compartido lo que constituye la promesa de universalidad. Los procesos de patrimonialización en el contexto transnacional megaminero no solo se desarrollan en luchas hegemónicas; también obedecen a conflictos de distribución cultural cuya raíz histórica se encuentra en el nacimiento del colonialismo / colonialidad a finales del siglo XV. La estrecha relación entre la minería y el orden cultural dominante representado en el patrimonio cultural es clara y evidente. Mientras el patrimonio es un producto de la modernidad que involucra la invención (o intervención) de la tradición para la consolidación de las comunidades imaginadas como nuevos Estados-nación, la minería está ligada a la emergencia, la constitución y los avatares políticos del colonialismo / colonialidad, contracara negada y oscura del orden moderno (Dussel 1992): “El desarrollo histórico de la minería moderna emerge, a la vez, *como producto y como medio de producción* clave del sistema de relaciones de poder que conforman y caracterizan el mundo moderno” (Machado 2011:141. Cursivas en el original).

Aunque la colonialidad es la supresión sistemática de culturas subordinadas (el encubrimiento del otro detrás de modelos creados por la experiencia moderno-colonial), también es condición de posibilidad en sus márgenes (Comaroff y Comaroff 2013). En la formación de conocimientos fronterizos (Mignolo 2003) existe el potencial de convertir los lugares de articulación en proyectos alternativos. Allí también es posible una pluralidad de configuraciones socioculturales (Escobar 2011). Esto es lo que representan los procesos de contrapatrimonialización de lugares de la memoria indígena en el contexto transnacional de la megaminería.

PATRIMONIO CULTURAL Y PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN

La noción de patrimonio cultural está ligada a la universalización de los Estados-nación modernos (Candau 2002) y a la expansión del sistema capitalista; por eso el estudio de sus significaciones sociales y culturales no puede desconocer el proceso de crecimiento de las sociedades actuales, de las nuevas configuraciones del Estado y del capital, de los modelos de desarrollo adoptados y de las historias locales y regionales. El patrimonio cultural es un producto de la modernidad que involucra la invención (o intervención) de la tradición (Hobsbawm y Ranger 2002). La “aparición del concepto de patrimonio es el resultado de la reflexividad moderna que redefine al pasado como marco de sentido” (Hernández i Martí 2010:629). La arqueología también participa en el estudio y análisis crítico de estos modos de producción cultural en los cuales se consolidan proyectos hegemónicos, se construyen identidades a medida y se definen alteridades necesarias para la reproducción del sistema.

Para Candau (2002:89-90), “el patrimonio es el producto de un trabajo de la memoria que, con el correr del tiempo y según criterios muy variables, selecciona elementos heredados del pasado para incluirlos en la categoría de los objetos patrimoniales”; el patrimonio “funciona eficazmente como un aparato ideológico de la memoria”. Candau distingue entre patrimonio y patrimonialización¹, entendiendo al segundo término como un “acto de memoria” que da lugar al primero. A través de la invención de las tradiciones y de la formación selectiva de la memoria, las sociedades modernas delimitan, física y simbólicamente, sus acervos culturales y establecen sus coordenadas de origen. Estas últimas sirven de fundamento histórico a las construcciones ideológicas del

1 Prats (2005:18-19) sostiene que los procesos de patrimonialización comprenden dos tipos de construcciones sociales o formas de representación del patrimonio, distintas pero complementarias. La primera, la *sacralidad de la externalidad cultural*, es “un mecanismo universal, intercultural, fácilmente reconocible, mediante el cual toda sociedad define un ideal cultural del mundo y de la existencia y de todo aquello que no cabe en él, o lo contradice”. La segunda, la *puesta en valor o activación patrimonial*, depende del Estado, pero está determinada por negociaciones entre distintos actores de la comunidad “en la medida en que existe en la sociedad una previa puesta en valor jerarquizada de determinados elementos patrimoniales, fruto normalmente de procesos identitarios, no necesariamente espontáneos, pero que pueden comportar un alto grado de espontaneidad y consenso previo” (Prats 2005:20). La activación patrimonial comporta un discurso; por eso es una representación hegemónica del patrimonio donde intervienen la ciencia y la tecnología como epistemologías modernizantes.

presente colectivo de un grupo étnico, región, provincia o nación. Las construcciones de patrimonios culturales significativos se actualizan en el seno de luchas hegemónicas por el sentido del pasado y sus referentes y ocurren en relación con la lucha política presente y con los proyectos de futuro de los colectivos sociales.

En mis investigaciones previas argumenté que la patrimonialización arqueológica es un acto de memoria en el cual se implican fuerzas de luchas políticas cuya finalidad es la producción de un patrimonio significativo para el Estado provincial y nacional, a través del cual determinados actores sociales pretenden conservar memorias particulares de su pasado (Jofré 2011, 2013). Me he referido a “los procesos de patrimonialización” como aquellas prácticas y mecanismos institucionalizados a través de los cuales se llevan a cabo estos actos de memoria. En el caso de la provincia de San Juan sostengo que la patrimonialización arqueológica no se desentiende de la realidad megaminería instalada por los aparatos y dispositivos de control estatal; en ese sentido, la arqueología de contrato es efecto, y no causa, de esta reconfiguración neocolonial del territorio y la memoria hecha patrimonio en el contexto transnacional. El patrimonio cultural (incluyendo el patrimonio arqueológico) participa en la formación y en el fortalecimiento de la cohesión colectiva de grupos, etnicidades e identidades nacionales, provinciales y regionales; al hacerlo suprime otros símbolos y significados y excluye las diferencias, reemplazándolas o reproduciéndolas en nombre de determinados proyectos nacionales y globales. La expansión del modelo neoextractivista representado por la megaminería en San Juan ofrece una oportunidad para comprender de qué manera estos dispositivos de control y disciplinamiento cultural obedecen a patrones estratégicos delineados por los objetivos del capital financiero global y dan forma a nuevas soberanías transnacionalizadas. Los procesos de patrimonialización arqueológica son una parte activa de este engranaje y se corresponden con un reordenamiento general de la producción cultural glocal, con sus discursos modernizantes y sus herramientas de inserción en el sistema-mundo capitalista a través de la producción de mercancías negociables.

MEGAMINERÍA EN ARGENTINA

La megaminería es un modelo de modernización, una trayectoria normativa de desarrollo del capitalismo flexible apoyada en las industrias extractivas de minerales alojados en los reservorios naturales de las regiones periféricas a las metrópolis del capitalismo. Este nuevo tipo de minería se realiza mediante procesos tecnológicos y químicos nuevos, diferentes de los utilizados previamente en la minería subterránea tradicional conocida como minería de galería o socavón, donde el metal se hallaba concentrado en

forma de vetas y se extraía mediante procedimientos manuales. Ahora los metales son escasos en el mundo. Los reservorios existentes solo contienen metales dispersos en la roca (grandes cerros y montañas) en forma de pequeñas partículas que deben ser separadas del mineral que lo contiene (se los llama minerales de baja ley). Para separar el oro de la roca o mineral se dinamitan montañas enteras, reduciéndolas a pequeñas rocas que luego son volcadas en una sopa química para lixiviar (separar) el metal de la roca. Este proceso químico se denomina “lixiviación cianurada”. Estos nuevos proyectos mineros utilizan tecnologías de alto impacto ambiental porque producen una fuerte depredación de los paisajes explotados; producen cuantiosos pasivos ambientales que contienen sustancias químicas altamente tóxicas y persistentes en el entorno natural (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio) y gravemente dañinas para la salud humana, animal y vegetal; y porque requieren enormes cantidades de agua potable para disolver o separar (lixiviar en diques de cianuro a cielo abierto) los metales contenidos en la roca; y necesitan suficiente “energía eléctrica” para poner en funcionamiento sus faraónicas obras de infraestructura. Estos procedimientos fueron prohibidos en varios lugares del mundo, entre ellos República Checa (2000); Nueva Gales del Sur, en Australia (2000); Alemania (2002); algunos condados del estado de Colorado, en Estados Unidos; el estado de Montana, en el mismo país (1998); y Costa Rica (2002) (Colectivo Voces en Alerta 2011).

La megaminería está destinada a la extracción de minerales para la producción de *commodities* (productos primarios) como oro, cobre y plata. En Argentina, especialmente en la provincia de San Juan, los proyectos megamineros se ubican en el cordón andino, a grandes alturas sobre la línea de glaciares, justo donde se originan los cursos de agua dulce que alimentan las cuencas habitadas por las comunidades humanas de la región. A partir del alto impacto previsto por estos proyectos, sobre todo a raíz de un proyecto de Barrick Gold por el cual la empresa pretendía “reubicar glaciares” en la línea de frontera cordillerana, debió expedirse una ley específica (resistida por las empresas y buena parte del sector político) para la protección de glaciares y ambientes periglaciares (Ley Nacional 26.639). Los movimientos sociales han denunciado que estos megaproyectos mineros utilizan cantidades extraordinarias de agua dulce y de energía que superan los límites de consumo de las poblaciones locales (Svampa y Antonelli 2009; Colectivo Voces de Alerta 2011). El alto consumo de agua por parte de estos proyectos en Chile y Argentina ha disminuido la disponibilidad de agua para consumo humano y riego agrícola en vastas regiones de ambiente desértico y semidesértico en estos países; también ha desestabilizado las economías sociales de base agrícola y ganadera, lo que llevó en el 2014 a la “declaración oficial de la emergencia hídrica en la provincia de San Juan”.

SAN JUAN: CAPITAL DE LA MINERÍA ARGENTINA

En la última década la provincia de San Juan reorientó su plan de gobierno hacia un modelo neextractivista promocionado como “La segunda reconstrucción de San Juan”. El plan propuso llevar a cabo la reconstrucción del Estado provincial y de la producción y el trabajo, propiciando el desarrollo humano. Los pilares básicos de la estrategia de crecimiento son cuatro orientaciones económicas: la minería, el complejo agroindustrial, el turismo y la salida al Pacífico a partir de la integración con Chile. Esto significó un gran trabajo de construcción de infraestructura y políticas públicas orientadas por este plan estratégico de desarrollo, con la intervención del sector científico y tecnológico.

En este contexto político-económico la minería actúa a través distintos mecanismos socioculturales. Su propósito es consolidar “la realidad megaminera” como algo inherente a la subjetividad de la identidad provincial y convertirla en un elemento constitutivo de la identidad estatal y ciudadana, asegurando su aceptación social y su perdurabilidad como modelo de desarrollo económico deseable. Los dispositivos y mecanismos comunicacionales controlados (directa e indirectamente) por el Estado provincial durante esta última década estuvieron abocados a la tarea de lograr un efecto mediático multiplicador del mensaje político minero en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la sociedad local y con apertura a los medios nacionales. La estrategia comunicacional implicó un ambicioso trabajo discursivo, desde costosas publicidades en prensa gráfica, cines y televisión, pasando por la creación de suplementos gráficos y programas radiales y televisivos específicamente dedicados a la actividad, hasta el patrocinio de muestras museográficas, artísticas, teatro y cuanto evento cultural, social, económico, deportivo, recreativo, de salud, se realice en San Juan. Una estrategia reciente del Gobierno ha sido la contratación de artistas (actores, presentadores mediáticos, directores de cine y televisión, músicos) como voceros autorizados para promocionar y multiplicar el mensaje minero de la provincia de San Juan, con la excusa de lograr una mayor rentabilidad en el sector turístico cultural local.

Cambio cultural promovido por la responsabilidad social empresarial y el rol de las ONG y las universidades en “el nuevo diálogo minero”

Casi una década después de la aparición de las “leyes de primera generación”, que enmarcan hasta hoy los beneficios otorgados por el Estado a las empresas transnacionales, estas últimas reforzaron su lenguaje comunicacional invocando el principio jurídico de responsabilidad ante terceros (compromiso de no daño) y su compromiso filantrópico

corporativo con las necesidades y deseos de las comunidades bajo explotación para “la buena gobernanza” (Antonelli 2009). El concepto propagandístico empresarial mine-ro difundido como responsabilidad social empresarial (RSE) forma parte del declarado “cambio cultural” propuesto por las empresas “para responder, proactivamente, a la más que negativa reputación de la industria en el mundo y a la creciente conflictividad y resistencia a esta explotación” (Antonelli 2009:77). Esto se desprende del informe del proyecto “Minería, minerales y desarrollo sustentable” (MMDS), realizado por el Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo y promovido por el International Council on Minerals and Metals (ICMM). En el informe se reconoce a la megaminería como una actividad perjudicial para el medio ambiente y se proponen cambios discursivos para referirse a estas desventajas como “desafíos” de la actividad. Argentina, a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), adhirió a estas nuevas políticas de gestión minera al sumarse al ICMM después de su creación en el 2001. Para implementar estos nuevos diseños político-sociales estratégicos, la corporación minera internacional recurrió a un conjunto de ONG para fortalecer el modelo democrático requerido para la sustentabilidad de la minería. En esta red internacional de organizaciones convocadas se encuentra, por ejemplo, el Grupo de Diálogo Latinoamericano, con sedes de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Estas organizaciones contrata-das (entre las cuales también se incluyen universidades nacionales y privadas como la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Católica Argentina) operan en el ámbito de la investigación, haciendo estudios socioantropológicos de los actores que van a integrar en el nuevo diálogo minero, identificando y utilizando estratégicamente sus fortalezas y debilidades como información clave en esta nueva “construcción de consen-sos” que apelan a los discursos de la diversidad multicultural y a la interculturalidad como principio práctico facilitador de las intervenciones sociocomunitarias de la nueva minería. Este “diálogo” apropia los discursos de los derechos humanos en favor de los consensos legitimadores de la megaminería y en el orden democrático vigente a escala global. Quedar fuera del “diálogo megaminero” representa, entonces, un desacato al or-den democrático de la sociedad de derecho. Sobre esta base se aprobaron algunas leyes contrarias a los derechos ciudadanos reconocidos constitucionalmente en la Argentina, entre ellas la Ley Antiterrorista Argentina sancionada en el 2007 y modificada en el 2011. Esta ley fue puesta en vigencia por recomendaciones del Grupo de Acción Finan-ciera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y utilizada por el Estado-nación argentino y sus provincias como herramienta jurídica para legalizar las represiones a los reclamos de los movimientos sociales y étnicos movilizadas contra los proyectos extrac-tivistas / neocoloniales, cobrándose a la fecha ya varios muertos y procesados.

La nueva política empresarial global de gobernanza reconfigura el rol de los conocimientos disciplinares de las ciencias humanas y sociales y ofrece a los profesionales de la antropología, de la arqueología, de la sociología y de las ciencias políticas nuevos locus en las ONG y en las universidades donde prestar su asistencia. En este sentido, quiero enmarcar mis interpretaciones del rol político que adquiere la arqueología de contrato involucrada en los procesos de patrimonialización en el contexto megaminero de Argentina y Suramérica.

ROL DE LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO EN LOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CONTEXTO MEGAMINERO TRANSNACIONAL. EL CASO DE SAN JUAN

Los procesos de patrimonialización arqueológica producidos en el contexto megaminero de Argentina fueron configurados por las condiciones político-económicas descritas, pero, al mismo tiempo y de manera recursiva, también ayudaron a configurar nuevos escenarios, no solo en el campo de las contrataciones de profesionales arqueólogos y antropólogos; además, reordenaron el panorama administrativo patrimonial de la gestión estatal y el rol de las universidades como generadoras de conocimiento científico y tecnológico y contribuyeron a la creación de nuevos estándares y cánones de legitimación del modelo desarrollista neoextractivo para la profundización de la dinámica de desposesión y saqueo de territorios y vastas poblaciones. En San Juan este escenario puede ser descrito de la siguiente manera:

a) En los últimos diez años se ha dado una notable reducción de proyectos de investigación arqueológica independientes, con un concomitante estancamiento en la producción científica arqueológica a escala local; esto se condice con los parámetros históricos de aislamiento académico-científico que registra la provincia en este campo de conocimiento disciplinar desde la década de los sesenta.

b) Al mismo tiempo han aumentado los estudios de impacto arqueológico (EIA) en proyectos megamineros, compuestos por inventarios arqueológicos e informes técnicos de tareas de rescate sin solución de continuidad. Generalmente, se trata de trabajos inéditos, las más de las veces con un marco teórico-metodológico de investigación que adopta una narrativa científica conservacionista y, en apariencia, despolitizada (Jofré *et al.* 2011). Las valoraciones de los informes están construidas solo en función de los intereses de investigación de los arqueólogos; este es el único parámetro de interpretación que se emplea en estos estudios, excluyendo de plano las autonarraciones de las comu-

nidades del área afectada, sus historias locales y sus modos particulares de entender la historia y producir memorias.

c) Los EIA son evaluados con muy bajos estándares de calidad científica para favorecer procesos de evaluación estatal flexibles y favorables a la liberación de áreas para la explotación minera.

d) Es notable la formación y el fortalecimiento de pequeños grupos corporativos de investigadores arqueólogos (locales y mayormente externos), favorecidos por estas políticas de Estado y en razón de sus contrataciones con empresas privadas. Esta situación favorece las rivalidades y competencias negativas en el campo del trabajo científico, cada vez más tendiente a la profesionalización de las arqueologías funcionales a los modelos de desarrollo vigentes. En la provincia de San Juan, la arqueología de contrato asociada a los proyectos megamineros suele emplear a los profesionales de la arqueología que, ideológicamente, se posicionan como “opositores a los procesos de reemergencia indígena” y a “los movimientos sociales ecologistas antimineros”. Dado que en la provincia hay muy escasos arqueólogos y antropólogos —de título o profesión—, es cada vez más común la contratación de profesionales externos recomendados por la cartera de contactos de las empresas consultoras o de las propias empresas mineras. Por ese motivo, los EIA realizados para proyectos megamineros en San Juan avalan y promueven teorías antropológico-arqueológicas de discontinuidad étnica y extinción aborígen, antaño al servicio de la política de exterminio indígena operada por el Estado-nación a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hoy en día estas narrativas científicas son espacios retóricos fundamentales para legitimar los nuevos modos de expropiación que representa el modelo neoextractivista megaminero.

e) Como derivado de la forzada ausencia de proyectos e investigaciones arqueológicas independientes, o no, ligados a la arqueología de contrato, existe un notable acrecentamiento de la *ficción proteccionista* que pone a las empresas megamineras en el papel de mecenas protectoras del patrimonio arqueológico local (Jofré, Biasatti y González 2010; Jofré, Galimberti y Biasatti 2010). Los medios de comunicación propagan noticias que ligan a las empresas y al Estado provincial en prácticas de activación patrimonial en lugares de memoria dentro y fuera de las zonas de afección minera o por medio de actividades de formación en convenio con instituciones educativas locales. Esto es parte del programa provincial de “desarrollo sustentable” que presenta a la “minería como actividad sustentable” y a las “empresas como socialmente responsables”.

f) Las situaciones anteriores son efecto, sobre todo, de la autoexclusión del Estado de su rol protector del patrimonio provincial (impuesto a través de su aparato jurídico, Ley 6.801). El Estado provincial delega en las empresas la responsabilidad sobre los costos

económicos de las activaciones patrimoniales de lugares de memoria y de medidas de conservación implicadas; así, las empresas ocupan el lugar del Estado metarregulador (Santos 2010) que controla y regula las intervenciones patrimoniales del sector privado. Un ejemplo es el *Manual de patrimonio cultural* dirigido a la educación primaria y media, publicado en el 2011 por la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan. Este manual del “patrimonio sanjuanino” fue financiado por la empresa Barrick Gold a pedido del organismo del Estado y expone los significados construidos en estos procesos de patrimonialización informados por los objetivos y las prácticas (responsabilidad social empresaria) del capital transnacional minero.

g) Sucede una flagrante *privatización minera* de los lugares de memoria patrimonializados, a través de los inventarios y de intervenciones realizadas por los EIA en proyectos megamineros. Los lugares de memoria convertidos en sitios arqueológicos por medio de la narrativa científica arqueológica ofrecida por estos informes, ingresan a la lista de bienes muebles e inmuebles patrimoniales del Estado; no obstante, el acceso físico a estos no es de orden público y está restringido solo a los empleados de las empresas. Las gestiones de permisos para visitar estos lugares intervenidos deben hacerse por medio de contactos con las empresas o el Gobierno provincial. Esta “privatización minera” de los lugares de memoria (convertidos en patrimonio cultural provincial y nacional) responde al hecho de que se encuentran dentro de pedimentos mineros que fueron cedidos en arrendamientos por años o décadas por el Estado a estas empresas (según el Código Minero) y porque, en algunos casos, como sucede en los proyectos favorecidos por el Pacto Minero Binacional entre Chile y Argentina, los Estados concedieron la soberanía de estos territorios nacionales en altas cumbres cordilleranas a las empresas mineras transnacionales. Del lado argentino, los proyectos Pascua-Lama y El Pachón, operados por Barrick Gold Corporation y Glencore Xtrata Copper, respectivamente, tienen plena soberanía territorial sobre las áreas que explotan².

h) A pesar de que las empresas mineras y el Estado se empeñan en remarcar su política de transparencia en la comunicación de sus actividades, el acceso a los informes elaborados por los profesionales contratados para la confección de EIA queda limitado a un restringido circuito burocrático; ocasionalmente, el acceso a esta información se niega por considerarse privativa y confidencial de las empresas. Los informes de EIA presentados por las empresas megamineras se publican en el sitio web del Ministerio de Minería de San Juan, así como también las resoluciones de aprobación de las Declaraciones de

2 Véase <http://www.conflictosmineros.net/contenidos/9/7236>

Impacto Ambiental (DIA); los estudios arqueológicos suelen integrar estos informes publicados, pero de manera editada. Los informes completos presentados por las empresas consultoras contratadas por las empresas megaminerías no son publicados y no son accesibles. Las solicitudes de estos informes en las administraciones de control estatal provincial usualmente se apilan en cajones y rara vez son contestadas. Las cláusulas de confidencialidad contravienen las legislaciones provinciales y nacionales que declaran al patrimonio arqueológico bien de interés común (cfr. Jofré, Galimberti y Biasatti 2010).

j) En la provincia de San Juan no se implementan las declaraciones internacionales de derechos humanos para pueblos originarios, ratificadas por Argentina, y que establecen el respeto a las diversidades culturales y la consulta previa, libre e informada como condición necesaria antes de la ejecución de estos proyectos. Los mecanismos de consulta a las comunidades locales, indígenas o no indígenas, solo se realizan al comienzo de los proyectos y en ningún caso cumplen el requisito que establece el carácter *previo, libre e informado* (cfr. Claps 2011). Los EIA en la provincia avalan esta situación puesto que no tienen en cuenta, y niegan, las objetivaciones nativas, los lugares de memoria indígena y los paisajes culturales activamente presentes en las construcciones de las subjetividades locales, en torno a las cuales conviven miradas del mundo diferentes de las construcciones modernas propias del aparato científico-técnico desplegado para su estudio y análisis.

h) Los informes de los EIA alimentan la ilusión de que es posible controlar y supervisar los impactos ambientales-socioculturales de estas monstruosas obras extractivas en la cordillera (Colectivo Voces en Alerta 2011; Jofré, Galimberti y Biasatti 2010). Alimentan la fantasía de que los estudios científicos y el control estatal sobre estas obras a gran escala en sus distintas fases (exploración, construcción, explotación y cierre de la mina) están orientados a cuidar los intereses de la ciudadanía y no los de las empresas que, a menudo, por no decir siempre, coinciden con los intereses estatales, porque el objetivo generalizado de los actuales gobiernos en Suramérica es adoptar un modelo de desarrollo neextractivista y reconvertir las economías locales a medida y deseo de la economía global del capital financiero. La ciencia y la tecnología están al servicio de este nuevo proyecto de modernización / neocolonial. Así lo ha demostrado el rol desempeñado por las universidades nacionales y privadas y las agencias de promoción científica y tecnológica a través de las discusiones suscitadas, por ejemplo, por la aceptación de los fondos mineros de YMAD³ repartidos a las universidades nacionales.

3 Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), explotados desde 1994 por Minera Alumbraera, un proyecto extractivo en el que participan varias multinacionales.

En este contexto sociopolítico, el rol de la arqueología de contrato (dentro o fuera de las universidades) en Argentina no puede ser otro que liberar las áreas de interés para las explotaciones. Las empresas y las políticas de Estado no dejan margen a otra posibilidad. Las contrataciones que pudieran hacer el Estado-nación y las universidades siguen la misma lógica de interés en favor de las empresas (a las cuales hay que “facilitarles” todos los medios para que inviertan capital en nuestro país); el trabajo arqueológico queda reducido a un “trabajo de rescate apresurado y bajo extrema presión política”. En el mejor de los casos una intervención arqueológica podrá evitar, por poco tiempo, la destrucción de sitios y lugares, atenuando impactos irremediables en la medida de sus posibilidades físicas, metodológicas y políticas; en cualquiera de estas posibilidades, sin embargo, contribuye al modelo de desarrollo neoextractivista, aportándole las narrativas científicas necesarias para la refinación de sus proyectos de intervención cultural. El arqueólogo es contratado para favorecer los proyectos megamineros para que puedan obtener las aprobaciones ambientales necesarias y desarrollar sus planes de obras de acuerdo a una agenda generalmente contraria a la conservación arqueológica patrimonial. Los restos arqueológicos en un lugar sujeto a obras son un contratiempo indeseable para las empresas y para el Estado, su socio. Es usual que los directivos de obras y proyectos tomen decisiones sin consultar a los especialistas o que estos sean contradichos por los imperativos de las obras. En San Juan es frecuente que los EIA se realicen cuando las obras ya están en marcha, lo cual agrega más presión a las responsabilidades asumidas por los profesionales contratados y evidencia la flexibilidad de la reglamentación vigente (Jofré, Galimberti y Biasatti 2010).

Narrativas de aboriginalidad de las comunidades del norte de San Juan. Pedidos de restitución del Joven de la Capacocha del cerro El Toro

Las narrativas de aboriginalidad son producciones discursivas identificadas con construcciones de etnicidad que, por lo general, impugnan la territorialidad y legitimidad de los Estados-nación, sus modelos de inclusión y homogeneización cultural y sus representaciones de identidad (Briones 2005; Escolar 2007). La aboriginalidad, quizás más que otras formas de etnicidad, se transforma en función de los cambios que ocurren en las comunidades imaginadas nacionales o en los preceptos del nacionalismo y las interpelaciones estatales (Escolar 2007). En el caso de las comunidades del norte de San Juan, en el departamento Iglesia, la producción y la circulación de narrativas de aboriginalidad discurren en una compleja red de relaciones sociales y políticas, por fuera y por dentro de comunidades autoidentificadas o marcadas por otros como indígenas, y no

siempre comprenden el pedido expreso de revisibilización aborigen de la población. Las narrativas de aboriginalidad producidas por estas comunidades no responden, necesariamente, a la interpelación de las políticas públicas actuales de la diversidad cultural, aunque sí agencian los sentidos y símbolos de aboriginalidad del “territorio”, de los “lugares de memoria” que conforman ese territorio como espacio donde lo colectivo comunitario puede tener otra articulación posible en la convergencia de intereses por la “defensa de lo local” manifestada por diferentes sectores, blancos y “no blancos”⁴, que conforman la pluralidad de la población actual. En el norte de San Juan algunos “lugares de memoria” funcionan como localizaciones significativas de la memoria colectiva actualizada en narrativas de aboriginalidad que plantean la continuidad de lo indígena en el presente, disputando los significados y referentes de la patrimonialización arqueológica. En 1964 andinistas, periodistas y arqueólogos exhumaron el cuerpo congelado de un joven de unos veintidós años ofrendado en el ritual incaico de la *capacocha*⁵ en uno de los cerros más altos de la zona cordillerana, el cerro El Toro o de San Crispín (al pie de los baños termales del Chollay, de más de 6.400 metros de altura, en el extremo noroeste del departamento Iglesia). Fue un evento sin precedentes que logró instalar uno de los imaginarios científicos más poderosos del discurso político provincial, el del “indio muerto convertido en patrimonio del Estado” (Jofré *et al.* 2011; Jofré, 2012, 2013).

A comienzos del 2000, interpelados por las demandas del pueblo warpe, producidas en un contexto de reivindicaciones étnicas, alumnos y docentes de una escuela rural en la localidad de Malimán, al norte del departamento Iglesia, enviaron una carta al gobernador de la provincia producto de un trabajo de investigación escolar sobre la temática (Jofré *et al.* 2011; Jofré 2013), apoyada por los concejales. Los alumnos y los maestros de la escuela de Malimán eligieron narrar la memoria colectiva desde un punto de vista dialógico para exigir “la restitución del cuerpo del joven”⁶ a su lugar de origen, pedido

4 Al emplear el término hago alusión a la definición de Segato (2007) del cuerpo “no blanco” como aquel que posee la marca del indio o del negro, una marca de desposesión, la huella de su subordinación.

5 La *capacocha* era uno de los rituales públicos incaicos más importantes. En este participaban los súbditos de las cuatro partes del imperio para dar ofrendas a las *huacas*. En un momento de la historia del Tawantisuyu las *capacochas* incorporaron sacrificios humanos.

6 Véase el documental *Hijos de la montaña*, dirigido por el realizador sanjuanino Mario Bertazzo, con asesoramiento y asistencia de dirección del Colectivo de Arqueología Cayana (Jofré *et al.* 2011), https://www.youtube.com/watch?v=_44PhWHN9RQ

que hicieron extensivo a “todas las culturas y momias del Departamento Iglesia”. Los alumnos recrearon en el texto un diálogo imaginario con “la momia” que yacía en la heladera del museo en Rawson; también llevaron a cabo su teatralización en una transmisión radial de un programa emitido localmente. Ese diálogo significativo expresa el proceso de contrapatrimonialización activado en la devolución de una identidad al sujeto museificado (cosificado). El pedido de regreso a su lugar de entierro ritual, en el cerro El Toro (hoy dentro del pedimento minero concedido a Barrick Gold), intenta establecer un nexo de cohabitación y copresencia en un mismo tiempo-espacio entre los niños y el joven momificado, una condición que permite reconocer este proceso como una narrativa posabismal (Santos 2010). El diálogo es el espacio contemporáneo en el que transcurre el encuentro porque los sujetos pronuncian el mundo transformándolo (Freire 2002) y disipan la alterización en la que se funda la patrimonialización del cuerpo del indio. La espacialización de la memoria, su territorialización efectuada en la constitución de los lugares de la memoria, habilita un espacio-tiempo de convergencia contemporánea de las identidades del presente y del pasado. Allí las prácticas y los agentes se identifican con un territorio común.

A partir del 2006 los docentes y los alumnos de la escuela realizaron, con el Colectivo de Arqueología Cayana, distintas actividades orientadas a fortalecer este pedido en el ámbito social local, nacional e internacional⁷. La demanda por la restitución del joven del cerro El Toro fue incluida en uno de los ocho puntos del petitorio presentado por la comunidad indígena warpe del territorio del Cuyum, en colaboración y con el aval de arqueólogos y organizaciones sociales e indígenas, a la Universidad Nacional de San Juan (Jofré 2012, 2014a, 2014b). El petitorio solicita la aplicación de la Ley Nacional 25.517, recientemente reglamentada, que protege y regula el derecho de los pueblos originarios a demandar la restitución de cuerpos humanos considerados antepasados y ancestros. Este documento se afirma sobre una demanda por la restitución de los cuerpos al territorio, evadiendo la posibilidad de que el Estado, a través de la ciencia, ejecute estas restituciones de cuerpos humanos como una manera velada de intercambiar “cuerpos por territorios”. La comunidad warpe afirma así que, desde la cosmovisión

7 El reclamo por la restitución del cuerpo del joven del cerro El Toro fue avalado por el voto mayoritario de los arqueólogos y antropólogos convocados en el Plenario de la IV Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur en el 2007 en Catamarca. Un año después este apoyo fue ratificado en el Plenario del IV Congreso Mundial de Arqueología celebrado en Dublín, Irlanda.

originaria, el territorio entiende una visión abarcativa de la tierra y de los seres que en ella habitan: “Somos territorio, el territorio lo es todo, el territorio es nuestra vida”.

En muchas de nuestras conversaciones los pobladores de Malimán y Colanguil contaron la historia de expropiación, dominación e injusticia de los pueblos indígenas en el presente; desde esas narrativas se identificaron con la marca de subordinación de estos cuerpos. Ellos también me interpelaron como “alguien con saber y por lo tanto con poder” para interceder ante quienes tienen el poder de cambiar las condiciones materiales de existencia de sus comunidades, presuntamente destinadas a desaparecer. En esta contrapatrimonialización de los lugares de memoria estos pueblos se resisten a desaparecer, a ser otro monumento arqueológico de discontinuidad. En su pronunciamiento están produciendo memorias de insubordinación. Estos lugares de memoria indígena, lugares “dominados” (Nora 1984), expropiados / apropiados como mercancías para la explotación minera, están siendo insubordinados, es decir, están siendo construidos como memorias localizadas de insubordinación y en ese acto performativo están agenciando territorios.

Como corolario de estas memorias de insubordinación producidas por las narrativas de aboriginalidad, en el 2011 las comunidades diaguitas del valle del Huasco, en Chile, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el proyecto Pascua Lama de la empresa Barrick Gold, por graves daños ambientales en territorios indígenas ancestrales, entre los cuales se incluyen la afectación de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, la contaminación de cursos de agua y la afectación de lugares de memoria considerados sagrados. Entre esos lugares reconocidos por las comunidades diaguitas como sitios sagrados se encuentra el santuario de altura del cerro El Toro (Yáñez y Molina 2012). En el 2012 la Corte de Copiapó acogió la demanda presentada por cinco comunidades diaguitas contra este proyecto megaminero, hecho que derivó, a comienzos del 2013, en una orden judicial de paralización total de las obras de construcción del proyecto Pascua Lama del lado chileno. Este hecho también afectó el proyecto del lado argentino (en el departamento Iglesia), hasta la actualidad. Estos hechos significaron un fuerte revés en las inversiones de la empresa minera transnacional en la región y expusieron públicamente —por primera vez de manera masiva— la contaminación y los atropellos de estos proyectos; también demostraron la fuerza potencial de contrapeso que representan las comunidades y organizaciones indígenas de la región. Por eso las empresas mineras emprendieron un fuerte trabajo de reconversión y apropiación de estas comunidades y de sus líderes y referentes, a fin de lograr la licencia social para sus emprendimientos, sin prescindir, por supuesto, de la ayuda de abogados y antropólogos. Del lado argentino, en la provincia de San Juan, la paralización de las

obras del megaproyecto minero Pascua Lama, originada por la orden judicial de la Corte de Copiapó en Chile, sumada a la mala racha financiera de la Barrick Gold en los últimos años, debido a malos manejos internos de la empresa y a la baja del oro en la bolsa internacional de valores, significó el despido de más de dos mil trabajadores, contratados directa o indirectamente por la empresa, y la desestabilización político-social de una economía reprimarizada fuertemente dependiente del mercado financiero global. Hoy la “realidad megaminera” deja ver los hilos detrás de la marioneta y las promesas del oro se desvanecen entre las fantasías del desarrollo moderno extractivista.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo (2012-2015) *Territorios en disputa: procesos de patrimonialización y contrapatrimonialización de lugares de memoria indígena en el Norte de San Juan*, Código 02/H264, dirigido por la autora y financiado y avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Catamarca; también dentro del Proyecto de Beca de Investigación Posdoctoral (2013-2015), *Procesos de patrimonialización y contrapatrimonialización de lugares de memoria indígena en proyectos megamineros transnacionales del norte de San Juan*, desarrollado por la autora con ayuda del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la Argentina.

REFERENCIAS CITADAS

Alimonda, Héctor

2011 La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana. En *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, editado por Héctor Alimonda, pp. 21-58. Clacso, Buenos Aires.

Antonelli, Mirta

2009 Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”. En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, pp. 51-101. Biblos, Buenos Aires.

Briones, Claudia

2005 Formaciones de alteridad, contextos globales, procesos nacionales y provinciales. En *Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*, editado por Claudia Briones, pp. 11-43. Antropofagia, Buenos Aires.

Candau, Joël

2002 *Antropología de la memoria*. Nueva Visión, Buenos Aires.

Claps, Luis

2011 Información, participación y mineras transnacionales en la meseta: una oportunidad perdida. En *El regreso de los muertos y las promesas del oro: patrimonio arqueológico en conflicto*, editado por Carina Jofré, pp. 195-205. Encuentro-Editorial Brujas, Córdoba.

Colectivo Voces de Alerta

2011 *15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero*, elaborado por Horacio Machado, Maristella Svampa, Enrique Viale, Marcelo Giraud, Lucrecia Wagner, Mirta Antonelli, Norma Giarraca y Miguel Teubal, con aportes de Javier Rodríguez Pardo y Darío Aranda. El Colectivo; Herramienta Ediciones, Buenos Aires.

Comaroff, Jean y John Comaroff

2013 *Teoría desde el sur. O cómo los países centrales evolucionan hacia África*. Siglo XXI, Buenos Aires.

2010 *Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal*. Clacso-Prometeo, Buenos Aires.

Dussel, Enrique

1992 *1492. El encubrimiento del otro*. Antropos, Bogotá.

Escobar, Arturo

2011 Ecología política de la globalización y la diferencia. En *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, editado por Héctor Alimonda, pp. 61-92. Clacso, Buenos Aires.

Escolar, Diego

2007 *Los dones étnicos de la nación. Identidades huarpes y modos de producción de soberanía en Argentina*. Prometeo, Buenos Aires.

Fabian, Johannes

1983 *Time and the Other. How Anthropology Makes its Object*. Columbia University Press, Nueva York.

Freire, Paulo

2002 *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI, Buenos Aires.

Hernández i Martí, Gil-Manuel

2010 La memoria oscura. El patrimonio cultural y su sombra. En *VI Congreso Internacional "Restaurar la memoria": La gestión del patrimonio: hacia un planteamiento sostenible*, tomo 2, editado por Javier Rivera, pp. 629-637. Junta de Castilla-León, Valladolid.

Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (editores)

2002 *La invención de la tradición*. Crítica, Barcelona.

Jofré, Ivana Carina, Soledad Biasatti y Gabriela González

- 2010 Los fantasmas capitalistas de una arqueología de los muertos y desaparecidos. En *El regreso de los muertos y las promesas del oro: Patrimonio arqueológico en conflicto*, editado por Carina Jofré, pp. 169-193. Encuentro; Editorial Brujas, Córdoba.

Jofré, Ivana Carina, Soledad Galimberti y Soledad Biasatti

- 2010 Contra-informe de los estudios y evaluaciones de impactos arqueológicos de proyectos mega-mineros ubicados en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, República Argentina. En *El regreso de los muertos y las promesas del oro: Patrimonio arqueológico en conflicto*, editado por Carina Jofré, pp. 207-241. Encuentro; Editorial Brujas, Córdoba.

Jofré, Ivana Carina, Soledad Biasatti, María Belén Guirado, Soledad Llovera y Bruno Rosignoli

- 2011 Proyecto documental "Hijos de la montaña". Ponencia presentada en el X Congreso Argentino de Antropología Social, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Jofré, Ivana Carina

- 2011 Proyecto de beca posdoctoral (2013-2015): "Procesos de patrimonialización y contra-patrimonialización de lugares de memoria indígena en proyectos mega-mineros transnacionales del Norte de San Juan". Estudios Posdoctorales realizados con ayuda del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet).
- 2012 Territorios y cuerpos en disputa: reclamos por la restitución y respeto de los cuerpos de nuestros ancestros. Ponencia presentada en el VI Encuentro de Investigadores en Ciencias Sociales. Democracia y Desarrollo en América Latina. Debates y desafíos del siglo XXI. Universidad Nacional de San Juan, San Juan.
- 2013 Los pájaros nocturnos de la historia. Una arqueología indígena de las sociedades capayanas del norte de la provincia de San Juan. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.
- 2014a Social Movements and Archaeology. En *Encyclopedia of Global Archaeology*, editado por Claire Smith, pp. 6753-6761. Springer, Nueva York.
- 2014b The Mark of the Indian Still Inhabits Our Body. En *After Ethics: Ancestral Voices and Postdisciplinary Worlds in Archaeology*, editado por Nick Shepherd y Alejandro Haber, pp. 55-78. Springer, Nueva York.

Laclau, Ernesto

- 2004 Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas. En *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*, editado por Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, pp. 49-93. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Machado, Horacio

- 2011 El auge de la minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo. En *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, editado por Héctor Alimonda, pp. 135-179. Clacso, Buenos Aires.

Mignolo, Walter

2003 *Historias locales, diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Akal, Madrid.

Nora, Pierre

1984 *Les lieux de mémoire I. La République*. Gallimard, París.

Prats, Llorenç

1997 *Antropología y patrimonio*. Ariel, Madrid.

2005 Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de Antropología Social* 21:17-35.

Santos, Boaventura de Sousa

1998 *La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*. Universidad Nacional-ILSA, Bogotá.

Segato, Rita Laura

2007 *La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad*. Prometeo, Buenos Aires.

Svampa, Maristella y Mirta Antonelli

2009 Hacia una discusión de la megaminería a cielo abierto. En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, pp. 15-27. Biblos, Buenos Aires.

Svampa, Maristella, Lorena Bottaro y Marian Sola

2009 La problemática de minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes. En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, pp. 29-50. Biblos, Buenos Aires.

Trouillot, Michel-Rolph

1995 *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Beacon Press, Boston.

Yáñez, Nancy y Raúl Molina

2012 *La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile*. LOM, Santiago.

EL MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL Y LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO EN EL NORTE DE CHILE

Patricia Ayala

EN CHILE SON ESCASOS LOS TRABAJOS QUE EXPLOREN CÓMO Y A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMOS LA arqueología ha participado en la construcción del multiculturalismo; también son contadas las investigaciones sobre las repercusiones de la política de la diferencia en las prácticas y discursos arqueológicos (Ayala 2011). Aunque se ha escrito sobre las orientaciones teórico-metodológicas de la arqueología en este contexto político (Troncoso *et al.* 2008; Salazar *et al.* 2012), aún no se ha realizado un trabajo reflexivo sobre cómo una de las expresiones de la arqueología multicultural, la arqueología de contrato (también llamada arqueología de impacto ambiental), adopta y reproduce la racionalidad neoliberal. En efecto, desde su aparición en los noventa se ha debatido sobre los aspectos legales y metodológicos de la arqueología de contrato, así como sobre sus ventajas y limitaciones, en desmedro de reflexiones referidas a sus aspectos éticos, políticos y sociales. Son excepcionales las discusiones sobre sus vínculos con la empresa privada y sobre sus diferencias con la arqueología académica (Cáceres 1999; González 2005; Carrasco 2007); el estudio de Salazar (2010) sobre la relación entre comunidades indígenas, minería y arqueología; y algunas menciones preliminares sobre los vínculos entre arqueología de contrato y neoliberalismo (Ayala y Vilches 2012; Salazar *et al.* 2012).

En este artículo pretendo contribuir a la discusión de las consecuencias sociales y políticas de la arqueología de contrato en Chile, mostrando cómo participa en la construcción y reproducción de la lógica y los valores del mercado. También busco visibilizar la estrecha relación entre la arqueología de contrato y la arqueología patrimonial (*sensu* Carrasco 2007) mediante una descripción etnográfica de dos sitios: el Consejo de Monumentos Nacionales y la localidad de San Pedro de Atacama, al norte de Chile, abarcando el periodo comprendido entre mediados de los noventa y el año 2009, sin dejar de lado antecedentes históricos relevantes. Mostraré cómo la racionalidad neoliberal se reproduce en las prácticas y los discursos cotidianos del Estado y la arqueología. Al abordar el caso de San Pedro de Atacama mostraré que el vínculo entre las arqueologías de contrato y patrimonial y las industrias minera y turística configura una práctica disciplinaria que construye y es construida por el Estado multicultural neoliberal y sus políticas de etnodesarrollo.

MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL Y ARQUEOLOGÍA

A finales de la década de los ochenta, los arqueólogos celebraron la llegada del multiculturalismo como una salida al etnocentrismo y al logocentrismo y que promovía “el retorno del nativo” y el reconocimiento de sus derechos y demandas culturales. Como consecuencia —y, a la vez, produciendo este nuevo escenario político— se abrió el debate sobre la democratización del conocimiento, el pluralismo, la multivocalidad, la inclusión de otras voces, la reflexión disciplinaria, la autoridad, las relaciones de poder, la representación y la repatriación a nivel mundial. Aunque en Chile esta discusión se desarrolló más tardíamente que en otras partes, el discurso político multicultural produjo la diversificación de las relaciones entre arqueólogos e indígenas, la apertura de nuevos espacios de participación local, la ampliación de los circuitos de difusión del discurso científico y la respuesta a demandas indígenas. También se experimentó una creciente inserción de los arqueólogos en proyectos de impacto ambiental y puesta en valor patrimonial (Ayala 2008, 2011); esta situación estuvo vinculada con innovaciones institucionales y legales a partir de las cuales el Estado reconoció su diversidad cultural y comenzó a reconstruirse como nación democrática y pluricultural después de la dictadura (Boccaro 2007; Bolados 2010). Sin embargo, una evaluación crítica de las relaciones y disputas de poder en los espacios de participación abiertos por el multiculturalismo en Chile deja en evidencia que la arqueología, en particular la desarrollada en la región atacameña, continúa reproduciendo relaciones coloniales de dominación, aunque ya no desde la negación y la exclusión, sino desde la inclusión. Su poder y autoridad como discurso experto en la construcción, autenticación y legitimación de identidades, no solo no ha cambiado de lugar, sino que se ha fortalecido como consecuencia de su rol activo en los procesos de patrimonialización, desde donde produce y representa al Estado multicultural. Esta situación se vincula, además, con el dominio de los enfoques culturalista y positivista en la arqueología chilena, a partir de los cuales se interpreta la cultura material y se genera una visión y división del mundo social. La autoridad de estas corrientes teóricas se ha traducido en una visión esencializada de las diferencias culturales promovidas, producidas y gestionadas por el multiculturalismo y en la reafirmación de la científicidad disciplinaria. Así, el discurso arqueológico es utilizado para encubrir las repercusiones sociales y políticas de los megaproyectos ambientales, en el marco de los cuales los arqueólogos producen informes caracterizados por su excelencia técnica y neutralidad científica.

Paradójicamente, un nacionalismo renovado permite a Chile definirse como multicultural. Aunque se producen nuevas diferenciaciones y territorializaciones, internas y

externas (Boccaro y Ayala 2011), el Estado continúa su discurso nacionalista en temática patrimonial al referirse al “patrimonio de la nación chilena” y al celebrar el “Día del Patrimonio”. El pasado indígena es actualizado como “patrimonio nacional” y se tiende a difundir un nuevo régimen de verdad sobre lo que es y no es cultural, nacional y patrimonial; así se fija, materializa, monumentaliza, naturaliza y restringe la noción de cultura / patrimonio. En los procesos de patrimonialización —mediante los cuales se apropia, construye, autentifica y legitima la diversidad cultural a favor de la historia del Estado multicultural— los arqueólogos ejercen su poder y su autoridad como expertos en la producción de culturas, identidades y territorializaciones: prospectan, excavan, analizan, clasifican, interpretan y mapean sitios arqueológicos para proyectos de investigación, puesta en valor o impacto ambiental.

Comprender cómo la cultura ha llegado a ser una categoría central en el discurso público y determinante en la construcción de las identidades sociales y políticas y entender la patrimonialización y la arqueología multicultural requiere concebir el multiculturalismo como el gobierno de lo étnico (*sensu* Boccaro 2007), como una nueva forma de gubernamentalidad de tipo étnico que tiende a extender los mecanismos de intervención del Estado y a generar nuevas subjetividades, nuevos espacios de poder, nuevos campos de saber y nuevos mercados de bienes simbólicos exóticos. El multiculturalismo no puede ser comprendido sin su estrecha conexión con el neoliberalismo (Hale 2004): se asienta en una racionalidad neoliberal que tiende a responsabilizar a los agentes sociales, a tratar a las comunidades como pequeñas empresas, a generalizar las relaciones de mercado —que llegan a ser unos elementos esenciales del tejido social—, a flexibilizar y precarizar el mercado laboral y a someter la sociedad a la economía. En ese contexto político emerge la figura del “indio proyecto”, del “cliente exótico” o del “consumidor” que deben encontrar su lugar en los nuevos nichos de mercado. También aparecen los arqueólogos / consultores o arqueólogos / empresarios asociados laboralmente con agencias estatales o paraestatales, así como con empresas chilenas o transnacionales que invierten grandes capitales en territorios indígenas.

El multiculturalismo neoliberal incita a los indígenas a ser emprendedores, a administrar y “mercadear” sus productos y prácticas culturales como fuente de valor y de propiedades intelectuales. Mediante la patrimonialización se los estimula a ser gestores y administradores de sus sitios arqueológicos y a integrarlos al mercado turístico transnacional como bienes exóticos y símbolos de su autenticidad y legitimidad cultural. Este proceso repercute en la esencialización y diferenciación de las comunidades que, en el caso atacameño, se disputan la propiedad del patrimonio arqueológico para ser mercadeado como emblema de su aboriginalidad y nacionalidad. El neoliberalismo,

como tecnología de gobierno, extiende y disemina los valores del mercado a la política social y a las instituciones. La universalidad con la que se ha impuesto la lógica neoliberal en sectores privilegiados para el desarrollo capitalista, donde se enfrentan los intereses transnacionales con las demandas indígenas, como la región atacameña, ha llevado a Bolados (2010:16) a plantear que en Chile y otros países de la región, más que un multiculturalismo neoliberal, hay un “neoliberalismo multicultural”. En estos espacios de disputa por los recursos culturales y naturales los arqueólogos intervienen como consultores en el mercado de la arqueología de impacto ambiental, estudiando, rescatando, protegiendo y poniendo en valor el pasado indígena, que queda a disposición del mercado cultural desde donde es consumido por agentes nacionales y transnacionales.

La tradición indígena a la que se quiere hacer partícipe debe ser funcional a los nuevos proyectos de etnodesarrollo, es decir, debe ser reconstruida, reinventada y refuncionalizada de acuerdo con los criterios multiculturales. Los mecanismos de legitimación, autenticación, representación y consagración de nuevos agentes sociales operan en el campo etnoburocrático; su objetivo es saber quién está autorizado para decir qué es un indígena y cuál es la cultura indígena auténtica; también impone una nueva lógica con respecto al ejercicio legal de la “indigeneidad”. Los mecanismos de legitimación y normalización tienden a producir efectos de estandarización de las culturas indígenas, de profesionalización de sus portadores y de delegación del poder de representación política. Con la comunidad y la cultura como nuevos objetos de gobierno, el multiculturalismo investiga la realidad indígena a través de profesionales de las ciencias sociales. Por medio de encuestas, censos, reuniones, grupos focales, entrevistas y sondeos se busca elaborar una imagen fidedigna de la sociedad y de la cultura de las poblaciones indígenas que habitan el territorio nacional. Los arqueólogos multiculturales, en posesión de un capital social y simbólico destacado en el campo etnoburocrático, también estudian y producen una imagen verídica de la cultura, el pasado y el territorio indígena. Las agencias estatales, como el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), solicitan los servicios de consultoras arqueológicas para elaborar catastros de sitios, proyectos de puesta en valor, conservación y protección, cursos de capacitación y rescates. La arqueología multicultural contribuye a construir una versión estándar y esencializada de la cultura indígena, que también se produce a través de la definición de una temporalidad lineal de larga data.

La democracia neoliberal posdictadura ha abierto escenarios de participación. Los nuevos métodos de intervención estatal a través de los cuales se gobierna a los indígenas requieren la presencia en terreno de los agentes encargados de la política multicultural, quienes incitan a la población local a actuar, a participar, a expresar sus opiniones, a pensar en etnodesarrollarse. Se busca establecer una suerte de “asociación” entre las

comunidades indígenas, las agencias estatales y paraestatales y la empresa privada. En lugar de intervenir desde el exterior, de manera discrecional o asistencialista, a través de la patrimonialización se procura involucrar a los indígenas en su propio etnodesarrollo con la ejecución de proyectos de puesta en valor y rescate cultural y a través de su participación en proyectos de impacto ambiental; en ellos su voz es considerada en la instancia de participación ciudadana, lo que implica separar las demandas aceptables de las consideradas inapropiadas, reconociendo a las primeras y cerrando el paso a las otras. Así se gestiona el multiculturalismo: eliminando su impronta radical o amenazadora (Hale 2004). Como corolario de este proceso, el Estado reconoce sus demandas aceptables en temática patrimonial y los responsabiliza por el cuidado de los sitios arqueológicos que administran y por la ejecución de proyectos de rescate. Además, aprueba proyectos de impacto ambiental en los cuales se integra a los indígenas como mano de obra en las excavaciones arqueológicas o en el trabajo de laboratorio. En el caso atacameño esta situación ha estado vinculada con un proceso de profesionalización indígena financiado por agencias estatales e internacionales como el CMN, la Conadi, el Programa Orígenes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

LA PATRIMONIALIZACIÓN MULTICULTURAL EN EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

El CMN fue creado en 1925 y hasta la década de los noventa estuvo encargado, fundamentalmente, de la declaración de Monumentos Nacionales, tarea en ejercicio de la cual cumplió un rol protagónico en la construcción de la identidad nacional monocultural (Ayala 2011). La reconfiguración experimentada por el Consejo a mediados de los noventa evidencia cómo se reproduce la lógica del multiculturalismo neoliberal en el interior del Estado; también evidencia cómo es construido el Estado por diferentes agentes patrimoniales, entre los cuales los arqueólogos ocupan un lugar importante. Estos cambios se relacionan con la promulgación de la Ley de Impacto Ambiental (1994) y la Ley Indígena (1993), a partir de las cuales no solo se burocratizaron, aún más, las normas y procedimientos del CMN, sino que se ampliaron sus atribuciones, responsabilidades y actividades. La inclusión del patrimonio cultural en estas leyes derivó en una verdadera reingeniería institucional. A partir de la promulgación de la Ley de Medio Ambiente (1994) el CMN se constituyó en un “organismo de la administración del Estado con competencia ambiental”. Esta labor fue fortalecida e incrementada con la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 1997. Para abordar esta tarea el CMN tuvo que establecer procedimientos y regulaciones internos y

externos, lo que produjo tensiones y conflictos con la arqueología, uno de los campos disciplinarios más involucrados. El nuevo rol ambiental del Consejo implicó un cambio rotundo en sus labores cotidianas porque tuvieron que ampliarse a la recepción, revisión y evaluación de estudios y declaraciones de impacto ambiental, adendas, solicitudes de autorización provisoria, informes consolidados de evaluación y resoluciones de calificación ambiental. Entre los procedimientos internos generados por el Consejo hay normas que abarcan desde la llegada de un “ingreso” enviado por la Corporación Nacional de Medio Ambiente, su asignación a un área técnica o geográfica, su evaluación, revisión y firma, hasta la distribución de su pronunciamiento a otras agencias del Estado. La Comisión de Arqueología del Consejo y miembros de la Sociedad Chilena de Arqueología crearon lineamientos básicos para los informes arqueológicos de impacto ambiental.

Los casos asociados al Sistema de Impacto Ambiental han crecido exponencialmente en los documentos del CMN. En 1995 se analizaron solo doce proyectos, mientras que en el 2004 se evaluaron 237 declaraciones y estudios de impacto ambiental, sin contar las adendas, los informes de calificación ambiental y las resoluciones de calificación ambiental (González 2005). El incremento de este tipo de proyectos se aceleró aún más en los últimos años: entre el 9 de septiembre del 2008 y el 22 enero del 2009 se recibieron más de 503 “ingresos”; la extrapolación anual de casos de impacto ambiental sobrepasa la cifra de 1.600. El rol del CMN como organismo con competencia ambiental afectó de manera tal su funcionamiento que actualmente es una de sus actividades predominantes: “Yo te puedo decir que el 70 %, 60, 70 % del trabajo del Consejo de Monumento tiene que ver con el área de impactos ambientales y todo el desarrollo de la arqueología en Chile se ha visto impactada por esta actividad” (Ayala 2008). Esto es confirmado por la cantidad de “ingresos” vinculados con el Área de Arqueología del Consejo, ya que, de un total de 2.614 casos recibidos en el 2008, el 62 % (1.510) corresponde a proyectos de impacto ambiental que involucran la contratación de arqueólogos, en tanto que el 38 % (1.004) tiene que ver con proyectos de investigación, permisos, rescates, tráfico de piezas arqueológicas y difusión. Además, el Consejo funciona como un mercado que regula los proyectos de inversionistas nacionales y transnacionales. Esta actividad ha despolitizado los problemas sociales y económicos asociados a este tipo de proyectos, a través de informes de alta calidad técnica y neutralidad política. También ha repercutido en la conformación de una arqueología multicultural que ha profundizado su dependencia del campo burocrático, en términos de la vinculación laboral, cada vez más frecuente, de arqueólogos con agencias del Estado relacionadas con el patrimonio cultural y natural y con empresas privadas nacionales y transnacionales.

Estos cambios se traducen no solamente en un aumento de las declaraciones de monumentos nacionales, sino también en la diversificación de la noción de patrimonio en relación con el discurso estatal de “participación ciudadana” que integra la noción de “patrimonio indígena” y “patrimonio ambiental”. Aunque desde la promulgación de la Ley Indígena el Consejo comenzó a trabajar con la Conadi en proyectos de administración y catastro de sitios arqueológicos en la región atacameña (Ayala 2008), en el 2000 se produjeron cambios importantes con la inauguración del Área de Patrimonio Cultural Indígena en el Consejo, así como con la declaración del Día del Patrimonio y el fortalecimiento del Programa de Patrimonio Mundial. Esto se produjo paralelamente a la profundización de la política neoindigenista e intercultural¹ (*sensu* Bolados 2010) iniciada en la década previa con la apertura del Programa Orígenes, financiado con fondos del Gobierno chileno y del BID y cuya implementación está directamente vinculada con los propósitos de desmovilizar y apaciguar el conflicto indígena mapuche que había recrudecido a fines de la década de los noventa (Bolados 2010). La construcción de la central hidroeléctrica Ralco en territorio pehuenche, perteneciente a una empresa española, dejó en evidencia las debilidades y contradicciones entre las políticas indígena y medioambiental de los gobiernos democráticos. También generó discusiones entre arqueólogos y antropólogos. Para la construcción de esta hidroeléctrica se adquirieron 3.750 hectáreas en Ralco, en la zona del Alto Bío-Bío, lo que significó la reubicación de quinientos pehuenches que, después de una larga y dura lucha contra el Estado chileno y las presiones de la empresa, cedieron sus terrenos a cambio de títulos de tierras de baja calidad agrícola cedidas por el Gobierno (Bolados 2010; González 2005). Este conflicto marcó un hito importante en la orientación de la patrimonialización étnica que, desde entonces, comenzó a focalizar sus acciones en territorio mapuche y a difundir el discurso patrimonial del Estado con más fuerza.

1 En este periodo el indigenismo estatal (heredero del indigenismo latinoamericano) se transformó en un neoindigenismo transnacional, referido a una nueva comprensión de la intervención del Estado en relación con los pueblos indígenas. Según Bolados (2010:50), del indigenismo clásico, cuyo modelo de desarrollo se caracterizó por ser fundamentalmente asistencialista, se pasó a implementar (a mediados de los noventa y mediados de la primera década del presente siglo) una nueva política intercultural, la cual introdujo una comprensión más moderna y tecnócrata a través de programas de etnodesarrollo cuyo financiamiento transnacional proviene de alianzas y contratos entre Estados y organismos multilaterales. Algunos sectores del movimiento indígena se incorporaron a los programas interculturales fomentados desde el Estado.

Esto tiene que ver también con la privatización de lo que antes se consideraba un ámbito de competencia del Estado. A partir de la patrimonialización multicultural se comenzó a gestionar el aporte privado para la protección y conservación del patrimonio nacional. Esta situación está vinculada a megaproyectos nacionales y transnacionales de carácter minero, hidroeléctrico, turístico, forestal, vial o de otro tipo que reclutan arqueólogos para sus declaraciones o estudios de impacto ambiental. Esta misma lógica es la que, en parte, impulsó la apertura del Programa de Patrimonio Mundial para acceder a las fuentes de financiamiento de agencias multilaterales, como el BID, que ha entregado importantes sumas de dinero para la puesta en valor, conservación, protección o restauración del patrimonio en Chile. La integración de un bien tangible o intangible a la Lista de Patrimonio Mundial es considerada por los organismos internacionales un factor de desarrollo. Este discurso es reproducido por el CMN a través de la patrimonialización en el ámbito nacional y en términos de etnodesarrollo en territorios indígenas. En este caso los mecanismos de autenticación y legitimación recaen en Estados y agencias transnacionales que autorizan y definen qué es representativo de una nación y de la humanidad, instalando un régimen de verdad universalista (Ayala 2011).

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO, TURISMO Y MINERÍA EN EL SALAR DE ATACAMA

San Pedro de Atacama es uno de los principales destinos turísticos de Chile, con cerca de 50.000 visitantes anuales provenientes de distintas partes del mundo. El salar de Atacama es parte de la provincia del Loa y la región de Antofagasta, donde se produce más del 60% del mineral de Chile, lo que estimula intensos y permanentes flujos migratorios nacionales e internacionales relacionados con esta actividad (Bolados 2014). Este escenario ha repercutido no solo en el nacimiento de las arqueologías patrimonial y de contrato, sino también en un número creciente de proyectos de inversión que las necesitan. La arqueología de contrato, en particular, es rechazada, cuestionada y confrontada por los líderes étnicos, pero también es negociada y considerada una herramienta útil en contra del avance avasallador de la minería y el turismo. A través de relaciones de mercado los arqueólogos se posesionaron, aún más, de su rol de expertos del pasado y protectores del patrimonio cultural, así como fortalecieron un discurso técnico-científico y culturalista. Estos arqueólogos están al servicio del desarrollo y, en general, se mantienen al margen de los debates políticos sobre las consecuencias sociales y medioambientales del turismo y la minería en el salar; también guardan silencio sobre su aporte a la reproducción de relaciones asimétricas de poder y explotación.

La configuración del salar de Atacama como una “región indígena, minera y turística en la nueva cartografía del capitalismo actual” (Bolados 2014:232) no puede ser comprendida sin considerar el rol de la arqueología. Antes de la aparición de esta trilogía en las representaciones regionales, el poblado de San Pedro de Atacama ya era publicitado como la “capital arqueológica de Chile”. En este lugar la emergencia de la arqueología de contrato se vincula al incremento de las industrias minera y turística desde la década de los noventa, cuando se instala el discurso político multicultural y se diseminan los valores de mercado en la política social y las instituciones, como mostraré después de una breve mirada histórica.

Durante el siglo XIX la importancia científica, geopolítica y minera de la región atacameña se fue consolidando hasta convertirse en un territorio de luchas entre las nacientes repúblicas de Bolivia, Perú y Chile. Desde la guerra del Pacífico (1879-1883) la puna de Atacama fue anexada al norte de Chile, que había comenzado a experimentar cambios profundos producto de la expansión de la industria minera y salitrera y la creciente inversión de capitales privados nacionales y transnacionales. La población indígena atacameña pasó de una economía agropastoril a una más diversificada con base capitalista. La arqueología en esta región se vinculaba a viajes y expediciones de naturalistas, viajeros, geógrafos y aficionados por las antigüedades; esta situación cambió en el siglo XX con la llegada de investigadores extranjeros que realizaron las primeras investigaciones arqueológicas y etnográficas (Ayala 2008).

A lo largo del siglo XX los atacameños fueron fuerza de trabajo en la industria minera, lo que produjo su migración hacia los centros urbano-industriales de Calama y Antofagasta. Un sector permaneció en su territorio de origen y continuó e intensificó la explotación artesanal de sal y de llareta o se incorporó a la industria local del azufre, industrias subsidiarias de la floreciente minería de gran escala (Vilches *et al.* 2015). La presencia del Estado se hizo tangible a finales del ciclo salitrero, cuando la actividad cuprífera se expandió con la mina de Chuquicamata (Bolados 2014). Por su parte, la presencia de la arqueología se concretó a través de figuras nacionales y extranjeras, entre quienes destacó el sacerdote belga y arqueólogo aficionado Gustavo Le Paige, quien asumió como párroco de la capilla de Chuquicamata y, posteriormente, se trasladó a San Pedro de Atacama². Le Paige no solo es recordado por sus aportes científicos y la creación del museo local, sino, además, por la inserción del oasis al mercado turístico

2 La tradición oral asocia la práctica arqueológica de esos años con los “gringos” de Chuquicamata, como el ingeniero Emil De Bruyne en Caspana, quienes excavaron cementerios indígenas

nacional e internacional. Su labor modernizadora fue apoyada por otros arqueólogos de la época, como Jorge Serracino (1973:5), quien, como editor de la revista *Estudios Atacameños*, escribió:

No se trata de mantener los pueblos atacameños como piezas vivientes de culturas pasadas sino desarrollar la cultura atacameña con medios modernos adaptados al medio ambiente en el cual vivimos. La planificación de su desarrollo es el motivo principal para la publicación de esta nueva revista.

En esa década y en la de los ochenta, la dictadura militar profundizó el discurso desarrollista del Estado e impulsó el modelo económico neoliberal. La presencia estatal se concretó a través de la creación del municipio de San Pedro de Atacama y el ingreso de nuevos actores transnacionales, los cuales llegaron al salar gracias a un cambio legislativo que estimuló la inversión extranjera y la privatización de los recursos naturales. A ello se sumó la introducción de la minería del litio a través de la Sociedad Chilena del Litio y la Sociedad Química Minera de Chile. Simultáneamente, el *holding* hotelero Explora realizó compras extensas de terrenos en diversos sectores del salar (Bolados 2014). Años después construyó el primer hotel cinco estrellas en San Pedro de Atacama. Durante esos años las agencias estatales vinculadas con el turismo y la minería —como la Dirección de Turismo de Antofagasta y Santiago y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)— financiaron la construcción y modificación del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama (Ayala 2011). También se realizó el Primer Simposio de Arqueología Atacameña (1983) en el que, entre otros temas, se discutió sobre la defensa y conservación del patrimonio y su relación con el turismo y sobre las “pautas de desarrollo andino”. En el ámbito nacional la arqueología continuaba con un fuerte énfasis empirista centrado en la construcción de secuencias histórico-culturales, en la identificación de relaciones tempo-culturales entre áreas y en tipologías de cultura material, aunque aparecieron los primeros trabajos con contenidos teóricos explícitos (Troncoso *et al.* 2008). En este contexto se realizaron trabajos orientados por la nueva arqueología norteamericana o por una arqueología marxista posteriormente conocida como arqueología social latinoamericana que, desde diferentes perspectivas, también avalaron el discurso desarrollista.

en la cuenca del Loa y en el salar de Atacama. Los cementerios prehispánicos de Chiu Chiu fueron excavados por aficionados de Chuquicamata, incluso usando dinamita (Ayala 2008).

La década de los noventa se caracterizó por la intensa política indígena y patrimonial desplegada por el Estado, así como por la incorporación de agentes globales provenientes de la minería transnacional y el turismo en el salar de Atacama. En aquellos años el auge del cobre chileno produjo el volumen de inversión minera más importante del siglo a nivel mundial; la producción nacional de este metal aumentó tres veces (Salazar 2010). La gran importancia otorgada a la minería del cobre en la economía nacional ha llevado a que esta actividad produzca uno de los mayores impactos sociales, económicos, culturales y ambientales del siglo xx en estas comunidades. La promulgación de la Ley Indígena y la Ley de Medio Ambiente, así como un contexto nacional e internacional favorable a las demandas étnicas, visibilizó conflictos históricos entre empresas mineras y poblaciones indígenas por derechos de agua y territorio (Carrasco 2014). Incluso se planteó que los procesos de etnogénesis vividos por las comunidades aymara y atacameña en el norte de Chile estaban relacionados con disputas con empresas mineras en torno a derechos y explotación de recursos hídricos (Gundermann 2000; Rivera 2006).

La minería, considerada por muchos un ingrediente necesario en la carrera hacia el progreso y el bienestar social, fue cuestionada por las comunidades indígenas. Como respuesta las empresas mineras reprodujeron la retórica multicultural de “responsabilidad social”, “participación ciudadana” y “relaciones comunitarias” como una vía para mejorar sus relaciones con estas poblaciones (Salazar 2010:230)³. Obligadas por la Ley de Medio Ambiente y por las legislaciones internacionales, las empresas mineras tuvieron que someter sus proyectos al Sistema de Impacto Ambiental; para ello reclutaron equipos de arqueólogos a través de diferentes modalidades contractuales. En algunos casos las consultoras arqueológicas se encargan de proyectos específicos y acotados en el tiempo; en otros mantienen una relación laboral de larga duración, como es el caso de la Sociedad Contractual Minera el Abra que desde 1996 financia el proyecto “Investigación, rescate y puesta en valor del patrimonio arqueológico en el Abra” (Salazar 2010). Cumpliendo los requisitos impuestos por la ley y siguiendo los protocolos del CMN, los informes arqueológicos reconstruyen y reproducen la historia cultural de un territorio; destacan por su calidad técnica y jerga científica, sin mencionar la tecnología de punta con que se despliega el saber / poder arqueológico en las etapas de terreno, laboratorio y redacción de resultados. La participación de la arqueología en este tipo de proyectos la

3 Para Carrasco (2014:248) este cambio de relaciones se debe a que las mineras pasaron de ignorar a las comunidades en las áreas de su influencia a incorporarlas como partes interesadas o como actores con influencia reconocida.

ha puesto en el centro del debate comunitario, ya que algunos líderes atacameños critican a los arqueólogos de contrato, especialmente aquellos que trabajan en el museo local:

Debieran conocer el sentimiento de la comunidad en que están insertos y con la que se supone debiera haber un mayor acercamiento o como aquí se plantea con la que debiera haber mayor comunicación e involucramiento [...] Debiera tenerse el compromiso de que por ética los arqueólogos de este museo debieran apoyar a la comunidad y no prestar servicios a particulares que quieren atentar en contra de lo que quiere la comunidad. (Tercera Mesa de Diálogo del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, 2005)

Con respecto a los cuestionamientos indígenas, la respuesta de los arqueólogos ha sido diversa. Mientras algunos se refugian en el silencio y la distancia, otros justifican su participación en proyectos ambientales de las siguientes maneras: “Alguien tiene que hacerlo”; “mejor hacerlo nosotros que otros”; “si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”; “como arqueólogos tenemos que proteger y salvar el patrimonio”; “por ley estamos obligados a hacerlo”; “de algo tenemos que vivir”. Sin embargo, después de discusiones internas y considerando los conflictos con la comunidad local, a pesar de no existir una posición unánime, a mediados del 2000 la dirección del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama determinó que los arqueólogos de esta institución no deberían participar en proyectos de impacto ambiental (Taller Políticas Étnicas del IAM, 2005). Por otra parte, consultoras arqueológicas provenientes de otros sectores del país integraron a miembros de las comunidades atacameñas como trabajadores de terreno y laboratorio. Esta integración fue demandada por los atacameños desde la construcción del gasoducto de Gas Atacama y el *bypass* San Pedro-Paso Jama a finales del siglo xx. En ambos casos los líderes indígenas interpelaron al Estado y a la empresa privada por la destrucción de sitios arqueológicos cuyo daño fue considerado un atentado a su patrimonio cultural; por eso exigieron medidas de compensación y mitigación, además de la participación atacameña en las diferentes etapas de ejecución (Ayala 2008). Paralelamente, la población atacameña comenzó a insertarse en proyectos de etnodesarrollo turístico y patrimonial promovidos por agencias gubernamentales y extranjeras (Ayala 2008). Esto se asocia a un paulatino retorno a sus comunidades de origen, donde el turismo y los servicios asociados comenzaron a constituirse en un trabajo asalariado que les permitió acceder a beneficios económicos antes vinculados solo a la minería. En este sentido, lo que en un inicio fue rechazado por los atacameños como un avasallamiento de espacios y recursos (en algunos casos manifestado a través de su repliegue o abandono de circulación del casco central del pueblo), se convirtió en una posibilidad laboral, estable y rentable, en su propio territorio ancestral.

Un ejemplo de la integración atacameña en iniciativas de desarrollo local son los proyectos de catastro, puesta en valor, protección y manejo turístico de sitios arqueológicos impulsados por agencias del Estado como la Conadi, el CMN y el Ministerio de Obras Públicas. En este contexto la arqueología atacameña activó su veta patrimonial trabajando en conjunto con agentes estatales e indígenas en la incorporación de sitios arqueológicos al mercado turístico. Este proceso no estuvo exento de disputas de poder, ya que los arqueólogos se vieron inmersos en alianzas políticas que discutían el tipo de proyectos por realizar, quién podía entrar a los sitios y en qué condiciones (Ayala 2008). Estos conflictos generados en torno al manejo indígena del patrimonio arqueológico fueron abordados por el CMN y la Conadi como problemas con comunidades atacameñas específicas, focalizando la atención en los desacuerdos entre arqueólogos y líderes étnicos o entre los arqueólogos e, incluso, minimizando las situaciones conflictivas. Al centralizar estos conflictos en los problemas existentes entre determinadas comunidades, entre arqueólogos e indígenas, o en el interior de la disciplina, se invisibilizó el tema de fondo: la propiedad del patrimonio arqueológico en territorios indígenas, sobre todo considerando que el manejo comunitario de estos bienes fue una forma de reorientar o encausar la demanda atacameña de propiedad y derechos culturales sobre ellos (Ayala 2008). La participación de la arqueología, llamada a evaluar la viabilidad de estas iniciativas desde su autoridad tecnocientífica, ayudó a despolitizar y desviar la atención de problemas aún no resueltos entre el Estado y los pueblos indígenas, de los cuales el patrimonio es solo una parte. La legitimación estatal del discurso experto de los arqueólogos ha sido funcional al sistema de relaciones de poder imperante, ya que los escenarios en los que ha sido llamado a participar ocultan las desigualdades sociales todavía existentes.

El discurso desarrollista del Estado se asocia, además, a la ejecución de proyectos hoteleros, también vinculados a los inicios de la veta ambiental de la arqueología multicultural en el salar. Un caso reiteradamente mencionado en la historia oral al hablar de la arqueología de impacto ambiental es la construcción del Hotel Explora a mediados de la década de los noventa. Aunque este hotel se presentó como una oportunidad de trabajo para los atacameños, su emplazamiento en una zona arqueológica sensible desplegó relatos sobre saqueos, profanaciones y diversas historias locales relacionadas con los hallazgos realizados, algunas de las cuales se refieren a las alianzas entre arqueólogos y la empresa privada en contra de los intereses étnicos. Este asunto produjo conflictos entre los arqueólogos del museo local y profesionales externos a esta institución, así como entre arqueólogos / investigadores y arqueólogos / consultores. También dio cuenta de la participación atacameña en prospecciones y excavaciones arqueológicas de impacto

ambiental, cada vez más recurrente en la arqueología de contrato en el salar. El “boom turístico”, así como la proliferación de hoteles en San Pedro de Atacama desde inicios de la primera década del siglo XXI, ha demandado una presencia significativa de consultoras arqueológicas, varias de las cuales han contratado mano de obra local para sus trabajos de campo, cumpliendo así con el discurso multicultural desarrollista de “participación indígena” (Ayala 2011). La arqueología de impacto ambiental, criticada por algunos líderes atacameños, es otra fuente de trabajo asociada al mercado turístico y patrimonial, aunque más esporádica e inestable que el trabajo en la limpieza, cocina y mantenimiento en los hoteles. A esto hay que sumar la integración de guías atacameños. El Hotel Explora fue pionero en la formación y contratación de guías locales a través de su Escuela de Guías, que incluyó curso de arqueología. El propósito de estas y otras formas de “participación” y “colaboración” con la población atacameña es revertir su percepción de este hotel como transgresor de la cultura local y generador de relaciones laborales desiguales y de explotación. Según Bolados (2014:236) estas iniciativas permitieron manejar las tensiones hasta el 2007, cuando el Consejo de Pueblos Atacameños decidió denunciar judicialmente a Explora por adueñarse de aguas medicinales de uso ancestral en las termas de Puritama. Ante este conflicto el hotel expandió sus operaciones e implementó estrategias de relación con las comunidades. A este efecto estableció un área protegida en las termas de Puritama, a través de una fundación cuyo objetivo sería proteger el sector como una reserva para contribuir a “resguardar el patrimonio natural y cultural atacameño”.

La formación de guías atacameños promovida por este hotel se vincula con dos de las principales características de la patrimonialización multicultural: la participación y profesionalización de los indígenas, financiada por agencias gubernamentales y multilaterales, así como por empresas hoteleras, como Explora y mineras, como La Escondida o El Abra. Los arqueólogos también han sido integrados al mercado de las capacitaciones, talleres y cursos de formación, entre los cuales destaca la Escuela Andina del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama por su sistematicidad y permanencia en el tiempo. Para el Estado y las agencias multilaterales el “indígena capacitado” o “el indígena fortalecido” es una herramienta de desarrollo. Por eso los proyectos patrimoniales vinculados con el turismo y la minería demandan atacameños capacitados en arqueología e historia local. En una paradoja propia de la era multicultural, los atacameños deben demostrar que son conocedores de su cultura a través de su certificación en programas de capacitación estatal o privada, lo que los pone en ventaja comparativa en el mercado laboral a la hora de buscar trabajo con consultoras arqueológicas de impacto ambiental o proyectos patrimoniales. Esta situación ha sido planteada por algunos líderes étnicos,

quienes consideran que son los estudiantes de la Escuela Andina quienes deben ocupar estos puestos de trabajo (Ayala 2011).

Un efecto inesperado del multiculturalismo neoliberal es que ha sido, precisamente, en el interior de los espacios de participación indígena, como la Escuela Andina, que los estudiantes y los líderes étnicos han rechazado y confrontado a la arqueología de contrato. Desde su perspectiva, la participación de docentes en proyectos de impacto ambiental que van en contra de los intereses de las comunidades evidencia una falta de coherencia, por lo que cuestionan los vínculos construidos entre el museo local y la comunidad indígena a través de este programa. En los últimos años los atacameños han participado más activamente en las instancias de participación ciudadana del Sistema de Evaluación Ambiental, solicitando en ocasiones la asesoría de arqueólogos para evaluar los informes entregados a la Corporación Nacional de Medio Ambiente. De hecho, para algunos dirigentes la arqueología puede ser una herramienta útil para oponerse a proyectos mineros, carreteros u hoteleros, tanto de carácter público como de carácter privado.

LA ARQUEOLOGÍA MULTICULTURAL: SUS VETAS AMBIENTAL Y PATRIMONIAL

La arqueología multicultural ha ampliado los límites disciplinarios hacia la gestión, el rescate cultural y el impacto ambiental al participar en programas de desarrollo impulsados por agencias estatales y transnacionales. También ha incrementado su participación en la administración del patrimonio, mediante la integración de los arqueólogos en agencias públicas y privadas y como consultores de proyectos culturales o ambientales. Una de las características más visibles de la arqueología multicultural es su papel en la definición, administración y legislación del patrimonio nacional, lo que se conoce en el mundo angloparlante como *cultural resource management* (Smith 2004). En este contexto, la arqueología es valorada como empresa nacionalizadora y conocimiento experto, técnico y científico; esta es una herencia del procesualismo y de su vínculo con el nacionalismo monocultural. El rol autoproclamado, y legitimado por el Estado, de guardianes del pasado y del patrimonio convierte a los arqueólogos en profesionales cada vez más requeridos por las agencias estatales vinculadas a los bienes culturales. Aunque antes del multiculturalismo los arqueólogos también formaban parte de este tipo de instituciones, en la actualidad es mucho más frecuente encontrarlos trabajando en el servicio público, desde donde definen y arbitran, junto a otros profesionales y agentes estatales, qué es el patrimonio nacional, qué es el patrimonio indígena, quién puede acceder a ellos y cuáles son los requisitos para hacerlo. La patrimonialización continúa reproduciendo un discurso nacionalista, de manera que el patrimonio indígena

—junto al patrimonio local, salitrero, histórico— forma parte de la noción más amplia de patrimonio nacional (Ayala 2014).

A través de la participación de los arqueólogos en este proceso administrativo, el Estado mide la legitimidad de las demandas nativas contra el pronunciamiento objetivo de los expertos. La arqueología es usada para gobernar a la población indígena y controlar conflictos sociales vinculados con el patrimonio, detrás de los cuales se esconden problemas vigentes que el Estado no ha solucionado, pese a su discurso político multicultural. Siguiendo a Smith (2004:102), quien define la arqueología como una “tecnología de gobierno” a través del *cultural resource management*, una de las consecuencias de la institucionalización de la arqueología no es solo facilitar su movilización como tecnología de gobierno, sino también su integración en la burocracia y la legalidad del patrimonio. La movilización del conocimiento arqueológico dentro de instituciones estatales no puede ser entendida como una simple respuesta técnica a necesidades de conservación del material cultural, sino también como parte de un proceso en el cual se identifica, clasifica y gobierna a la población, parcialmente identificada por su nexos con dichos bienes culturales.

La visibilidad y expansión de la patrimonialización en los últimos años no solamente ha significado la incorporación de un mayor número de arqueólogos por parte del Estado; también ha incrementado el número de carreras de arqueología y la orientación marcadamente patrimonialista de algunas de ellas. El fortalecimiento de las políticas neoliberales y su impacto en la disciplina ha llevado a los arqueólogos a dejar sus investigaciones e involucrarse en proyectos de puesta en valor, conservación y protección de sitios patrimoniales relacionados con la industria turística, donde su experticia es llamada a evaluar su viabilidad y controlar los conflictos que pudieran surgir (Ayala 2008). Algo similar ocurre con los proyectos de impacto ambiental, en los cuales se destaca el rol técnico y científico del conocimiento arqueológico para evaluar el daño ambiental de inversiones mineras, hidroeléctricas, forestales, inmobiliarias, hoteleras y turísticas. El énfasis en la objetividad, el rigor técnico y la neutralidad política de la arqueología produce la despolitización de este tipo de proyectos, porque los problemas sociales que desencadenan se reducen a simples problemas técnicos. En el caso de los proyectos de inversión minera, la tecnología de punta y el rigor científico con que se estudian los sitios arqueológicos desplazan la mirada de los conflictos sociales de fondo y la centran en la producción de enormes volúmenes de información inédita y la acumulación de colecciones arqueológicas. Ese desplazamiento refuerza el rol de los arqueólogos como guardianes del pasado, mientras se siguen reproduciendo las mismas desigualdades y explotaciones sociales; mientras los indígenas siguen siendo crimina-

lizados por sus demandas de tierra; mientras la violencia policial sigue siendo ejercida aún en la era del reconocimiento de las diferencias culturales, como en el caso de los mapuches en el sur de Chile.

Todo esto se relaciona con un discurso desarrollista, a través del cual los indígenas han sido impulsados a implementar proyectos que les permitan insertarse al mercado cultural y obtener asistencia internacional, ayuda y validación política. Su autenticidad cultural es más exigida que nunca. El paradigma etnodesarrollista requiere el “empoderamiento nativo”, ya que necesita nativos para desarrollar, así como el Estado multicultural los necesita para asegurar fondos internacionales y representarse como pluricultural, exitoso y seguro para la inversión extranjera. La diferencia cultural es vista a través de proyectos patrimoniales, ambientales y turísticos avalados por el Estado y la empresa privada. La administración indígena de sitios arqueológicos es considerada una alternativa de desarrollo económico para estas poblaciones, a la vez que aporta a la construcción de una imagen de reconocimiento de sus derechos culturales y a la conformación de sujetos exóticos y auténticos listos para ingresar y competir en el mercado de la diferencia. A esto se suma que el nuevo discurso ambientalista concibe la cultura como un recurso más para posibilitar su inserción mercantil. Para Villa (2003:337), quien investigó el caso colombiano, esta coyuntura política inscribe la arqueología en el acontecer tecnoeconómico de ese país y en el orden económico global, puesto que la protección del patrimonio arqueológico, como parte del desarrollo sostenible, se articula con la nueva concepción de transformación del medio ambiente. Este proceso se expresa en la arqueología de contrato y en la referencia al patrimonio arqueológico como recurso cultural, es decir, como bien de capital. Según Villa (2003:339), la práctica arqueológica contribuye a la construcción de un orden hegemónico estructurado por las nuevas concepciones de desarrollo, la modernización y la globalización de la cultura en la economía.

La inserción de los estudios de impacto ambiental es coherente con el sistema neoliberal y es impuesta desde los centros de poder mediante los protocolos de las multinacionales que se instalan en el país o por medio de los convenios de libre mercado con Estados Unidos y Europa (Troncoso *et al.* 2008:134). Las repercusiones de esta estrecha relación entre la arqueología y el neoliberalismo se reflejan en un limitado interés en la discusión teórica y en cierta inclinación y renacimiento de enfoques en el positivismo que priorizan los métodos cuantitativos y físico-químicos sobre aquellos más reflexivos, a lo que se suma la profundización de la tendencia a la microarqueología, la popularización y aumento de una arqueología apoyada por nuevas tecnologías de la información y la diferenciación entre los profesionales de la academia y los de estudio

de impacto ambiental. Carrasco (2007:39) plantea que en este tipo de arqueología “no hay una aproximación en función de un problema de investigación, por lo que el ejercicio mismo se transforma en la aplicación de principios metodológicos básicos derivados de la práctica arqueológica normal en su etapa de obtención de datos y generándose mayoritariamente la elaboración de diagnósticos histórico-culturales locales”. Como consecuencia, la arqueología es utilizada por el multiculturalismo neoliberal, no solo por sus aportes a la construcción identitaria, sino también por su experticia técnica en proyectos de inversión estatal o privada que reproducen y demandan las interpretaciones culturalistas históricamente vinculadas con los nacionalismos. La implementación de este nuevo arte de gobierno no se hace sin tensiones ni contradicciones. Las nuevas posibilidades políticas no radican solo en grandes oposiciones, sino también en los intersticios de las estructuras de poder emergentes y en nuevos espacios políticos y sociales en construcción. Se trata de los efectos no esperados o deseados del multiculturalismo, ya que los indígenas no se limitan a ser objetos de gobierno y etnodesarrollo. A través de la patrimonialización, cuestionan al Estado multicultural desde adentro y participan de las nuevas luchas por la definición, la clasificación y la propiedad de su patrimonio. También se aprovechan del proceso de profesionalización para apropiarse del discurso patrimonial y científico y usarlo en sus luchas políticas contra el Estado y los arqueólogos, así como para ocupar espacios antes vetados, conseguir posesionar viejas y nuevas demandas y buscar el reconocimiento del conocimiento local en igualdad de condiciones con el científico. La politización de la cultura y el nuevo régimen de verdad multicultural acerca de lo que es cultural, nacional y patrimonial es un proceso disputado de construcción de significados entre agentes indígenas, estatales, científicos y privados, a escalas tanto locales como globales.

REFERENCIAS CITADAS

Ayala, Patricia

2008 *Políticas del pasado: indígenas, arqueólogos y estado en Atacama*. Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama.

2011 *La patrimonialización y la arqueología multicultural y las disputas de poder por el pasado indígena*. Tesis doctoral, Universidad Católica del Norte-Universidad de Tarapacá, San Pedro de Atacama.

Ayala, Patricia y Flora Vilches

2012 Introducción. En *Teoría Arqueológica en Chile: reflexionando en torno a nuestro quehacer disciplinario*, editado por Patricia Ayala y Flora Vilches, pp. 9-24. IIA; UCN; Ocho Libros, Santiago.

Boccaro, Guillaume

- 2007 Etnogubernamentalidad. La formación del campo de la salud intercultural en Chile. *Chungará* 39(2):185-207.

Boccaro, Guillaume y Patricia Ayala

- 2011 Patrimonializar al indígena: imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile. *Les Cahiers des Ameriques Latines* 67(2):111-202.

Bolados, Paula

- 2010 Neoliberalismo multicultural en el Chile democrático: gubernamentalizando la salud atacameña a través de la participación y el etnodesarrollo. Tesis doctoral, Universidad Católica del Norte; Universidad de Tarapacá, San Pedro de Atacama.
- 2014 Los conflictos etnoambientales de “Pampa Colorada” y “El Tatio” en el salar de Atacama, norte de Chile. Procesos étnicos en un contexto minero y turístico transnacional. *Estudios Atacameños* 48:229-248.

Cáceres, Iván

- 1999 Arqueología y sistema de evaluación de impacto ambiental. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 28:47-54.

Carrasco, Carlos

- 2007 La práctica arqueológica y la actual construcción del conocimiento arqueológico en Chile. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 39:35-49.

Carrasco, Anita

- 2014 Entre dos aguas: identidad moral en la relación entre corporaciones mineras y la comunidad indígena de Toconce en el desierto de Atacama. *Chungará* 46(2):247-258.

González, Paola

- 2005 Acerca del Consejo de Monumentos Nacionales como órgano con competencia ambiental. Institucionalidad pública y fiscalización (Conama, Consejo de Monumentos Nacionales y Consejos Asesores). En *Actas del Primer Seminario de Minería y Monumentos Nacionales*, editado por Gastón Fernández y Paola González, pp. 86-97. Editec, Santiago.

Gundermann, Hans

- 2000 Las organizaciones étnicas y el discurso de la identidad en el norte de Chile, 1980-2000. *Estudios Atacameños* 19:75-92.

Hale, Charles

- 2004 Rethinking Indigenous Politics in the Era of the “Indio Permitido”. *Nacla, Report on the Americas* 38(2):1-11.

Rivera, Francisco

- 2006 Entorno neoliberal y la alteridad étnica antiflexibilizante de los atacameños contemporáneos. *Revista Chilena de Antropología* 18:59-89.

Salazar, Diego

2010 Comunidades indígenas, arqueología y mineras en el norte de Chile: ¿hacia un diálogo posible? En *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*, editado por Cristóbal Gnecco y Patricia Ayala, pp. 221-250. FIAN; Universidad de los Andes, Bogotá.

Salazar, Diego, Donald Jackson y Andrés Troncoso

2012 Entre dos tierras: reflexiones sobre la arqueología chilena en el siglo veintiuno. En *Teoría arqueológica en Chile: reflexionando en torno a nuestro quehacer disciplinario*, editado por Patricia Ayala y Flora Vilches, pp. 41-71. Línea Editorial IAM-UCN, Ocho Libros, Santiago.

Serracino, Jorge

1973 Editorial. *Estudios Atacameños* 1:5.

Smith, Laurajane

2004 *Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage*. Routledge, Nueva York.

Troncoso, Andrés, Diego Salazar y Donald Jackson

2008 Ciencia, Estado y sociedad: retrospectiva crítica de la arqueología chilena. *Arqueología Suramericana* 4(2):122-145.

Vilches, Flora, Cristina Garrido, Patricia Ayala y Ulises Cárdenas

2015 El pasado contemporáneo en San Pedro de Atacama, norte de Chile: ¿arqueología pública? Manuscrito en proceso de publicación.

Villa, Freddy

2003 Arqueología de rescate y desarrollo sostenible en Colombia: crítica a un vínculo instrumental. En *Arqueología al desnudo: Reflexiones sobre la práctica disciplinaria*, editado por Cristóbal Gnecco y Emilio Piazzani, pp. 327-344. Universidad del Cauca, Popayán.

ARQUEOLOGÍA DISTÓPICA: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DEL CAPITAL EN EL MANEJO DEL PATRIMONIO

Nicolas Zorzin

Traducido del inglés por Cristóbal Gnecco

POR UNA ECONOMÍA POLÍTICA EN ARQUEOLOGÍA

ME GUSTARÍA COMENZAR ESTE ARTÍCULO CON UNA CITA DEL ECONOMISTA FRANCÉS THOMAS PIKETTY (2013:942):

La evolución dinámica de una economía de mercado y de propiedad privada, abandonada a sí misma, contiene fuerzas de convergencia importantes vinculadas, en particular, a la difusión de conocimientos y habilidades pero, también, fuerzas de divergencia poderosas y potencialmente amenazantes para nuestras sociedades democráticas y los valores de justicia social en los que se basan.

Piketty sugiere que, a pesar de algunas contribuciones positivas, la economía de mercado no regulada y el proceso de privatización iniciado en la década de los setenta socavan las sociedades democráticas y la justicia social. Como reacción a este fenómeno del capitalismo tardío Piketty (2013:946) sugiere que es imperativo que los científicos sociales se comprometan con, y contribuyan más, al debate social. En ese sentido me parece que los arqueólogos deben acometer la —o, al menos, influir en— la elección de las estructuras, las instituciones y las orientaciones específicas de economía política para el manejo del patrimonio (Smith 2000:310). Hoy en día la arqueología está integrada, cada vez más, en el manejo del patrimonio cultural¹, cuyas políticas son definidas por agencias estatales pero influenciadas por grupos de presión corporativos apoyados por las nuevas orientaciones de formación profesional en el currículo académico y por las nuevas tendencias de reducción de costos de gestión en las universidades, aplicadas en las empresas arqueológicas privadas con ánimo de lucro; esas políticas, por lo tanto, están influenciadas por una mentalidad comercial “estrecha” (Bergman y Doer-

1 Conocido en inglés como *cultural heritage management* (CHM).

shuk 2003:85-97; Shepherd 2007:110). En este artículo busco deconstruir la economía política de la práctica de la arqueología en diferentes partes del mundo para entender sus implicaciones directas en las comunidades. Sostengo que separar el debate sobre la práctica de la arqueología de su contexto sociopolítico es, hoy en día, una opción perjudicial para los arqueólogos y la gente.

UNA DÉCADA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA EN QUEBEC (CANADÁ), VICTORIA (AUSTRALIA) Y JAPÓN (2003-2013)

Antes del inicio de la crisis financiera y económica del 2007 y el 2008, tuve experiencias de primera mano con arqueología comercial y arqueología de rescate mientras trabajaba como profesional en Quebec. Desde entonces mi investigación se ha centrado en entender la organización de esas estructuras arqueológicas en diferentes partes del mundo; este proceso requirió contextualizar la práctica de la arqueología en el sector más amplio del manejo del patrimonio, para el que cada país posee sus propias especificidades. Un elemento, sin embargo, se mantuvo constante y parecía recurrente en los problemas que se presentan en la práctica de la arqueología: las tensiones entre los incentivos financieros y éticos que enfrentan los arqueólogos, los empresarios y los organismos gubernamentales. Los resultados de mis investigaciones (Zorzin, 2010, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014a, 2014b) muestran que las restricciones y las regulaciones económicas obligan a muchos en el sistema arqueólogo-empresario a negociar su compromiso con un resultado arqueológico científico, ético y socialmente significativo. Pero ¿cómo se llegó a esto?; ¿por qué?; ¿para quien?; y ¿en qué medida estas concesiones se están haciendo en diferentes partes del mundo? ¿Cómo la estructura económica de la profesión, incrustada en el capitalismo tardío, afecta la forma como producimos resultados arqueológicos, la naturaleza de estos resultados y los significados atribuidos a ellos? ¿Cómo podría ser cambiado, amplificado o, simplemente, eliminado el significado de diversos resultados si la estructura económica fuera diferente?

Los académicos y los profesionales iniciaron un proceso de reflexión sobre las relaciones entre la economía y la arqueología a comienzos de la década de los ochenta, cuando aparecieron las primeras estructuras comerciales de arqueología de contrato (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, España). Estas estructuras se diferenciaron de las estructuras arqueológicas académicas o gubernamentales anteriores en sus medios (financiadas por empresas) y objetivos (rescate o registro). Esta transformación en una industria con fines de lucro fue criticada, pero solo en los últimos años, y después de casi cuarenta años de arqueología comercial, tenemos la distancia

temporal necesaria para comenzar a entender sus consecuencias negativas (Shanks y McGuire 1996; Darvill *et al.* 2002; Bergman y Doershuk 2003:95) y algunos resultados constructivos (Bradley 2006).

Los estudios recientes han demostrado que algunas preocupaciones estaban bien fundadas y que todo el sistema era perjudicial para la práctica arqueológica y para el público. Uno de estos estudios fue hecho por Paul Everill (2012; véase también Everill 2007) en el Reino Unido y lleva por título, acertadamente, *Los excavadores invisibles*. Varios trabajos han cuestionado y desafiado la configuración económica capitalista como una opción viable para la práctica de una arqueología ética y significativa, lo que demuestra lo inadecuado del proceso de comercialización de la arqueología (Hamilakis y Duke, eds. 2007; Schlanger y Aitchison 2010; Gnecco y Lippert, eds. 2015).

El proyecto de investigación

Desde el 2007 he hecho investigación sobre la situación de la arqueología en Canadá, Australia y Japón (Zorzin, 2010, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014a, 2014b). En este artículo sintetizo algunos de los resultados de esos proyectos. Estos resultados se basan en trabajo de campo etnográfico que llevé a cabo durante un período de 15 meses y que involucró a 117 entrevistados, muchos de los cuales son actores claves en cada país, estado y provincia.

Aunque la arqueología comercial o de contrato tiene características distintivas en los contextos nacionales que presento, se desarrolla dentro de la mentalidad neoliberal económica que se afianzó en la década de los ochenta. Uno de los ejemplos más avanzados de esta conversión de la arqueología de contrato a los principios neoliberales se observa en Victoria (Australia), donde no solo la totalidad del trabajo de campo arqueológico ha sido privatizada, sino que una nueva ola de reformas estatales ahora tiene la intención de transferir esta mentalidad económica, codificada legalmente, a los pueblos indígenas.

En Quebec ocurrió el mismo proceso con la privatización de la arqueología de contrato. El contexto histórico particular de esa provincia de habla francesa, sin embargo, creó las condiciones para la implementación de un sistema de intermediación para la arqueología en el que su práctica es controlada por empresas privadas, pero en el cual el gobierno provincial sigue desempeñando un papel importante (sobre todo financiero); además, han surgido alternativas locales, incluyendo experiencias orientadas al público, a veces controladas por los indígenas.

Por último, y en contraste con los casos anteriores, en Japón todavía funciona un sistema estatal —Francia, Italia y, parcialmente, Alemania y Grecia son otros ejemplos

notables—. Sin embargo, un examen más detenido revela que la misma tendencia hacia la privatización está ocurriendo en Japón, aunque no de una forma directa y estructural. Esta conversión se ha efectuado a través de reformas internas que han transformado los servicios públicos arqueológicos en proveedores de servicios público-privados, estrechamente ajustados a las necesidades de los empresarios y del imperativo de crecimiento financiero.

UNA AVANZADA ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA MERCANTILIZADA: EL CASO DE VICTORIA (AUSTRALIA)

La organización actual de la arqueología en Victoria es el resultado de la transformación progresiva del marco jurídico, de acuerdo con los principios neoliberales globales iniciados en la década de los ochenta (Zorzin 2012:75-76), y de un fuerte marco teórico procesual (Smith 2004:34). Esta combinación de factores ha dado como resultado la creación de un cierto tipo de gubernamentalidad o “tecnología de gobierno” (Smith 2004:184) que se materializa en la creación de una “próspera industria arqueológica” privatizada (Ulm *et al.* 2013:38). Los 35 arqueólogos que entrevisté en Victoria (de un total de 200 activos en el estado) en el 2012 señalaron que esta “industria” se encuentra en crecimiento y que es rica y prolífica (en términos de generación de datos e informes); sin embargo, también me dijeron que enfrenta desafíos relacionados con el cumplimiento de las normas y la ética de su trabajo. Los arqueólogos no han tenido espacio para considerar las implicaciones socioeconómicas, simbólicas e históricas de sus actividades sobre la vida diaria de las personas, ya sean blancas, aborígenes o de otra descendencia étnica (Zorzin 2012:75-76).

Marcos legales y reformas neoliberales en Victoria

La arqueología de campo en Victoria fue privatizada en 1983, a raíz de la reestructuración de la economía de Australia y de la adopción de nuevos principios rectores de gestión relacionados con reducción de costos y “eficiencia óptima” (Western *et al.* 2007:401-402; Zorzin 2012:75-76). El Servicio Arqueológico de Victoria fue dividido en dos entidades: (a) una agencia estatal de gestión del patrimonio que consta de dos departamentos: Asuntos Aborígenes de Victoria (AAV, por sus siglas en inglés), que trata con la arqueología aborígen, y Patrimonio de Victoria (HV, por sus siglas en inglés), que se ocupa de la arqueología colonial y del poscontacto, pero con “funciones administrativas y reguladoras” limitadas (Colley 2002:103); y (b) una industria de arqueología

de campo estrictamente privatizada (Zorzin 2012:76). Como resultado, la arqueología comercial entró a dominar el sector. Para el año 2012 alrededor del 77% de los puestos de trabajo en arqueología se encontraba en las empresas privadas que, en ese momento, realizaban casi todas las excavaciones arqueológicas en el estado.

El patrimonio aborígen constituye entre el 90 y el 95% del volumen de estas excavaciones (Zorzin 2014a). Puesto que los rastros materiales aborígenes son relativamente escasos, como me explicó un arqueólogo consultor profesional, la arqueología del paisaje puede desempeñar un papel clave en la comprensión de los 50.000 años de historia de Australasia; sin embargo, este enfoque apropiado no es compatible con los nuevos principios rectores de gestión de la AAV. Patrick (de casi 40 años y veterano en una empresa privada) señaló:

Conocí a un funcionario de alto rango de la AAV y tuve una discusión con él tratando de explicarle que a nosotros [los arqueólogos] nos gustaría utilizar un enfoque de paisaje, un enfoque de no-sitios [sitios que, a menudo, se definen o dividen artificialmente de acuerdo con las necesidades modernas del cliente], porque pensamos que se adapta mejor a la arqueología aborígen [...] porque ésta se encuentra justo en el paisaje.

En el contexto de integración de las poblaciones aborígenes a la sociedad capitalista de Australia (Mercer 2001:422-445), que tuvo lugar junto a la desregulación de la economía, la implementación de la nueva Ley de Patrimonio Aborígen (AHA por sus siglas en inglés) (2006) estuvo dirigida a sintetizar estas dos aspiraciones en Victoria. La ley pretende aumentar la protección del patrimonio aborígen y el empoderamiento económico, en tanto que facilita el desarrollo a través de la “racionalización” de la arqueología, creando las condiciones para que, supuestamente, se beneficien los grupos aborígenes, los arqueólogos y los empresarios. Sin embargo, los entrevistados piensan que la ley ha ampliado el sector de consultoría en manejo del patrimonio (hasta el 15.5% de la fuerza de trabajo activa en temas de patrimonio en el 2012) y ha incrementado el número de arqueólogos en las industrias de ingeniería (hasta el 30% de la fuerza laboral del sector) que trata, directamente, con la arqueología como una rama menor de los proyectos de desarrollo.

Oficialmente, la nueva legislación pretendía “tomar medidas para la protección del patrimonio cultural aborígen” (Kiriama 2012:68), pero, en realidad, consolidó el sistema “quien contamina paga”. Los empresarios adquirieron más responsabilidades sobre la “protección” de los sitios —bajo la amenaza de una “orden de suspensión” del Ministerio y de una multa de un millón y medio de dólares australianos si los sitios son dañados o destruidos (Kiriama 2012:69)—, y deben pagar los costos de las actividades

arqueológicas, a cambio de una mayor “certeza” en los procesos de desarrollo. Esta “certeza” se consigue haciendo de la arqueología un “proceso cuantificable”, es decir, un proceso que puede ser planificado y presupuestado por adelantado (Kiriama 2012:71). Aunque esta reforma legal estaba dirigida a dar un mayor soporte sociocultural y financiero a los grupos aborígenes (Kiriama 2012:73), aumentó, paradójicamente, el volumen de las actividades de los arqueólogos no aborígenes y de los asesores patrimoniales y generó mayores ingresos a las empresas que se ocupan de la arqueología y el patrimonio.

Efectos de las reformas sobre las comunidades aborígenes

A pesar de los esfuerzos de la AAV, la reforma no tuvo éxito en involucrar la participación de los aborígenes en estos procesos (Kiriama 2012:71). Más bien, las empresas no aborígenes continuaron haciendo arqueología financiada por los proyectos de desarrollo. Sin embargo, a mediados del 2012 se discutió una revisión de la ley en un intento por reducir el crecimiento artificial de las actividades arqueológicas, pero es probable que promueva, aún más, la corporativización de las comunidades aborígenes, con el fin de que estas puedan “disfrutar de los beneficios económicos de su patrimonio” (Kiriama 2012:73).

Algunas comunidades aborígenes ya han creado “corporaciones”. Este espíritu emprendedor, sin embargo, va mano a mano con lo que algunos activistas y académicos aborígenes han descrito como la tendencia (alentada por el gobierno blanco y sus aparatos) hacia la privatización de sus reclamos de tierras a expensas de los principios y las ideas de la comunidad, exponiéndolas a un “enorme riesgo de un segundo despojo” (Foley y Anderson 2006:100). En un futuro próximo se espera que las comunidades aborígenes (pero ¿quién en la comunidad y para beneficio de quién?) tomen el control del manejo del patrimonio y que lo gestionen como un negocio, facilitando la apropiación de su territorio al contribuir a su “desarrollo” a cambio de una compensación monetaria. Tom, aborígen y arqueólogo de unos 50 años de edad, señaló:

Una cosa de la cual muchos de nosotros [los aborígenes] nos quejamos es que no tenemos el derecho de controlar esos sitios. No podemos volver allí cuando está todo hecho [desarrollado]. Puedo caminar allí como individuo pero tan pronto como los proyectos de desarrollo han terminado el consejo local lo puede arrasar. Todo ese tipo de cosas continúa. No tenemos el derecho de controlarlo.

Es probable que este proceso facilite la “asimilación” de las comunidades aborígenes por la sociedad australiana, a través de los principios del capitalismo neoliberal.

El activista y académico aborigen Gary Foley, profesor en la Universidad de Victoria (Melbourne), ha sido muy crítico con respecto a las implicaciones del llamado proceso de “reconciliación” controlado por las agencias gubernamentales de Australia, como la AAV. Para él es urgente “escapar del ciclo perpetuo de ‘soluciones’ impuestas por los blancos a nuestros problemas” (Foley 1999). Tom comentó en una conversación con Craig, un arqueólogo de unos 30 años que trabaja para un grupo de aborígenes:

Por ahora es muy bueno para la comunidad [aborigen]. En realidad estamos haciendo dinero. El problema es que en 20 años no habrá mucha tierra para desarrollar. Ya no tendremos un ingreso...

Craig: ...y ¿qué hemos aprendido?

Tom: después de 40 años la organización habrá ganado dinero pero al final de eso ¿qué obtenemos? No tenemos información.

La economía política de la arqueología en Victoria: la colonización en marcha

Muchos arqueólogos australianos eligieron luchar contra lo que veían como un debilitamiento de su disciplina “científica”, manteniendo distancia de la esfera pública, en especial de las comunidades aborígenes. En la comunidad arqueológica de Victoria es común escuchar comentarios como los realizados por Gladia, una arqueóloga consultora independiente de unos 30 años, con quien hablé en el 2012:

La arqueología [aquí en Australia] es completamente científica [...] Usted puede volver a Gordon Childe y a los grandes arqueólogos australianos pero, en realidad, como disciplina la arqueología de Australia es hija del procesualismo. También es hija de la economía política de la década de 1980. Tiene un conjunto profundo de ideas científicas; además, creo que se ha rodeado de barreras porque el ambiente político [poscolonial] en el que se encuentra es tan difícil. Es más fácil decir: vamos a ser una ciencia ¡porque la ciencia es objetiva!

Por otro lado, varios arqueólogos australianos han abrazado causas aborígenes o se han ocupado de las implicaciones políticas de su trabajo y de sus obligaciones éticas con los aborígenes (Byrne 1996; David y Barker 2006; Lilley 2000; Murray 1992; Smith y Wobst, eds. 2005). En la actual configuración de la arqueología en Victoria, sin embargo, y a pesar de los progresos realizados, son arqueólogos principalmente blancos quienes han “tripulado” las empresas arqueológicas y la AAV, una situación política tensa que es perjudicial para la población aborigen (Zimmerman 2008:55-56). Las voces y opiniones aborígenes apenas se escuchan o, como he señalado, cada vez están más contenidas

dentro de una nueva formación corporativa de su identidad. A pesar de las intenciones de muchos arqueólogos y de algunos proyectos pioneros, genuinamente colaborativos, se perpetúa un proceso de neocolonización. Peter, un académico y activista aborígen, de unos 60 años, señaló: “Los antropólogos y arqueólogos, a mi modo de pensar, se establecieron como porteros y como expertos sobre nosotros y sobre lo que somos [...] y tratan de mantener su control y dominio sobre nosotros”. Hoy en día, a través de la AHA, la arqueología ha relocalizado a los grupos aborígenes en la esfera neutra del manejo del patrimonio cultural, situada dentro de un discurso tecnocrático de “ciencia objetiva”, de conformidad con los requisitos sociopolíticos capitalistas de neutralidad y con el principal objetivo de generar ganancias, consideradas progresistas y beneficiosas para todos.

En combinación con la tradición procesual de la arqueología en Australia, la Ley de Patrimonio Aborígen ha fomentado el desarrollo de un fuerte sector comercial arqueológico en Victoria, profundamente arraigado en la economía de mercado y orientado a la generación de ganancias (para las empresas arqueológicas y las corporaciones aborígenes) y a la reducción de costos (para los empresarios), dejando pocas alternativas a los arqueólogos. Daniel, empleado público de unos 40 años, señaló:

La buena noticia [...] es que la profesión, en comparación con Canadá, donde está en quiebra y donde no hay mucho dinero, está en buena forma. El modelo de Victoria funciona muy bien en términos financieros. Eso es un problema porque la gente se dio cuenta: “¡Puedo hacer medio millón de dólares este año!” Cada vez que alguien me llama y dice “¿Puede usted trabajar para mí?” le digo “Sí” y me paga bien por hacer ese trabajo. Por supuesto, al final de un proyecto él [el gerente de la empresa arqueológica] tiene la opción de llevar a otro o a la oficina para hacer la investigación, escribiendo los resultados de los trabajos anteriores [...] pero no lo hará a menos que tenga que hacerlo. No existe un sistema que los obligue a hacerlo. El dinero está ahí pero, en cierto modo, el dinero hace que el problema empeore porque hay menos incentivos y menos tiempo para hacer las cosas. Como arqueólogo uno es consciente de lo que debería estar haciendo: educar a la comunidad, devolver los resultados a la comunidad [...] y también, para los arqueólogos, conseguir ese cumplimiento y satisfacción laboral.

A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos, la AAV y las comunidades aborígenes que participan, la actual estructura legal y económica en la que se incrusta la arqueología parece haber sido perjudicial para los arqueólogos y los aborígenes. Hoy en día, quienes se benefician (o pierden menos) con la reconfiguración de las estructuras arqueológicas y patrimoniales parecen ser los empresarios, que están obteniendo “certeza” a cambio de la inyección de capital en varios grupos de interés (como indicó Daniel). Al final,

las comunidades están profesional y éticamente insatisfechas, pero, sin embargo, son silenciadas por las perspectivas de beneficio económico y por la promesa de bienestar personal y comunitario.

EL SISTEMA ARQUEOLÓGICO SEMIPRIVATIZADO EN QUEBEC (CANADÁ)

Al igual que en Victoria, la forma de las estructuras arqueológicas actualmente en vigor en la provincia de Quebec es el resultado de reformas neoliberales globales que se introdujeron a finales de la década de los setenta en Canadá (Gattinger y Saint-Pierre 2010:280-283), así como de la teoría procesual dominante en arqueología. Esta combinación hizo la tecnificación y la mercantilización de la práctica arqueológica compatible con el sistema económico capitalista (Carman 2002:190), el cual buscaba crecer a través de nuevos mercados, nuevos beneficios y nuevos empleos (Gattinger y Saint-Pierre 2010:285). Sin embargo, una diferencia fundamental entre los dos sistemas se origina en el contexto histórico en el que se ha desarrollado la arqueología en Quebec. En la década de los sesenta el aumento de las aspiraciones nacionalistas de la población de habla francesa, demográficamente dominante, así como las reivindicaciones de reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en el territorio, puso a la arqueología en un entorno sociopolíticamente desafiante. A principios de la década de los setenta estas tendencias, a veces en conflicto, dieron nueva forma a la legislación de la provincia y a sus orientaciones culturales (Gattinger y Saint-Pierre 2010:283-284) y establecieron la arqueología, aún más firmemente, en un marco procesual aislado socialmente y, por lo tanto, “más seguro” (Zorzín 2011a:128). En Quebec y en Victoria la arqueología, desarrollada en un contexto poscolonial, comparte la mayor parte de los problemas que describí en relación con el manejo del patrimonio cultural aborígen.

La especificidad del contexto histórico de Quebec ha hecho a la arqueología menos vulnerable a las presiones de la privatización. Como resultado, la provincia conserva una estructura gubernamental para la arqueología (aunque en rápido declive) y alternativas a las empresas arqueológicas privadas (como cooperativas y organizaciones sin ánimo de lucro); incluso, han aparecido organizaciones culturales indígenas sin ánimo de lucro que tratan, directamente, con la arqueología (Zorzín 2010:5). Sin embargo, este “enfoque cuasineoliberal” (Gattinger y Saint-Pierre 2010:285) o posición “intermedia” en Quebec —que no es totalmente parte del mercado, pero tampoco está controlada por el Estado— ha hecho vulnerable a la arqueología a las presiones de la economía de mercado. Por eso, la arqueología en Quebec (a) no ha tenido éxito, hasta ahora, en asegurar condiciones adecuadas de trabajo, salarios sostenibles y perspectivas de futuro para la

mayoría de sus practicantes (Zorzin 2010:11-13); (b) ha desilusionado a muchos arqueólogos de campo con respecto a su capacidad para lograr resultados significativos; y (c) ha limitado sus resultados a informes técnicos, en gran medida desconocidos y generalmente inaccesibles (Zorzin 2011a:130-131, 2014b).

La integración capitalista de la arqueología: el retiro del Estado y la reducción de los procesos

En Quebec el proceso que llevó a la privatización de las actividades arqueológicas comenzó en algún momento entre 1979 y 1981, coincidiendo con la primera ola de conversión de la economía canadiense a las políticas de “libre empresa”, que enterró el keynesianismo para siempre (Ernst 1992:126-127). Por ejemplo, la organización sin ánimo de lucro Société d’Archéologie et de Numismatique de Montréal (SANM), que había estado a cargo de todas las actividades arqueológicas en el casco histórico de Montreal, fue disuelta en 1992 para dar paso a las nuevas oportunidades del mercado arqueológico en el marco de proyectos de desarrollo (Zorzin 2011b:77).

Esta lógica se tradujo en la constitución de un sistema dual: (a) un órgano de gestión del patrimonio (compuesto por un grupo fragmentado de arqueólogos en ministerios, municipios y corporaciones semipúblicas); y (b) empresas privadas de arqueología, como en Australia, estructuradas de conformidad con el competitivo sistema de licitación pública de Quebec y localizadas, sobre todo, en zonas urbanas (Zorzin 2011b:94-97). Esta transformación dio lugar a una posición dominante de la arqueología comercial (Zorzin 2010:6). Sin embargo, es exclusivo de Quebec el hecho de que prevaleciera el sistema “quien contamina paga”, pero sigue siendo el Gobierno, a través de diversos ministerios, la ciudad y los consejos locales, quien cubre hasta el 80% de los costos generados por la arqueología (Zorzin 2011a:123), ya que la mayoría del desarrollo tiene que ver con importantes proyectos de utilidad pública. Además, desde el 2006 la elección del gobierno de Harper se tradujo en la reducción de los servicios arqueológicos y patrimoniales federales²: la Ley C-38 redujo a casi nada, y en una escala nacional, el sistema público de arqueología y conservación (Ross 2012). Paralelamente, en el 2012 la anticuada legislación de Quebec (de 1972) fue reformada con criterios comerciales y de mercado, con el pretexto de simplificar y modernizar la normativa —pero, ¿de acuerdo con los intereses

2 Parks Canada Agency Act (2012). Modificación de S.C. 1998. Ministerio de Justicia, Ottawa. Véase <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-o.4.pdf>

de quién?—. Las normas reformadas se centraron en una protección “sostenible” del patrimonio y en la integridad del “paisaje” y transfirieron las responsabilidades patrimoniales de la provincia a las autoridades locales³, con lo cual pusieron en riesgo la asignación de la responsabilidad a las comunidades locales, las cuales no tienen la competencia ni los medios financieros para llevar a cabo actividades arqueológicas satisfactorias, éticas y no destructivas mientras resisten la presión de los empresarios. La nueva ley podría contribuir a un mayor debilitamiento de las actividades arqueológicas, al reducir la industria a un “sistema privatizado cuasiautorregulado” (Zorzin 2011a:126). A principios del 2014 esta reforma ya había demostrado ser ineficaz contra las presiones de los empresarios y los mandatos del crecimiento. Por ejemplo, en Quebec City la ley “reforzada” fracasó en la protección de paisajes relacionados con un antiguo cementerio (San Patricio) en contra del lucro de los empresarios (Asselin 2014).

La aparición de alternativas

En Quebec los arqueólogos consultores (en condiciones de vida precarias, tal vez incluso como resultado de ellas) producen los mejores resultados alcanzables en el entorno político-económico en el que se han desarrollado desde la década de los ochenta. Sin embargo, como señalé antes, muchos de ellos han llegado a considerar su profesión como alienante. En el 2008 el 73% de las actividades arqueológicas fue hecho por empresas privadas (Zorzin 2010:7), pero la ironía del sistema es que la mayoría de los costos de la arqueología es asumida por los ciudadanos que pagan impuestos. En cambio, las cooperativas arqueológicas, las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones culturales indígenas están activas y son una importante alternativa de organización socioeconómica para la arqueología, a la que dan voz y una visibilidad sustancial. Aunque en el 2008 representaban solo el 9% de los puestos de trabajo en Quebec (Zorzin 2010:6), estas alternativas parecen más beneficiosas para el público que para sus contrapartes privadas: por ejemplo, actualmente la arqueología es muy popular entre la población de la provincia, como indica el gran éxito del “mes de la arqueología” organizado cada agosto por la organización sin ánimo de lucro Réseau Archéo-Québec (Auger 2014). Organizaciones sin ánimo de lucro como Artefactuel o Archéo-08 han dejado claro que un resultado arqueológico significativo y beneficioso puede y debe ser

3 Véase <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2011C21A.PDF>

generado en beneficio del mayor número posible de personas; esta consideración está excluida del mandato de la mayoría de las empresas privadas —excluida de los imperativos económicos, pero, sin embargo, incluida en los imperativos éticos y personales de los arqueólogos—. David, gerente de una cooperativa arqueológica, de unos 30 años (uno de mis 40 entrevistados en Quebec) dijo:

El patrimonio es un asunto de la comunidad y pertenece a todos nosotros. Estamos trabajando para toda la población de Quebec para integrar nuestro largo y complejo patrimonio [...] Si no tuviéramos archivos en unos pocos siglos nadie sabría quién llegó primero aquí y todos estarían demasiado confundidos para entenderlo. Lo que debería ser útil hoy en día es convencer a la gente de que incluso si el patrimonio se refiere a “otros” sigue siendo interesante y esencial para la comprensión de lo que somos. Es parte de la historia de nuestro territorio y esto es lo que estamos tratando de posicionar como cooperativa.

EL CASO DE LA ARQUEOLOGÍA JAPONESA: ¿TODAVÍA ES UN MODELO ESTATAL?

En Japón la arqueología como “investigación científica” comenzó a mediados del siglo xx bajo la influencia occidental (Barnes 1999:28-29; Edwards 2005:36; Ikawa-Smith 2010:299). Muy pronto, sin embargo, comenzó a desarrollarse por su cuenta y generó dos tradiciones académicas específicas: la “escuela de la universidad” (incrustada en las ciencias naturales) y la “escuela del museo” —también llamada “tradición histórico-cultural” o “escuela Kokugaku” (Kyujitai: 國學 / Shinjitai: 国学; iluminado), un estudio nacional con miras a un renacimiento histórico nacionalista—. En la década de los setenta del siglo xix esta última llegó a ser dominante (Ikawa-Smith 2011:678) y sirvió para fijar la identidad de la nación en un periodo de crecientes aspiraciones imperiales y de lucha contra la dominación occidental (Mizoguchi 2006:60). En 1945, después de la caída del imperio y de la ideología imperial, llegó a su fin la construcción de la “gran narrativa” para Japón, incluyendo la “escuela Kokugaku” (Edwards 2005:45; Hudson 2007:14). En cambio, “la historia del pueblo” o “movimiento democrático”, dentro de un marco marxista, empezó a predominar y animó un enfoque no elitista y empírico (Fawcett 1995:234). Sin embargo, incluso con este cambio de paradigma, la arqueología todavía estaba centrada en la identidad, la autenticidad y la pureza japonesas (Mizoguchi 2006:72), mientras enfatizaba la historia de los “japoneses comunes” (Hudson 2007:14). En este período se creía que una nueva gran narrativa nacional podía ser fabricada mediante la acumulación de datos sólidos producidos por el trabajo de campo. Por eso la

arqueología estaba profundamente arraigada en un enfoque descriptivo y evitaba, en la medida de lo posible, los “prejuicios” ideológicos (Ikawa-Smith 2011:685-686).

A pesar del hecho de que el movimiento “la historia del pueblo” fue muy influyente en todo Japón hasta la década de los setenta (con miles de voluntarios haciendo trabajo de campo), la profesionalización y burocratización de la arqueología, que comenzaron en la década de los cincuenta, rápidamente socavó estos esfuerzos y creó una distancia cada vez mayor entre el patrimonio y el pueblo. Más aún, la profesionalización dio lugar a la creación de un servicio arqueológico público en 1971 que ha crecido constantemente desde entonces: en el año 2000 habían 7.111 arqueólogos y unos 50.000 obreros trabajando para el gobierno (figura 1), en un país de 127 millones de habitantes (Keally 2003), antes de una reducción gradual de alrededor del 20% en la última década (Agency for Cultural Affairs 2013:1).

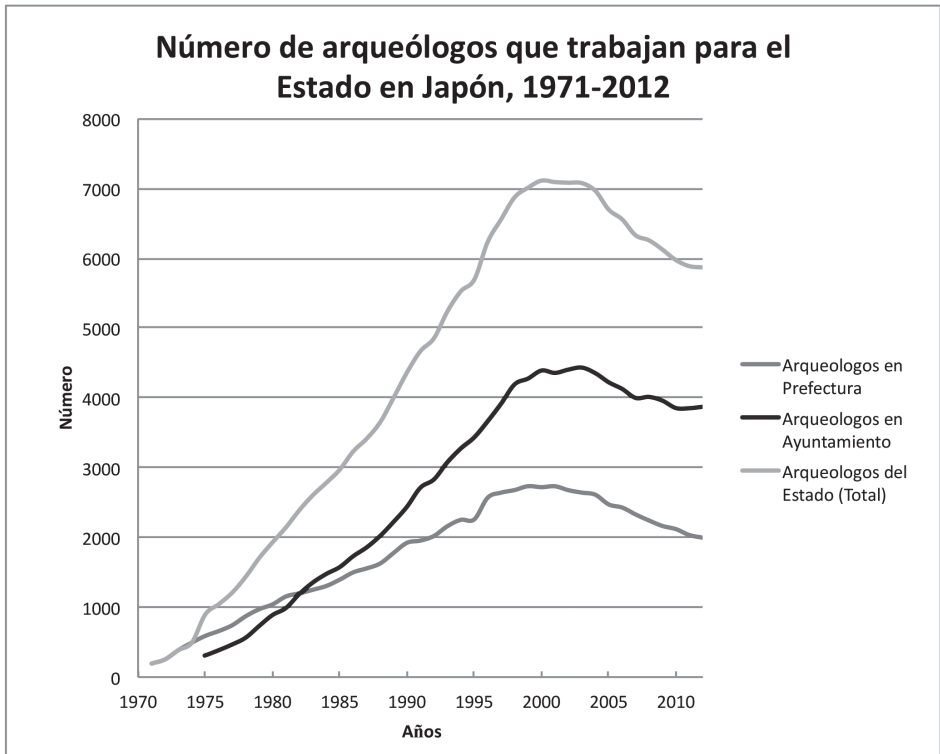


Figura 1. Número de arqueólogos que trabajan para el Estado en Japón, 1971-2012

Fuente: Elaboración propia con base en Agency of Cultural Affairs 文化庁 (2013:1).

Arqueología estatal en el nuevo paradigma neoliberal

Hasta el año 2000, y a pesar de las reformas económicas que Japón ha implementado desde la década de los ochenta a través de la privatización (Vogel 2006:26-30), la arqueología seguía siendo un actor importante en el aparato estatal, en la misma época en que era disuelta en otras naciones capitalistas avanzadas. La razón de esta peculiaridad japonesa debe ser entendida a través de aspiraciones internas diferentes, a veces contradictorias. Los arqueólogos, independientemente de sus inclinaciones nacionalistas, marxistas o aparentemente apolíticas, se han enfocado en la unidad y singularidad del pueblo japonés; por eso la arqueología aún es un significante de identidad en la sociedad japonesa (Fawcett 1995:245; Mizoguchi 2006:23). El partido gobernante (Partido Liberal Democrático [PLD], en el poder desde 1955, con excepción de un breve periodo de 11 meses), neoliberal y neonacionalista, nunca ha amenazado el sector arqueológico gubernamental. Desde la década de los ochenta, sin embargo, y más claramente desde el año 2000, han cambiado las condiciones para hacer trabajo de campo. Actualmente la arqueología parece estar a “medio camino” entre un servicio público y una provisión de servicios comerciales. En una de las 42 entrevistas que realicé en Japón, Aguri, un eminente arqueólogo de unos 50 años de la región de Kansai, expresó sus puntos de vista sobre las empresas privadas de arqueología y se refirió a su percepción de lo que puede suceder en el futuro:

Últimamente el dinero y los empleados están descendiendo en la arqueología japonesa. Para mantener el sistema como es, una de las soluciones aplicadas fue ahorrar dinero en las excavaciones, haciéndolas más eficientes (hoy tenemos que justificar cómo usamos los impuestos). La otra solución para las autoridades locales, que emplean a especialistas con contratos indefinidos, fue reducir el número de arqueólogos permanentes [desde el 2001]. Por eso es imposible que los arqueólogos hagan todas las excavaciones correctamente. Por encima de todo, los empresarios quieren proceder a la construcción gastando el menor dinero posible [en arqueología] y hacen mucho cabildeo para lograrlo. En el futuro esto va a influir, profundamente, en la manera como utilizan las empresas privadas de arqueología. Hoy, sin embargo, se supone que cuando los empresarios contratan una empresa de arqueología comercial, antes de un proyecto de construcción deben hacer “arqueología de rescate”. Pero eso no debería significar la “destrucción sistemática del patrimonio después de la excavación”. Más bien debe implicar preservar y promover los restos y difundir el conocimiento generado. Por lo tanto, cuando un empresario hace excavaciones y

descubre artefactos o sitios muy importantes creo que el gran problema será ver cómo la empresa arqueológica contratada puede garantizar que va a excavar y conservar los restos correctamente. [En cambio], en el sistema de rescate arqueológico [gubernamental] existente, si un sitio es reconocido como muy significativo, tenemos la oportunidad de discutir su potencial de conservación [...] Todavía tenemos oportunidades para pensar el destino de los sitios importantes y eso también significa que el gobierno local se involucra en el proceso. Si este proceso tuviera que ser atendido por la arqueología comercial, el empresario pediría a los arqueólogos que terminaran de excavar en el sitio lo más rápidamente posible y con una cantidad limitada de dinero. No habría oportunidad de discutir la importancia del sitio. Esto es lo que más me preocupa [del actual proceso de privatización de la arqueología en Japón].

Desde 1991 la endémica crisis económica y financiera —los “20 años perdidos” (失われた20年, *Ushinawareta Nijūnen*)— ha acelerado la presión sobre las reformas internas, en busca de una mayor privatización o semiprivatización mediante programas neoliberales de transformación del Estado como la “Agencia Administrativa Incorporada” (IAI-独立行政法人, *Dokuritsu gyōsei hōjin*). Durante la última década las unidades de arqueología de los municipios y las prefecturas han sido discretamente reducidas o, incluso, disueltas (Kikuchi 2011:1). Los arqueólogos han señalado que la reducción de costos presiona los servicios arqueológicos dirigidos por el Estado, hasta el punto de que usar “empresas arqueológicas privadas” se convertirá en una solución obvia e inevitable para compensar la falta de tiempo y los medios disponibles para esta labor (Tanaka 2011:1); pero, como Okamura (2014:2483) señaló, la obtención de datos ahora parece ser de mejor calidad porque las empresas privadas utilizan métodos nuevos y costosos.

A pesar de la existencia de una organización pública dominante, en Japón la arqueología experimenta un proceso de privatización parcial, a través de la creación de hasta 70 empresas temporales (que incluyen personas de todos los sectores y que muchas veces se crean solo para hacer una propuesta para un contrato específico y luego se disuelven) y por medio de una reforma neoliberal de los servicios estatales. Hoy en día el servicio arqueológico del Estado ya no sirve, necesariamente, los intereses públicos. La creciente participación de la lógica del capital, que implica “racionalización” (es decir, acciones que sean justificadas cuantitativamente), eficiencia (favoreciendo la velocidad de entrega) y “optimización” de las tareas (para reducir costos), creó las condiciones para que los arqueólogos de campo estén sometidos a una gran presión y enfrenten dilemas éticos (Okamura 2014:2482-2485).

ARQUEOLOGÍA DISTÓPICA: LA PRIVATIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA PRÁCTICA DE LA ARQUEOLOGÍA

Esta breve presentación de tres diferentes contextos nacionales me invita a formular algunas observaciones adicionales sobre las consecuencias generales de la privatización de la arqueología de campo. En primer lugar, uno de los imperativos fundamentales de la economía de libre mercado es que la competencia entre las empresas arqueológicas crea una presión económica sobre los administradores para hacer propuestas más baratas que las de sus competidores y así ganar contratos. En Victoria, sin embargo, se sabe que los consultores bien establecidos han hecho enormes esfuerzos para definir y utilizar estándares metodológicos muy refinados desde la creación de sus empresas en la década de los noventa. Sin embargo, la producción de resultados de alta calidad tiene un costo financiero y necesita tiempo. La Ley de Patrimonio Aborigen del 2006 está reduciendo estos estándares de manera significativa (un efecto inesperado de su aplicación) mediante el fomento de la entrada de nuevos actores en el mercado, con el fin de hacer frente a la creciente necesidad de conocimientos arqueológicos provocada por la puesta en marcha de la legislación. Estos jugadores, sin la experiencia y las competencias para llevar a cabo su trabajo de manera adecuada, amenazan con disminuir la calidad de los proyectos, apresurar el proceso y registrar defectuosamente la información clave. Algunos de estos problemas son ilustrados por los testimonios de Daniel, un funcionario de unos 40 años de la AAV: “La calidad de los informes es muy inconsistente últimamente. Hay consultores que trabajan toda la noche para producir el mejor resultado porque eso es lo que hacen [...] y hay otros que quieren pasar al próximo proyecto lo más rápidamente posible”. Como dijo Ron, otro funcionario de la AAV, de unos 30 años:

Hay gente en la industria que tiene una verdadera pasión, supongo que para la perspectiva más amplia. Dan ese paso adicional (interpretativo, quiero decir), mientras que otras personas, ya sabes [...] es un trabajo muy bien pagado para alguien que sólo tiene una cualificación básica en ese campo a una edad temprana.

En segundo lugar, la arqueología (comercial) organizada como negocio es extremadamente vulnerable a las fluctuaciones macroeconómicas. En el caso de una desaceleración de la economía, las firmas consultoras tendrán que hacer recortes drásticos porque dependen casi exclusivamente del sector del desarrollo (empresarial o público). Este tipo de recorte sucedió hace poco en la arqueología comercial en Irlanda (Chapple 2014) y en el Reino Unido (Aitchison y Rocks-Macqueen 2013:20-21. Figura 2) y también

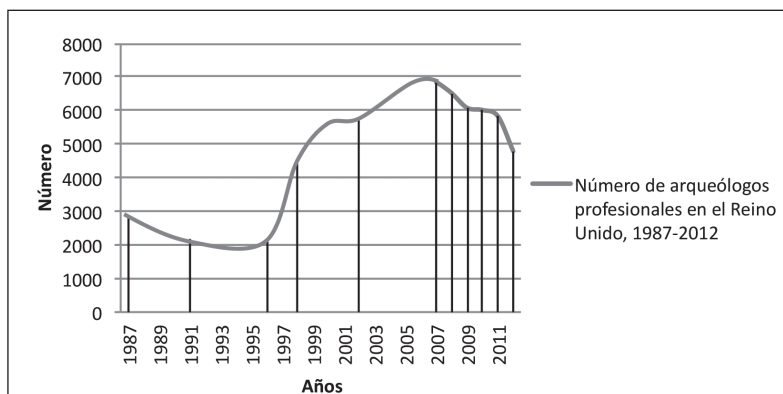


Figura 2. Número de arqueólogos profesionales en el Reino Unido, 1987-2012

Fuente: Elaboración propia con base en Aitchison y Rocks-Macqueen (2013:20-21).

en los sistemas públicos, como el federal en Canadá (Ross 2012). Los recortes tienen consecuencias dramáticas para la comunidad arqueológica y para la protección y conservación del patrimonio. Esto pone en duda la validez y la sostenibilidad a largo plazo de la lógica de la rentabilidad y la reducción de costos en las actividades patrimoniales.

En tercer lugar, desde la perspectiva del trabajo de campo, la profesión siempre ha sido marginal y ha sido percibida como costosa e, incluso, como perjudicial para el crecimiento económico (Zorzín 2011a:127). Como resultado, los arqueólogos rara vez ganan salarios decentes —no los pueden justificar en términos de creación de crecimiento y riqueza desde un punto de vista capitalista—, sobre todo en Reino Unido y Quebec (Everill 2007:123-126; Zorzín 2010:12-13). Australia es una excepción a estos patrones globales de ingresos bajos. Los sueldos de los arqueólogos en Australia se sitúan muy por encima del promedio nacional (Ulm *et al.* 2013:39), debido, principalmente, a la relativa estabilidad de la economía —relacionada con la alta demanda de recursos— y a un régimen no forzoso del manejo del patrimonio.

Cuarto, el empleo arqueológico también se caracteriza por los contratos temporales y carece de perspectivas profesionales serias (Everill 2007:132-135; Zorzín 2010:11), lo que explica los abandonos masivos de la profesión por individuos entre 30 y 40 años de edad, como se ilustra en Quebec (figura 3). Estas características son comunes en otros países occidentales

(Figuras 4 y 5). En Japón la presión económica hacia una práctica más liberal (menos protectora de los empleados) puede producir la misma situación en un futuro próximo (Zorzín 2013:12).

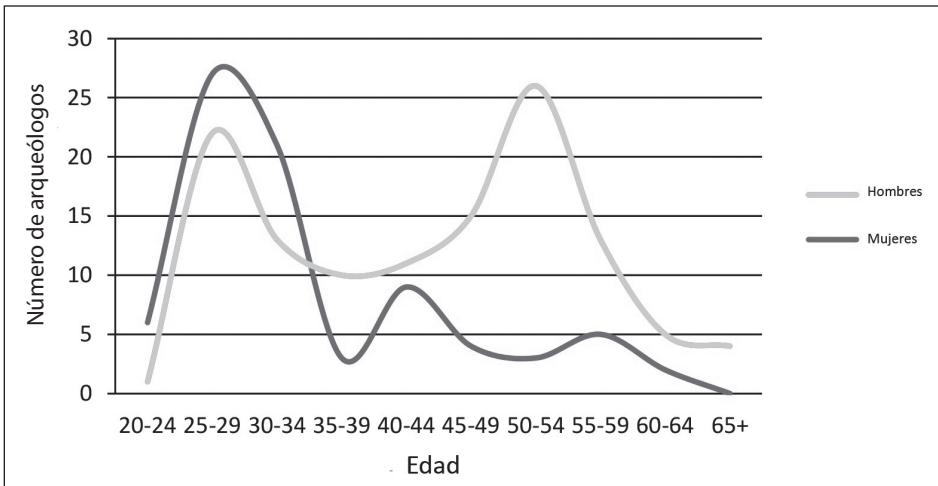


Figura 3. Edad y género de los arqueólogos en Quebec en 2008
Fuente: Zorzin (2011b:133).

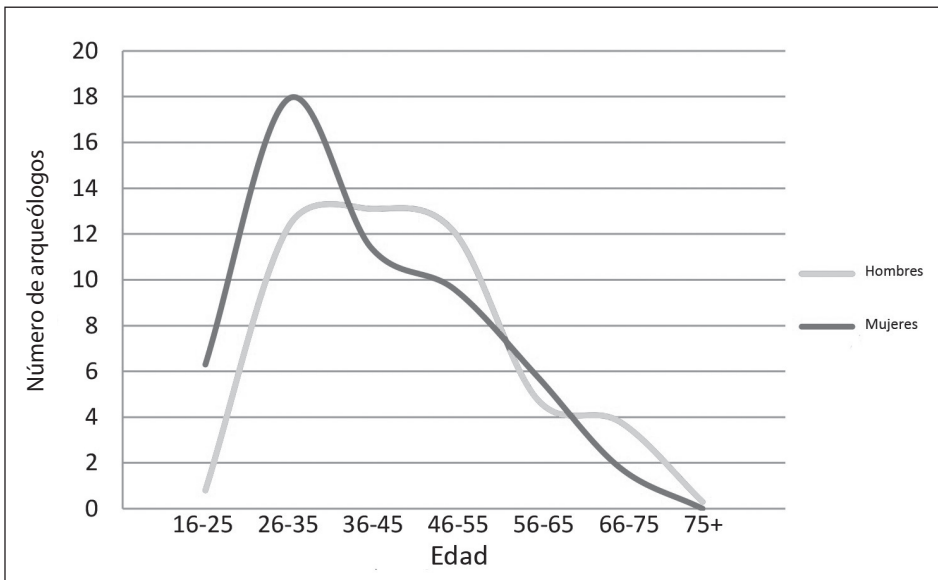


Figura 4. Edad y género de los arqueólogos en Australia en el 2010
Fuente: Elaboración propia con base en Ulm *et al.* (2013:36).

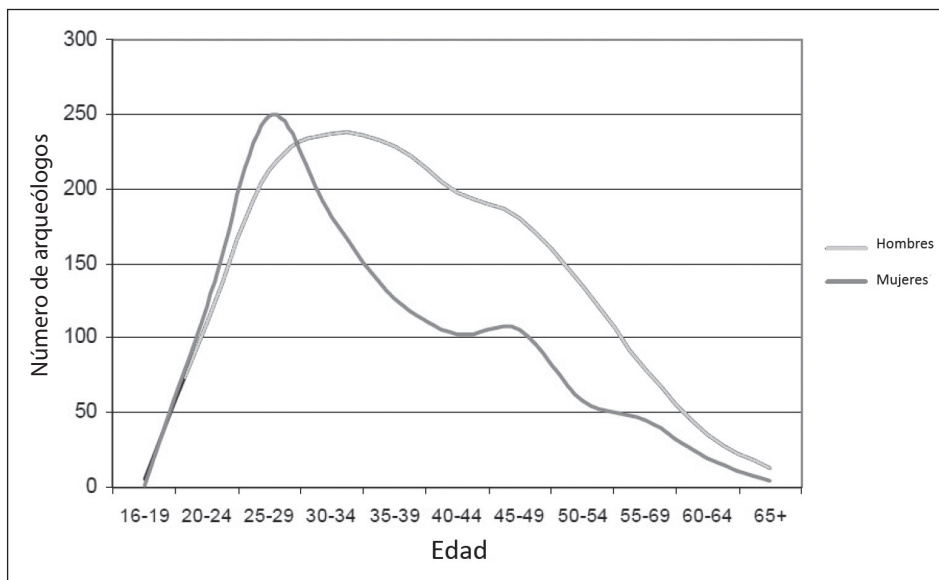


Figura 5. Edad y género de los arqueólogos en Inglaterra en el 2008

Fuente: Elaboración propia con base en Aitchison y Edwards (2008:49).

Quinto, en Quebec y en Victoria los trabajadores tienen que ser móviles y flexibles, a medida que las empresas y consultoras privadas compiten por el trabajo en la provincia. En Quebec la flexibilidad es aún mayor debido a la estacionalidad del trabajo (que implica largos periodos de desempleo en invierno y muchos descansos entre contratos en periodos más activos). Esta configuración flexible del trabajo produce una forma de vida nómada. Los arqueólogos van detrás de los contratos y, a menudo, están aislados por meses en los territorios del norte o constantemente en marcha, alojados en campamentos o moteles. Como subrayó Everill (2007:131), este tipo de vida no es necesariamente perjudicial para los arqueólogos, que por lo general disfrutan de la falta de rutina, de las actividades al aire libre y de la camaradería del trabajo de campo. Sin embargo, a largo plazo ese modo de vida (a) fragmenta el conocimiento local de los arqueólogos; (b) fragmenta su identidad como profesionales (¿en qué contribuyen al avance del conocimiento?); y (c) socava su compromiso social (¿para quién trabajan?). Muchos entrevistados expresaron un sentimiento de alienación hacia su profesión porque no están involucrados, o lo están mínimamente, con los análisis y los estudios (Everill 2007:129). Esto lleva a muchos de ellos a abandonar la profesión después de unos años de actividad, sobre

todo las mujeres (Zorzin 2014b. Véase la figura 3 para el caso de Quebec). Esta situación está poniendo la profesión en peligro, por la pérdida sistemática de habilidades en cada nueva ola de salida de profesionales relativamente jóvenes (menores de 35 años), y crea una separación interna entre una mayoría de “técnicos” jóvenes, pero calificados, quienes aplican procedimientos crecientemente estandarizados y alienantes, y una minoría de arqueólogos administradores bien informada, por desgracia separada del trabajo de campo debido a su obligación de producir rentabilidad para la empresa y para que sobreviva la comunidad profesional. En contraste, en Japón todavía existen estructuras regionales y experiencia local, pero este conocimiento y compromiso local altamente cualificados pueden estar en riesgo en los próximos años (Zorzin 2013:12; Okamura 2014:2485.). Por último, con frecuencia la arqueología ha sido instrumental en la creación de una imagen corporativa limpia mediante actividades de “lavado verde” y de “lavado ético” que están implicadas en la destrucción del paisaje (minería, proyectos hidroeléctricos y carreteras) y en la apropiación de tierras en contextos aborígenes o de primeras naciones (Zorzin 2014b).

OTRA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA ES POSIBLE FUERA DEL CAPITALISMO

Más de treinta años de experiencia acumulada en arqueología comercial por parte de profesionales, presentada aquí a través de un retrato socioeconómico limitado de arqueólogos en tres áreas diferentes del mundo entre el 2003 y el 2013, confirma las dudas sobre el proceso de privatización. ¿Cómo pueden existir la arqueología y el manejo del patrimonio fuera del capitalismo en el siglo xxi? Como señalé, ya se han hecho algunos intentos en Quebec (organizaciones sin ánimo de lucro y de primeras naciones) y en Japón (la “historia del pueblo”, desde la década de los cincuenta). Inspirado en esos experimentos, tengo la intención de recopilar y desarrollar estas ideas en futuros proyectos de investigación y publicaciones, para mostrar, finalmente, cómo construir un modelo para la arqueología comunitaria en el que la economía no sea un factor dominante, en el que la cooperación derrote la competencia y en el que el bien común supere en importancia a las ganancias.

La arqueología ha seguido la orden capitalista, imponiendo un modelo individualista de comportamiento y marginando la lógica colectiva (Kempf 2009), que ha sido representada como obsoleta, costosa e improductiva (Bourdieu 1998). El primer paso para refundar la arqueología es distanciarla de la lógica del capital impuesta a los arqueólogos en las últimas cuatro décadas. La tecnificación y la estandarización de la arqueología solo pretenden perpetuar el modelo capitalista dominante, al crear una imagen

“profesional / empresarial” limpia, de conformidad con la idea de eficiencia. Este tipo de arqueología comercial es la fetichización extrema de la profesión, una ilusión de progreso, mientras la disciplina carece de importancia científica y social. Este tipo de arqueología se ha vuelto distópica porque deshumaniza y tecnifica la práctica arqueológica, que se convierte en inaccesible y sin relación con los desafíos, preocupaciones e interrogantes contemporáneos.

La arqueología puede ser reconstruida en una nueva configuración de relaciones sociales, con la solidaridad como un elemento central. Esto se puede lograr, no solo mediante la creación de alternativas a los sistemas privatizados actuales, sino también marginando el principio de maximización de beneficios mediante reubicación del manejo del patrimonio cultural dentro de la lógica cooperativa (Kempf 2009). Esta breve síntesis pretende incentivar una reflexión a largo plazo y difusa destinada a producir modelos alternativos alejados de la competencia y de sus efectos. Aún subsiste en muchas partes del mundo un modelo no capitalista en el gobierno y la academia, pero es urgente desarrollar otras alternativas viables puesto que el modelo estatal / académico está siendo rápidamente reformado.

AGRADECIMIENTOS

Estoy particularmente agradecido con los editores, con Yannis Hamilakis y con todas las personas que participaron en esta investigación en Quebec, Victoria y Japón. También me gustaría dar las gracias a Australian Endeavour Awards (2012) y a Japan Society for the Promotion of Science (2013) por su apoyo financiero. Por último, agradezco a Philippa Currie y Maria Ali-Adib por su valiosa ayuda.

REFERENCIAS CITADAS

Aboriginal Heritage Act

2006 *Act n.º 16 de 2006*, asentido el 9 de mayo de 2006, aboriginal Affairs Victoria, Melbourne, 142p.

Agency of Cultural Affairs (Bunka-chō (文化庁)

2013 埋蔵文化財関係統計資 (平成 25 年 3 月)

Aitchison, Kenneth y Richard Edwards

2008 *Discovering the Archaeologists of Europe: United Kingdom-Archaeology Labour Market Intelligence: Profiling the Profession 2007/08*. Institute of Field Archaeologists, Reading.

Aitchison, Kenneth y Doug Rocks-Macqueen

2013 *Archaeology Labour Market Intelligence: Profiling the Profession 2012-13*. Landward Research Ltd, Sheffield.

Asselin, Pierre

2014 Le Bourbier Woodfield. *Le Soleil*, 22 de enero.

Auger, Samuel

2014 Moins de fouillis dans l'archéologie à Québec. *Le Soleil*, 6 de enero.

Barnes, Gina

1999 *The Rise of Civilization in East Asia*. Thames & Hudson, Londres.

Bergman, Christopher y John Doershuk

2003 Cultural Resource Management and the Business of Archaeology. En *Ethical Issues in Archaeology*, editado por Larry Zimmerman, Karen Vitelli y Julie Hollowell, pp. 85-97. Rowman & Littlefield Publishers, Oxford.

Bourdieu, Pierre

1998 The Essence of Neoliberalism. *Le Monde Diplomatique* (versión en inglés), diciembre.

Bradley, Richard

2006 Bridging the Two Cultures: Commercial Archaeology and the Study of Prehistoric Britain. *The Antiquaries Journal* 86:1-13

Byrne, Denis

1996 Deep Nation: Australia's Acquisition of an Indigenous Past. *Aboriginal History* 20:82-107.

Carman, John

2002 *Archaeology & Heritage. An Introduction*. Continuum, Londres.

Chapple, Robert

2014 "Oh, Margaret the Lapping Waves Are Licking Quietly at our Ankles". The fall of Commercial Archaeology in Northern Ireland. The Robert M. Chapple Blog. <http://rmchapple.blogspot.co.uk/2014/02/oh-margaret-lapping-waves-are-licking.html>

Colley, Sarah

2002 *Uncovering Australia. Archaeology, Indigenous People and the Public*. Allen & Unwin, Crows Nest.

Darvill, Timothy y Bronwen Russell

2002 *Archaeology after PPG16: Archaeological Investigations in England 1990-1999*. DOI, Bournemouth.

David, Bruno y Bryce Barker

2006 *The Social Archaeology of Australian Indigenous Societies*. Aboriginal Studies Press, Canberra.

Arqueología distópica: la implementación de la lógica del capital en el manejo del patrimonio

Edwards, Walter

- 2005 Japanese Archaeology and Cultural Properties Management. En *A Companion to the Anthropology of Japan*, editado por Jennifer Robertson, pp. 36-49. Blackwell, Oxford

Ernst, Alan

- 1992 From Liberal Continentalism to Neoconservatism: North American Free Trade and the Politics of the C.D. Howe Institute. *Studies in Political Economy* 39:109-140.

Everill, Paul

- 2007 British Professional Field Archaeology: Antiquarians and Labourers; Developers and Diggers. En *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*, editado por Yannis Hamilakis y Philip Duke, pp. 119-136. Left Coast Press, Walnut Creek.
- 2009 *Invisible Diggers: A Study of British Commercial Archaeology*. Oxbow, Oxford.

Fawcett, Clare

- 1995 Nationalism and Post War Japanese Archaeology. En *Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology*, editado por Philip Kohl y Clare Fawcett, pp. 232-246. Cambridge University Press, Cambridge.

Foley, Gary

- 1999 Reconciliation: Fact or Fiction? The Koori History Website. http://www.kooriweb.org/foley/essays/essay_6.html

Foley, Gary y Tim Anderson

- 2006 Land Rights and Aboriginal Voices. *Australian Journal of Human Rights* 12(1):83-108.

Gattinger Monica y Diane Saint-Pierre

- 2010 The "Neoliberal Turn" in Provincial Cultural Policy and Administration in Québec and Ontario: The Emergence of "Quasi-neoliberal" Approaches. *Canadian Journal of Communication* 35(2):279-302.

Gnecco, Cristóbal y Dorothy Lippert (editores)

- 2015 *Ethics and Archaeological Praxis*. Springer, Nueva York.

Hamilakis, Yannis y Philip Duke (editores)

- 2007 *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*. Left Coast Press, Walnut Creek.

Hudson, Mark

- 2007 Japanese Beginnings. En *A Companion to Japanese History*, editado por William Tsutsui, pp. 13-29. Blackwell, Malden.

Ikawa-Smith, Fumiko

- 2010 Co-traditions in Japanese Archaeology. *World Archaeology* 13(3):296-309.
- 2011 Practice of Archaeology in Contemporary Japan. En *Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past*, editado por Ludomir Lozny, pp. 675-705. Springer, Nueva York.

Keally, Charles

2003 Japanese Archaeology. Fieldwork Opportunities in Japanese Archaeology. <http://www.t-net.ne.jp/~keally/fieldwork.html>

Kempf, Hervé

2009 *Pour sauver la planète, sortez du capitalisme*. Seuil, París.

Kikuchi, Tetsuo

2011 Trends in Japanese Archaeological Research, 2008. *Archaeologia Japonica*, marzo.

Kiriama, Herman

2012 The Victorian Aboriginal Heritage Act 2006: Five Years on. En *Excavations, Surveys and Heritage Management in Victoria*, vol. 1, editado por Ilya Berelov, Mark Eccleston y David Frankel, pp. 67-74. La Trobe University, Melbourne.

Lilley, Ian (editor)

2000 *Native Title and the Transformation of Archaeology in the Postcolonial World*. University of Sydney, Sydney.

Mercer, David

2003 “Citizen Minus”? Indigenous Australians and the Citizenship Question. *Citizenship Studies* 7(4):421-444.

Mizoguchi, Koji

2006 *Archaeology, Society and Identity in Modern Japan*. Cambridge University Press, Cambridge.

Murray, Tim

1992 Aboriginal (pre)History and Australian Archaeology: The Discourse of Australian Pre-historic Archaeology. *Journal of Australian Studies* 16(35):1-19.

Okamura, Katsuyuki

2014 Ethics of Commercial Archaeology (Japan). En *Encyclopedia of Global Archaeology*, editado por Claire Smith, pp. 2482-2485. Springer, Nueva York.

Piketty, Thomas

2013 *Le capital au XXI^e siècle*. Seuil, París.

Ross, William

2012 Draconian cuts to Parks Canada. Canadian Archaeological Association (CAA). <http://www.canadianarchaeology.com/caa/about/public-advocacy-committee/draconian-cuts-parks-canada>

Shanks, Michael y Randall McGuire

1996 The Craft of Archaeology. *American Antiquity* 61(1):75-88.

Arqueología distópica: la implementación de la lógica del capital en el manejo del patrimonio

Shepherd, Nick

- 2007 What Does It Mean “To Give the Past Back to the People”? Archaeology and Ethics in the Postcolony. En *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*, editado por Yannis Hamilakis y Philip Duke, pp. 99-114. Left Coast Press, Walnut Creek.

Schlanger, Nathan y Kenneth Aitchison (editores)

- 2010 *Archaeology and the Global Economic Crisis. Multiple Impacts, Possible Solutions*. Culture Lab Editions, Tervuren.

Smith, Claire y Martin Wobst (editores)

- 2005 *Indigenous Archaeologies: Decolonizing Theory and Practice*. Routledge, Nueva York.

Smith, Laurajane

- 2000 “Doing Archaeology”: Cultural Heritage Management and its Role in Identifying the Link between Archaeological Practice and Theory. *International Journal of Heritage Studies* 6(4):309-316.
- 2004 *Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage*. Routledge, Nueva York.

Tanaka, Yoshiyuki

- 2011 Trends in Japanese Archaeological Research, 2009. *Archaeologia Japonica*, noviembre.

Ulm, Sean, Geraldine Mate, Cameo Dalley y Stephen Nichols

- 2013 A Working Profile: The Changing Face of Professional Archaeology in Australia. *Australian Archaeology* 76:34-43.

Vogel, Steven

- 2006 *Japan Remodeled. How Government and Industry Are Reforming Japanese Capitalism*. Cornell University Press, Ithaca.

Western, Mark, Janeen Baxter, John Pakulski, Bruce Tranter, John Western, Marcellinus Van Egmond, Jennifer Chesters, Amanda Hosking, Martin O’Flaherty y Yolanda Van Gellecum

- 2007 Neoliberalism, Inequality and Politics: The Changing Face of Australia. *The Australian Journal of Social Issues* 42(3):401-418.

Zimmerman Larry

- 2008 Unusual or “Extreme” Beliefs about the Past, Community Identity, and Dealing with the Fringe. En *Collaboration in Archaeological Practice: Engaging Descendent Communities*, editado por Chip Colwell-Chanthaphonh y Thomas Ferguson, pp. 55-86. AltaMira Press, Walnut Creek.

Zorzin, Nicolas

- 2010 Archéologie au Québec. Portrait d’une profession. *Archéologiques* 23:1-15.
- 2011a Contextualising Contract Archaeology in Quebec. Political-economy and Economic Dependencies. *Archaeological Review Cambridge* 26(1):119-135.
- 2011b The Political Economy of a Commercial Archaeology. A Quebec Case-Study. Disertación doctoral, University of Southampton, Southampton.

- 2012 The Political-Economy of Victoria Archaeology: An Introduction and Critical Analysis, En *Excavations, Surveys and Heritage Management in Victoria*, vol. 1, editado por Ilya Bere-
lov, Mark Eccleston y David Frankel, pp. 75-79. La Trobe University, Melbourne.
- 2013 The Political-Economy of Japanese Archaeology: Reflective thoughts on Current Organi-
sational Dynamics. *Japanese Journal of Archaeology* 1:1-17.
- 2014a Heritage Management and Aboriginal Minorities: Relations in a Global Economy. The
Contemporary Challenges of Victoria (Australia). *Archaeologies* 10(2):132-167.
- 2014b Socio-economics of Archaeology in Victoria after the Aboriginal Heritage Act 2006, En
Excavations, Surveys and Heritage Management in Victoria, vol. 3, editado por Ilya Bere-
lov, Mark Eccleston y David Frankel, pp. 65-74. La Trobe University, Melbourne.
- 2015 Archaeology and Capitalism: Successful Relationship or Economic and Ethical Aliena-
tion? En *Ethics and Archaeological Praxis*, editado por Cristóbal Gnecco y Dorothy Lip-
pert, pp. 115-139. Springer, Nueva York.

LA ARQUEOLOGÍA DE GESTIÓN EN MADRID. ATRAPADOS EN EL MODELO DE ESPECULACIÓN CAPITALISTA DEL TERRITORIO

Carlos Marín Suárez

Eva Parga Dans

INTRODUCCIÓN: EL “LADRILLAZO”, CATAPULTA DE LA ARQUEOLOGÍA COMERCIAL

CON LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN 1978 SE INTRODUJO UN SISTEMA DE COMPETENCIAS normativas y administrativas que fue transferido a 17 comunidades autónomas; en esas competencias se incluye la gestión del patrimonio arqueológico. Aunque la aplicación de este sistema territorial dotó a las regiones que conformaban el mapa político español de cierta independencia, en la práctica se instauraron diferentes versiones de un mismo modelo. Lo vemos, por ejemplo, con la introducción de la arqueología de gestión en su versión comercial.

Pero en España no inventamos nada. Simplemente adoptamos los vientos de modernidad provenientes del contexto europeo. En el ámbito arqueológico se institucionalizó el principio “el que contamina paga”, a través de La Convención de La Valletta (COE 1992), como elemento paliativo a la amenaza desarrollista, a la vez que se legitimó la lógica del capital para intervenir y mediar en asuntos patrimoniales. Ese modelo se introdujo en el contexto español a través de diferentes regulaciones estatales (como la Ley 16, de 25 de junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español) y autonómicas. A través de este principio la intervención arqueológica quedó a expensas de los intereses inversionistas de los “desarrolladores” (llámense empresas constructoras, concejalías de urbanismo o como se quiera), siempre y cuando cumplieren ciertas garantías patrimoniales, habitualmente en función de los matices de las normativas regionales, de su interpretación y del caciquismo político-local de turno, posibilitado a través del modelo autonómico.

La conversión de la arqueología en práctica profesional se institucionalizó bajo la lógica de mercado (con anterioridad a este proceso normativo la arqueología se había llevado a cabo con fines de investigación), favoreciendo su instrumentalización asociada a la recalificación del suelo y su conversión en urbanizable, habilitándolo para la actividad de la construcción, clave de la prosperidad económica española. La actividad de

la construcción supuso un 7.7 % del PIB durante el periodo 1980-1990 y llegó a alcanzar 12 % en el 2006, una cifra bastante elevada en comparación con otros países europeos. En casos como Madrid el patrimonio ha tenido un rol protagónico en esa “destrucción creativa” por la que el excedente del capitalismo se absorbe mediante la transformación urbana con la creación de nuevas geografías sobre el derrumbe de las antiguas. Este proceso, siempre violento, suele tener una dimensión de clase: los más pobres y menos privilegiados, los marginados del poder político, son los que más sufren (Harvey 2013:36-37). De este modo la gestión arqueológica (al igual que estaba sucediendo en otros ámbitos de interés público, como el medioambiental) se transformó en un nicho de mercado a través del cual se podía ganar dinero (y mucho), al margen del valor social asociado al patrimonio.

Varios trabajos han analizado en el contexto español la relación perversa entre las garantías patrimoniales asociadas a la normativa autonómica y la inserción de la arqueología como actividad de mercado (Díaz del Río 2000; González 2013; Moya 2010; Vidal 2005). La demanda sin precedentes de informes de impacto arqueológico favoreció el nacimiento y desarrollo de un pujante mercado de trabajo asociado a la práctica arqueológica. Numerosos profesionales y empresas encontraron en esta nueva actividad una fuente de empleo y de ingresos. Entre 1985 y el 2009 se crearon 273 empresas de arqueología (parece que antes de la publicación de la normativa sobre gestión patrimonial no existía ninguna) y se registraron más de 2.500 puestos de trabajo vinculados a estas organizaciones, sin tener en cuenta a las miles de personas que trabajaban por cuenta propia (y sobre las que no existen fuentes de datos o registros).

La transformación del sector traspasaba el ámbito empresarial. La arqueología como práctica racional y tecnificada llevó aparejada un proceso de objetivización y sofisticación del conocimiento asociado a esta actividad que para ser aplicado tenía que ser adquirido a través de un proceso de formación reglada y avalado por la administración pública en función del proyecto. El *boom* de la actividad arqueológica implicó un aumento del número de matrículas y de la oferta de titulaciones universitarias en las áreas relacionadas con esta práctica. También se consolidaron museos, centros de investigación, departamentos académicos y administrativos y servicios públicos. La arqueología se convirtió en un novedoso y prometedor nicho de empleo en el que numerosos profesionales comenzaron a operar a través de un conocimiento especializado, clave en la liberación del suelo en un mercado muy cotizado.

La instrumentalización de la práctica arqueológica, su rápido crecimiento y cataclismo, evidenció contradicciones asociadas a un modelo dependiente de la lógica del capital. Los profesionales se encontraron trabajando ante una lógica disociada, actuando

como garantes de la protección patrimonial (establecida por la normativa) pero en constante conflicto con la lógica de la eficiencia del libre mercado (competencia en presupuestos para adjudicaciones y necesidad de ganar dinero para mantener la actividad). La práctica arqueológica pasó a depender del buen hacer y la ética individual.

Además, la mediación de la administración pública como mecanismo de control sobre el mercado del suelo favoreció su inserción en la lógica del capital: intereses particulares, abusos de poder de cargos públicos y corruptelas locales (al margen de las siglas políticas) encontraron en el contexto español su caldo de cultivo. El entramado de contratos y adjudicaciones dudosas resultante, asociado a recalificaciones del suelo, ha sido conocido como el modelo “ladrillazo” y España como uno de sus representantes destacados en el panorama internacional (Harvey 2013:31-32). En el 2015 se cuantificaron en España 1.700 causas y más de 500 imputaciones de casos de corrupción.

Para la gestión del patrimonio arqueológico derivado de esta práctica especulativa se ideó el Modelo Madrid, que consistió en la declaración de bien de interés cultural (BIC) bajo la figura de zona arqueológica de grandes áreas con potencial arqueológico. Una vez que estas zonas eran incoadas, la Dirección General de Patrimonio Histórico (DGP-H) de la Comunidad de Madrid (CAM) redactaba unas normas para la protección del patrimonio arqueológico que debían incluirse en los planeamientos urbanísticos de los municipios que tuvieran zonas arqueológicas (Castillo 2004:100). Pero, como veremos, en ese contexto socioeconómico el Modelo Madrid fracasó. De hecho, si por algo debemos caracterizar el Modelo Madrid no ha sido por sus éxitos, sino por la precariedad laboral y la continua destrucción del patrimonio arqueológico que ha llevado asociado.

La arqueología comercial, resultante de políticas económicas socialdemócratas que obviaron el valor social del patrimonio, pasó a formar parte de un sector de servicios de alta inestabilidad, dependiente de factores externos y coyunturales: un mercado del suelo fluctuante supeditado a las crisis cíclicas del capitalismo avanzado. Madrid es uno de los ejemplos más destacados en la introducción del llamado libre mercado arqueológico y representante de un caso extremo de arqueología en contextos posindustriales (Díaz del Río 2000:7) y registra el mayor número de intervenciones arqueológicas que ha tenido España. En el 2008, último año antes de la explosión de la crisis con el pinchazo de la burbuja del ladrillo, se contabilizaron unas 1.700 intervenciones arqueológicas solo para esta comunidad, en las que estaban trabajando más de 600 personas y, al menos, 45 empresas. Sin embargo, este modelo expansivo, instrumental y fundamentado en la lógica de la eficiencia fue un espejismo de poca duración. El colapso y el agotamiento del sector de la construcción como consecuencia de la crisis económica del 2008 tuvo un efecto devastador en la arqueología española. En el 2013

desaparecieron el 42 % de las empresas arqueológicas junto con el 66 % de los puestos de trabajo asociados; los empleos que permanecieron se caracterizaron por una elevada temporalidad (en función de la escasa y volátil demanda) y precariedad (mal pagados).

MADRID: DE LA IMPOSIBILIDAD DEL CONSENSO

Un ejemplo paradigmático del Modelo Madrid fue lo que ocurrió con las obras de remodelación de la M-30, la autopista de circunvalación de la capital, construida en el tardofranquismo. En el 2004 el Ayuntamiento, gobernado por el derechista Partido Popular (PP), decidió soterrar un importante tramo del este y del sur de esta autopista (unos 32 kilómetros), precisamente los sectores que discurren sobre el río Manzanares, un enclave de gran valor patrimonial y escenario del origen de la ciencia arqueológica y paleontológica en el siglo XIX (Fernández 1980), con yacimientos catalogados de prácticamente todos los periodos prehistóricos e históricos, incluyendo los puentes de Toledo y Segovia (figura 1).

Pero los principales problemas de la obra no iban a ser solo los de carácter patrimonial, ya que con el soterramiento se iba a triplicar el número de carriles en cada dirección, lo que aumentaría el tráfico en un 60 %, suponiendo un considerable aumento de la contaminación en la ribera del río de Madrid y de su pulmón verde, la Casa de Campo, en una ciudad que más de la mitad de los días del año ya superaba los límites de contaminación impuestos por la Unión Europea. Además, tal y como fue denunciado por la oposición y por diferentes colectivos, el Ayuntamiento de Madrid quedaría con una deuda descomunal. Más de 10 años después sabemos que el coste de la obra se estima en unos 1.700 millones de euros, pero que por los intereses de la deuda los madrileños terminarán pagando unos 10.406 millones de euros. El cálculo de 35 años de endeudamiento para el ayuntamiento de Madrid que se hizo en el 2004 no parece errado.

Esa faraónica obra marcó el origen del desbordamiento de la deuda municipal que ahora mismo, en plena crisis económica, ahoga al consistorio. Esta obra y otras similares, como el desdoblamiento de la carretera M-501, es sintomática del modelo democrático del tardofranquismo, impulsado con especial virulencia por la sucesión de gobiernos de los *Spanish neocon* (Carmona *et al.* 2012:158-164) del PP, tanto en la CAM como en el Ayuntamiento de la capital. Mientras se aumentaba el peso de la carga fiscal en las clases más empobrecidas y se descargaba a las oligarquías (“keynesianismo inverso”), se extendían las alianzas mafiosas público-privadas en los procesos de privatización de los servicios públicos y se modificaban las leyes del suelo (tanto estatales como autonómicas) para permitir un “todo es urbanizable”, mediante una desregulari-

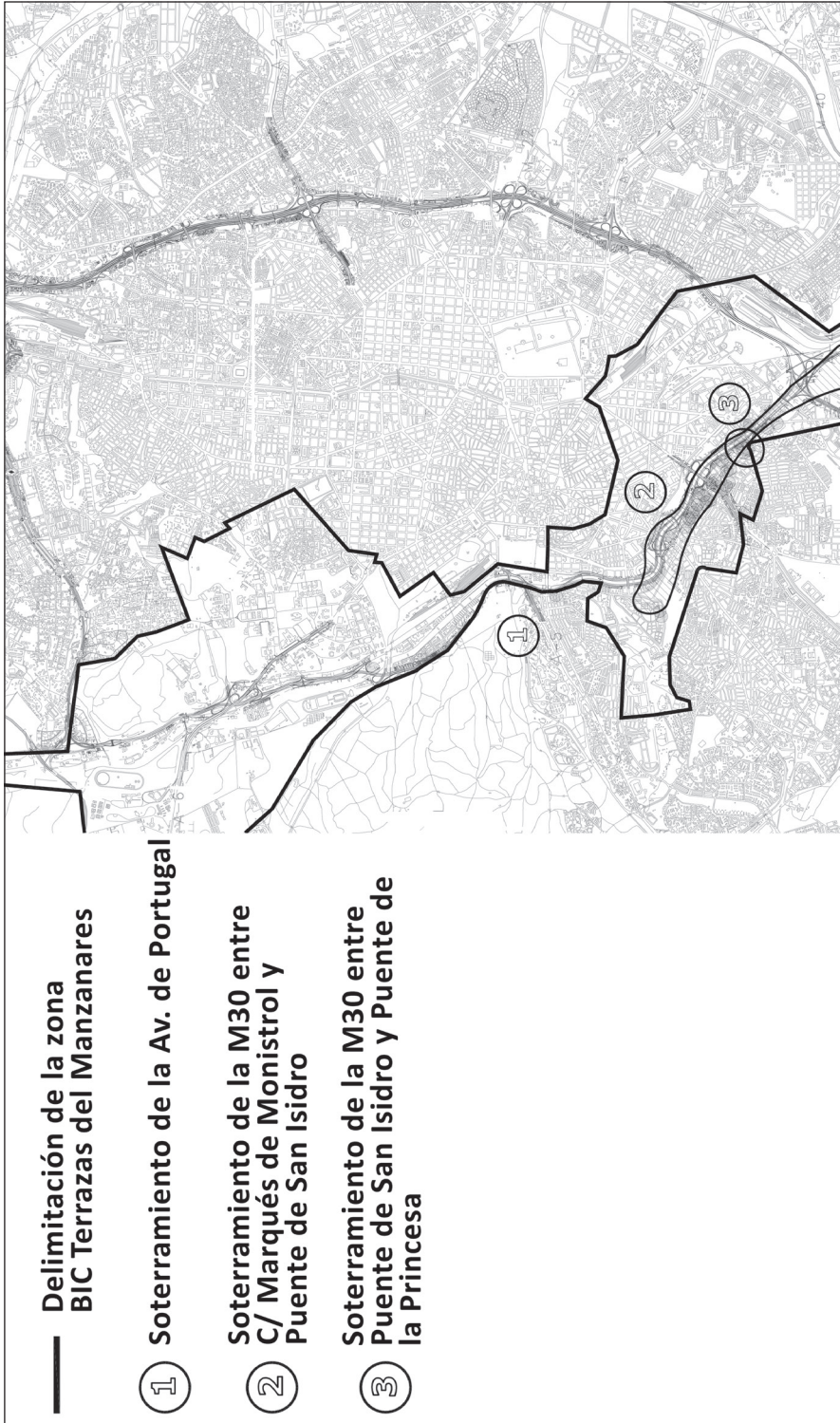


Figura 1. Plano de la trama urbana de Madrid (gris claro) con el trazado de la autopista de circunvalación M-30 (gris oscuro) e indicación del trazado del BIC Terrazas del Manzanares.

Fuente: Plataforma de Colectivos de Arqueología que integraba la Plataforma M-30 No Más Coches.

zación del urbanismo que ha dejado ingentes beneficios en el bloque oligárquico (bancos, constructoras y promotoras) conectado con los políticos del PP¹, públicamente se aludía al desarrollo de la democracia y a la participación ciudadana. En el caso concreto de las obras en la M-30 se dijo que “El Gobierno de la Ciudad quiere que el proyecto sea ampliamente participativo. Durante el periodo de información pública los ciudadanos podrán formular sus alegaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva”. Pero en los plenos municipales la información siempre fue opaca, escasa y cambiante; se concedieron plazos insignificantes de 20 días para poder realizar alegaciones y estas nunca fueron vinculantes, no se discutieron públicamente y no fueron debatidas en ningún órgano colegiado con participación de los opositores al proyecto.

Pero nos gustaría centrarnos, sobre todo, en la manera como reaccionaron los arqueólogos madrileños ante este asunto. Uno de los principales problemas de la obra fue que se eximió de la evaluación de impacto ambiental (EIA) que, según la normativa europea,

identificará, describirá y evaluará de forma apropiada [...] los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.²

Al eximir del EIA a esta obra se contravinieron leyes nacionales y autonómicas. El truco de la administración local fue de tipo cosmético, convirtiendo esta autopista en una “calle”, que pasó a denominarse Calle 30, y troceando la obra en 15 subtramos para poder eludir todas las leyes que exigían una EIA. Las Terrazas del Manzanares estaban declaradas como BIC, la máxima figura de protección patrimonial de la ley de patrimonio histórico español y de la ley de patrimonio histórico de la CAM³.

1 Hoy sabemos que el PP ha estado cobrando en dinero negro a las principales constructoras y promotoras del país durante la democracia: la famosa caja B del tesorero del partido, Miguel Bárcenas. Las “mordidas” a las constructoras solían ser del 3%.

2 Artículo 3.º de la Directiva 85 / 337 / CEE del Consejo, del 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

3 Las Terrazas del Manzanares cuentan (o, mejor dicho, contaban) con más de cien yacimientos arqueológicos y paleontológicos documentados y fueron declaradas BIC en 1993, con la categoría de “zona arqueológica” (Decreto 113 del 25 de noviembre de 1993). El artículo 32.1.g de la Ley 10 del 9 de julio de 1998, de Patrimonio Histórico de la CAM señaló que “en las actuaciones que afecten

En ese mismo 2004, y alrededor del grupo Ecologistas en Acción, se coordinaron asociaciones vecinales de las zonas afectadas, plataformas ciudadanas, grupos ecologistas, partidos minoritarios de izquierda, sindicatos mayoritarios y partidos políticos de la oposición para combatir esa locura especulativa y destructora. Ahí surgió la Plataforma M-30 No Más Coches⁴, desde la que se desarrollaron iniciativas de denuncia y concienciación (asambleas, actos informativos, manifestaciones, recogidas de firmas y apoyos) y se pidieron informes técnicos a varias universidades madrileñas sobre los riesgos para la salud del considerable aumento de tráfico que iba a suponer la obra. Varios licenciados recientes y jóvenes investigadores del departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense creímos que los arqueólogos teníamos que participar en esa plataforma y por ello convocamos a nuestro gremio a varias asambleas para fundar la Plataforma de Colectivos de Arqueología, con el fin de aunar en una sola voz a arqueólogos empresarios, trabajadores en empresas de arqueología, investigadores independientes, profesores universitarios, estudiantes, becarios de investigación, técnicos arqueólogos de la administración, arqueólogos de los museos... Partíamos de la idea de que la lucha por conseguir una mejor gestión, conservación, estudio y difusión del patrimonio arqueológico no debía ser un compromiso exclusivo de los profesionales, sino una consecuencia de acciones colectivas. Nuestra participación como arqueólogos en la Plataforma M-30 No Más Coches permitiría ese objetivo mediante un trabajo común, horizontal, plural y participativo con todos los ciudadanos y colectivos relacionados, de algún modo, con el mundo de la arqueología, la historia y sus focos de memoria / patrimonio. Con la creación de discursos colectivos sobre estos temas podríamos combatir mejor la mercantilización de la cultura o la subordinación de los intereses culturales a los especulativos.

a un lugar arqueológico declarado Bien de Interés Cultural se requiera la Evaluación de Impacto Ambiental, previo informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural”. Aparte de ser obligatoria la EIA, por ser BIC, también obligaba a la Ley 25 del 29 de julio de 1988, de Carreteras, así como el punto 95 del anexo segundo (Proyectos y actividades de obligado sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental en la Comunidad de Madrid), de la Ley 2 del 19 de junio de 2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, por ser una reforma de una carretera superior a los cinco kilómetros.

4 Véase el listado de integrantes de la plataforma en <http://www.ecologistasenaccion.org/article4434.html>

Además, teníamos clara la amenaza que suponía el soterramiento de la M-30 para el patrimonio. En esos años ya se habían dado otros megaproyectos especulativos con resultados lamentables. El aparcamiento y soterramiento de la calle Bailén a la altura de la plaza de Oriente, epicentro de la fundación musulmana de la ciudad, había destruido importantes restos del Madrid islámico (murallas y fortificaciones), de la trama urbanística medieval cristiana (incluyendo iglesias románicas y conventos), de la Casa del Tesoro de la época de Felipe II, etcétera. A día de hoy esas excavaciones apresuradas y mal desarrolladas ni siquiera han sido publicadas de forma correcta. En el cercano pueblo de San Martín de la Vega la creación de un parque de atracciones de la Warner Bros Co. supuso el arrasamiento de importantes yacimientos calcolíticos, de la Edad del Bronce, de varias granjas y de un cementerio de época altomedieval en un bello paraje natural de alto valor ecológico dominado por el real sitio de Gózquez, un caserío que perteneció a Felipe II. El caso de la ampliación del aeropuerto de Barajas también supuso un gran volumen de trabajo para las empresas de arqueología debido a la densidad y variedad de yacimientos en ese tramo de la vega del río Jarama. Presiones, caos organizativo y mala gestión de las excavaciones redundaron en una muy baja calidad en la documentación y en que a la sociedad, una vez más, no llegara ningún dato del conocimiento histórico generado en el lugar. Los informes técnicos de estas megaintervenciones arqueológicas, así como del resto de miles de intervenciones menores, se siguen amontonando en las estanterías de la DGPH de la CAM.

De asambleas numerosas en las dos primeras convocatorias pasamos, rápidamente, a un pequeño grupo militante. La Plataforma de Colectivos de Arqueología se convirtió, irónicamente, en un solo colectivo, de unos cuantos recién licenciados que combinábamos tanto la carrera investigadora como la arqueología de gestión⁵. Visto hoy con perspectiva es posible que partiéramos de una visión ciertamente naif en el intento de conformación de la plataforma de arqueólogos anclada en la idea de la multivocalidad y su afán de integrar las diferentes voces de los agentes, grupos o instituciones que con-

5 La Plataforma de Colectivos de Arqueología realizó un importante trabajo de documentación, investigación y difusión que dio lugar a un extenso manifiesto que fue incluido, posteriormente, como informe patrimonial en las denuncias que presentó el grupo Ecologistas en Acción. Para ello se intentó consultar en la DGPH la carta arqueológica de la CAM y los expedientes arqueológicos de los yacimientos intervenidos en el BIC Terrazas del Manzanares. Los técnicos de esta administración, pese a tratarse de documentos públicos, tan solo nos permitieron un mapa del área protegida con los yacimientos conocidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

forman el campo de la arqueología madrileña. Pero ¿son todas las voces iguales? ¿Es necesariamente progresista dejar hablar a todo el mundo? ¿No es este “fundamentalismo democrático” y búsqueda de consenso una forma de pospolítica que anula la capacidad crítica y subversiva de nuestras luchas? (González 2010, siguiendo a Žižek). Hoy sabemos de la imposibilidad y el riesgo que supone la búsqueda de consenso (Mouffe 2011), del no tener claras las posiciones desde las que cada colectivo lucha. ¿Cómo aunar en la misma lucha a los empresarios, que iban a obtener pingües beneficios con las excavaciones arqueológicas generadas por el soterramiento de la M-30, y a los trabajadores precarios, que iban a desarrollar su labor de forma insegura, sin las mínimas medidas de seguridad e higiene y con contratos temporales y mal remunerados? ¿Cómo aunar en la misma lucha a los profesores universitarios con los alumnos y becarios-precarios de investigación, con quienes median múltiples mecanismos de explotación social en las excavaciones de investigación, en el dictado de clases o en los laboratorios de arqueología? ¿Cómo atraer hacia nuestra postura a los técnicos de la DCPH, cuyos trabajos se encuentran en una tensión permanente entre la legalidad vigente y las directrices políticas marcadas “desde arriba”?

Además, la maniobra política por parte del gobierno conservador de la CAM, competente en materia patrimonial, fue bastante hábil. Para hacer “efectiva la gestión y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico” la DCPH propuso una serie de medidas para suplir la preceptiva EIA. La más relevante fue la creación de una comisión de asesoramiento arqueológico y paleontológico de las obras de modificación de la carretera de circunvalación M-30, que tuvo como funciones asesorar y colaborar con los responsables de las obras en lo concerniente al patrimonio paleontológico y arqueológico, hacer el seguimiento de las obras y asesorar sobre las soluciones más adecuadas en el caso de que se produjeran hallazgos, sobre todo en cuestiones relativas a investigación y protección de estos patrimonios. Esta comisión contó con profesionales de reconocido prestigio. Además de ser multidisciplinar también fue multiinstitucional, pues sus miembros pertenecían a las principales instituciones madrileñas vinculadas a la arqueología y la paleontología⁶. Con este movimiento político las principales instituciones madrileñas vinculadas a la arqueología quedaron del lado del gobierno municipal y

6 La Sección de Arqueología del CDL sirvió como amplificador y justificador de esta comisión, celebrando una “mesa redonda” el 20 de mayo del 2004, a la que fueron invitados los políticos vinculados directamente a la obra (el director gerente de Infraestructuras de la Ciudad) y al patrimonio (director general del Patrimonio Histórico), algunos miembros de la comisión y los

de su obra ilegal y faraónica. En la plataforma comprendimos, tristemente, que en esta lucha concreta los empresarios y los profesores universitarios no estaban dispuestos a involucrarse, ni siquiera quienes dictan doctas conferencias sobre la gestión del patrimonio arqueológico. La arqueología universitaria actuó de forma timorata y cobarde, renunciando a su rol de crítica y vigilancia continua del patrimonio arqueológico, en algunos casos en clara connivencia con la ilegalidad de la obra, pese a ser un caso flagrante en el que las administraciones se saltaron la normativa patrimonial y medioambiental regional, estatal y europea.

A “LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO”

A lo largo del 2007 el desencanto y la frustración entre los precarizados trabajadores de arqueología madrileños eran cada vez más patentes. Megaproyectos como el de la M-30 daban trabajo a cientos de compañeros y compañeras, pero la temporalidad de los contratos, los sueldos insuficientes, la ausencia de medidas de seguridad e higiene, la premura de los trabajos, la mala documentación del registro, la destrucción de bienes patrimoniales ante nuestros ojos, la frecuente contratación bajo la figura ilegal del falso trabajador autónomo o la ausencia de un convenio laboral colectivo específico para la arqueología fueron acelerando el clima de descontento. Hubo varios hechos detonantes que propiciaron la toma de conciencia. En julio del 2003 se realizaron los estudios arqueológicos previos a la construcción de la carretera de circunvalación de Madrid M-50. Gracias a ellos se documentó un yacimiento único, unas minas de sílex neolíticas formadas por galerías verticales en donde abundaban los objetos arqueológicos. La empresa Trabajos de Arqueología y Restauración, Soc. Coop. Mad., más conocida como TAR, realizó tres campañas arqueológicas (Capote *et al.* 2006). Pero este yacimiento no es famoso solo por sus particularidades ergológicas, sino también por ser el primer ejemplo madrileño en donde los trabajadores realizaron una huelga y una lucha colectiva reclamándole a la empresa mínimas medidas de seguridad e higiene, pues tenían que jugarse la vida descendiendo a excavar a las galerías verticales, así como una contratación directa y no bajo la figura ilegal de falso trabajador autónomo. Los trabajadores consiguieron una inspección de trabajo que impuso una sanción a la empresa por las condiciones laborales en la que desempeñaban su función los arqueólogos. Por otro

empresarios de arqueología responsables de las obras previas. Ninguna voz crítica o contraria a la obra fue invitada a la mesa.

lado, los compañeros y compañeras catalanes protagonizaron la primera manifestación de trabajadores en arqueología, a través de la sección sindical de la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la empresa de arqueología Codex, con reivindicaciones similares a las señaladas. No se trataba del primer sindicato de arqueología —desde el año 2002 existía la Central Sindical Independent d'Arqueòlegs de Catalunya (CSIAC)—, pero sí de la organización sindical más activa en la defensa de los derechos de los trabajadores que aglutinó a otras secciones que operaban de forma dispersa y en la cual los trabajadores se organizaron de forma horizontal y asamblearia (CNT-Córdoba 2012; García 2007; Moya 2010:19).

En este ambiente y con estos precedentes no fue raro que mediante el boca a boca realizáramos la primera asamblea de trabajadores en arqueología de Madrid, en el espacio cedido por la librería y editorial Traficantes de Sueños, en el barrio de Embajadores. Fueron asambleas multitudinarias, prácticamente catarsis colectivas, que en los primeros momentos sirvieron como una especie de terapia de grupo, compartiendo nuestros problemas personales con el resto para darnos cuenta de que se trataba de problemas colectivos y estructurales. Organizados de forma horizontal y asamblearia, las decisiones siempre fueron tomadas, hasta el día de hoy, por unanimidad. Para agilizar las actividades se conformaron grupos de trabajo. Uno de ellos era el encargado de entrar en contacto con los principales sindicatos para ver el modo más adecuado de organización. De los sindicatos mayoritarios —Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)— no recibimos la atención que demandábamos o no fuimos atendidos. No comprendían nuestras reivindicaciones y ni siquiera sabían en qué sección encuadrarnos como profesión. Sin embargo, los anarcosindicalistas CNT y Confederación General del Trabajo (CGT) no dudaron en aceptar nuestra invitación y nos asesoraron en las primeras asambleas. De sus consejos surgió la idea de conformar una asamblea de trabajadores independiente de cualquier sindicato, debido a la especificidad de nuestro caso. Así, el 15 de noviembre del 2007 nació la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA)⁷.

AMTTA (figura 2) nació como asociación apartidista y al margen de cualquier sindicato, motivada por una doble preocupación: la precariedad laboral que se vivía / vive en la arqueología de Madrid y la incesante destrucción del patrimonio. Por ello, desde el principio combinó rasgos de sindicato (asamblea de trabajadores) con los de movimiento social preocupado por el modelo de ciudad y la gestión patrimonial. Uno de sus prin-

7 Véase <http://amtta.blogspot.com.es/>

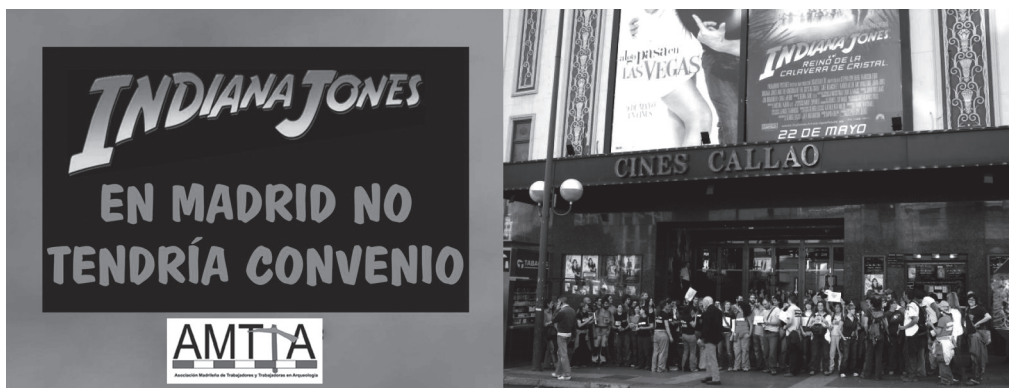


Figura 2. Cartel y una de las concentraciones informativas organizadas por AMTTA en puertas de cines para dar a conocer la situación de precariedad laboral de los arqueólogos madrileños, aprovechando el estreno de la película *Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal*.

Fuente: Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA)

cipales objetivos en los primeros momentos fue la consecución de mejoras laborales para los trabajadores y trabajadoras en esta especialidad. Para ello una de las primeras medidas fue la redacción de un decálogo que marcara las directrices de actuación de la asociación hasta día de hoy: crear un convenio colectivo en arqueología para la CAM que regule las condiciones laborales empleado-empleador en el sector; definir unas categorías profesionales, junto con los requisitos, las retribuciones y los cometidos propios de cada una de ellas; promover actividades de promoción profesional para los trabajadores; adaptar normas de seguridad e higiene a las diferentes labores que se desempeñen profesionalmente; trabajar en pro del reconocimiento social e institucional de la actividad arqueológica profesional; elaborar un código deontológico para una correcta praxis profesional; y fomentar actividades que permitan un mayor acercamiento de la arqueología a la sociedad (AMTTA 2008).

Desde su nacimiento la asociación se vio inmersa en esas lógicas ambidiestras, dissociadas, a las que aludíamos más arriba, puesto que nuestro afán de proteger, gestionar y socializar el patrimonio estaba mediado por una gestión capitalista hegemónica del territorio que sacaba a la luz los restos arqueológicos, pero también era la causa de su destrucción “científica”. Además, en esta vorágine arqueológica los proyectos que fueron modificados para la preservación íntegra o parcial de algún yacimiento fueron contados con los dedos de las manos. Éramos conscientes, y víctimas, de nuestro rol social

complejo y contradictorio con respecto a la destrucción y mala gestión del patrimonio. Formábamos parte tanto de la causa, pues participábamos activamente de ese sistema, como de la solución del problema, ya que este era uno de los objetivos principales de la asociación. No obstante, pese a estar inmersos en esta doble tensión, con los problemas éticos que conlleva una praxis profesional que conjuga dos economías morales contrapuestas, la del científico social y la del técnico cuya única ética está definida por el vínculo contractual (Díaz del Río 2000:13), creíamos posible acercar esas dos lógicas divergentes a un punto de encuentro en la forma de un código deontológico para la profesión. Además, éramos conscientes de que quedaban muchos espacios para la maniobra política. Mediante la negociación con la administración, la sensibilización ciudadana, la negociación con partidos políticos y el reclamo de un desarrollo legislativo —por ejemplo, de un reglamento de arqueología que desarrollara la ley de patrimonio de la CAM— pensábamos que podríamos revertir la balanza de la destrucción / conservación del patrimonio y mejorar nuestra situación laboral.

En este sentido AMTTA supuso una evolución respecto a la estrategia política por seguir, debido a una toma de conciencia de clase como trabajadores precarizados o semiproletarios. Se había dado una ruptura social que supuso, para el colectivo de arqueólogos, la introducción de parte de sus miembros en la estructura general de producción de plusvalías y en las múltiples contradicciones que conlleva a la hora de gestionar el patrimonio. Las pequeñas empresas y las cooperativas del comienzo del modelo, en la década de los ochenta, habían dado lugar a un abanico amplio de arqueólogos profesionales, debido al aumento exponencial de obras y de megaproyectos, como consecuencia de lo cual se polarizaron las categorías. Así, la mayor parte de los arqueólogos había pasado a vender su fuerza de trabajo y se conformó con ser semiproletaria y proletaria con relación a los arqueólogos que contrataban, a quienes habría que englobar en el grupo de pequeños capitalistas y pequeña burguesía. El contratado como peón, auxiliar de arqueología o técnico arqueólogo realizaba trabajos más afines al de trabajador libre vinculado a la clase trabajadora que al de profesional libre (Díaz del Río 2000:8, 13), pese a que muchos fueran contratados ilegalmente como falsos trabajadores autónomos. Además, la mayoría del colectivo cobraba sueldos muy cercanos al salario mínimo interprofesional (González 2013:161; Moya 2010:21, con datos del 2009).

Pasamos a tener plena conciencia de que de científicos sociales, tal y como habíamos imaginado durante la fase de formación universitaria, habíamos pasado a convertirnos en técnicos precarizados, cuya principal labor era liberar suelo para permitir la explotación capitalista del territorio. Además, la crisis económica venía precedida de otra crisis previa, la de valores. La delgada línea roja, propia de la arqueología contractual,

que separa la permanencia de unos criterios aceptables de calidad en la gestión del patrimonio arqueológico de la búsqueda de la máxima rentabilidad comercial, empresarial, se había visto borrada del mapa hacía ya tiempo, inclinándose hacia el segundo de los polos (Vigil-Escalera 2011:20). Interiorizar esta situación y tomar conciencia de lo que estaba sucediendo fueron fundamentales para que el afán de consenso de las luchas previas fuera abandonado por una “guerra de posiciones” con la construcción de una identidad colectiva de clase y una estrategia que podríamos definir como contrahegemonía y antagonista, pero, siguiendo la terminología de Chantal Mouffe (2011:27-28), dejando abierta la puerta al *agonismo*, esto es, a una negociación con nuestros oponentes (empresarios, clase política, administración y, en ciertos aspectos, también la universidad y el colegio de arqueólogos) que permitiera mejoras sustanciales mediante una modificación de las prácticas, la legislación y las instituciones.

En el 2008, con el arranque del trabajo de AMTTA como asociación, nos enteramos por la prensa de que el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 22 de Madrid resolvía⁸, de forma contundente, que la ampliación de la carretera de circunvalación M-30 se había hecho vulnerando normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. La sentencia recogió todos los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción, incluidos los patrimoniales redactados por la plataforma de arqueólogos, e hizo suyos los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta instancia judicial comunitaria. Pese a este espaldarazo moral y al importante varapalo a las tesis defendidas por el consistorio madrileño y buena parte del *establishment* arqueológico regional, la obra ya estaba prácticamente finalizada, por lo que la sentencia no iba a tener ninguna consecuencia práctica. La lentitud de la justicia dejaba sin protección efectiva al medio ambiente y al patrimonio histórico.

Mientras tanto, desde AMTTA, y entre otras actividades (García 2012), seguíamos los pasos de Catalunya en la lucha por un convenio laboral colectivo para la arqueología madrileña. Nos empeñamos en su redacción⁹, inspirándonos en otros ejemplos nacionales y europeos, mediante un trabajo colectivo y la supervisión de un abogado. Una vez redactado pasamos a la fase de la negociación colectiva con las empresas del sector en Madrid. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con los mismos problemas que en las

8 Sentencia n.º 282 de 2008.

9 Véase <https://es.scribd.com/doc/72819470/PropuestaConvenio-junio2011>. A día de hoy solo 4 de las 17 comunidades autónomas que forman el Estado español tienen un convenio colectivo laboral para la arqueología.

negociaciones colectivas de otras regiones: la carencia o pasividad de los interlocutores empresariales, las disensiones internas entre los arqueólogos y el juego sucio de los sindicatos mayoritarios en la recta final del proceso (Moya 2010:21), sin cuya firma no se puede validar el convenio. Pero lo que no podíamos ni imaginar es que la patronal no llegaría ni siquiera a conformarse. Sin un interlocutor con el que negociar el articulado se hacía imposible, porque así lo marcaba la ley, sacarlo adelante. Poco tiempo después la última reforma laboral del PP en el 2012 supuso un arrasamiento más de los derechos laborales de los españoles porque, entre otros aspectos, redujo la aplicabilidad de los convenios laborales colectivos (González 2013:161), lo que nos obligó a dejar en el cajón el trabajo de varios años (AMTTA 2012b).

Además, este proceso de trabajo y lucha colectiva se dio en paralelo a los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria a partir del 2008. Como vimos, el parón en la construcción supuso, como efecto dominó, que cientos de arqueólogos sobrarian en el mercado laboral. Muchas empresas pasaron de tener contratados a decenas de arqueólogos y de mantener varias obras simultáneas a quedarse, exclusivamente, con los socios fundadores para adaptarse a la exigua y esporádica oferta de trabajos del momento actual. Los salarios se han reducido drásticamente y ha bajado la calidad técnica de los trabajos que, por otro lado, nunca había sido la deseable (Vigil-Escalera 2011:18). En AMTTA esto supuso pasar de las asambleas multitudinarias de los primeros años, con variadas comisiones de trabajo y en donde había trabajadores de las principales empresas de Madrid, a asambleas de no más de 12 miembros a partir del 2011.

Pese a la drástica reducción del número de participantes en las asambleas de AMTTA y al jarro de agua fría que supuso la reforma laboral del gobierno del PP en el 2012, la asociación comenzó una nueva ofensiva, esta vez contra el anteproyecto de ley de patrimonio de la CAM que suponía un claro retroceso en la protección del patrimonio histórico respecto a la ley de 1998. La solución del PP para salir de la crisis económica, provocada por la liberalización del suelo que ellos mismos habían aprobado¹⁰, fue apostar por el mismo modelo, en el cual el patrimonio no pasa de ser una mera traba administrativa. La desregulación patrimonial tiende a que “el patrimonio sea rentable”, en palabras de los responsables del PP en la CAM, aunque para ello se redacten leyes que contravienen artículos de la Constitución Española, de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y de los convenios internacionales firmados por España, como el de la Protección del Patrimonio Arqueológico de La Valletta, de 1992. La primera medida tomada por

10 Ley 6 de 1998, con la primera presidencia de José María Aznar.

AMTTA fue la elaboración de unas alegaciones¹¹ a la totalidad, proponiendo una redacción alternativa y razonada al articulado de la ley (AMTTA 2012a).

Otro de los hitos del 2012 fue la inserción de AMTTA en la asociación de asociaciones Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP)¹², una plataforma que coordina el trabajo de diferentes asociaciones y colectivos que defienden el patrimonio histórico, artístico, cultural, social y natural de la CAM. Arquitectos, urbanistas, ecologistas, asociaciones de vecinos en defensa de su patrimonio, proyectos autogestionados, asociaciones de memoria histórica... y ahora arqueólogos nos dábamos encuentro para coordinar nuestras luchas y realizar acciones conjuntas. Uno de los principales frentes al poco tiempo de entrar AMTTA en MCYP fue contra la regresiva reforma de la ley de patrimonio. En caso de tener que hacer una nueva ley, a lo que en principio no nos oponíamos, pedíamos que se democratizara su redacción, que se corrigieran los artículos marcados y que se incluyera a los profesionales y sectores afectados, como los coordinados por MCYP (Torija 2012).

La inclusión de AMTTA en MCYP supuso un espaldarazo para la asociación, ya que lo que antes eran luchas aisladas ahora eran acciones apoyadas por el resto de colectivos. En MCYP se da un refuerzo mutuo, una colaboración entre diferentes especialistas y sensibilidades y un trabajo continuado en las luchas patrimoniales que ha acabado desembocando en la conformación de una institucionalidad alternativa, referente para los medios de comunicación y los partidos políticos. Además, en MCYP ocurre la equivalencia de las luchas de las asociaciones y plataformas que lo conforman. Lo mismo podríamos decir de la estrecha relación de AMTTA con otras asociaciones profesionales y sindicatos de arqueólogos del Estado español que parten de posiciones similares en el campo político, de unas motivaciones compartidas (González 2013:164) y de unas "lógicas de equivalencia" mantenidas dentro de la autonomía y la horizontalidad (Laclau 2014:19-20). Estas lógicas de equivalencia no se encontraban en la Plataforma M-30 No Más Coches, puesto que con algunos de sus integrantes, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), era casi imposible compartir las estrategias y, mucho menos, los objetivos. El PSOE ha desempeñado el rol de pareja de baile necesaria del PP para, desde el arranque de la posdictadura, sustentar un sistema bipartidista (llamado en la calle PPSOE) que se presenta a sí mismo como situado en el centro del espectro político (centro-izquierda y centro-derecha), pero que, realmente, durante más de 30 años ha sido el artífice de la implementación de políticas profundamente conservadoras y neoliberales, del arrasamiento de lo público, del

11 Véase <https://es.scribd.com/doc/98436948/Alegaciones-AMTTA-Borrador-Ley-Madrid-2012>

12 Véase <http://madridciudadaniaypatrimonio.org/>

freno al avance de la democratización del país y del intento de destrucción de los movimientos sociales, así como responsable de mantener las formas socioeconómicas del tardofranquismo (Monedero 2013). En AMTTA queríamos aprender de los errores previos y, por tanto, creíamos fundamental realizar una discriminación de los colectivos con los que se converge en las luchas específicas. Ello se debe a que el cierre relativo del espacio es necesario para la construcción discursiva del antagonismo, ya que una cierta interioridad excluyente es requerida para constituir una totalidad que permita dividir a ese espacio en dos campos. La autonomía de los movimientos sociales es algo más que un requerimiento para que ciertas luchas puedan desarrollarse sin interferencias: es un requerimiento para que el antagonismo pueda emerger (Laclau y Mouffe 1987:152-153). Desde esta nueva posición, que busca la modificación de las prácticas, desarrollos legislativos y mejoras institucionales, no mediante el consenso sino desde el antagonismo agonista, es desde donde han trabajado y trabajan AMTTA y MCYP con los partidos políticos representados en el parlamento de la CAM.

El 13 de junio del 2013 entró en vigor la Ley 3 de 2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, gracias a la mayoría absoluta del PP. Esta ley, que ha sido definida como neoliberal y retrograda (Fernández 2013:14), busca, fundamentalmente, seguir proveyendo de suelo a las constructoras, para lo cual, una vez que ha explotado el modelo de construcción de viviendas en suburbios, el foco se ha puesto en los edificios históricos de los centros urbanos, la mayor parte de ellos protegidos por sus valores patrimoniales. La construcción de hoteles y apartamentos de lujo, centros comerciales, sedes de multinacionales y casinos parece ser la nueva apuesta de los gobiernos conservadores. Desde que se conoció el borrador del anteproyecto de ley, la respuesta de AMTTA fue desarrollar un trabajo frenético y asesorar a los partidos políticos de la oposición para la redacción de las alegaciones al texto legislativo. En colaboración con la Sección de Arqueología del CDL y con el apoyo de MCYP se organizó el “Grupo de trabajo sobre la normativa de patrimonio cultural en la Comunidad de Madrid”, que reunió a expertos de todo el territorio nacional y de ámbitos de conocimiento variados (arqueólogos, arquitectos, urbanistas, juristas..., provenientes de la administración, de las empresas, de la universidad...). Ese grupo tan heterogéneo llegó, sin embargo, a conclusiones firmes que fueron puestas por escrito en un manifiesto, en una petición de firmas y en una rueda de prensa que compartieron el título “Sin presente, sin futuro y ahora SIN PASADO.

Por la defensa del patrimonio histórico. NO a la ley 3/13 de la comunidad de Madrid”¹³. Además de apariciones en los principales medios de comunicación, se llevaron a cabo concentraciones delante de edificios en riesgo de Madrid, hoy ya destruidos, con letras que formaban la frase: “SOS patrimonio. No a una ley desprotectora”. También se organizó en el Ateneo de Madrid el encuentro “Patrimonio: lo legal, lo real” que, días después, fue acompañado por una visita guiada por el patrimonio arqueológico que no se ve, todo aquel destruido “científicamente” en aras del progreso del centro de la ciudad y que ni siquiera los otros especialistas conocen (García 2013; Torija 2013). Javier García (2013:25), uno de los principales juristas españoles especialistas en patrimonio y participante del mencionado grupo de trabajo, señaló:

La aprobación de la Ley 3/2013, de 18 de junio de 2013, de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, es, sin exageración, el acontecimiento más grave que ha ocurrido en la España democrática en el campo de la protección de los bienes culturales.

García fue encargado de redactar el recurso de inconstitucionalidad de la ley que presentamos ante el Tribunal Constitucional. Para poder presentar este recurso la legislación vigente obligaba a que fuera firmado por, al menos, 50 miembros del Congreso de los Diputados (Parlamento Nacional) o 50 senadores. Hubo que recurrir al peso del PSOE y, también, de forma minoritaria, a Izquierda Unida. El recurso fue admitido a trámite. El 17 de julio del 2014 la Sentencia 5277-2013 del Tribunal Constitucional dictaminó positivamente sobre la casi totalidad de las alegaciones presentadas y declaró inconstitucional el 20 % de la ley (Díaz del Pozo *et al.* 2014).

PALABRAS FINALES

La destrucción masiva de empleo asociada a la actividad arqueológica, el arrasamiento patrimonial, el agotamiento del modelo basado en la práctica comercial y las disfuncionalidades de la norma —evidenciadas a través de la multiplicidad de casos

13 Los principales puntos de oposición a la ley fueron el abuso de los silencios administrativos positivos; los plazos exigüos en la relación con la administración; la supresión de las comisiones de patrimonio; la eliminación de la realización de planes especiales; la eliminación del dominio público para el patrimonio arqueológico inmueble (medida que contradice a la Constitución Española); la no adaptación a la Declaración de Valletta de 1992, ratificada por el Estado español; y la anulación de la participación ciudadana (ya de por sí exigua en la anterior ley).

de corrupción política— ponen de relieve el cuestionamiento del discurso objetivado sobre la eficiencia del libre mercado y su finalidad estratégica. Ser empresario no es lo mismo que ser arqueólogo. Ese tipo de asociaciones ha creado una jurisdicción de conocimiento y poder sobre ciertas prácticas, atacando las bases cognitivas de la actividad arqueológica como práctica social. Los discursos sobre la eficiencia, la tecnificación y la libertad (de mercado) a través del capital han sido percibidos como “verdad”, como una tipología de conocimiento codificado de algo que no se sabe muy bien qué es. De nuevo queda en evidencia que el “conocimiento” y la “verdad” están relacionados con el ejercicio y la reproducción del poder (Foucault 2002).

El cataclismo de la arqueología española como actividad comercial abre un camino de reflexión en el que la legitimidad de la arqueología solo puede venir de una conexión real con lo público y lo social, aquella para la que, supuestamente, se había llevado a cabo el teatro normativo. Los ejemplos de pequeñas élites burguesas corruptibles ante las lógicas de capital (ya sea desde los ámbitos administrativos, académicos o productivos, o a través de prácticas ilegales, conniventes y cómplices) y la fragilidad de los grupos de presión (colectivos alienados, explotados y parias del sistema) ante tal caballo de batalla sitúan el horizonte de la “arqueología” como práctica política crítica, subversiva y emancipatoria. Una “arqueología” política, social, afectiva y conmovida, con agencia en términos de lucha, solo puede gestarse a través de la legitimidad inherente a los procesos inclusivos y a las alianzas (más allá de profesionales, gestores, políticos, empresas, academia y de estatus geográficos), es decir, a través de un discurso radicalmente diferente de “verdad” y “poder”. Pero no se trata de diluir nuestras luchas en otras más amplias, o de criticar el modelo de arqueología de gestión desde una perspectiva externa o desde la falsa dicotomía arqueología universitaria / arqueología de empresa; proponemos analizar y tomar conciencia de cuáles son las formas de explotación social y arrasamiento vinculadas a nuestro ámbito particular, con el fin de ganar autonomía y marcar las posiciones de cada uno dentro del campo arqueológico y, desde ahí, poder establecer alianzas con colectivos afines. En este sentido, la comprensión de las lógicas de la explotación social y laboral en la arqueología de gestión, así como las fórmulas de arrasamiento patrimonial que supuso esta práctica “normalizada”, son un paso ineludible para involucrar a los arqueólogos y las arqueólogas en luchas de más amplio espectro junto a otros colectivos sociales.

Los problemas que enfrenta la arqueología son un ejemplo más de las contradicciones congénitas del sistema capitalista global que celebra la máxima de la eficiencia desde el amparo ideológico de las élites políticas (a través de marcos normativos) e ilustradas (soberanas del conocimiento científico-académico), quienes han minimizado las diso-

nancias y los procesos reflexivos desde la hegemonía institucional y discursiva. Las protestas de trabajadoras y trabajadores en el contexto madrileño son un ejemplo de la impasividad con la cual las clases dominantes otean el expolio patrimonial derivado de lucrativos macroproyectos urbanísticos y el desfalco humano afín, en este caso arqueólogos y arqueólogas que nutrieron, y nutren, de fuerza de trabajo dichos proyectos, sin más posibilidad de negociación (ética, laboral y salarial) que la protesta sindicada y la lucha patrimonial. Ese movimiento ha sido desoído o criticado por una progresía intelectual que, desde sus tronos civilizados (es decir, desde una seguridad salarial y dignidad laboral y desde posiciones de voces cultivadas), se permitió moralismos e, incluso, mirar hacia otro lado, convirtiendo la problemática de la arqueología comercial en un ente ajeno a la distinguida arqueología de investigación —aparentemente no contaminada por el capitalismo—, como si se tratase de dos arqueologías distintas.

Aunque esta discusión trasciende el contexto español y la disciplina arqueológica, a través de la experiencia madrileña se ejemplifica la magnitud de los desafíos institucionales contemporáneos y sus limitadas formas de acción. Desde AMTTA se discutió si, en definitiva, estas luchas de los sindicatos de arqueólogos, asociaciones profesionales y colectivos de defensa del patrimonio no eran más que parches que seguían ocultando el verdadero problema: la explotación capitalista del territorio y la reproducción de ese pernicioso sistema socioeconómico mediante nuestra práctica profesional. Se trata de una encrucijada en la que queremos cambiar un sistema a la par que lo sustentamos y lo validamos.

Hay dos escenarios de análisis, uno a largo plazo y otro situado en nuestra práctica cotidiana. Respecto al primero somos conscientes de que la arqueología de gestión, tal y como la conocemos, deberá desaparecer o modificarse sustancialmente, adaptándose a una gestión no capitalista del territorio. En el caso concreto madrileño ello pasa por un modelo económico que no esté sustentado en la generación de plusvalía con el suelo y sobre principios económicos distintos a los actuales, como el decrecimiento. El modelo de gestión patrimonial en donde interviene la arqueología comercial no ha hecho sino consolidar el ciclo originado en el siglo XIX por el cual el patrimonio cultural, que podemos entender como un bien comunal, un procomún de la colectividad, ha ido pasando del ámbito público al privado (Fernández *et al.* 2015). Si defendemos un cambio de modelo habría que abogar por otras formas de gestionar el patrimonio arqueológico; si es entendido como un procomún, su investigación debe ser hecha por los poderes públicos y las comunidades locales. Desde AMTTA nos interesaba el modelo desarrollado en Francia hace unos años, hoy ya en fase de desmantelamiento. Allí existía una mayor participación del Estado en la arqueología preventiva, con diferentes instituciones públi-

cas con arqueólogos en nómina, desde la escala nacional, con el INRAP, hasta los servicios arqueológicos de los departamentos y los ayuntamientos. Aunque no se descartaba la participación del capital privado de los promotores y de las empresas de arqueología, y aun cuando el sistema tenía muchas carencias (Gernigon 2013), se trataba de un modelo sugerente, inspirador en lo que se refiere a la gestión pública de un bien común. Si defendemos una sanidad y una educación públicas y desarrolladas por funcionarios, ¿por qué no una gestión pública del patrimonio y en relación directa con las comunidades locales?

En este sentido, ante el debate sobre la ruptura radical con el paradigma imperante se presenta un dilema complejo, pues parece probable que la corriente institucional contemporánea seguirá existiendo durante los próximos años, incluso décadas. Sin embargo, esto no es motivo disuasor para soñar e idear otros horizontes. La revolución de la arqueología como práctica social, como lugar común para la negociación colectiva, únicamente podrá venir de actuaciones transversales e inclusivas; pero no seamos reduccionistas con el enemigo, pues la lucha tiene que hacerse también hacia dentro del campo arqueológico, no solo hacia afuera.

Gustavo Verdesio (2001:650-651) aboga por unos estudios sobre la materialidad a partir de estrategias que permitan narrar el pasado de manera informada —con base en datos empíricos— y reflexiva y cuestionar, al mismo tiempo, la forma como los académicos se relacionan con ese pasado. Para ello sería necesario sentar las bases de un marco disciplinario que posibilite un diálogo académico que no sea de sordos y una ética que haga posible y que fomente la elaboración de estrategias para incidir, seriamente, en la sociedad. En este sentido Verdesio enfatiza la necesidad de establecer un diálogo con los sujetos subalternos, a través de un modelo de investigación más democrático y permeable a los sujetos oprimidos. Sin embargo, esta perspectiva parte de una concepción de la disciplina arqueológica como un todo homogéneo, como si la arqueología no fuera un campo científico (Bourdieu 1994:54-77) con estructura y leyes y con agentes distribuidos de forma diferencial en función de sus relaciones objetivas; como si no hubiera conflictos, competición y dinámicas enfrentadas en donde entran en juego los capitales específicos —en la arqueología de gestión se combina el capital científico con el económico— según se esté en posiciones subordinadas o dominantes. Digámoslo claramente: dentro de la arqueología también hay lucha de clases. Como demuestra el caso madrileño, las luchas protagonizadas por arqueólogos y arqueólogas en posiciones subordinadas en ocasiones han coincidido con las de otros colectivos (a veces mantenidas, otras veces coyunturales) gracias a cadenas de equivalencia que, en parte, se definen por la condición subalterna de sus agentes. En el caso de la arqueología madrileña este sujeto subalterno no es otro que los cientos de trabajadores y trabajado-

ras en situación de precariedad, consecuencia de una triple ruptura ocurrida desde la década de los ochenta: la tecnificación de un sector del colectivo para introducirlo en la estructura de producción de plusvalía; la inserción en un contexto laboral novedoso en donde primó la subsistencia en el mercado antes que la producción de conocimiento; y el surgimiento de una clase “proletaroides” en el seno de la arqueología (Díaz del Río 2000:11-13). No se trata, por tanto, de la arqueología y su relación con los subalternos, sino de los subalternos de la arqueología.

Para llevar adelante esas luchas debemos deshacer el camino que nos llevó de científicos sociales a técnicos liberadores de suelo, y así poder ampliar el *zoom* de nuestro foco de atención y pasar de los límites del yacimiento en el que trabajamos al intento de análisis de las luchas hegemónicas y del modelo socioeconómico en el que se desenvuelve el patrimonio, pero siendo conscientes de que desde el ámbito de la arqueología no vamos a erradicar las contradicciones del capitalismo. Si el capitalismo está en crisis y se aboca hacia otro modelo es, entre otros motivos, por el agotamiento de los combustibles fósiles y los cambios a escala planetaria que están produciendo su reconfiguración (Fernández 2012). Lo que dependerá de nosotros como sociedad es que esos cambios lleguen a sociedades muertas, que permitan nuevas formas de feudalización de las relaciones sociales, o a sociedades vivas, que aprovechen las fisuras del sistema para subvertir la lógica del capitalismo y avanzar en la democratización de la sociedad. Pero, entonces, ya no estamos hablando solo de arqueología; hemos de saber situar las luchas y los procesos en los que nos encontramos.

Compartimos la crítica general que se hace a la arqueología de gestión como justificación científica del arrasamiento social y medioambiental que genera el capitalismo (Gnecco y Schmidt, este volumen) pero este debate nos recuerda al llevado en las plazas, como la Puerta del Sol de Madrid, cuando en las asambleas del 15M se discutía si el sistema debía ser reformado o destruido. Finalmente, se desarrollaron dos comisiones de trabajo para poder solventar esta dialéctica: política a largo plazo y política a corto plazo. Desde este trabajo pretendemos superar la dialéctica de ambos posicionamientos, puesto que las modificaciones sustanciales del sistema a largo plazo, o su completa subversión, devendrán de la suma de las luchas específicas, de la atención a la problemática cotidiana de los patrimonios locales, a su conflicto y a las condiciones de explotación de esos agentes subalternos. ¿De qué sirve llamar a la revolución desde la estabilidad institucional mientras las tropas siguen inmersas en el fango, sin alternativa a la reproducción de las lógicas ambidiestras del capital? Desde el trabajo cotidiano, desde los contextos particulares, desde las problemáticas locales patrimoniales es

posible generar procesos de toma de conciencia, de empoderamiento y de acción colectiva como forma de lucha. Nuestra propuesta es, por tanto, de escala local, pero tiene un objetivo mucho más ambicioso: la radicalización del Estado como única vía para resistir, controlar y modificar el capitalismo. Pero en esa liga los arqueólogos y las arqueólogas ya no estarían jugando de forma aislada.

La toma de conciencia en cuanto que víctimas, a la par que habilitadores, del capitalismo permitirá profundizar en la dimensión horizontal de su autonomía, paso ineludible para el establecimiento de alianzas de lucha en el aspecto vertical de la hegemonía. Si aspiramos a la consecución de un “socialismo del siglo XXI” tendremos que saber cómo combinar la dimensión horizontal de la autonomía y la dimensión vertical de la hegemonía (Laclau 2015:20). Al ampliar el *zoom* ya no se tratará, entonces, de las luchas específicas de la arqueología como disciplina, sino de la integración en otros movimientos sociales, participando y ejerciendo la responsabilidad social a través de la toma de decisiones y del control de las instituciones.

Por ello abogamos por un horizonte de trabajo desde el ámbito patrimonial que priorice la discusión colectiva a través de procesos de participación directa, desde posiciones horizontales, para aportar nuestro granito de arena en la reversión del actual modelo neoliberal de las “democracias de mercado”. Entendemos esa “arqueología en lucha” como una práctica militante y contrahegemónica que aspira a reconocer las dinámicas hegemónicas, pretéritas o actuales, cuya afirmación posibilitará la generación de cadenas de equivalencias entre aspiraciones y experiencias sociales —sindicalismo de clase, lucha feminista, lucha ecologista, movimientos vecinales, proyectos autogestionados, movimiento okupa... (Falquina *et al.* 2006)— que, en muchos casos, se vinculan, de una forma u otra, con el “derecho a la ciudad” (*sensu* Harvey 2013:20). Además, pensamos en el importante aporte que puede hacer la arqueología en los reclamos de ese derecho, mediante el reconocimiento de las genealogías de lucha inscritas en la materialidad habitada. Por último, abogamos por una práctica arqueológica consciente de que “las revoluciones contra el orden científico establecido son, inseparablemente, revoluciones contra el orden establecido” (Bourdieu 1999).

Estas luchas han ido generando una cultura de resistencia arqueológica que supone el mejor arsenal para afrontar los tiempos venideros. Además, es posible que también puedan servir de ejemplo para la reflexión, especialmente cuando otros países están experimentando ciclos de capitalismo desarrollista y avance de la legislación patrimonial similares a los de España, lo que, sin duda, no tardará en generar un nuevo caso de arqueólogos precarizados en medio de dos lógicas contrapuestas.

REFERENCIAS CITADAS

AMTTA

- 2008 Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología. Una iniciativa ante la precariedad laboral. En *Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: dialogando con la cultura material*, editado por Orjia, pp. 561-563. Cersa, Madrid.
- 2012a Alegaciones de AMTTA al borrador del anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 3:2.
- 2012b La reforma laboral supondrá más precariedad para el sector de la arqueología. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 2:3.

Bourdieu, Pierre

- 1994 *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Gedisa, Barcelona.
- 1999 *Intelectuales, política y poder*. Eudeba, Buenos Aires.

Capote, Marta, Nuria Castañeda, Susana Consuegra, Cristina Criado, Pedro Díaz del Río, María Ángeles Bustillo y José Luis Pérez

- 2006 Casa Montero. La mina de sílex más antigua de la península Ibérica. *Tierra y Tecnología: Revista de Información Geológica* 29:42-50.

Carmona, Pablo, Almudena Sánchez y Beatriz García

- 2012 *Spanish neocon. La revolución conservadora en la derecha española*. Traficantes de Sueños, Madrid.

Castillo, Alicia

- 2004 La gestión del patrimonio arqueológico y el urbanismo en la Comunidad de Madrid. *Complutum* 15:99-144.

CNT-Córdoba (Sección Sindical de Arqueología)

- 2012 Saliendo del subsuelo: sindicalismo y arqueología. La labor de la Sección Sindical de Arqueología de la Confederación Nacional del Trabajo. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 1:6-7.

Díaz del Pozo, Diana, Alicia Torija y Eva Zarco

- 2014 Una nueva ley de patrimonio histórico para la CAM. Reflexiones en torno a un camino accidentado. *Revista PH* 85:6-10.

Díaz del Río, Pedro

- 2000 Arqueología comercial y estructura de clase. En *Gestión patrimonial y desarrollo social*, editado por María del Mar Bóveda, pp. 7-18. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago.

(COE) Council of Europe

- 1992 *European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage* (revisada). 16. I. Valletta.

Falquina, Álvaro, Carlos Marín y Jorge Rolland

2006 Arqueología y práctica política. Acción y reflexión en un mundo cambiante. *Arqueoweb* 8(1).

Fernández, José Antonio

2013 Del “dejad hacer, dejad pasar” al “dejad hacer, dejad destruir”. *Apuntes de Arqueología* 27:2-5.

Fernández, Ramón

2012 *La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. Preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial*. Ediciones de Extensión Universitaria, Montevideo.

Fernández, Jesús, Pablo Alonso González y Óscar Navajas

2015 La Ponte-Ecomuséu: una herramienta de desarrollo rural basada en la socialización del patrimonio cultural. *Revista Iberoamericana de Patrimonio y Comunidad* 1:118-130.

Fernández, Manuel

1980 La arqueología en la Provincia de Madrid. *I Jornadas de Estudios sobre la Provincia de Madrid*, pp. 23-32. Diputación Provincial de Madrid, Madrid.

Foucault, Michel

2002 *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo XXI, Buenos Aires.

García, David

2007 L'arqueologia en lluita. Entrevista a Toni Llorca (CNT-SSC). *Estrat Crític* 1:6-10.

García, Javier

2013 La Ley 3/2013, una norma redactada para facilitar la expoliación de bienes culturales. *Apuntes de Arqueología* 1:25-28

García, María Luisa

2012 AMTTA, una respuesta al futuro de la arqueología madrileña. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 1:2.

2013 Aprobada una ley desprotectora de patrimonio en la Comunidad de Madrid. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 6:2-3.

Gernigon, Karim

2013 La arqueología preventiva en Francia: organización y problemáticas. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 5:3-5.

González, Alfredo

2010 Contra la pospolítica: arqueología de la Guerra Civil Española. *Revista Chilena de Antropología*, 22(2): 9-32.

González, David

2013 Del precariado a la nada. La situación laboral de la arqueología comercial en el Estado español a comienzos del s. XXI. En *Arqueología pública en España*, editado por Jaime Almansa, pp. 151-168. JAS, Madrid.

Harvey, David

2013 *Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Akal, Madrid.

Laclau, Ernesto

2014 *Los fundamentos retóricos de la sociedad*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe

1987 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Siglo XXI, Madrid.

Monedero, Juan Carlos

2013 *La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española*. Catarata, Madrid.

Mouffe, Chantal

2011 *En torno a lo político*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Moya, Pedro

2010 Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo XXI. *Complutum* 21(1):9-26.

Torija, Alicia

2012 Nueva propuesta de ley sobre patrimonio en la Comunidad de Madrid: algunas reflexiones. *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 4:3-4.

2013 Encuentro sobre "Patrimonio: lo legal, lo real". *A Pico y Pala. Boletín de AMTTA* 6:6-7.

Verdesio, Gustavo

2001 Todo lo que es sólido se disuelve en la academia: sobre los estudios coloniales, la teoría poscolonial, los estudios subalternos y la cultura material. *Revista de Estudios Hispánicos* 35:633-660.

Vidal, Julio Manuel

2005 La inmodélica gestión de la arqueología en España: de servicio público a mercancía. *PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico* 53:78-82.

Vigil-Escalera, Alfonso

2011 El pequeño mundo en ruinas. De la arqueología contractual española. *Arkeogazte* 1:17-20.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO EN BRASIL

BRASIL ES UN PAÍS GIGANTESCO (OCHO VECES MÁS GRANDE QUE COLOMBIA Y CASI LA MITAD DE LA superficie de Suramérica). Su escala desmesurada no es solo espacial: allí también son gigantes los problemas contemporáneos, desde la pobreza y la criminalidad hasta la corrupción practicada por la clase política. Uno de esos problemas es la arqueología de contrato. Los temas tratados en esta sección, dedicada a pensar / sondear la arqueología de contrato en Brasil y sus temas conexos, son los mismos que pueden verse en otros lugares, aunque allí adquieren características singulares —y, a veces, francamente desproporcionadas—.

En Brasil, como en muchos otros países, la arqueología de contrato se realiza en el marco de estudios ambientales exigidos por la ley. La relación de la arqueología de contrato con las legislaciones ambientales no es casual. Con la preocupación global por el deterioro de los delicados equilibrios planetarios han surgido legislaciones que buscan poner freno (o, al menos, encausar) a los nocivos impactos medioambientales de los proyectos de desarrollo —que benefician al gran capital a expensas de las finas relaciones de la vida—. Justas y bien intencionadas en principio, aunque puramente modernas en su concepción de lo que es cultura y de lo que es naturaleza, esas legislaciones han terminado siendo, en la mayoría de los casos, simples satisfacciones burocráticas. Después de la intervención de una plétora de “expertos” que certifican que los daños ambientales serán menores o remediables (aunque no lo sean), las licencias ambientales dan vía libre a los proyectos en cuestión —porque el desarrollo no se cuestiona, solo se administra—. En un macabro juego inacabable permiten que la naturaleza, una vez más, sea devorada por la cultura. La arqueología de contrato es una más de las disciplinas involucradas. Su labor técnica, profesional y gerencial se limita a dar cuenta de la presencia o ausencia de las huellas del pasado en las zonas que van a ser impactadas por proyectos específicos. Cuando las evaluaciones determinan la presencia del pasado se negocia con las empresas contratantes un plazo prudencial para que sus huellas sean documentadas. En cualquier caso, el resultado final es que los arqueólogos de contrato actúan como liberadores del suelo. Al final triunfa el desarrollo, una aplanadora que muchos aplauden y pocos enfrentan —y esos pocos no están en las empresas contratantes—.

tes y rara vez hacen parte de los “expertos” contratados—. La liberación del suelo, claro, no solo elimina las huellas del pasado; también desplaza poblaciones, a veces en gran escala, y abre paso a la producción de daños ambientales, muchas veces irreparables. En la relación entre arqueología de contrato y desarrollo son vulnerados los derechos de las comunidades locales y la naturaleza, casi nunca considerados en la ecuación.

La educación patrimonial, íntimamente ligada a los proyectos de contrato como forma de cumplir con los mandatos empresariales de responsabilidad social, ignora y agrede las concepciones locales sobre lo que la modernidad llama patrimonio, pasado, arqueología. Es una violencia colonial porque repite la viejísima idea de que el otro no tiene voz ni concepciones propias y por eso debe ser educado en términos ilustrados, haciéndole conocer los hallazgos determinados por la narrativa moderna del tiempo. La educación patrimonial participa del carácter netamente monológico de la comunicación moderna: ha emitido enunciados en una sola vía (y, consecuentemente, entendimientos en una sola vía), por medio de los cuales la alteridad es contenida por las redes semánticas de la civilización, el progreso y el desarrollo —varios nombres para la misma idea—. Puesto que educa de acuerdo con los lineamientos temporales de la modernidad, no ha buscado establecer relacionamientos respetuosos y transformadores; es, en suma, una práctica arrogante y violentadora.

El artículo de Carlos Fausto fue el único escrito hace ya varios años (en el 2006), como reacción a los desatinos deliberados de un informe emitido por una empresa de contrato sobre la zona donde se iba a construir (y donde finalmente se construyó) una represa en el río Culuene, y ayuda a ver el tema del impacto de la arqueología de contrato sobre los derechos humanos en Brasil desde una perspectiva temporal. El informe de la empresa de contrato liberó la zona, lo cual permitió que el proyecto siguiera adelante, pisoteando las marcas territoriales de una población indígena asentada en el lugar y legitimando su desplazamiento. Mientras otras disciplinas, incluso de la ciencia dura, se opusieron a lo que estaba sucediendo, la arqueología miró para otro lado. Silencio y complacencia. La complicidad con los proyectos de intervención y el silencio de la arqueología sobre la violación de los derechos humanos y el medio ambiente surge, en gran medida, de la relación acrítica e instrumental con el desarrollo que caracteriza a su campo contractual. Esta situación también se debe a la posición tradicional de la disciplina en el país, educada desde el régimen militar a rechazar las definiciones rígidas y a repudiar los conflictos, ayudando con ello a ocultar los problemas sociales y a exacerbar la exclusión política. Esto se refleja en la Sociedad de Arqueología Brasileña (SAB), la mayoría de cuyos miembros es contratista en proyectos de variada escala, lo que la condujo a un silencio gremial absoluto. Aunque casi todos los arqueólogos brasileños continúan

haciendo proyectos por contrato, incluso si son profesores o si ocupan cargos directivos sensibles en la toma de decisiones sobre políticas educativas, las cosas han empezado a cambiar, y lo están haciendo en la dirección correcta. Recientemente el largo silencio de la SAB empezó a romperse, a través de simposios promovidos en su último congreso, así como de la publicación en su revista de posiciones críticas de la arqueología de contrato. Aunque estos movimientos todavía son tímidos y específicos, indican la posibilidad de un cambio en la conciencia política de la arqueología brasileña y son una señal clara de que el asunto se empieza a discutir y de que ya es parte de la agenda pública; más importante aún, si los arqueólogos siguen laborando en condiciones contractuales, lo harán con plena conciencia de las consecuencias de su trabajo, sin poder esgrimir ya más la torpe excusa de que no sabían qué estaban haciendo.

PROYECTOS DE DESARROLLO, VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EL SILENCIO DE LA ARQUEOLOGÍA EN BRASIL

Loredana Ribeiro

Traducido del portugués por Cristóbal Gnecco

INTRODUCCIÓN

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SOBRADINHO FUE CONSTRUIDA EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA EN EL noreste de Brasil. Su construcción produjo el desplazamiento forzado de más de 70.000 mil personas de los márgenes del río São Francisco. Para reubicar esta población el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria —Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)— creó el Proyecto Especial de Colonización —Projeto Especial de Colonização (PEC)— de la Sierra de Ramalho, una formación montañosa situada en una región semiárida cientos de kilómetros al sur de las tierras originales de la población desplazada y que ya estaba habitada por un grupo indígena, los pankarus (figura 1). A mediados de la década de los setenta más de mil familias fueron desplazadas del área del embalse y reubicadas en la Sierra de Ramalho. Los pankarus fueron confinados a un pueblo especialmente planeado en un área boscosa seca (Estrela 2009).

Treinta años más tarde, entre el 2004 y el 2005, mientras estudiaba el arte rupestre de la región, conocí a algunas de las personas que habían sido reubicadas por la fuerza de Sobradinho al PEC Sierra de Ramalho (Ribeiro 2009). Matilde, Valdeci y Décio fueron algunas de las personas que me guiaron a los sitios arqueológicos y con quienes desarrollé una relación más estrecha. De las conversaciones que tuvimos sobre una variedad de temas se destacaron su infancia, los recuerdos de juventud en Sobradinho y los relatos de espíritus en los sitios con arte rupestre. Fue al hablar de los abrigos rocosos pintados y de las entidades que moran allí que llegué a conocer las historias de esas personas, los “afectados por Sobradinho”, las más perjudicadas y menos beneficiadas por este proyecto de desarrollo económico de la dictadura militar.

Muchos aspectos observados durante la construcción de Sobradinho son recurrentes en el licenciamiento ambiental en Brasil. Su ejecución fue precedida por un proyecto pionero de rescate arqueológico que me permite ver la actual arqueología de contrato a la luz de esa experiencia. Desde la década de los setenta el papel de la arqueología



Figura 1. Localización de la represa Sobradinho y del Proyecto Especial de Colonización en la Sierra de Ramalho. Abajo: vista panorámica de Sobradinho
Fuente: fotos recuperadas de Google earth y wikimedia.

en la arena del licenciamiento ambiental, que ha sido la fuerza principal detrás del crecimiento de la disciplina en los últimos años, no ha experimentado ningún cambio. Todavía es pretenciosamente técnica y neutral y aislada de los conflictos e injusticias causadas por los proyectos de desarrollo.

La relación entre los habitantes de la Sierra de Ramalho y los abrigos locales es sintomática de las consecuencias persistentes de la construcción de la represa. Las narrativas locales sobre los sitios arqueológicos me permiten escrutar la materialidad del conflicto socioambiental que se ha estado desarrollando desde que se construyó la represa; también me permite apoyar las reivindicaciones locales que han sido margi-

nadas en las últimas cuatro décadas. El momento es adecuado para lamentar el aniversario 42 de la construcción de Sobradinho (1973), para llamar la atención sobre los conflictos persistentes provocados por los proyectos de desarrollo y para la lucha permanente de las poblaciones afectadas por el reconocimiento de sus derechos¹.

LA GENTE DEL RÍO Y LA GENTE DE LA SIERRA

Las personas que habitan en las márgenes del río São Francisco se llaman a sí mismas *beraderos*. En los lugares no modificados por las represas la población tradicional mantiene una economía basada en el movimiento estacional del río, una combinación de ganadería y pesca. Hasta la construcción de Sobradinho el río era la principal referencia que tenían los *beraderos* para la constitución del tiempo y el espacio; su movimiento marcaba las estaciones y las diferencias de los años, mientras que la distancia desde el río marcaba la jerarquía del espacio y el movimiento de la gente en el territorio —cerca o lejos, arriba o abajo, adelante o atrás; todas las posiciones tenían al río como referencia (Sigaud *et al.* 1987)—. Para llenar la represa se inundaron veintiséis aldeas y cuatro centros urbanos. Más de 4.000 familias vivían en la zona rural que ahora está bajo el agua; unas mil personas fueron forzadas a trasladarse a la Sierra de Ramalho (Estrela 2009). La continuidad de su forma de vida tradicional fue imposible en las aldeas en las que fueron reubicadas: el río está a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano, hay pocos campos cultivables y casi no hay agua para los cultivos y el ganado. En ausencia del río las personas reasentadas en la Sierra de Ramalho se confunden: se pierden en las estaciones, en el calendario religioso y en las nuevas tierras (Sigaud *et al.* 1987). Estas tierras ya estaban ocupadas por los *pankarus*, cuya tenencia fue reafirmada por varios abrigos rocosos con arte rupestre.

Los *pankarus* fueron a la Sierra de Ramalho en la década de los cincuenta por su propia decisión, aunque las plantas hidroeléctricas tienen un papel central en su historia reciente. Su relato ejemplifica un movimiento indígena característico del noreste de Brasil desde la década de los setenta: la movilización de grupos en un proceso de etnogénesis que incluye el surgimiento de nuevas identidades y la reinención de etnicidades ya conocidas (Oliveira 2004:20). En las narrativas *pankaru* el origen está relacionado con la migración del *pajé* (chamán) Apolônio desde una aldea *pankararu* (un grupo indígena distinto) en Pernambuco. A principios de la década de los cincuenta

1 Véase www.mabnacional.org.br

Apolônio consiguió un trabajo en la construcción de la central hidroeléctrica Afonso Paulo y, después, como guardia de seguridad en otra planta, Correntina, en el estado de Bahía. Para entonces el *pajé* había llegado a conocer a los bosques y abandonados del *cerrado* de la Sierra de Ramalho y planeó mudarse allí con su familia y sus parientes. Cuando a principios de la década de los sesenta el INCRA anunció el programa de colonización de la Sierra de Ramalho para las poblaciones afectadas por Sobradinho, la tierra de los pankarus fue invadida por forasteros que se asentaron y legalizaron títulos de propiedad, con la esperanza de ser compensados por el Gobierno más tarde. Después de estas invasiones llegaron técnicos del INCRA a dividir las tierras; aunque la Fundación Nacional del Indio —Fundação Nacional do Indio (FUNAI)— participó en las negociaciones, no pudo impedir que los pankarus fueran confinados a un área de menos de 1.000 hectáreas de un total de más de 250.000 hectáreas que formaban parte del proyecto de colonización en la Sierra de Ramalho. Los pankarus fueron identificados y reconocidos por la FUNAI en la década de los setenta, pero la ratificación de sus tierras solo se produjo a comienzos de la década de los noventa² (Sampaio 1993; Arruti 2004).

Desde la década de los sesenta las personas reubicadas de Sobradinho se relacionaron con los pankarus y con numerosos sitios arqueológicos en la zona, en una telaraña de significado con el nuevo territorio, materializando sus derechos como personas afectadas. En las narraciones de la población local se expresan relaciones complejas. Matilde, por ejemplo, vive a 400 metros de un afloramiento de roca con muchos paneles pintados, pero cada vez que me llevó allí lo hizo a caballo, con el argumento de que “los que caminan son los habitantes”. Los habitantes son los pankarus, que vagan por las colinas y duermen a la entrada de las cuevas. Así también se llama un cañón con muchos abrigos rocosos y cuevas, utilizadas en la década de los ochenta por una familia indígena que cazaba por allí. La palabra “habitante” es un sinónimo de los pobladores originales de las colinas: “[Hasta la llegada de los reasentados por el PEC] todas estas colinas eran solo la casa de los indios”, según Valdeci. Muchos de los *beraderos* reconocen que su traslado forzoso a la Sierra de Ramalho por el INCRA causó el confinamiento de los pankarus.

Valdeci, como muchos otros colonos nuevos, sostiene que los pankarus conocían bien los secretos de la tierra y los escondieron antes de que fueran aislados en una pequeña porción de la Sierra de Ramalho. En la clasificación de los abrigos de piedra hecha por los nuevos colonos hay dos tipos que son particularmente distintivos por el simbolismo involucrado en el conflicto entre ellos y los colonos originales. Para encontrar agua

2 Véase <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankaru>

en la Sierra los *beraderos* tienen que excavar el suelo o escabullirse a lo largo de los conductos y galerías de la roca en busca de ríos subterráneos que podrían canalizarse —estos lugares son llamados aguas “ocultas” o “descubiertas”—. Las cuevas con ríos subterráneos o fisuras con acceso a aguas subterráneas tienen una importancia vital para el suministro de agua para las personas y los animales domésticos (figura 2). Pero la Sierra es abundante en cuevas y paleoconductos obstruidos por arcilla, piedras y otros materiales arrastrados por la corriente. Los nuevos pobladores afirman que estos conglomerados son paredes artificiales hechas de arcilla y piedra por los antiguos pobladores para evitar el acceso al agua escondida en las profundidades de las cuevas. Este segundo tipo, cuevas cubiertas selladas artificialmente por los pobladores originales, materializa la privación, la sed y la escasez de alimentos que asaltan a las familias reubicadas.

La mayoría de las “cuevas cubiertas” tiene pinturas rupestres en la entrada y, a veces, adentro —de hecho, es fácil encontrar pinturas y grabados en los muchos abrigos de la Sierra de Ramalho (figura 3)—. La ocupación humana data de la transición Pleistoceno / Holoceno y hoy se conocen docenas de sitios con arte rupestre en la Sierra. Esos sitios



Figura 2. Fisuras verticales con acceso al agua subterránea que se usa en las casas del vecindario
Fuente: Loredana Ribeiro, 2004.

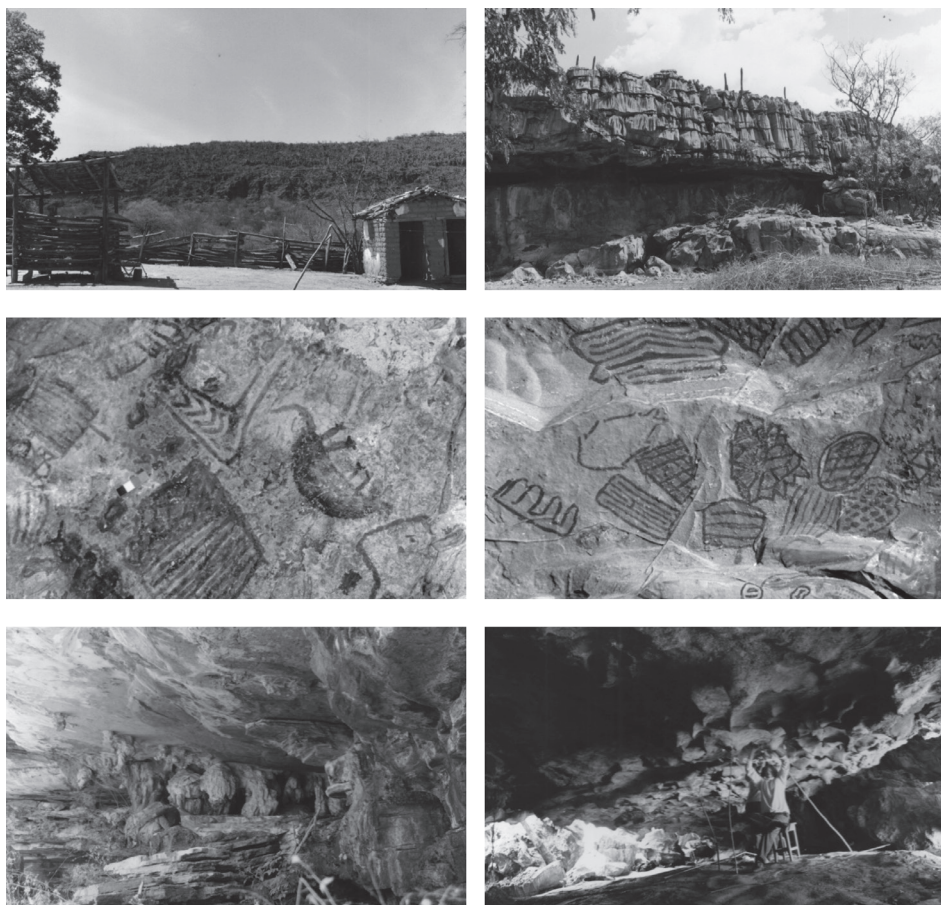


Figura 3. Paisajes de la Sierra de Ramalho. Arriba y abajo: formaciones de piedra caliza y abrigos rocosos. Centro: techo pintado del abrigo Morro da Lapinha

Fuente: Loredana Ribeiro, 2004 y 2005.

tienen una gran diversidad de estilos de pintura y grabado y a veces ocupan el espacio con una gran cantidad de figuras, algunas en grupos y otras aisladas (Ribeiro 2007; Schmitz *et al.* 1996). Para los nuevos pobladores los abrigos rocosos estaban llenos de dibujos hermosos, pero incomprensibles, y estaban habitados por espíritus indios —los guardianes de las riquezas enterradas—. En algunos abrigos los hombres excavaron en busca de esos tesoros, pero solo encontraron signos enloquecedores de la presencia de las almas indias: risas y susurros burlones que podían escuchar mientras trabajaban

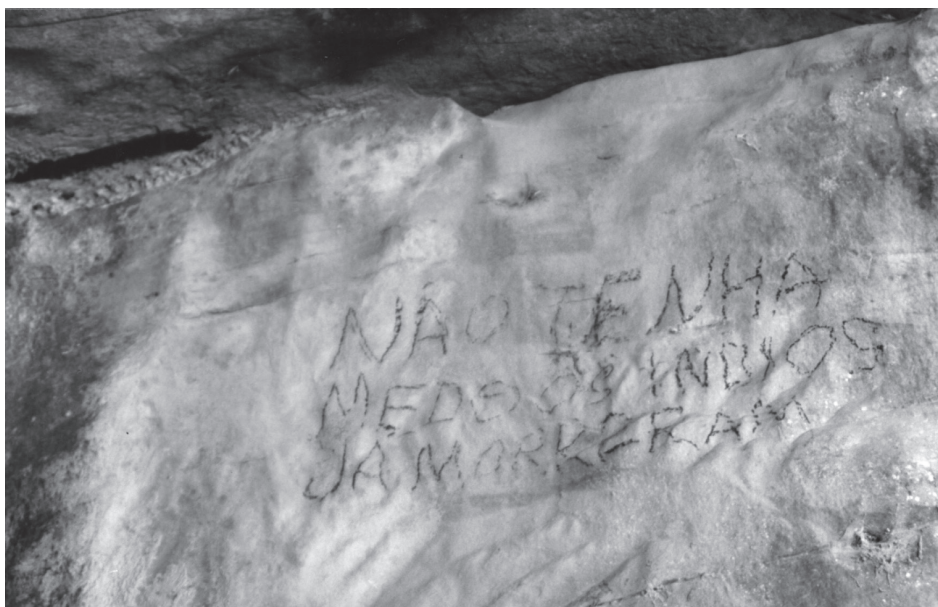


Figura 4. Grafiti en carbón en un abrigo rocoso con pinturas. Dice: “No tema a los indios. Ya están muertos”

Fuente: Loredana Ribeiro, 2005.

en los sitios y en su camino de regreso a casa. Incluso los confundieron y los hicieron perder en el bosque, a veces durante varios días (figura 4). En uno de los relatos más inquietantes el cazador de tesoros encuentra la guardiana de las riquezas de los pankarus: un cuerpo tan bien preservado que todavía tenía pelo y, de acuerdo con Décio y su hijo, las curvas de los senos³.

Esta creencia en tesoros escondidos en abrigos rocosos y marcados por el arte rupestre es arquetípica del imaginario de las zonas interiores (Pereira 2004; Ribeiro 2010; Jorge *et al.* 2007); sin embargo, ha resurgido en la Sierra de Ramalho debido al conflicto socioambiental creado por la construcción de Sobradinho. Sin acceso al río y desplazados a las colinas áridas, los *beraderos* se han asentado en una tierra sin referentes espaciales o cosmológicos conocidos. Parte de la población expulsada de Sobradinho

3 La momificación natural es bastante común en el ambiente calcáreo de suelos básicos y clima seco, como los que prevalecen en la Sierra.

terminó yendo a regiones más centrales del país. Con el éxodo muchos de los afectados por Sobradinho se comparan con la cerceta (*Anas querquedula*, un ave doméstica con pocos lazos con sus crías), individuos desarraigados sin destino cierto (Estrela 2005). Otra parte de la población desplazada regresó a la zona de la represa (Sigaud 1992). Los que se quedaron en la Sierra trabajan en agricultura, ganadería y comercio y son ellos quienes hablan de tesoros escondidos en las entrañas de los cerros y de las entidades fantasmales que los protegen.

Aparte de aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscar tesoros escondidos, los sitios de arte rupestre son lugares que es preciso evitar. No se utilizan como refugios para cazadores, ni siquiera como lugares de culto o de ocio; en estos casos parecen ser utilizados los refugios naturales sin arte rupestre (Ribeiro 2009). Para los nuevos pobladores las cuevas son artefactos pankarus: fueron ellos quienes modelaron las colinas, les dieron sus características actuales y marcaron los refugios con sus figuras de colores. El arte rupestre refiere a una época de comunidades arraigadas, conocedoras de su tierra y sus secretos. Sin embargo, las antiguas raíces de algunos señalan la diáspora forzada de otros. Los nuevos colonos constituyen y reconstituyen sus identidades como afectados por la represa, y se mantienen lejos de las cuevas cubiertas, contando y volviendo a contar los relatos sobre ellas e, incluso, excavándolas en busca de tesoros. Esta interacción particular y negativa con la evidencia material de otro pasado indígena, que estimula la repulsión en lugar de la pertenencia, también actúa para reforzar y hacer más duradera la resistencia de la comunidad.

El papel desempeñado por los sitios arqueológicos en la producción y articulación de significados por parte de las poblaciones afectadas por Sobradinho es, obviamente, contextual y apropiado para sus historias. Pero si creemos que ninguna interacción social es posible sin la participación del mundo material, y que estas interacciones siempre están mediadas por seres animados e inanimados, entonces el papel desempeñado por los sitios arqueológicos de la Sierra de Ramalho en los actuales conflictos socioambientales se vuelve prominente; se convierte en parte de una resistencia más amplia a los propósitos capitalistas —un tema sumariamente ignorado por la mayoría de los arqueólogos y las arqueólogas de Brasil—.

LA GENTE DE LA CIENCIA Y DE LAS TÉCNICAS

No tiene sentido imaginar lo que la arqueología podría haber hecho en Sobradinho a mediados de la década de los setenta si hubiese utilizado su conocimiento para favorecer los lazos y los derechos de los *beraderos* con su territorio tradicional. En aquel

entonces ni siquiera fue considerada la posibilidad de cartografiar las interacciones entre las poblaciones locales y los sitios arqueológicos como un medio para evaluar las consecuencias de la reubicación forzada. Los efectos que podría producir el cambio radical del paisaje y la consecuente supresión de la interacción entre las personas y el pasado material con el que estaban familiarizadas no fueron motivo de preocupación. Las consecuencias de la construcción de la hidroeléctrica fueron ignoradas, como las dificultades o, incluso, la imposibilidad de reproducir las economías tradicionales en las áreas de reasentamiento y la ruptura abrupta de los lazos familiares y de las redes comunitarias. El proyecto Sobradinho fue llevado a cabo por la fuerza, en tiempos de la dictadura militar.

La arqueología en Brasil se ha expandido dramáticamente en las últimas cuatro décadas, sobre todo a raíz de proyectos de desarrollo similares a Sobradinho, los cuales han causado expropiación material, violación de derechos humanos y marginación de las comunidades tradicionales; la única diferencia es que ya no vivimos bajo la sombra (o justificación) de un régimen militar. Aunque hoy algunos, o muchos, de nosotros compartimos una profunda insatisfacción con la forma como ha actuado la arqueología en el licenciamiento ambiental, carecemos de mecanismos eficientes para enfrentar esta situación. Para generar una posición contrahegemónica primero es necesario definir, claramente, la hegemonía que tendríamos que enfrentar, caracterizando las políticas ambientales en Brasil y el funcionamiento de los procesos de licenciamiento. Es decir, para develar la arqueología de contrato también necesitamos develar el proceso administrativo que le da sentido —el licenciamiento ambiental—.

El actual modelo de gestión ambiental adoptado en Brasil es consecuencia de las mismas políticas de desarrollo del régimen militar que llevaron a la construcción de Sobradinho. Muchas personas ya han llamado la atención sobre el hecho de que el *campo* (*sensu* Bourdieu 1993) ambiental en Brasil está organizado en posiciones jerárquicas y relaciones desiguales de poder y que las representaciones simbólicas del medio ambiente, su uso y destino están en disputa y son decididos en condiciones asimétricas (Zhourri 2008). El licenciamiento ambiental, el principal instrumento de las políticas ambientales de Brasil, está marcado por el carácter deliberativo de la democracia liberal; su principal objetivo es organizar los procesos de toma de decisiones mediante la participación directa; sin embargo, promueve lo que Avritzer y de Souza Santos (2002) han llamado democracia de baja intensidad, que resta importancia a la participación popular directa. Esa democracia se caracteriza por “buenas políticas” establecidas por políticos, empleados públicos, empresarios y consultores externos y crea consenso y acuerdo entre las partes, en lugar de políticas que identifiquen, caractericen y resuelvan

los conflictos (Vieira 2008). El consenso, que es inherente a la noción de desarrollo sostenible, prospera en la posibilidad de contemporizar diferentes intereses económicos, ecológicos y sociales, pero abstrayendo las relaciones de poder que influyen en la dinámica de los procesos sociales. Por esa razón, Chantal Mouffe (2000:49) ha declarado que el consenso en una sociedad democrática liberal es la expresión de la hegemonía y la cristalización de las relaciones de poder.

La base del licenciamiento ambiental son los estudios de impacto ambiental —estudios de impacto ambiental (EIA)— y los informes de impacto ambiental —relatórios de impacto ambiental (RIMA)— posteriores. Ambos son resultado de diversas evaluaciones (ecológicas, antropológicas, arqueológicas) llevadas a cabo por personal contratado por empresas de desarrollo. De acuerdo con la lógica del mercado, las EIA / RIMA son mercancías compradas por las empresas con el fin de que los organismos públicos aprueben sus planes. Dentro de esta lógica los consultores externos tienden a elaborar informes que facilitan e impulsan los proyectos de desarrollo (Lacorte y Barbosa 1995; Zhouri 2008; Vieira 2008). Además, Zhouri (2008; Zhouri y Oliveira 2007) ha demostrado que las políticas ambientales en Brasil operan dentro de un “paradigma de adecuación ambiental” —en el cual el medio ambiente está concebido como algo aparte de las relaciones sociales, como un paisaje neutral que puede ser adaptado a los proyectos técnicos a través de la mitigación y la compensación—. Una “posible conciliación de intereses” es, en realidad, la adecuación de las dimensiones ecológicas y sociales a los intereses económicos.

Las evaluaciones arqueológicas para proyectos de desarrollo son una parte de esta lógica, ya que tratan los sitios arqueológicos como realidades ajenas a los grupos sociales existentes, como algo que solo se refiere al pasado del territorio destinado al desarrollo. Los consultores circulan con facilidad entre la investigación académica y la arqueología de contrato, bajo el supuesto de que los informes de contrato son técnicos, neutrales y objetivos —y aprovechando una realidad que está “allá afuera” para ser descubierta—. Este supuesto, muy familiar para la arqueología brasileña, hace que sea difícil, cuando no impide, entender los significados de los sitios arqueológicos para las poblaciones actuales, especialmente los significados producidos en contextos de conflictos sociales y ambientales.

En Sobradinho la arqueología de contrato produjo síntesis regionales útiles, se registraron decenas de sitios y miles de objetos fueron recuperados, inventariados y salvaguardados —se recuperó más de una tonelada de material (Calderón *et al.* 1977)—. Sin embargo, un legado positivista, expresado en la descripción de artefactos y en las tipologías y cronologías, resuena en los informes técnicos elaborados por las empresas

consultoras. La investigación arqueológica para licenciamiento ambiental está comprometida con sitios y materiales, con su estudio y registro, pero los intereses y las expectativas de los pueblos locales se ignoran de forma rutinaria.

EL SILENCIO DE LA ARQUEOLOGÍA EN EL CAMPO AMBIENTAL DE BRASIL

Sobradinho es un ejemplo histórico de violación de derechos humanos por parte de un proyecto de desarrollo a gran escala. A pesar de que han pasado más de 40 años desde su construcción, la situación en Brasil aún no ha cambiado. En el 2011 el Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, un organismo público asociado al secretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, emitió el informe de una comisión especial creada para evaluar denuncias de violaciones de derechos humanos durante la construcción de las represas. La comisión concluyó que la insuficiencia y la precariedad de los estudios ambientales, así como la definición restringida y limitada del concepto de “poblaciones afectadas” adoptado por las empresas de consultoría, habían causado recurrentes y graves violaciones de los derechos humanos. La comisión observó que 16 derechos habían sido violados sistemáticamente, varios de los cuales se refieren a las actividades arqueológicas directamente: derechos de información y participación; derechos de las prácticas tradicionales y formas de vida; derechos de acceso y preservación de los recursos culturales, materiales e inmateriales; y derechos de los indígenas, comunidades cimarronas y poblaciones tradicionales⁴. El informe también señaló que las políticas de Brasil para la implementación de proyectos de desarrollo tienden a profundizar la violación de los derechos humanos.

El licenciamiento ambiental en Brasil está influido por la noción de propiedad y por el establecimiento de costos económicos. Lo que se está licenciado en Brasil es un área geográfica determinada (el área que va a ser impactada por el desarrollo), vista como una propiedad a la que se adjuntan costos económicos en su proceso de desarrollo. Esos costos son el resultado de estudios técnicos, compensaciones y multas y de los acuerdos que se firmarán, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico —Instituto do Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN)—, debido a la eventual destrucción de sitios arqueológicos. Ivan Illich (citado por Esteva 1992:18) escribió que el valor económico se establece a expensas de la depreciación de todas las formas de existencia social. En la apropiación del medio ambiente las técnicas son

4 Véase www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cddph/relatorios/relatorios

mecanismos de esta depreciación. Muchos estudios de caso han demostrado que los pueblos afectados por los proyectos de desarrollo son descalificados y quebrantados por las licencias ambientales (Zhouri *et al.* 2005; Rothman 2008).

En tiempos del Programa de Aceleración del Crecimiento —Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)—, una política gubernamental para impulsar el desarrollo del país, los proyectos surgen y se hacen viables con una velocidad vertiginosa. La gran dispersión de los proyectos de licenciamiento en todo el país y la alta inversión de los sectores público y privado en los estudios arqueológicos requeridos por esos proyectos son efectos de la expansión mundial del capitalismo sobre territorios históricamente ocupados por grupos tradicionales y minorías étnicas (Zhouri y Oliveira 2007). Más de 12.500 proyectos energéticos y minerales se encuentran actualmente en curso en Brasil (muchos de los cuales tienen sus propios planes para la autogeneración de electricidad), ya sea en una etapa de licenciamiento, o ya sea en una etapa de planificación. La página web oficial de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) muestra 3.026 empresas en funcionamiento, a las que pronto se deben añadir 693 nuevas⁵. El informe del 2011 del Instituto Brasileño de Minería —Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)— registró 8.870 proyectos mineros en régimen de concesión o licencia⁶. Es seguro que más de uno de estos emprendimientos coincidirá con áreas en las cuales los arqueólogos y las arqueólogas realizan investigaciones. Sin embargo, pocos de nosotros van a reportar irregularidades o discutirá los efectos que los proyectos de desarrollo tienen sobre los grupos marginados. Esto parece ser un asunto de poca importancia para la arqueología en Brasil, dedicada, casi exclusivamente, a la protección del patrimonio arqueológico, según lo definido por el Estado. Solo recientemente hemos empezado a discutir cuestiones éticas en nuestra práctica profesional y a argumentar en contra de ciertas conductas de la arqueología de contrato (Oliveira 2006; Ribeiro 2010; Neves 2010; Dias 2010; Rocha *et al.* 2013). La regulación profesional se ha debatido a fondo en eventos académicos en los últimos años (reuniones, foros nacionales e internacionales, simposios, una audiencia con el Ministerio Público). A pesar de que la práctica arqueológica en el licenciamiento ambiental necesita algunos valores morales, la organización de la profesión en torno a principios éticos básicos no cambia la lógica de mercado que guía los estudios de impacto ambiental; mucho menos va a resolver las injusticias sociales y ambientales que van de la mano con los proyectos de desarrollo.

5 Véase www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm

6 Véase www.ibram.org.br/

Sin embargo, la arqueología puede adoptar diferentes posiciones en las políticas ambientales, posiciones en las cuales nuestros informes de investigación no son mercancías, sino herramientas para el empoderamiento de los grupos sociales afectados por los proyectos de desarrollo. A raíz de las discusiones actuales sobre la buena conducta en el ejercicio profesional, hemos empezado a pensar en los efectos políticos de las prácticas de campo vigentes y en el análisis en la arqueología de Brasil (Oliveira 2006; Rocha *et al.* 2013; Dias 2010). Uno de esos efectos, que ha contribuido a silenciar y segregar a los grupos sociales, es la degradación de las relaciones sociales entre las personas y el mundo material *en el presente*. Además, la arqueología de contrato ha silenciado los conflictos, evitando esas relaciones en el juego lingüístico de la controversia técnica. Mientras los arqueólogos eviten discutir el papel que los “sitios arqueológicos” desempeñan en la producción y reproducción de la vida social *en el presente*, y mientras no discutan las relaciones *actuales* entre las personas y el mundo material, la arqueología perderá la oportunidad de poner de relieve las concepciones locales y tradicionales sobre el territorio y la vida alternativa. La manera como, actualmente, la arqueología se ocupa de la interacción entre las personas y los “sitios arqueológicos”, en el marco de los proyectos de licenciamiento ambiental, contribuye a la marginación de los grupos sociales. Los informes técnicos crean una distancia artificial e insuperable entre la arqueología y la gente, localizando el significado y la importancia del conocimiento arqueológico solamente en el pasado —y en un pasado lejano—. Ese es otro elemento del patrimonio positivista, la creencia en la distancia naturalizada entre pasado y presente, entre los productores / usuarios y los observadores de la evidencia arqueológica. Esta distancia desafía las percepciones espontáneas y hace imposible que la arqueología aprecie los valores afectivos y espirituales que los pueblos que no tienen “ascendencia probada” con la tierra pueden tener con los “sitios arqueológicos” en los lugares donde viven.

Las personas siempre delinearán paisajes culturales particulares en sus territorios y los lugares de ocupaciones antiguas adquieren un significado positivo o negativo en sus experiencias, deseos y agendas políticas. La interacción conflictiva entre las familias afectadas de Sobradinho y el registro arqueológico en la Sierra de Ramalho, que a veces se manifiesta como una interacción destructiva con los sitios, expone las injusticias ambientales que sufrieron y desafía la efectividad del desarrollo económico que debería haber llegado a ellos como ciudadanos. Una nota en la popular revista *Veja*, en agosto de 1975, anunció los beneficios de Sobradinho: la “producción de 42 millones de toneladas de pescado por año y 1 millón de kilovatios de energía eléctrica” (Gomes 1975:24). Si los discursos de desarrollo, desde la década de los setenta en adelante, pro-

metían el crecimiento económico del noreste de Brasil con la construcción de Sobradinho, la realidad de las familias reubicadas en la Sierra de Ramalho (sin peces, sin tierra, sin ganado y, hasta hace poco, sin electricidad en las aldeas rurales) muestra que los más directamente afectados por los proyectos de desarrollo son los menos premiados con sus beneficios y los que asumen todas las consecuencias (Zhourri 2008).

Nuestra interacción con “sitios arqueológicos” nos permite saber cómo una población trata con el tiempo y el territorio. Si era una práctica común destacar la interacción de las personas con el mundo material, resaltando su participación permanente en la creación de significado, entonces podemos destacar el vínculo entre los pueblos locales y sus territorios y la relevancia de los “sitios arqueológicos”. Pero la tendencia en la arqueología ha sido muy diferente: enfatizar, voluntariamente o no, la distancia entre los grupos afectados por los proyectos de desarrollo y el patrimonio arqueológico —un patrimonio “nacional” con el cual la arqueología de Brasil está totalmente comprometida—. El conocimiento técnico es un capital social en el *campo* ambiental y los estudios que abordan las relaciones entre las personas y las cosas abren la puerta para “tecnificar” los derechos sobre los territorios tradicionales y tienen el potencial de dar visibilidad a los movimientos de resistencia. Nuestra disciplina puede crear argumentos que sean utilizados eficazmente en las articulaciones sociales contra los efectos de los proyectos de desarrollo.

REFERENCIAS CITADAS

Arruti, José Mauricio

2004 A árvore Pankararu: fluxos e metáforas da emergência étnica no sertão do São Francisco. En *A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena*, editado por João Pacheco de Oliveira, pp. 231-280. Contra Capa Livraria; LACED, Río de Janeiro.

Avritzer, Leonardo y Boaventura de Souza Santos

2002 Para ampliar o cânone democrático. En *Democratizar a democracia*, editado por Boaventura de Souza Santos, pp. 39-82. Civilização Brasileira, Río de Janeiro.

Bourdieu, Pierre

1993 *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, Cambridge.

Calderón, Valentin, Yara Dulce Bandeira de Ataíde Jácome e Ivan Dorea Cancio Soares

1977 Relatório das atividades de campo realizadas pelo Projeto Sobradinho de Salvamento Arqueológico. AAPHBA / CHESF, Salvador.

Projectos de desarrollo, violación de derechos humanos y el silencio de la arqueología en Brasil

Dias, Adriana Schmidt

2010 Caminhos cruzados? Refletindo sobre os parâmetros de qualidade da prática arqueológica no Brasil. *Arqueologia em Debate* 2:14-15. <http://sabnet.com.br/jornal>

Esteva, Gustavo

1992 Development. En *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, editado por Wolfgang Sachs, pp. 6-25. Zed Book, Londres.

Estrela, Ely Souza

2005 Como filhos de marrecas: a experiência dos “beraderos” sanfranciscanos após a construção da barragem de Sobradinho-Bahia. *Imagário* 10:341-361.

2009 Um rio de memória: o modus vivendi dos beraderos sanfranciscanos antes da Represa de Sobradinho (Bahia). *Historia & Perspectivas* 41:115-140.

Gomes, C. P.

1975 Sob as águas. *Revista Veja*, 13 de agosto, pp. 23-24.

Jorge, Marcos, André Prous y Loredana Ribeiro

2007 *Brasil rupestre. Arte pré-histórica brasileira*. Petrobrás; Ministério Cultura; Editora Zen-crane, Brasília; Curitiba.

Lacorte, Ana Castro y Nair Barbosa

1995 Contradições e limites dos métodos de avaliação de impactos em grandes projetos: uma contribuição para o debate. *Cadernos IPPUR / UFRJ* IX(1/4):252-262.

Mouffe, Chantal

2000 *The Democratic Paradox*. Verso, Londres.

Neves, Eduardo

2010 Parâmetros de qualidade para a prática da arqueologia no Brasil. *Arqueologia em Debate* 1:16-17. <http://sabnet.com.br/jornal/>

Oliveira, Jorge Eremites de

2006 Cultura material e identidade étnica na arqueologia brasileira: um estudo por ocasião da discussão sobre a tradicionalidade da ocupação kaiowá da Terra Indígena Sucuri'y. *Revista de Arqueologia* 19:29-50.

Oliveira, João Pacheco de

2004 Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. En *A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena*, editado por João Pacheco de Oliveira, pp. 13-42. Contra Capa Livraria; LACED, Rio de Janeiro.

Pereira, Edithe

2004 *Arte rupestre na Amazônia*. Unesp; Museu Paraense Emilio Goeldi, São Paulo; Belém.

Ribeiro, Loredana

2007 Repensando a tradição: a variabilidade estilística na arte rupestre do período intermediário de representações no alto-médio rio São Francisco. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia* 17:117-127.

2009 Sobre pinturas, gravuras e pessoas ou os sentidos que se dá à arte rupestre. *Especiaria* 11-12(20-21):157-182.

2010 Auto-regulação da arqueologia brasileira: responsabilização, credibilidade e fortalecimento profissional. *Arqueologia em Debate* 1:8-9. <http://sabnet.com.br/jornal/> (consultado el 28 de abril del 2013).

Rocha, Bruna Cigaran da, Camila Jácome, Guilherme Mongeló, Francisco Forte Stuchi y Raoni Valle

2013 Arqueologia pelas gentes: um manifesto. Constatações e posicionamentos críticos sobre a arqueologia brasileira em tempos de PAC. *Revista de Arqueologia* 26(1):130-140.

Rothman, Daniel (editor)

2008 *Vidas alagadas: conflitos socioambientais, licenciamento e barragens*. UFV, Viçosa.

Sampaio, José Augusto Laranjeiras

1993 Seu Apolônio, o velho patriarca Pankaru. *Boletim Anai-BA* 9(6-7).

Schmitz, Pedro Ignácio, Altair Sales Barbosa, Avelino Fernandes de Miranda, Maira Barberi Ribeiro y Mariza de Oliveira Barbosa

1996 *Arqueologia nos cerrados do Brasil Central: sudoeste da Bahia e leste de Goiás. O Projeto Serra Geral*. Instituto Anchieta de Pesquisas, São Leopoldo.

Sigaud, Lygia

1992 O efeito das tecnologias sobre as comunidades rurais. En *O ambiente inteiro. A contribuição crítica da universidade à questão ambiental*, editado por Tânia Barros Maciel, pp. 41-68. UFRJ, Río de Janeiro.

Sigaud, Lygia, Ana Luiza Martins-Costa y Ana Maria Daou

1987 Expropriação do campesinato e concentração de terras em Sobradinho: uma contribuição à análise dos efeitos da política energética do Estado. *Ciências Sociais Hoje* 1:214-290.

Vieira, Ubiratan

2008 Paradoxos do licenciamento ambiental de hidrelétricas em Minas Gerais. En *Vidas alagadas: conflitos socioambientais, licenciamento e barragens*, editado por Daniel Rothman, pp. 254-295. UFV, Viçosa.

Zhourí, Andréa

2008 Justiça ambiental, diversidade cultural e accountability. Desafios para a governança ambiental. *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 23(68):97-107.

Zhourí, Andrea, Klemens Laschefski y Doralice Pereira (editoras)

2005 *A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais*. Autêntica, Belo Horizonte.

Zhourí, Andréa y Raquel Oliveira

2007 Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas. *Ambiente & Sociedade* X(2):119-135.

EN EL BORDE. ARQUEOLOGÍA, EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMAZONÍA BRASILEÑA

Marcia Bezerra

Traducido del portugués por Cristóbal Gnecco

INTRODUCCIÓN

*L: Los objetos actúan sobre la gente.
A: ilmage el oro!*

LA CITA QUE ABRE ESTE ARTÍCULO REPRODUCE UN DIÁLOGO ENTRE UN ARQUEÓLOGO (L) Y UN RESIDENTE LOCAL (A) de Sierra Pelada, en la Amazonía brasileña, durante un taller arqueológico ofrecido a los maestros de esa pequeña comunidad de buscadores de oro en el sur del estado de Pará. Esta actividad fue parte de un programa de educación patrimonial (EP) que coordiné en el marco de un proyecto de arqueología de contrato (AC) llevado a cabo por la Universidad Federal de Pará entre el 2011 y el 2012¹ (Schaan *et al.* 2011). La cita es una epifanía de las relaciones que se establecen en el ámbito de proyectos de AC que crean, y son creados por, un entrelazamiento de intereses sociales, culturales, políticos y económicos en el que convergen distintas visiones del mundo. Por un lado, los investigadores afirman la agencia de las cosas (del pasado) sobre las personas (del pasado y del presente); por el otro, las comunidades locales indican la centralidad de las cosas (del pasado y del presente) que les importan. En este caso la *materialidad nuclear* es el oro. Esta dinámica también está formada por otros sujetos, por empresarios y por el Estado que, a veces, constituyen una misma entidad.

El oro —una amalgama de la vida de los mineros— es, al mismo tiempo, un sustantivo y un asunto metafórico. Como *cosa* tiene un valor definido por sus atributos físicos,

1 Programa de Prospecções e Educação Patrimonial em Serra Leste, Curionópolis / PA, coordinado por Denise Pahl Schaan (FADESP / UFPA e Vale).

significados por un “juicio hecho sobre ellos por los sujetos” (Appadurai 1986:3). Estos sujetos gravitan en torno a una *cosa* que actúa en el centro de esas relaciones como un catalizador de sus posiciones de poder. Su fuerza centrípeta constituye un campo político o —como Bourdieu (2002:9) señaló sobre la formación del campo cultural— “un sistema de líneas de fuerza” que se reordena de acuerdo a la situación. En Sierra Pelada la agencia del “oro” provoca un reajuste de esas fuerzas, creando y aumentando los conflictos de los que hace parte la arqueología. En este sentido, parafraseando a Acsehrad (2004:9), es necesario situar a la arqueología dentro de los conflictos sociales. En el ámbito de la AC ese ejercicio es esencial porque nuestra práctica ha sido apropiada por el capitalismo como una mercancía, restando importancia a los conflictos en los que participa, especialmente en cuanto a su relación con las poblaciones locales. La mayoría de esos conflictos surge como efecto colateral de la mercantilización disciplinaria, en la cual la eficiencia técnica ya no es un medio, sino un fin (Haber 2010). De hecho, las prácticas profesionales están impregnadas de tecnicismos de todo tipo y avanzan sobre las relaciones que se producen entre los arqueólogos y las comunidades locales. En la AC el conocimiento es una mercancía disimulada como un regalo, en el sentido maussiano del término, ofrecido a las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo y de quien se espera su colaboración en la conservación del patrimonio como una especie de obligación recíproca. Este paisaje de asimetrías es construido por los proyectos de desarrollo legitimados por el Estado y reificados por los arqueólogos por medio de un aparato técnico y de los programas de educación —eufemismos para el control y la domesticación—. La EP dirigida a estas comunidades puede, incluso inadvertidamente, agravar esas asimetrías, convirtiéndose en un instrumento para mantener el *statu quo*.

Ribeiro (2008:109), luego de reflexionar sobre las redes de poder en el ámbito de los proyectos de desarrollo, señaló: “Entiendo el desarrollo como una expansión económica que se adora a sí misma. Esto significa que tenemos que entender el sistema de creencias que subyace a esta devoción, así como las características del campo de poder que la sostiene”. Para hacerlo debemos reflexionar sobre nuestro papel en la legitimación de esta “devoción” y en la constitución de las “líneas de fuerza” (Bourdieu 2002:109) que apoyan la AC. Al analizar mi intervención en el programa de EP en Sierra Pelada voy a ir más allá de los debates sobre las relaciones entre las comunidades locales y el patrimonio arqueológico, para estimular un debate en torno a nuestros valores éticos más amplios. De hecho, los acontecimientos de Sierra Pelada revelan que el papel de la arqueología va mucho más allá de sus pretensiones epistémicas neutras.

ARQUEOLOGÍA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN BRASIL

El desarrollo solo desarrolla la desigualdad

Eduardo Galeano (1982:14)

La arqueología se ha convertido en un instrumento requerido por el Estado y por los empresarios y se ha vuelto cada vez más dependiente de los proyectos de desarrollo, reforzando así una perspectiva económico-utilitaria del patrimonio (Wassilowsky 2013:77). La relación de la arqueología con el desarrollo ha transformado la disciplina en una mercancía, un instrumento burocrático de la expansión capitalista en contextos poscoloniales (Haber 2010:16). La mayoría de la investigación arqueológica llevada a cabo actualmente en América del Sur está relacionada con la AC. En algunos países estos proyectos representan entre un 70 y un 95% de todas las actividades arqueológicas (Beovide y Caporale 2009; Londoño 2013; Stanchi 2013; Zanettini 2009). En términos generales, los proyectos de AC —y, como en el caso de Brasil, también los proyectos de EP— están sometidos a los cánones del licenciamiento ambiental y están conectados con la lógica y las consecuencias del desarrollo (Zarankin y Pellini 2012). Según Zhouri y Gomes (2007: 105), el licenciamiento es un instrumento burocrático “que expresa la dinámica del *campo* ambiental”, invisibiliza a las comunidades afectadas y empodera a agentes que solo están interesados en el beneficio económico (Zhouri 2007:3).

En Brasil el plan gubernamental Programa de Aceleración del Crecimiento —Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)— se puso en marcha en el 2007; su principal objetivo es la promoción del desarrollo mediante la construcción de infraestructura clave, especialmente hidroeléctricas y termoeeléctricas, oleoductos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y carreteras². Los iconos de la propaganda del PAC son tres de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, todas ubicadas en la Amazonía: Santo Antônio, Jirau y Belo Monte. Este aparente triunfo del desarrollo es inversamente proporcional al

2 Véase <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/49d8db1c7ce9549ca01e831e502d23e.pdf>

daño causado al medio ambiente, a las poblaciones locales y al patrimonio; se supone que este último, irónicamente, es uno de los principales beneficiarios del desarrollo³.

La puesta en marcha del PAC no solo impone un calendario muy apretado en construcciones, sino también en investigaciones arqueológicas. A esto se suma la falta de estructura del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) (Borges 2013) y la burocratización de la investigación, lo que transforma a la AC en un campo de “racionalidades técnico-científicas” al servicio de los discursos del progreso y el desarrollo (Catullo 2006:25). Las poblaciones afectadas son descalificadas, marginadas y culpadas por su incapacidad para organizarse y sostenerse e, incluso, se consideran ignorantes con respecto a su propio patrimonio. Según Ribeiro (1987:8-17), en los proyectos de desarrollo en Brasil, especialmente en las obras públicas a gran escala, opera una compleja red de relaciones de poder en tres dimensiones interconectadas: *gigantismo*, *aislamiento* y *temporalidad* (Catullo 2006:25). Gigantismo, debido a la monumentalidad de obras que implican grandes áreas, explotación de vastos recursos naturales, participación de grandes corporaciones y una cantidad significativa de capital y trabajo. El aislamiento tiene más que ver con aspectos económicos y sociales que con cuestiones geográficas. La fuerza de trabajo normalmente es contratada en otras regiones porque los trabajadores locales no tienden a cumplir los estándares exigidos; su aislamiento, por lo tanto, favorece el poder de las empresas, que controlan un territorio que está sujeto a la lógica económica del proyecto. La temporalidad se refiere a la programación impuesta a la obra. Los proyectos se desarrollan, normalmente, de acuerdo con un calendario muy apretado (Ribeiro 1987:17; Catullo 2006:25).

En la AC esta dinámica es activada mediante un “triángulo institucional” (Ribeiro 1991:44-45) compuesto por el Estado, los empresarios y los arqueólogos, parte de empresas privadas o de universidades. Las poblaciones locales quedan fuera de esta estructura, bajo el supuesto de que no son un cuerpo cohesionado, sino partes desorganizadas y desagregadas a las que el “triángulo institucional” ofrece la “modernización de sus regiones o áreas subdesarrolladas” (Catullo 2006:26). Por lo tanto, de ser “sujetos de sus propias vidas estas poblaciones se convierten en objeto de élites técnicas” (Ribeiro 2008:122), formadas, entre otros, por los arqueólogos y su experticia, pretenciosamente

3 En el sitio web de la revista *Horizonte Geográfico*, el titular “Una obra de construcción del PAC produce descubrimientos arqueológicos” (Camargo 2013) se ilustra con cerámica encontrada durante un proyecto de AC en Jirau. Según la revista, “la construcción de plantas hidroeléctricas, puertos y oleoductos está revelando tesoros arqueológicos hasta ahora ocultos”.

autopresentados como redentores del pasado, la historia y la cultura de esas comunidades. La arqueología participa en este sistema, no solo desempeñando su competencia técnica específica (la investigación del registro arqueológico), sino también mediante la realización de actividades paralelas con las comunidades afectadas. Este es el caso de Brasil, donde desde el 2002 la EP es una obligación legal ligada a los proyectos de licenciamiento ambiental. El discurso conservacionista del Estado utiliza los proyectos de EP para estandarizar la percepción de la cultura material y el pasado (Bezerra 2012). El manejo del patrimonio arqueológico se ha considerado únicamente desde un punto de vista técnico-utilitario. Sin embargo, puesto que ocurre en un contexto amplio, esta “imagen pública⁴” de la arqueología está sellada por medio de un pacto social, en el que el *otro* debe ser incluido. Esa inclusión subraya algo accidental, episódico, algo suspendido y desconectado de la práctica arqueológica.

La educación y la arqueología son formas de intervenir en el mundo. Su papel como instrumentos de acción política ha sido discutido por educadores y arqueólogos (Apple 2003; Funari *et al.* 2008; McGuire 1999; Sabloff 2008), cuyas críticas han sido ignoradas. De hecho, aunque el crecimiento exponencial de la AC en Brasil también ha aumentado el número de proyectos de EP, estos reciben poca atención. Las ideas, las actividades y los resultados de decenas de proyectos solo son conocidos por las personas directamente involucradas. Los materiales producidos en estos proyectos revelan muchos problemas: lenguajes inadecuados, extrema simplificación de los contenidos, desprecio total de las historias locales y falta de una perspectiva crítica (Bezerra 2010; Schaan 2007). Las comunidades locales sufren los efectos colaterales de los programas de EP, supuestamente aliviados por folletos y kits educativos sin sentido (Hilbert 2006). El principal efecto colateral es la idea de que los programas de EP sirven para educar a la gente sin educación, en este caso sobre su propio patrimonio. Esta idea se inspira, supuestamente, en la obra de Paulo Freire (1999, 2002), un notable pedagogo brasileño que creía en el poder emancipador de la educación y en su naturaleza eminentemente política. El uso sesgado de sus ideas ha llevado a pensar que el *otro* es “alguien incapaz de tratar [...] con su propia cultura [...] y que por tanto debe ser educado” (Rocha 2005:16). Por eso los

4 Aunque toda la arqueología es “pública” (Bezerra de Meneses 2007), la necesidad de clasificar y nombrar “tipos” de práctica ha originado categorías adjetivas contemporáneas como acción (McGuire 1999; Sabloff 2008), colaborativo (Silva *et al.* 2011), participativo (Pyburn 2009), indígena (Gnecco y Ayala, eds. 2010), comunitario (Marshall 2002) y simétrico (Cabral 2011). Estas etiquetas aparecen como alegorías de la disciplina.

analfabetos acaban recibiendo una transfusión alienante (Freire 2002:17). Se supone que este tipo de educación promoverá la democratización, valorización y preservación de las culturas locales (Corrêa, 1979: 244). Estos objetivos también se encuentran en los documentos producidos por el Movimiento Brasileño de Alfabetización —Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral)—. Este programa gubernamental fue creado en la década de los sesenta, durante el régimen militar, para la integración del país. Los anal-fabetos eran vistos como ciudadanos marginales que tenían que integrarse a la sociedad (Oliveira 1989:104). A diferencia de Freire, sin embargo, que abogó por la importancia de las diferencias en los procesos educativos, el Mobral y los programas de EP legitiman la desigualdad, al privar a las poblaciones locales de sus propias perspectivas, imponiendo una lectura académica y vertical de su historia. No pretendo hacer una comparación anacrónica entre el Mobral y la EP; pretendo mostrar que las campañas de educación promovidas por el Estado, adoptadas sin ninguna crítica, como en el caso de los programas de EP, contribuyen a racionalizar la intervención, la instrumentalización y la alienación de las poblaciones locales.

Este uso distorsionado de las ideas de Freire por la AC y, en consecuencia, por la EP reproduce una violencia simbólica contra las comunidades a las que sus acciones están destinadas, más aún si se encuentran en una situación de vulnerabilidad cultural, económica y social. De hecho, sus derechos son violados de forma rutinaria⁵. La gramática estructurante del patrimonio viola los derechos locales, ya que se refiere “al lenguaje oficial más que a preguntas que aborden las injusticias morales y sociales”, como ha señalado Hodder (2010:864, traducción libre); en este orden de ideas, el patrimonio es hablado por un lenguaje “a través del cual el Estado critica al otro, pero no a sí mismo”.

EL DERECHO A LAS HISTORIAS: LOS MINEROS DE SIERRA PELADA

Sierra Pelada se encuentra al sur de Pará, en el norte de Brasil. Está formada, mayoritariamente, por mineros y sus familias. En la década de los ochenta la minería de oro causó una explosión demográfica en la región. La mina de Sierra Pelada, controlada por la dictadura militar, fue conocida como el “hormiguero humano”, una alusión a los miles de hombres que se apilaban diariamente en pendientes y escaleras y que vivían en el

5 Varios autores (e.g., Silverman y Ruggles, eds. 2007; Funari *et al.* 2008; Ferreira 2010) han discutido las relaciones entre arqueología, patrimonio y derechos humanos, pero esta discusión aún falta en el contexto brasileño.

borde de la mina, en busca de oro. Según estimaciones, en 1983 había 80.000 personas trabajando allí. En las décadas de los ochenta y los noventa la mina, que se cerró en 1992, produjo 48 toneladas de oro (Mathis *et al.* 1997).

La situación política en el pueblo es tensa y muy conflictiva. En la calle principal, formada por casas polvorientas de madera, sorprende el gran número de asociaciones y cooperativas —un “paisaje de resistencia”—. Los residentes locales son reacios a los proyectos mineros promovidos desde fuera de la comunidad. Se sienten excluidos, piensan que sus derechos han sido violados y no creen en los discursos externos de colaboración. Los mineros continúan viviendo en el pueblo porque carecen de otras opciones y esperan que el nuevo operador de la mina (una empresa grande y poderosa, Vale) los compense por la pérdida de sus puestos de trabajo. La miseria, la inseguridad, la falta de oportunidades y un sentido de exclusión alternan en los relatos que escuché sobre su pasado. A veces melancólicos, otras veces rebeldes, siempre tenían como punto de partida la actividad minera: los años “dorados”, el descubrimiento de la primera pepita de oro, las pérdidas familiares, las enfermedades resultantes de la intoxicación por mercurio, la pobreza, la vergüenza o la decepción. En este contexto son borrosas las referencias a elementos que los conecten con el patrimonio arqueológico local (asentamientos precoloniales ubicados lejos del pueblo). En su lugar emergen otros paisajes más significativos, no arqueológicos y más mundanos. El pasado remoto de la arqueología tiene poco que decir a estas comunidades, cuyo pasado más reciente está suspendido y se proyecta en el presente como una carga. Hablar del patrimonio arqueológico precolonial en un contexto como este, como hacen los programas de EP, es actuar en un “vacío semiótico”⁶. La EP y el discurso de la AC no tienen sentido para una realidad constituida por las narraciones históricas de los mineros, que recrean el pasado minero, su arqueología.

Durante el trabajo de campo pedí a la gente que hablara sobre las *cosas* —más allá del oro— que realmente les importaban. Mientras contaban sus relatos, los mineros revelaron la agencia de la cultura material con la que interactúan, en el pasado y en el presente. Al recordar su vida cotidiana en la mina entretejieron narrativas y el repertorio material utilizado como prueba de su pertenencia a una comunidad que trabajaba en el pasado. De la misma manera, los lugares que todavía evocan sus vidas son referidos como testimonios de su presencia y trabajo hace décadas. Como resultado de estos encuentros históricos muchos mineros revelaron el deseo de ver contadas sus historias.

6 Cristóbal Gnecco (comunicación personal 2015).

Este reclamo de una arqueología de su vida no es solo una preocupación histórica; está vinculado a su identidad actual y a la legitimación de sus derechos. Eckert (2012:19) señaló sobre una mina de carbón en Francia que había sido cerrada que “hoy en día, sin la mina, la profesión está desapareciendo y con ella los valores de referencia, las prácticas sociales y el estilo de vida de un grupo”. En Sierra Pelada la profesión vive en / por los objetos. Esto tiene profundas implicaciones para la construcción de la identidad de “ser minero”, para la cohesión de la comunidad y para la protección de sus derechos.

La investigación etnográfica realizada en Sierra Pelada expuso el papel de la cultura material en la identidad de los mineros. Frases como “si no tengo mi batea, ¿quién va a decir que soy minero?,” pronunciada por uno de los habitantes, señala la centralidad de las herramientas y de los documentos como signos diacríticos de ser minero y como elementos discursivos para reclamar sus derechos (Bezerra y Ravagnani 2013). Sus biografías son movilizadas en el reconocimiento de su trabajo, que está sellado en sus documentos de identidad, amarillentos por el tiempo, pero siempre a la mano; en los instrumentos que utilizan cuando trabajan en la mina, especialmente bateas; y en las narraciones contadas con detalle por quienes quieren demostrar que “sucedió de esta manera” y que estaban allí. Los relatos de los mineros constituyen un rico corpus histórico al que se aferran con fuerza, ya que la exploración minera actual puede dar lugar a su desplazamiento y, finalmente, a la desaparición completa de sus lugares de memoria. Esta pérdida trascendería una mera cuestión económica (Eckert 2012:19); la mina no era solo una “empresa económica”, sino también “un hecho social total” que abarca y es abarcado por la presencia de la arqueología (Schwartz 1990:11).

Por lo tanto, asumiendo que los discursos patrimoniales deben considerar los derechos humanos y que el patrimonio, o lo que esta categoría signifique localmente, vive en las narraciones de los mineros, organicé con Luis Ravagnani un pequeño folleto que narra la historia de Sierra Pelada a través de los relatos de nuestros interlocutores (Bezerra y Ravagnani, eds. 2012). Tiene que ver con sus relatos de la mina, no con el patrimonio arqueológico precolonial regional. La recepción del folleto distribuido en el pueblo sugiere que la arqueología, si se entiende como un “fenómeno sociocultural” (Castañeda 2008), puede y debe servir para discutir los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo. Esta pequeña publicación no tiene un efecto emancipador, pero da crédito a la idea de Ayala (2007:155) de que “es necesario tener en cuenta que nuestro papel como arqueólogos no reside en hablar por otros sino en hablar sin negar a los otros, en circunstancias en que ninguna de esas voces debe ser silenciada”.

El programa de EP en Sierra Pelada llevó a cabo otras actividades: un curso para maestros de escuela; la exposición “Memorias del tiempo”⁷, que mostró los múltiples paisajes temporales en la región (desde artefactos arqueológicos hasta la presencia de los mineros a través de sus fotografías); y la producción de un libro de texto que articula la arqueología y el patrimonio local (Bezerra *et al.*, eds. 2012). Esta experiencia reveló que la arqueología es sobre las personas y las cosas. También mostró que entender el papel de la cultura material en ese sistema social-cultural y su agencia en la vida cotidiana de los mineros no está más allá de la arqueología; es arqueología como compromiso político. Es una arqueología comprometida con la justicia social y preocupada por el pasado para el presente de las poblaciones locales, negativamente impactadas por los proyectos de desarrollo.

SOBRE EXPERIENCIAS QUE NOS AFECTAN A TODOS

*Lo que es importante para mí es que mi afecto ético me exige preguntar “qué hace la arqueología, realmente, en el mundo”.
¿Cuáles son sus efectos, consecuencias, ramificaciones, implicaciones y experiencias para las personas, las comunidades, la sociedad, las culturas y la humanidad?*

Castañeda (2014:30)

Miceli (2005:11) reflexiona sobre la “emoción razonada” de Bourdieu, cuando entrelaza la relación entre su vida personal y sus preocupaciones intelectuales, lo que implica la inseparabilidad de lo vivido y lo racionalizado. Esa emoción razonada es un intento de “disciplinar las intermitencias del afecto” (Miceli 2005:11) que provoca molestias, pero transforma la experiencia vivida en el *campo de trabajo* y en el *trabajo de campo*. Favret-Saada (2005:155), al tratar con el estatus del afecto en la antropología, afirmó que es urgente “rehabilitar la vieja sensibilidad” y reconocer que “afectar y ser afectado” es parte del esfuerzo etnológico. En cuanto a la arqueología, la incorporación de la dimensión sensible a la práctica de la disciplina no debe ser solo una opción heredada del *zeitgeist* de la década de los ochenta; debe asumirse como un reconocimiento de que la experiencia total vivida en la arqueología, con la arqueología y a través de la arqueología, es lo que empodera a la disciplina como un “fenómeno sociocultural”, como propuso Castañeda (2008).

7 Proyecto de la museóloga Luzia Ferreira Gomes (UFPA).

Este fenómeno en el mundo contemporáneo se puede analizar como un “hecho social total” (Mauss 2003). En primer lugar, porque su naturaleza generalizada lo refiere a esferas de orden físico y simbólico. Las conexiones que existen entre la práctica de la arqueología y los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales activados en la construcción de los discursos arqueológicos indican que el “fenómeno arqueológico” reúne una “multitud de cosas sociales en movimiento” (Mauss 2003:187). En segundo lugar, porque el “fenómeno arqueológico” afecta las realidades sociales y es afectado por ellas, con lo cual se revela la inexistencia de una dualidad entre sujeto y objeto. También apunta a la idea de que si los hechos sociales son totales, “no sólo significa que todo lo que se observa constituye parte de la observación [...] En una ciencia en la que el observador es de la misma naturaleza que su objeto *el observador es parte de su observación*” (Lévi-Strauss 2003:25). En este sentido, el registro arqueológico se compone de objetos de carácter histórico, con lazos en el pasado y en el presente. Estas materialidades son constituidas y significadas por un “sujeto doble —el arqueólogo en el presente y la gente en el pasado”— (Lucas 2010:36). Añadiré otro sujeto: la gente en el presente, y sugeriré que la afirmación de Lévi-Strauss debe extenderse a la arqueología (véase Haber 2010:14). Las relaciones de la vida social en sus múltiples dimensiones — en tiempo y espacio— confieren a nuestra práctica un carácter eminentemente político.

La arqueología y la EP, en el marco de los proyectos de desarrollo, son utilizadas por el Estado como una “tecnología de gobierno” (Rose y Miller 1992:186) en la cual el arqueólogo es un instrumento. Ribeiro (2008:122), teniendo en cuenta el impacto de los proyectos de desarrollo a gran escala sobre las poblaciones locales y el papel de los agentes externos, afirmó: “Antes de la existencia de un proyecto de desarrollo las poblaciones locales difícilmente podían concebir que su destino era susceptible de ser secuestrado por un grupo organizado de personas”. Los derechos de las comunidades afectadas son sumariamente violados por intervenciones más preocupadas por cosas que por personas, como las intervenciones que apoya la mayoría de los arqueólogos al ofrecer su servicio técnico. En la Amazonía la arqueología está conectada, inexorablemente, con las historias locales. Ignorar sus agentes y sus circunstancias contemporáneas es reafirmar la invisibilidad de las poblaciones locales y consolidar el discurso del subdesarrollo económico, la incapacidad técnica y la devaluación cultural. Las acciones irreflexivas de los arqueólogos en los proyectos de desarrollo los pueden convertir en secuestradores del pasado, de la historia y, también, del destino y de los derechos de las comunidades afectadas.

Mi intención no es demonizar la AC o a los colegas que se dedican a ella, pero hay que recordar que el desarrollo, como sostuvo Galeano (1982:14), fomenta la desigualdad.

En este sentido, debemos reflexionar más seriamente sobre las consecuencias epistémicas y políticas de nuestras acciones en el ámbito de los proyectos de desarrollo, y también sobre el hecho de que una práctica alienada hace a la arqueología cómplice de las desigualdades contra las que tantas personas han luchado en la Amazonía y en otros lugares. Pero las consecuencias y la lógica del desarrollo son, según Ribeiro (1987:7), regulares y predecibles, por lo que es posible oponerse y resistirlas. La arqueología importa, incluso si no es el camino adecuado para conocer el pasado. El registro de las narrativas locales del pasado, como en el caso que he discutido aquí con los mineros de oro de Sierra Pelada, crea un espacio en el que las voces de las comunidades pueden expresarse y desenvolverse. Ese espacio no depende de la arqueología. Los arqueólogos no son los redentores de las narrativas históricas locales, las cuales operan dentro de su propia lógica y epistemes y para sus propios fines. Los arqueólogos y las comunidades locales no son las dos caras opuestas del conocimiento, sino que coexisten en una forma relacional (Gnecco 2011).

REFERENCIAS CITADAS

ABC

- 2013 Licencia libre para dragado de ríos, excavaciones en aeropuertos y obras viales. Decreto discrimina exigencia de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/decreto-discrimina-exigencia-de-ley-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-626654.html>

Acselrad, Henri

- 2004 Conflitos ambientais: a atualidade do objeto. En *Conflitos ambientais no Brasil*, editado por Henri Acselrad, pp. 7-11. Fundação Heinrich Böll, Río de Janeiro.

Appadurai, Arjun

- 1986 Introduction: Commodities and the Politics of Value. En *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*, editado por Arjun Appadurai, pp. 3-63. Cambridge University Press, Cambridge.

Apple, Michael

- 2003 *Educando à direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade*. Cortez; Instituto Paulo Freire, São Paulo.

Ayala, Patricia

- 2007 Relaciones entre atacameños, arqueólogos y Estado en Atacama (norte de Chile). *Estudios Atacameños* 33:133-157.

Beovide, Laura y Marcela Caporale

2009 La arqueología de contrato en el marco de la gestión integral del patrimonio arqueológico de la región metropolitana de Montevideo. *Revista de Arqueología Americana* 27:7-35.

Bezerra de Meneses, Ulpiano Toledo

2007 Premissas para a formação de políticas públicas em arqueologia. *Revista do Patrimônio* 33:37-58.

Bezerra, Marcia

2010 Nossa herança comum': considerações sobre a educação patrimonial na arqueologia amazônica. En *Arqueologia amazônica*, editado por Edithe Pereira y Vera Guapindaia, pp. 1021-1036. MPEG, Belém.

2012 Signifying Heritage in Amazon: A Public Archaeology Project at Vila de Joanes, Marajó Island, Brazil. *Chungara* 44(3):363-373.

Bezerra, Marcia y Luis Ricardo Ravagnani (editores)

2012 *O verdadeiro ouro de Serra Pelada: histórias de vida do garimpo*. GK Noronha, Belém.

Bezerra, Marcia y Luis Ricardo Ravagnani

2013 "Se eu não tiver a minha bateia, quem vai dizer que sou garimpeira?": a memória, a identidade e as coisas no garimpo de Serra Pelada, Amazônia. *Illuminuras* 14(34):355-360.

Bezerra, Marcia, Denise Schaan y Caroline Caromano (editoras)

2012 *Arqueologia e educação patrimonial em Serra Leste, Curionópolis, Pará*. GK Noronha, Belém.

Borges, André

2013 Sem profissionais, Iphan caminha para a falência, diz diretor. *Valor Econômico*. <http://www.valor.com.br/brasil/3233190/sem-profissionais-iphancaminha-parafalencia-diz-diretor> (consultado el 17 de octubre del 2013).

Bourdieu, Pierre

2002 *Campo de poder, campo intelectual: itinerario de un concepto*. Editorial Montessor, Madrid.

Cabral, Mariana

2011 E se todos fossem arqueólogos? Pensando o encontro da arqueologia e da simetria na prática. Ponencia presentada en el XV Congreso de la Sociedad de Arqueología Brasileira, Florianópolis.

Camargo, Clara Nobre de

2013 Obras do PAC rendem descobertas arqueológicas. *Revista Horizonte Geográfico*. <http://horizontegeografico.com.br/exibirMateria/1673/obras-do-pac-rendem-descobertas-arqueologicas>

Castañeda, Quetzil

2008 The "Ethnographic Turn" in Archaeology. Research Positioning and Reflexivity in Ethnographic Archaeologies. En *Ethnographic Archaeologies: Reflections on Stakeholders*

- and Archaeological Practices*, editado por Quetzil Castañeda y Christopher Matthews, pp. 25-61. Altamira Press, Walnut Creek.
- 2014 Situating Activism in Archaeology: Mission of Science, Activist Affect, and the Archaeological Record. En *Transforming Archaeology*, editado por Sonia Atalay, Lee Clauss, Randall McGuire y John Welch, pp. 61-90. Left Coast Press, Walnut Creek.
- Catullo, María Rosa
2006 *Ciudades relocalizadas: una mirada desde la antropología social*. Biblos, Buenos Aires.
- Corrêa, Arlindo Lopes (editor)
1979 *Educação de massa e ação comunitária*. Rio de Janeiro, AGGS; Mobral.
- Eckert, Cornelia
2012 *Memória e trabalho: etnografia da duração de uma comunidade de mineiros de carvão (La Grand-Combe, França)*. Appris, Curitiba.
- Favret-Saada, Jeanne
2005 Ser afetado. *Cadernos de Campo* 13:155-161.
- Ferreira, Lúcio Menezes
2010 Arqueología comunitaria, arqueología de contrato y educación patrimonial en Brasil. *Jangwa Pana* 9:95-102.
- Freire, Paulo
1999 *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra, São Paulo.
2002 *Ação cultural para a liberdade*. Paz e Terra, São Paulo.
- Funari, Pedro, Andrés Zarankin, y José Alberioni dos Reis (editores)
2008 *Arqueologia da repressão e da resistência: América Latina na era das ditaduras (décadas de 1960-1980)*. Annablume, São Paulo.
- Galeano, Eduardo
1982 *As veias abertas da América Latina*. Paz e Terra, Rio de Janeiro.
- Gnecco, Cristóbal
2011 Antropología y arqueología: relaciones oblicuas. En *Teoría arqueológica en Chile: reflexionando en torno a nuestro quehacer disciplinario*, editado por Patricia Ayala y Flora Vilches, pp. 25-40. Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Gnecco, Cristóbal y Patricia Ayala (editores)
2010 *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*. FIAN; Universidad de los Andes, Bogotá.
- Haber, Alejandro
2010 Arqueología y desarrollo: anatomía de una complicidad. En *Arqueología y desarrollo en América del Sur: de la práctica a la teoría*, editado por Alexander Herrera, pp. 13-18. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

- Herrera, Alexander
 2013 Arqueología y desarrollo en el Perú. En *Arqueología y desarrollo en América del Sur: de la práctica a la teoría*, editado por Alexander Herrera, pp. 75-96. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Hilbert, Klaus
 2006 Qual é o compromisso social do arqueólogo brasileiro? *Revista de Arqueologia* 19:89-102.
- Hodder, Ian
 2010 Culture Heritage Rights: from Ownership and Descent to Justice and Well-being. *Anthropological Quarterly* 83(4):861-882.
- Lévi-Strauss, Claude
 2003 Introdução à obra de Marcel Mauss. En *Sociologia e antropologia*, de Marcel Mauss, pp. 11-46. Cosac & Naif, São Paulo.
- Londoño, Wilhelm
 2013 Arqueología para el desarrollo y arqueología del desarrollo: una visión desde Colombia. En *Arqueología y desarrollo en América del Sur: de la práctica a la teoría*, editado por Alexander Herrera, pp. 147-166. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Lucas, Gavin
 2010 Triangulating Absence: Exploring the Fault-line between Archaeology and Anthropology. En *Archaeology and Anthropology: Understanding Similarity, Exploring Difference*, editado por Duncan Garrow y Thomas Yarrow, pp. 28-39. Oxbow Books, Oxford.
- Marshall, Yvonne
 2002 What is Community Archaeology? *World Archaeology* 34(2):211-219.
- Mathis, Amin, Daniel Chaves de Brito y Franz Josef Brüseke
 1997 *Riqueza volátil: a mineração de ouro na Amazônia*. Cejup, Belém.
- Mauss, Marcel
 2003 *Sociologia e antropologia*. Cosac & Naif, São Paulo.
- McGuire, Randall
 1999 A arqueología como ação política: o projeto Guerra do Carvão do Colorado. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, Suplemento 3:387-397.
- Miceli, Sergio
 2005 Introdução: a emoção raciocinada. En *Esboço de auto-análise*, de Pierre Bourdieu, pp. 7-20. Companhia das Letras, São Paulo.
- Oliveira, José Luiz
 1989 As origens do Mobral. Tesis de Maestría, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro.

En el borde. Arqueología, educación patrimonial y derechos humanos en la Amazonía brasileña

Pyburn, Anne

2009 Practicing Archaeology - as if it Really Matters. *Public Archaeology* 8(2-3):161-175.

Ribeiro, Gustavo Lins

1987 ¿Cuánto más grande mejor? Proyectos de gran escala: una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. *Desarrollo Económico* 27(105):3-27.

1991 *Empresas transnacionais: um grande projeto por dentro*. Marco Zero, São Paulo.

2008 Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento. *Novos Estudos* 80:109-125.

Rocha, Gladys

2005 PAS X Mobral: convergências e especificidades. 28.ª Reunião de ANPED, Minas Gerais. <http://28reuniao.anped.org.br/textos/gt18/gt18733int.rtf>

Rose, Nikolas y Peter Miller

1992 Political Power beyond the State: Problematics of Government. *The British Journal of Sociology* 43(2):173-205.

Sabloff, Jeremy

2008 *Archaeology Matters: Action Archaeology in the Modern World*. Left Coast Press, Walnut Creek.

Schaan, Denise

2007 Múltiplas vozes, memórias e histórias: por uma gestão compartilhada do patrimônio arqueológico na Amazônia. *Revista do IPHAN* 33:109-136.

Schaan, Denise, A. dos Santos y Welton Costa de Oliveira

2011 Programa de prospecções e educação patrimonial em Serra Leste, Curionópolis / PA. Informe final. UFPA, Belém.

Schwartz, Olivier

1990 *Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du nord*. PUF, Paris.

Silva, Fabíola, Eduardo Bespalez y Francisco Forte Stuchi

2011 Arqueologia colaborativa na Amazônia: Terra Indígena Kuatimemu, Rio Xingú, Pará. *Amazônica* 3(1):32-59.

Silverman, Helaine y Fairchild Ruggles (editores)

2007 *Cultural Heritage and Human Rights*. Springer, Nueva York.

Stanchi, Roberto

2013 “Agora, todos temos trabalho!”. Arqueologia preventiva no Brasil: da ilusão da preservação à escavação como um fim (lucrativo) em si mesmo. Ponencia presentada en el simposio Desvelando a arqueologia de contrato, Porto Alegre.

Zanettini, Paulo

2009 Projetar o futuro da arqueologia brasileira: desafio de todos. *Revista de Arqueologia Americana* 27:71-84.

Zarankin, Andrés y José Roberto Pellini

2012 Arqueologia e companhia: reflexões sobre a introdução de uma lógica de mercado na prática arqueológica brasileira. *Revista de Arqueologia* 25(2):44-61.

Zhour, Andréa

2007 Conflitos sociais e meio ambiente urbano. *Comunidades, Meio Ambiente, Desenvolvimento* 17:1-8.

Zhour, Andréa y Lilian Alves Gomes

2007 Da invisibilidade à mobilização popular: atores e estratégias no licenciamento ambiental das hidroelétricas Capim Branco I e II. *Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais*, UFSC, Florianópolis.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO Y PUEBLOS INDÍGENAS: REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO BRASILEÑO

Fabiola Andrea Silva

Traducido del portugués por Cristóbal Gnecco

EN 1988 LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE BRASIL CONSAGRÓ LA CIUDADANÍA, EL RECONOCIMIENTO y la protección de los pueblos indígenas. Fue la primera vez que esto ocurrió en el país. Las políticas del Gobierno, hasta entonces autoritario y tutelar, tomaron una nueva dirección. La explotación económica de las tierras indígenas fue regularizada y los pueblos indígenas adquirieron derechos legales. Sin embargo, la expansión de varios intereses capitalistas durante los últimos diez años ha afectado, directa e indirectamente, las tierras indígenas que han sido objeto de su explotación permanente o intermitente. Aún más, han aumentado las acciones contra los intereses indígenas y se ha fortalecido una postura conservadora que sostiene que obstaculizan el desarrollo económico. Por otra parte, en colaboración con varias organizaciones, los pueblos indígenas han aumentado su lucha por la autodeterminación y por la preservación de sus tierras, sus culturas y sus formas de vida (Souza Lima y Hoffmann, eds. 2002; Baniwa 2012).

En este escenario conflictivo los arqueólogos han tenido que expresarse sobre el impacto de los proyectos de desarrollo en el patrimonio arqueológico. En el caso de las tierras indígenas y sus áreas circundantes, directa e indirectamente afectadas por los proyectos de desarrollo, las investigaciones colaborativas han aumentado, aunque se trata de una situación compleja debido al encuentro conflictivo entre los pueblos indígenas, los administradores del patrimonio —el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)—, las políticas indigenistas —Fundação Nacional do Índio (FUNAI)— y las empresas ambientales y patrimoniales que trabajan a nombre de y por los intereses de los empresarios y en el cumplimiento de la legislación patrimonial.

En este artículo voy a examinar la investigación arqueológica en tierras indígenas en Brasil, con especial referencia a las condiciones en que se desarrolla. Después haré una discusión sobre las prácticas arqueológicas, especialmente en relación con la colaboración cuando los conflictos de intereses se convierten en la razón de ser de la presencia arqueológica.

PUEBLOS INDÍGENAS, LEGISLACIÓN Y TIERRAS INDÍGENAS

Brasil tiene una población indígena de unas 896.000 personas que hablan 274 lenguas y conforman 305 grupos étnicos en 505 tierras indígenas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Las tierras indígenas componen el 12.5% del territorio de Brasil (106.000.007 hectáreas), en donde viven 517.400 personas (57.7% del total).

Desde el siglo *xvi* los pueblos indígenas brasileños vivieron bajo tutela, solo oficializada en 1910, cuando se estableció el Serviço de Proteção aos Índios (SPI). La tutela buscaba protegerlos del exterminio; también buscaba su “pacificación” para transformarlos, poco a poco, en trabajadores rurales asimilados a la sociedad brasileña. La tutela, que vistió el traje del indigenismo, sobrevivió hasta mediados del siglo *xx*; el establecimiento del Parque Nacional del Xingú (1961) es emblemático de este periodo. La FUNAI fue fundada en 1967 y sustituyó al SPI, muy criticado y acusado de corrupción y genocidio. Después de 1964 y durante la dictadura militar brasileña, cuando se suprimieron los derechos civiles, las políticas indígenas se basaron en el lema “desarrollo y seguridad”, que permitió al Estado avanzar sobre la Amazonía, considerada una región geopolítica fundamental para el desarrollo económico. La FUNAI fue administrada por los militares y al principio sus actividades estuvieron dirigidas, especialmente, a contactar a las poblaciones indígenas de la Amazonía y a consolidar el proyecto de desarrollo del régimen militar (Oliveira 2006a, 2006b; Souza Lima 2005, 2006). En esa época surgió un indigenismo no gubernamental o misionero que se opuso a la dictadura militar (1964-1985), al Estado y a la FUNAI, desarrollando actividades colaborativas con los pueblos indígenas, centradas en sus derechos (Baniwa 2012:208; Souza Lima 2006:122). La promulgación de la Constitución de 1988 dio nuevas posibilidades a este indigenismo y promovió la participación y la corresponsabilidad a través del diálogo intercultural (Oliveira e Iglesias 2002; Souza Lima 2006). Más aún, las prácticas y la legislación para la definición de las tierras indígenas fueron severamente criticadas durante la democratización de Brasil, sobre todo por los antropólogos involucrados en su demarcación (e. g., Souza Lima 2005; Oliveira y Almeida 2006). La definición de las tierras indígenas no es solo un procedimiento técnico y administrativo; es “el establecimiento de un vínculo jurídico que une, directamente, a un grupo social con un territorio determinado” (Oliveira e Iglesias 2002:64). Además, las tierras indígenas hacen posible y garantizan el mantenimiento, la reproducción y la actualización de las culturas indígenas a través de la autoadministración de sus derechos culturales y naturales.

Desde un punto de vista jurídico y práctico, en Brasil las tierras indígenas son de propiedad común. La Constitución de 1988 reconoce a los pueblos indígenas “sus de-

rechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas y protegerlas y garantizar el respeto de todos sus bienes”. Las tierras indígenas pertenecen a la República de Brasil, pero su usufructo exclusivo pertenece a los indígenas, incluyendo la explotación de sus recursos naturales en el suelo, los ríos y los lagos, con excepción de los recursos subterráneos que son estratégicos y, por lo tanto, pertenecen al Estado. Las tierras indígenas son para uso perenne e incondicional de los pueblos indígenas y no pueden ser compradas ni vendidas. La Constitución de 1988, junto con la ratificación por el Congreso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce: (a) la capacidad civil de los indígenas como sujetos individuales y colectivos, con ciudadanía plural; (b) sus organizaciones sociales, costumbres, lenguas, tradiciones y creencias (jurídicas, políticas, sociales, culturales, económicas y religiosas); (c) los derechos fundacionales e imprescriptibles sobre sus tierras tradicionales por pertenencia permanente, que debe ser regularizada por el Estado; (d) el usufructo exclusivo de las riquezas contenidas en el suelo, en los ríos y en los lagos; (e) el uso de sus lenguas maternas y sus procesos de producción, reproducción y transmisión de conocimiento (procesos especiales de aprendizaje); (f) la autonomía territorial y étnica o libre determinación; (g) la denominación de los pueblos; (h) ser escuchados en todo lo que les concierne, especialmente en relación con los programas y las empresas públicas y privadas que les afecten o en las que tienen algún interés; (i) la consulta sobre todo lo que afecta sus intereses (véase Baniwa 2012:215-216). Sin embargo, en los últimos años las autoridades estatales y algunos sectores de la sociedad civil han tratado de deslegitimar y restringir los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales. En este escenario la opinión pública y los arqueólogos han estado divididos sobre qué hacer para garantizar la integridad de los pueblos indígenas y sus tierras.

PROYECTOS DE DESARROLLO Y PUEBLOS INDÍGENAS

El Programa de Aceleración del Crecimiento —Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)— fue introducido en el 2007 por el Gobierno de Brasil para impulsar la infraestructura. El PAC ha hecho grandes proyectos en la Amazonía, especialmente para la generación y la distribución de energía eléctrica, lo que ha suscitado acaloradas discusiones. Muchas personas defienden estos proyectos como una alternativa a la crisis energética de Brasil, mientras otras piensan que afectan el medio ambiente y las formas tradicionales de vida. El complejo hidroeléctrico del río Madeira, el complejo hidroeléctrico del Tapajós, la central hidroeléctrica Dardanelos y el aprovechamiento hidroeléctrico (AHE) Belo

Monte son algunos de los proyectos más polémicos. Belo Monte, en concreto, ha sido ampliamente debatido. Fue activado por el Gobierno recientemente, después de su suspensión en la década de los ochenta debido a numerosas protestas (Santos y Andrade 1989). Centraré mi análisis en este proyecto, debido a mi experiencia en arqueología colaborativa con los asurinis del Xingú, que viven en la tierra indígena Kuatinemu, considerada no inundable pero directamente impactada por Belo Monte (Silva 2013; Silva *et al.*, 2011).

La AHE Belo Monte, en el río Xingú, se está construyendo en una zona histórica y tradicionalmente ocupada por los jurunas, los araras, los xipayas, los kuruayas y los kapyós. Los estudios de evaluación de impacto ambiental realizados para este proyecto fueron criticados por ineficientes; además, la viabilidad del proyecto y su sostenibilidad social y ambiental han sido cuestionadas por investigadores y ambientalistas (cfr. Hernández y Magalhães 2011). Esos estudios, una de las muchas etapas en el licenciamiento ambiental, evaluaron la viabilidad del proyecto y su sostenibilidad social y ambiental. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) recibió los estudios de evaluación de Belo Monte en mayo del 2009 para su consideración. Las críticas surgieron rápidamente porque (a) los EIA-RIMA¹ estaban incompletos con relación al componente indígena; (b) los estudios finales no cumplían con estándares de investigación; (c) algunos estudios mostraban metodologías defectuosas; (d) no se consultó a los indígenas; (e) las audiencias públicas se vieron perjudicadas por logísticas deficientes, falta de explicaciones y procedimientos inhibitorios y coercitivos, como resultado de lo cual muchos indígenas no participaron. Sin embargo, las obras de construcción de Belo Monte se iniciaron en el 2011 (Baraúna y Marín 2011:113-120; Hernández y Magalhães 2011).

Enormes cantidades de dinero fluyeron a las aldeas para compensar a las poblaciones afectadas. Los asurinis del Xingú utilizaron el dinero en infraestructura, equipamiento (casas, pozos, motores, embarcaciones y combustible), alimentos y mercancías, siguiendo sus propias expectativas, pero bajo el control de la FUNAI. Sin embargo, no hubo planificación en la forma como se invirtió el dinero. Los líderes indígenas jóvenes quedaron atrapados entre un modelo de gestión exógeno y vertical, impuesto por el Estado, y el modelo asurini, caracterizado por la reciprocidad y la no centralización del poder político. Por eso hubo conflicto y desconfianza. Además, la compensación económica intensificó una creciente dependencia de los asurinis del dinero y las mercancías.

El Plan Básico Ambiental (PBA) de los Estudios del Componente Indígena, estructurado siguiendo los resultados de los EIA-RIMA, fue concluido en el 2011 por antropólogos

1 EIA: estudio de impacto ambiental. RIMA: *relatório* (informe) de impacto ambiental.

que conocían la vida y las necesidades de las poblaciones locales; hay que señalar, sin embargo, que el PBA propuesto por los consultores fue alterado por las corporaciones para las que trabajaban. En el 2013 las conclusiones del PBA fueron debatidas en las aldeas. El Programa Medio Xingú (PMX), una de las recomendaciones del PBA, se está ejecutando a pesar de los incumplimientos de las corporaciones y el Gobierno Federal. Sin embargo, los pueblos indígenas están insatisfechos y son comunes las protestas y las ocupaciones en los sitios de construcción.

Los proyectos de desarrollo, especialmente la construcción de plantas hidroeléctricas, causan conflictos debido a intereses difusos y opuestos. El Estado y las corporaciones encargadas de la construcción y explotación de las plantas presentan esos proyectos como inexorables y al medio ambiente como un mero espacio físico que debe ser apropiado o, mejor, expropiado en nombre del “bien común”. Las acciones y los debates públicos son considerados simples obstáculos (Zhourri, ed. 2011). Muchas veces, las poblaciones indígenas se oponen a los proyectos de desarrollo porque sienten que sus formas de vida están amenazadas y sus derechos debilitados; sin embargo, terminan aceptándolos, empujadas por conveniencia burocrática, promesas engañosas y medidas compensatorias. Están experimentando un colonialismo perverso y sutil; de hecho, son los grupos más amenazados y perturbados por las actividades de desarrollo.

Los organismos financieros, como el Banco Mundial, han establecido nuevos procedimientos y criterios para evaluar los programas de desarrollo, en los que se incluyen normas y requisitos de protección de las poblaciones indígenas. Sin embargo, esos procedimientos y criterios mantienen una idea estereotipada sobre dichas poblaciones y son ambiguos en las políticas de protección necesarias para mitigar los efectos adversos. Las propuestas para “preservar la singularidad cultural” también enfatizan la “aculturación”, sin importar que profundice las políticas paternalistas, autoritarias y asimiladoras del Estado brasileño (Oliveira 2006c). En ese contexto, la arqueología de contrato está vinculada a los proyectos de desarrollo, ofreciendo una experticia necesaria. Por lo tanto, se convierte en cómplice de un autoritarismo económico y estatal que ignora los derechos indígenas.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO Y PUEBLOS INDÍGENAS

El proceso de institucionalización de la arqueología en Brasil se inició en el siglo XIX y se caracterizó por la relación de la disciplina con el nacionalismo, el universalismo de la ciencia y el colonialismo (Ferreira 2010). Influída por el naturalismo y el evolucionismo, se vinculó a la antropología biológica y se dedicó a investigar los orígenes humanos y la

evolución y a clasificar las evidencias arqueológicas en razas y culturas. En la primera mitad del siglo xx se estableció como la disciplina que trataba con la prehistoria de las poblaciones nativas del país y se consolidó en la academia con centros de investigación y formación. En las décadas de los cincuenta y los sesenta investigadores franceses y norteamericanos condujeron la formación técnica de la primera generación de arqueólogos brasileños. El pasado indígena precolonial fue desvinculado de las trayectorias históricas y culturales de las poblaciones indígenas contemporáneas, cuyas luchas fueron ignoradas. La mayor parte de los arqueólogos hizo caso omiso de los conocimientos producidos por la historia, la lingüística y la etnología (Barreto 2000; Noelli 1999). Cuando se implementó un diálogo con la antropología, la historia nativa y la lingüística, en la década de los noventa, la investigación con poblaciones indígenas comenzó a ser parte de la agenda arqueológica (Wüst 1991; Eremitas de Oliveira 2002; Heckenberger 1996; Neves 1998; Silva 2000; Baptista da Silva 2001). En la última década se hicieron investigaciones arqueológicas colaborativas con poblaciones indígenas (Silva 2013; Silva *et al.* 2010). También se generalizó la arqueología de contrato, que exhibe viejas prácticas; por ejemplo, la investigación hecha por una empresa de consultoría en Volta Grande, una zona directamente afectada por Belo Monte, se llevó a cabo sin la participación de las poblaciones indígenas locales. La ocupación tradicional de Volta Grande está siempre presente en las narraciones históricas de varias comunidades que todavía habitan tierras y aldeas en el bajo y medio Xingú. Esto también es cierto para otras poblaciones que viven en zonas no inundables, como los asurinís del Xingú, los araweté, los araras y los kararaôs. En este sentido, quiero plantear cuatro preguntas: (a) ¿por qué se omitió la arqueología colaborativa?; (b) ¿para quién se hace arqueología en la zona?; (c) ¿cuál es el significado dado al patrimonio arqueológico?; y (d) ¿por qué no se hizo investigación arqueológica en las zonas no inundables, dado que sus resultados podrían haber sido fundamentales para apoyar el manejo de la tierra propuesto por el Plan Básico Ambiental? Una investigación colaborativa que conduje por varios años con los asurinís del Xingú, acerca de la historia de su ocupación territorial en los periodos de precontacto y poscontacto, demuestra que los miembros de esta comunidad utilizan la información arqueológica en las actividades de manejo de la tierra. El redescubrimiento de sitios ocupados por sus antepasados promueve la revitalización de su memoria, de la tradición oral y de la identidad, además de reforzar sus lazos con la tierra que ahora ocupan, la tierra indígena Kuatinemu (Silva *et al.* 2011, 2013).

Dado que una parte significativa del registro arqueológico en las áreas afectadas por las hidroeléctricas puede estar relacionado con la historia de los habitantes indígenas, no tiene sentido recuperarlo sin su participación directa. Sin embargo, así sucede habi-

tualmente, y esto los llevó a interrumpir la construcción de las plantas hidroeléctricas. Por ejemplo, en el 2004 catorce grupos de la reservación indígena Xingú detuvieron la construcción de la central hidroeléctrica Paranatinga II en el río Culuene. Alegaron que el lugar sagrado en el que se realiza el *quarup* (ritual de los muertos) desde tiempos inmemoriales estaba siendo destruido. La firma de consultoría arqueológica determinó que la construcción no afectaría el sitio, ya que estaba en una zona distante. Entre los indígenas, los empresarios y los arqueólogos se produjo un acalorado debate. Al final, los empresarios se vieron obligados a subsidiar un estudio para definir y delimitar los paisajes culturales de Sagihengu y Kamukuwaká (Robhran-González 2006; Fausto, este volumen). Belo Monte y los otros complejos hidroeléctricos en la Amazonía reflejan la política autoritaria y paternalista del Estado brasileño con respecto a los pueblos indígenas: el registro arqueológico se ha convertido en un objeto y los indígenas han sido alienados de su patrimonio. Esa situación es emblemática de la “naturalización de la distancia” entre el objeto de la arqueología y su sujeto (Haber 2010). Esta es una arqueología que promueve una brecha entre el pasado amerindio y las poblaciones indígenas contemporáneas (Gnecco y Ayala 2010).

Aunque otros proyectos de desarrollo han posicionado la investigación arqueológica colaborativa con poblaciones indígenas, la identificación directa de los arqueólogos con el desarrollo y el capitalismo ha alienado a los pueblos nativos. De hecho, los arqueólogos no están trabajando con, por y para los pueblos indígenas, sino con, por y para las corporaciones, para cumplir con la legislación vigente. Sin embargo, la articulación de empresarios, arqueólogos y pueblos indígenas demuestra que estos últimos reivindican, constantemente, sus derechos.

En el 2010 los araras y los cinta larga exigieron a la FUNAI y al IPHAN la extensión de los estudios arqueológicos en la región que iba a ser afectada por la construcción de la central hidroeléctrica Dardanelos. Como resultado, se estableció un programa de investigación colaborativa para documentar la historia de su ocupación territorial y su cultura material; esta información fue presentada a la FUNAI para apoyar la solicitud de ampliación de límites de sus tierras (Stuchi 2012). Los arqueólogos que trabajan en este programa también han servido de intermediarios, llevando al Gobierno y a los empresarios las preocupaciones de los araras y los cinta larga sobre el impacto del proyecto sobre su estilo de vida. Incluso en las situaciones en las cuales la investigación es el resultado de las demandas de los indígenas, y la colaboración entre ellos y los arqueólogos es más eficaz, siempre existen contradicciones. Por ejemplo, la central hidroeléctrica Dardanelos se está construyendo sin la licencia ambiental obligatoria.

Un caso reciente involucra a los mundurucús, a los kaiabis y a los apiakás, impactados por el proyecto hidroeléctrico Tapajós. La firma de consultoría arqueológica que llevó a cabo un proyecto de investigación colaborativa desde el 2011 con los kaiabis y los apiakás excavó en una sección de la planta de Teles Pires, un sitio considerado sagrado por una de esas poblaciones. Los mundurucús reclamaron que las urnas funerarias de cerámica encontradas durante el proyecto eran parte de su patrimonio cultural. En su correspondencia con el IPHAN los indígenas pidieron el cese inmediato de la investigación arqueológica. Según el informe arqueológico, las urnas estaban intactas y alojadas en el laboratorio arqueológico de la planta de Teles Pires. Aún más, la investigadora invitó a los mundurucús a participar en el proyecto, puesto que reconoció que “el conocimiento tradicional de la etnia era relevante para la discusión de varios temas involucrados”². Pero los mundurucús se rehusaron a participar en el EIA y en el proyecto de investigación colaborativa porque estaban en contra de la central hidroeléctrica. Aunque habían querido una investigación colaborativa desde que coordiné un proyecto conjunto con los kaiabis, cuya tierra bordea la de los mundurucús (Silva *et al.* 2010), temían que su participación en este proyecto dentro de un EIA podría interpretarse como que estaban de acuerdo con la construcción de la planta. La FUNAI y el IPHAN aceptaron la negativa de los mundurucús como su derecho democrático; como resultado, la empresa constructora abandonó cualquier intento de realizar estudios en colaboración con ellos. Los EIA se llevaron a cabo con la protección de guardias armados para contrarrestar las protestas indígenas. Aunque las autoridades públicas acataron la ley, se creó un precedente de inconstitucionalidad sobre la alienabilidad de las poblaciones indígenas. Este caso muestra una apropiación oportunista por parte del Estado y el constructor de la “democratización” implícita en el proceso de licenciamiento ambiental. Teles Pires desnuda el compromiso del Gobierno con el desarrollo, en detrimento de los derechos indígenas (Rocha *et al.* 2013).

La legislación brasileña sobre el patrimonio arqueológico y el licenciamiento ambiental es desigual. Los principales agentes son el Gobierno, los empresarios y los arqueólogos; los indígenas son jugadores menores, subalternos. En el 2007 el IPHAN propuso democratizar esa legislación, para lo cual se creó un grupo de discusión sobre la preservación del patrimonio arqueológico en tierras indígenas, incluyendo arqueólogos, representantes del Gobierno e indígenas. Se elaboró un documento en el que se identificaron los temas pertinentes; se establecieron directrices éticas, científicas y multicultu-

2 Véase www.sabnet.com.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=760 pg. 6

rales para que los investigadores puedan administrar el patrimonio arqueológico; y se hicieron recomendaciones para la modificación de las leyes que se ocupan de las tierras indígenas (Robrahn-González y Migliaccio 2008). Sin embargo, el IPHAN no promovió un debate informado y completo sobre el documento, el cual terminó siendo inútil e ineficaz. Las leyes sobre el patrimonio arqueológico en tierras indígenas permanecieron intactas, así como la arqueología de contrato vinculada al licenciamiento ambiental. El único cambio introducido exigió que el conocimiento indígena sobre el “patrimonio arqueológico” fuera incluido en todos los EIA. Además, el IPHAN ahora requiere estudios etnoarqueológicos y programas colaborativos en los proyectos de arqueología de contrato; sin embargo, estos estudios se llevan a cabo de acuerdo con las directrices para casos específicos que establecen el IPHAN o los empresarios. Las directrices, obviamente, son preparadas sin consultar a los pueblos indígenas y son aprobadas unilateralmente por el IPHAN.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO Y ACTIVISMO ARQUEOLÓGICO

Algunos arqueólogos han afirmado que la arqueología de contrato (a) ha facilitado la destrucción de paisajes tradicionales; (b) está comprometida con el desarrollo y con el mero acatamiento de la ley; y (c) es una empresa privada (La Salle y Hutchings 2012). La arqueología de contrato se ha beneficiado de la arqueología pública —de la cual emergió la investigación colaborativa—, utilizando como estrategia de mercadeo la idea de que la demolición también construye (Ferreira 2013:99). Otros sostienen que la arqueología colaborativa debe evaluarse críticamente, ya que algunas experiencias revelan una brecha entre la teoría arqueológica progresiva y una práctica colonial que reproduce relaciones asimétricas. Los indígenas son informantes, excavadores y asistentes de laboratorio, pero no participan de manera efectiva en los diseños de investigación, en el manejo del registro arqueológico en sus tierras y en la construcción de conocimiento de acuerdo con sus trayectorias culturales (Gnecco y Ayala 2010:39-40; La Salle 2010). Estas críticas no pueden ser ignoradas, especialmente en el caso de la arqueología de contrato, en la cual la posición de los arqueólogos contratados por empresarios es ambigua en cuanto a la colaboración. ¿Con quién colabora el arqueólogo? ¿Cuál es su posición con respecto a las demandas indígenas y las restricciones impuestas por los empresarios, únicamente preocupados por cumplir con la ley, con la ejecución de los proyectos y con la maximización de los beneficios? Estas cuestiones están siendo enfrentadas por los arqueólogos en sus experiencias cotidianas en contextos de

contrato y consultoría (Phillips 2010; véanse Allen 2010; Rika-Heke 2010; Salazar 2010; Guilfoyle *et al.* 2011).

Mi experiencia con los araras y los cinta larga me hace dudar de la posibilidad de hacer arqueología colaborativa en proyectos de contrato. Las etnografías arqueológicas (Hamilakis y Anagnostopoulos, eds. 2009) son viables; sin embargo, ya que abordan las relaciones de las poblaciones nativas con el registro arqueológico, también se esfuerzan por comprender cómo se traducen esas relaciones en trayectorias históricas locales y transformaciones y continuidades socioculturales. Sin embargo, una discusión crítica de los contextos en que se desarrollan estas prácticas es necesaria para denunciar las asimetrías inherentes a la arqueología de contrato. Este debate está ligado a cuestiones como (a) la construcción de diálogos entre la arqueología, las poblaciones indígenas, los legisladores y los empresarios; (b) las consecuencias de las prácticas arqueológicas en la reproducción de las desigualdades sociales y en la destrucción del medio ambiente y las formas de vida indígenas; (c) la apropiación indígena de estas prácticas para recuperar, preservar y valorizar sus patrimonios. También hay que considerar que el manejo del patrimonio cultural —la razón de ser de todos los asuntos y debates arqueológicos— se relaciona con la estructura social, cultural, política y económica en la que se insertan la recuperación, la protección y la conservación de objetos arqueológicos; la institucionalización de la arqueología dentro de discursos liberales y coloniales; y la construcción de las identidades culturales, históricas, sociales y nacionales (Smith 2010:62).

El arqueólogo es un actor que ejerce poder y el conocimiento arqueológico siempre es apropiado en relaciones de poder, dentro y fuera de la disciplina y con diferentes intereses y perspectivas. En su práctica los arqueólogos ocupan dos posiciones: como individuos con intereses y agendas específicas y como representantes y participantes en procesos políticos y sociales amplios (Smith y Waterton 2010:102). Se debe rechazar la idea, supuestamente inocente, de que la participación de los arqueólogos en los procesos de licenciamiento ambiental solo tiene que ver con asuntos científicos. Su participación ocurre en un contexto en el que hay en juego intereses económicos y donde las políticas económicas y ambientales afectan a diferentes sectores de la sociedad, especialmente a las poblaciones indígenas. Creo que la expansión continua de los proyectos de desarrollo y la intensificación de las preocupaciones indígenas por sus territorios tradicionales impulsará la demanda por arqueología de contrato en tierras indígenas. En este escenario aumentarán los diálogos, pero también las tensiones, entre los arqueólogos y los pueblos indígenas.

En las últimas décadas la relación entre ellos ha oscilado entre conflicto y colaboración, entre el cuestionamiento de las prácticas disciplinarias y el establecimiento de

diferentes programas de investigación que han mejorado la interpretación y difusión de la información arqueológica. Las poblaciones indígenas de Brasil han cuestionado la manera como se realiza la investigación arqueológica en sus tierras con el pretexto del desarrollo desenfrenado y el progreso. Muchos de los arqueólogos brasileños han sido oportunistas y nada críticos con el desarrollo y han ignorado las demandas indígenas. Sin embargo, si no tomamos una postura crítica como arqueólogos y como ciudadanos, los estilos tradicionales de vida, el medio ambiente y el patrimonio cultural están condenados a desaparecer. El progreso no justifica tales pérdidas. Stottman (2010:12) tiene razón cuando afirma que una arqueología activista es arriesgada, pero eso no significa que no se deba hacer.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a FAPESP y CNPq por financiar mi investigación; a Francisco Stuchi y Tatiana Fernandes, quienes me aportaron su experiencia como consultores en arqueología de contrato; a Cristóbal Gnecco y Adriana Dias por invitarme a hacer esta reflexión; y a Francisco Noelli por sus sugerencias y revisiones.

REFERENCIAS CITADAS

Allen, Harry

- 2010 The Crisis in 21st Century Archaeological Heritage Management. En *Bridging the Divide: Indigenous Communities and Archaeology into the 21st Century*, editado por Caroline Phillips y Harry Allen, pp. 157-180. Left Coast Press, Walnut Creek.

Baniwa, Gersem

- 2012 A conquista da cidadania indígena e o fantasma da tutela no Brasil contemporâneo. En *Constituições nacionais e povos indígenas*, editado por Alcida Rita, pp. 206-227. UFMG, Belo Horizonte.

Baraúna, Gláucia Maria y R. Marin

- 2011 O “fator participativo” nas audiências públicas das hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. En *As tensões do lugar: hidrelétricas, sujeitos e licenciamento ambiental*, editado por Andréa Zhouri, pp. 93-125. UFMG, Belo Horizonte.

Barreto, Cristiana

- 2000 A construção de um passado pré-colonial: uma breve história da arqueologia no Brasil. *Revista USP* 44(1):32-51.

Baptista da Silva, Sergio

- 2001 Etnoarqueología dos grafismos Kaingang: um modelo para a compreensão das sociedades Proto-Jê meridionais. Disertación doctoral, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Eremites de Oliveira, Jorge

- 2002 Da pré-história à história indígena: (re)pensando a arqueologia e os povos canoieiros do Pantanal. Disertación doctoral, PUCRS, Porto Alegre.

Ferreira, Lúcio Menezes

- 2010 Arqueología comunitaria, arqueología de contrato y educación patrimonial en Brasil. *Jangwa Pana* 9:95-102.
- 2013 Essas coisas não lhes pertencem: relações entre legislação arqueológica, cultura material e comunidades. *Revista de Arqueologia Pública* 7:87-106.

Gnecco, Cristóbal y Patricia Ayala

- 2010 ¿Qué hacer? Elementos para una discusión. En *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*, editado por Cristóbal Gnecco y Patricia Ayala, pp. 23-47. FIAN; Universidad de los Andes, Bogotá.

Guilfoyle, David, Wayne Webb, Toni Webb y Myles Mitchell

- 2011 A Structure and Process for “Working beyond the Site” in a Commercial Context. *Australian Archaeology* 73:25-32.

Haber, Alejandro

- 2010 Arqueología indígena y poder campesino. En *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*, editado por Cristóbal Gnecco y Patricia Ayala, pp. 51-61. FIAN; Universidad de los Andes, Bogotá.

Hamilakis, Yannis y Aris Anagnostopoulos (editores)

- 2009 Archaeological Ethnographies: A Special Issue of Public Archaeology. *Public Archaeology* 8(2-3):63-322.

Heckenberger, Michael

- 1996 War and Peace in the Shadow of Empire: Sociopolitical Change in the Upper Xingu of South-Eastern Amazonia, A.D. 1400-2000. Disertación doctoral, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Hernández, Francisco del Moral y Sonia Barbosa Magalhães

- 2011 Ciência, cientistas, democracia desfigurada e licenciamento ambiental. En *As tensões do lugar: hidrelétricas, sujeitos e licenciamento ambiental*, editado por Andréa Zhouri, pp. 295-324. UFMH, Belo Horizonte.

La Salle, Marina

- 2010 Community Collaboration and other Good Intentions. *Archaeologies* 6(3):410-422.

La Salle, Marina y Rich Hutchings

- 2012 Commercial Archaeology in British Columbia. *The Midden* 44(2):8-16.

Neves, Eduardo Goes

- 1998 Paths in Dark Waters: Archaeology as Indigenous History in the Upper Rio Negro Basin, Northwest Amazon. Disertación doctoral, Indiana University, Bloomington.

Noelli, Francisco

- 1999 Repensando os rótulos e a história dos Jê no sul do Brasil a partir de uma interpretação interdisciplinar. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia* 3:285-302.

Oliveira, João Pacheco

- 2006a Una etnografía de las tierras indígenas: procedimientos administrativos y procesos políticos. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco Oliveira, pp. 15-50. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.
- 2006b Políticas indígenas contemporáneas: régimen tutelar, juegos políticos y estrategias indígenas. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco, pp. 127-150. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.
- 2006c Entre la ética del diálogo intercultural y una nueva modalidad de colonialismo. Los pueblos indígenas en las directrices del Banco Mundial. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco Oliveira, pp. 181-200. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.

Oliveira, João Pacheco y Alfredo Wagner de Almeida

- 2006 Demarcación y reafirmación étnica: una etnografía de la agencia indigenista. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco Oliveira, pp. 51-96. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.

Oliveira, João Pacheco y Marcelo Iglesias

- 2002 As demarcações participativas e o fortalecimento das organizações indígenas. En *Estado e povos indígenas. Bases para uma nova política indigenista II*, editado por Antonio Carlos de Souza Lima y Maria Barroso-Hoffmann, pp. 41-68. Contra Capa, Río de Janeiro.

Phillips, Caroline

- 2010 Working Together? Maori and Archaeologists in Aotearoa / New Zealand Today. En *Bridging the Divide: Indigenous Communities and Archaeology into the 21st Century*, editado por Caroline Phillips y Harry Allen, pp. 129-156. Left Coast Press, Walnut Creek.

Rika-Heke, Margaret

- 2010 Archaeology and Indigeneity in Aotearoa / New Zealand: Why do Maori not Engaging with Archaeology. En *Bridging the Divide: Indigenous Communities and Archaeology into the 21st Century*, editado por Caroline Phillips y Harry Allen, pp. 197-212. Left Coast Press, Walnut Creek.

Robrahn-González, Erika

2006 Nota de esclarecimento. Programa de diagnóstico antropológico e de patrimônio cultural da PCH Paranatinga II. Manuscrito sin publicar.

Robrahn-González, Erika y María Clara Migliacio

2008 Preservação do patrimônio arqueológico em terras indígenas. *Arqueologia Pública* 3:15-18.

Rocha, Bruna Cigaran da, Camila Jácome, Guilherme Mongeló, Francisco Forte Stuchi y Raoni Valle

2013 Arqueologia pelas gentes: um manifesto. Constatações e posicionamentos críticos sobre a arqueologia brasileira em tempos de PAC. *Revista de Arqueologia* 26(1):130-140.

Salazar, Diego

2010 Comunidades indígenas, arqueología y compañías mineras en el norte de Chile: ¿hacia un diálogo posible? En *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*, editado por Cristóbal Gnecco y Patricia Ayala, pp. 221-258. FIAN; Universidad de los Andes, Bogotá.

Santos, Leinad Ayer y Lúcia Mendonça Andrade

1989 *As hidrelétricas do Xingu e os povos indígenas*. Comissão Pró-Índio, São Paulo.

Silva, Fabíola Andrea

2000 As tecnologias e seus significados: um estudo da cerâmica dos Assurini do Xingu e da cestaria dos Kaiapó-Xikrin sob uma perspectiva etnoarqueológica. Disertación doctoral, Universidad de São Paulo, São Paulo.

2013 Território, lugares e memória dos Asurini do Xingu. *Revista de Arqueologia* 26(1):28-41.

Silva, Fabíola Andrea, Eduardo Bepalez y Francisco Forte Stuchi

2011 Arqueologia colaborativa na Amazônia: Terra Indígena Koatinemu, Rio Xingu, Pará. *Amazônica* 3(1):32-59.

Silva, Fabíola Andrea, Francisco Forte Stuchi, Eduardo Bepalez y Frederic Pouget

2010 Arqueologia em terra indígena. Uma reflexão teórico-metodológica sobre as experiências de pesquisa na aldeia Lalima (MS) e na terra indígena Kaiabi (MTPA). En *Arqueologia amazônica*, editado por Edithe Pereira y Vera Guapindaia, pp. 265-283. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém.

Smith, Laurajane y Emma Waterton

2009 *Heritage, Communities and Archaeology*. Duckworth, Londres.

Smith, Laurajane

2010 Towards a Theoretical Framework for Archaeological Heritage Management. En *The Heritage Reader*, editado por Graham Fairclough, Rodney Harrison, John Schofield y John Jameson, pp. 62-74. Routledge, Londres.

Souza Lima, Antonio Carlos de

- 2005 A identificação como categoria histórica. En *Antropologia e identificação: os antropólogos e a definição de terras indígenas no Brasil, 1977-2002*, editado por Antonio Carlos de Souza Lima y Henyo Trindade Barretto Filho, pp. 24-74. Contra Capa, Río de Janeiro.
- 2006 El indigenismo en Brasil: migración y reapropiaciones de un saber administrativo. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco Oliveira, pp. 97-125. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.

Souza Lima, Antonio Carlos y Maria Barroso-Hoffmam

- 2002 Estado e povos indígenas no Brasil. En *Estado e povos indígenas. Bases para uma nova política indigenista II*, editado por Antonio Carlos de Souza Lima y Maria Barroso-Hoffmann, pp. 7-24. Contra Capa, Río de Janeiro.

Stottman, Jay

- 2010 Introduction: Archaeologists as Activists. En *Archaeologists as Activists. Can Archaeologists Change the world?*, editado por Jay Stottman, pp. 1-16. University of Alabama Press, Tuscaloosa.

Stuchi, Francisco Forte

- 2012 Estudos etnohistóricos, arqueológicos e etnoarqueológicos das comunidades indígenas na região de Aripuanã, MT. Manuscrito sin publicar, Scientia Consultoria, São Paulo.

Wüst, Irmhild

- 1991 Continuidade e mudança: Para uma Interpretação dos grupos pré-coloniais da Bacia do Rio Vermelho, Mato Grosso. Disertación doctoral, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Zhour, Andréa (editora)

- 2011 *As tensões do lugar: hidrelétricas, sujeitos e licenciamento ambiental*. UFMG, Belo Horizonte.

ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO, COLONIALISMO INTERNO Y PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL

Jorge Eremites de Oliveira
Traducido del portugués por Cristóbal Gnecco

INTRODUCCIÓN

EN ESTE ARTÍCULO PRESENTO UN CONJUNTO DE REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE la arqueología de contrato, el colonialismo interno y los pueblos indígenas en Brasil. La discusión va al encuentro de una antropología y arqueología del colonialismo, es decir, del estudio del colonialismo entendido de dos formas inseparables y complementarias: primero, como un sistema estructurante de relaciones sociales de poder, explotación y dominación que no se limita a la temporalidad del periodo colonial; segundo, como un conjunto de problemas inherentes a la conformación, práctica y producción de saberes en esos campos del conocimiento, originalmente establecidos en Occidente (Himes 1972; Dirks 1995; Pels 1997, 2008; Cooper 2005; Lander 2005; Smith 2005; Atalay 2006; Moro 2006; Mignolo 2008). El colonialismo interno, por su parte, es un sistema estructurante de la misma naturaleza, pero particular a cada país y conectado a las capilaridades transnacionales del colonialismo global (González 1963, 1995, 2002, 2006; Cardoso de Oliveira 1978; Pacheco de Oliveira 2006).

La arqueología de contrato, a su turno, es una práctica empresarial porque se produce dentro de una lógica de negocio y mercado. Presupone la existencia de complejas relaciones entre contratantes / clientes / empleadores y contratistas / negociantes / empleados. En esos casos el producto que se vende o comercializa es el trabajo del arqueólogo. Este producto es un laudo en su sentido más amplio, del latín *laudare*, es decir, un dictamen técnico-científico cuya elaboración requiere algún tipo de estudio o investigación. Por lo general, este tipo de servicio es necesario en el licenciamiento socioambiental de diversos proyectos, desde la revitalización de una plaza pública en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, a la construcción de una planta hidroeléctrica en el estado de Pará, en el norte. Sin embargo, por medio del contrato también es posible producir otros tipos de trabajos. Un ejemplo son los laudos administrativos y periciales producidos en la esfera gubernamental y para el poder judicial, respectivamente, sobre áreas reivindicadas por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como

los remanentes de los *quilombos*¹. En situaciones de ese tipo también se elaboran contralaudos, encargados de defender sujetos y organizaciones vinculadas al movimiento ruralista que se presentan como contratantes y partes involucradas en disputas legales sobre la propiedad de la tierra en Brasil².

Para hacer frente a un tema demasiado complejo me baso principalmente en observaciones realizadas entre el 2003 y el 2012 en la región centro-oeste, en las que participé como arqueólogo o como antropólogo social, en dos tipos de trabajos. El primero está relacionado con la producción de un laudo administrativo y dos laudos periciales o judiciales en tierras indígenas (Eremites de Oliveira y Pereira 2009a, 2012; Eremites de Oliveira *et al.* 2011b). El segundo tiene que ver con la realización de estudios complementarios a informes sobre los impactos socioambientales de proyectos que afectan a comunidades indígenas: dos carreteras, una línea de transmisión de energía y una mina de oro (Eremites de Oliveira 2010; Eremites de Oliveira y Pereira 2009b, 2011; Eremites de Oliveira *et al.* 2011a). Además, uso información obtenida en el 2013 y en el 2014 a partir de la interlocución mantenida sobre el tema con estudiantes de arqueología y colegas que trabajan en universidades, museos, organismos estatales, empresas y otras instituciones que, de alguna manera, están relacionados con la arqueología de contrato.

La intención no es reducir la discusión a un binarismo del tipo “los que están a favor” frente a “los que están en contra” de la arqueología de contrato. Hacerlo sería ignorar lo que Rocha *et al.* (2013:132) llamaron, acertadamente, “dicotomía reduccionista que crea una oposición entre investigadores ‘ingenuos e idealistas’ e investigadores ‘ambiciosos que vendieron sus almas al capital’”. La proposición que defiendo es otra: un estímulo para mantener una postura crítica sobre este tipo de práctica arqueológica en Brasil y otros países.

1 En Brasil el término *quilombo* refiere a sujetos y comunidades de origen afroamericano y, por tanto, con un pasado ligado a la esclavización de negros traídos de África a América del Sur, cuyos colectivos tienen una organización social de la cultura diferenciada con relación a la sociedad nacional. Están legalmente reconocidos como “comunidades remanentes de los quilombos”, de acuerdo con el artículo 68 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Federal de 1988.

2 Los laudos judiciales son estudios técnico-científicos hechos por profesionales designados como peritos por la justicia, con experticia en temas relacionados con asuntos polémicos, como la posesión de ciertos terrenos. Los contralaudos son estudios hechos por asistentes técnicos, es decir, expertos contratados para defender a las personas o a las instituciones que son parte de procesos judiciales que involucran derechos.

DEL COLONIALISMO INTERNO A OTROS ASUNTOS CONEXOS

Los orígenes del colonialismo interno se remontan al proceso de independencia de las antiguas colonias europeas y la formación de los Estados nacionales en América y otros continentes. Fue entonces cuando las élites criollas ascendieron al poder central y pasaron a tener el control del aparato del Estado (González 2006). En el caso de América esas élites descendían de europeos y no se identificaban con las poblaciones indígenas. Los nuevos Estados-nación que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII no fueron constituidos teniendo en cuenta los derechos de los colectivos que estaban aquí antes de la existencia de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México o Estados Unidos. La categoría analítica *colonialismo interno* fue difundida en la antropología brasileña en la década de los sesenta por Roberto Cardoso de Oliveira (1978), cuyas ideas fueron inspiradas por Balandier (1993), González (1963) y otros autores. Esa categoría sirvió de base para que Cardoso formulara la teoría de *fricción interétnica*, que significó una ruptura con el enfoque culturalista y con el paradigma de la aculturación que dominaban en los estudios etnológicos de la época.

En aquella época gran parte de la arqueología brasileña estaba marcada por la influencia histórico-cultural del Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa), desarrollado entre 1965 y 1970 bajo la coordinación de Betty Meggers y Clifford Evans (Souza 1991; Prous 1992; Dias 1995)³. A pesar de que no ignoro o desprecio los valiosos aportes del programa, el hecho es que en ese momento el enfoque histórico-cultural era muy criticado en la arqueología americana. Las críticas más conocidas surgieron del movimiento de la nueva arqueología o procesualismo, cuyas influencias más significativas llegaron demasiado tarde a Brasil, básicamente a partir de la década de los ochenta. En ese periodo también se constituyó un *establecimiento* que pasó a controlar e influir en la arqueología en varias regiones y cuyas articulaciones fueron más allá del programa referido, manteniendo la disciplina poco abierta a la innovación y la renovación (Funari 1989, 1994; Dias 1995; Eremites de Oliveira 2002). Desde entonces, y por razones complejas, la antropología social y la arqueología siguieron caminos separados en muchas instituciones brasileñas: la primera permaneció más estrechamente vinculada a la sociología y la ciencia política, como resultado de una vieja alianza en las cien-

3 Otros investigadores también contribuyeron al desarrollo de la arqueología brasileña, como los franceses Joseph y Annette Laming-Emperaire, el estadounidense Wesley Hurt y los brasileños Luiz de Castro Faria, José Loureiro Fernandes y Paulo Duarte.

cias sociales; y la segunda quedó más cerca de la historia. Años más tarde, en la década de los noventa y en la primera del siglo XXI, en tiempos marcados por el pluralismo teórico-metodológico de la arqueología posprocesual y por la renovación de la disciplina en todo el mundo, comenzó un (re)acercamiento entre los dos campos del conocimiento. Los cambios tuvieron un impacto positivo en la apertura de nuevos programas de pregrado y posgrado en los cuales la antropología social y la arqueología pasaron a estar juntas y articuladas, como ocurre, por ejemplo, en las universidades federales de Minas Gerais, Pará y Pelotas (Eremites de Oliveira 2014).

Muchas de las perspectivas epistémicas adoptadas desde hace tiempo en la antropología brasileña están vinculadas con lo que algunos llaman, desde un punto de vista sociológico, el proyecto de *construcción de la nación*. En esa tradición los antropólogos sociales están comprometidos con los grupos con los cuales trabajan, algo que también se percibe como activismo político centrado en la garantía de derechos (Peirano 2000; Cabral 2004). En la arqueología se adoptó una postura diferente, conocida por la violencia epistémica construida en relación con los pueblos indígenas, una característica que no es exclusiva de la disciplina en el país (Gnecco y Langebaek, eds. 2006; Gnecco 2009). En el origen de su institucionalización, la arqueología brasileña estuvo centrada en un proyecto de “construcción del Estado” más que en un proyecto de “construcción de la nación”. Esa diferencia explica, al menos en parte, la ruptura y el distanciamiento epistemológico entre la arqueología prehistórica y la etnología indígena y la etnohistoria. Por esa y otras razones todavía hay pocos estudios en etnoarqueología, arqueología indígena, arqueología colaborativa y arqueología pública en esta parte de América del Sur. Sin embargo, ha habido progreso creciente en esa dirección en las últimas décadas, como lo demuestran los trabajos de Silva *et al.* (2008, 2011), Stuchi (2010), Bezerra (2011), Moraes (2012) y Wanderley (2013). Un ejemplo de esa situación se puede ver en el siguiente texto, escrito a finales de la década de los noventa, sobre la historia de la arqueología practicada en Brasil:

La mayor parte del conocimiento arqueológico producido en Brasil trata con el período precabralino. *La arqueología realizada en Brasil es, esencialmente, una arqueología de las sociedades indígenas extintas que vivieron en un pasado distante, dejando como testimonio de su existencia sólo restos materiales.* (Barreto 2000:33. Énfasis añadido)

La idea principal del texto es hija de una postura epistémica que postula una ruptura temporal entre la prehistoria (tiempo sin escritura) y la historia (tiempo con escritura), como si los pueblos indígenas actuales no tuvieran nada que ver con los pueblos del pasado precolonial. El texto hace uso implícito y acrítico del término *prehistoria*, acuñado

en 1851 por Daniel Wilson bajo la influencia del evolucionismo y la Ilustración (Trigger 2004); se trata de una categoría evolucionista naturalizada e institucionalizada en la arqueología mundial, incluso dentro de una perspectiva historiográfica que limita los pueblos amerindios a las temporalidades precoloniales (Eremites de Oliveira 2012). En esta perspectiva el lugar común del *otro* es representado como distante del presente, es decir, de la civilización, y es relegado al tiempo de los salvajes primitivos (Fabian 2013). A ello se suma la influencia del paradigma de la aculturación, que también marca las estructuras de pensamiento, el establecimiento del objeto de estudio y la producción intelectual de muchos arqueólogos. Por eso la noción de colonialismo interno es relevante para analizar el papel de los profesionales y las empresas vinculadas a la arqueología de contrato en escenarios marcados por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Este es el caso de situaciones históricas caracterizadas por el avance de los frentes de expansión e implementación de proyectos de desarrollo en Brasil. Un sistema estructurante de ese tipo se caracteriza por relaciones sociales y de poder, leyes, prácticas, burocracias y conocimientos que perpetúan formas de explotación, dominación y mantenimiento de asimetrías por parte de las élites nacionales contra los colectivos étnicos y culturalmente distintos, entre sí o con respecto a la mayoría de la población. Este es el caso de la percepción de que el patrimonio arqueológico, especialmente el que se refiere al pasado indígena precolonial, es algo meramente estatal y, por lo tanto, protegido por la ley y que no pertenece a los pueblos indígenas actuales (Ferreira 2013).

Esta situación ocurrió con comunidades guaraníes y kaiowás, confinadas a pequeñas reservas indígenas o expulsadas de sus tierras en el estado de Mato Grosso do Sul, muchas de ellas acampadas cerca de las carreteras estatales (Brand 1997; Cavalcante 2013). En esos casos comunidades enteras permanecen bajo asedio y limitadas por diversos mecanismos de sujeción: restricción de la circulación en sus territorios; amenazas de muerte y asesinatos de líderes; imposición del portugués como lengua oficial para comunicarse con las autoridades y los órganos del Estado; intolerancia de las misiones evangélicas, que demonizan las religiones nativas y promueven otras formas de violencia; implementación de una política de educación formal y salud que ignora las particularidades de cada comunidad; acción de los medios de comunicación en la construcción de una imagen negativa de los indios; destrucción de los sitios arqueológicos más recientes, como cementerios y asentamientos antiguos de los siglos XIX y XX. También se imponen mecanismos de sujeción a los pueblos indígenas y comunidades locales de todo tipo cuando se implementan proyectos de desarrollo, como la central hidroeléctrica de Belo Monte, la obra más grande del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) en Brasil. En este caso emblemático, las comunidades no fueron consultadas previa

y adecuadamente antes de la concesión de las licencias para el proyecto, lo que configura una violación de los derechos garantizados en la Constitución Federal de 1988 y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un tema candente es que el licenciamiento de estos proyectos también cuenta con el trabajo de arqueólogos y otros profesionales. Esto suele ocurrir de manera acrítica y en un contexto histórico más amplio, marcado por la globalización del capital (Chesnais 1996). En este escenario ocurre la descentralización de las operaciones productivas y la centralización del capital, dada su necesidad de acumulación. Esto da lugar a la *relocalización* de las inversiones y las actividades productivas, lo que polariza la riqueza en favor de las potencias del hemisferio norte; los países del hemisferio sur reciben menos riqueza y múltiples impactos negativos. En la parte meridional del planeta estos países tienen democracias jóvenes, economías en crecimiento y una historia marcada por dictaduras, tramas de corrupción en los poderes institucionales y políticas colonialistas. En Brasil y otros países de América Latina hay clases sociales, pueblos originarios y minorías étnicas en situación de vulnerabilidad social (Zhoury y Oliveira 2007; Roberto de Paula 2010). Ellos son los más afectados por todo esto, especialmente cuando son expulsados de sus tierras en nombre del progreso y la civilización.

DE LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO A LA ARQUEOLOGÍA PARA LA GENTE

El término *arqueología de contrato* fue popularizado en Brasil a partir de la década de los noventa. Tal como sucedió en la arqueología mundial, la idea inicial era diferenciar la nueva modalidad de trabajo con relación a la arqueología practicada en universidades, museos y otras instituciones. La arqueología de contrato se desarrolló en un contexto histórico marcado por el proceso de (re)democratización, la reanudación del crecimiento económico y una mayor expansión de la educación superior. La situación fue más marcada después del fin del régimen militar (1964-1985) y después de la promulgación de la Constitución de 1988. En esa época también entró en vigor una nueva legislación para el licenciamiento de proyectos de desarrollo potencialmente degradantes del medio ambiente y los seres humanos, incluido el patrimonio cultural. Esos cambios favorecieron el crecimiento de la arqueología de contrato, especialmente para el licenciamiento ambiental, y estimularon las primeras discusiones nacionales al respecto (e. g., Caldarelli 1997; Caldarelli y Santos 2000; SAB 2002). Desde entonces la arqueología de contrato creció vertiginosamente y en la primera década del siglo XXI pasó a ser responsable de más del 95% de las investigaciones realizadas en el país con la autorización del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN)

(Zanettini 2009; Wichers 2010; Ferreira 2013). Estas cifras, sin embargo, no tienen la misma proporcionalidad con respecto a las publicaciones científicas. La producción intelectual de mayor impacto científico todavía es hecha, paradójicamente, por arqueólogos que actúan como profesores e investigadores en universidades y museos más que como técnicos o empresarios vinculados exclusivamente con el contrato.

Por todo eso y mucho más, el término *arqueología de contrato* a veces tiene una connotación peyorativa, como si fuese algo inferior; por eso algunos prefieren llamarla *arqueología consultiva* o *arqueología preventiva*, en vez de designarla como *arqueología empresarial*. También son prácticamente desconocidas e ignoradas la producción y la comercialización de contralaudos y evaluaciones, incluso del tipo *junk science*⁴, utilizados por el poder judicial para defender a personas y organizaciones que se oponen a la regularización de las tierras indígenas y quilombolas en el país.

Si, inicialmente, la arqueología de contrato fue recibida con cierto entusiasmo, después pasó a ser vista con decepción por muchos de nosotros. Algunos, incluso, piensan que estamos frente a una verdadera tragedia en la arqueología de Brasil, como señaló Cristóbal Gnecco en una conferencia en Florianópolis, estado de Santa Catarina, en el 2012. Una evaluación similar y más detallada fue realizada en el 2013 en el manifiesto *Arqueología por la gente*, firmado por cinco arqueólogos brasileños (Rocha *et al.* 2013). Los autores de ese manifiesto argumentan diez cuestiones básicas relacionadas con la arqueología de contrato en Brasil. Primero, que la trayectoria actual de la arqueología brasileña desentona de la agenda mundial promovida por el Congreso Mundial de Arqueología (wac), especialmente con respecto a la mediación de intereses entre comunidades locales, instituciones públicas y empresas estatales y privadas. Segundo, que el Gobierno brasileño asume una actitud autoritaria y desarrollista en relación con los pueblos indígenas, violando sistemáticamente sus derechos. Tercero, que la mayoría de la comunidad arqueológica es silenciosa y cómplice ante la falta de conducta ética de los arqueólogos y empresas vinculadas al contrato, como en los casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales afectados por proyectos de desarrollo. Cuarto, que muchos arqueólogos son cómplices de procesos ilegales de expropiación y despojo de tierras tradicionales, bienes culturales y recursos naturales. Quinto, que los arqueólogos deben contribuir a la promoción y

4 La expresión *junk science* se utiliza en Estados Unidos para referirse a las producciones científicas consideradas de menor valor, a veces falsas o fraudulentas, presentadas en procesos para influir decisiones judiciales.

valorización de la diversidad sociocultural, aun rompiendo con la violencia epistémica observada en los museos, donde los pueblos indígenas aparecen fosilizados y relegados a un pasado distante. Sexto, que cuando la arqueología se hace a través de contrato no debe limitarse a conocimientos inconexos, no reflexivos y producidos con plazos ajustados y sin la inclusión de las comunidades e instituciones afectadas por los proyectos. Séptimo, que incluso los derechos de autor y los datos de las investigaciones de arqueólogos que no hacen contrato son violados y manipulados para satisfacer los intereses de los contratistas y las empresas. Octavo, que la violación del patrimonio cultural de las comunidades indígenas ha sido recurrente, como ocurrió con los mundurukús afectados por proyectos hidroeléctricos en la región amazónica. Noveno, que cuando el manifiesto fue escrito, el Código de Ética de la Sociedad de Arqueología Brasileira (SAB) ya era obsoleto —e ilegal— en lo que se refiere a la relación de los arqueólogos con pueblos y comunidades tradicionales, condicionando el reconocimiento de sus derechos sobre el patrimonio cultural a la comprobación de su vinculación ancestral. Décimo, que la arqueología brasileña está “siendo dominada por ‘hucólogos’ acrílicos y autómatas” (Rocha *et al.* 2013:133), lo que sugiere la existencia de un nuevo *establecimiento* en la arqueología nacional, vinculado al contrato. Esta es, en mi opinión, la crítica más contundente, valiente y dura a la arqueología de contrato y a la arqueología brasileña elaborada en las últimas décadas.

DE LA EVALUACIÓN GLOBAL AL ANÁLISIS DE UN CASO

A finales de la década de los ochenta y mediados de los noventa, cuando la arqueología de contrato todavía estaba en su infancia en Brasil, muchos arqueólogos jóvenes aspiraban a seguir la carrera de sus maestros y actuar como investigadores y profesores en universidades y museos. En ese momento surgió y creció la arqueología empresarial, que construyó un *know-how* centrado en la negociación, la elaboración y el desarrollo de proyectos, incluyendo presupuestos, plazos, servicios y productos. También avanzó con respecto a la aplicación de técnicas y métodos, el conocimiento sobre áreas poco estudiadas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Aún más, dio la oportunidad para que algunos individuos continuaran siendo arqueólogos y pudieran trabajar fuera de las relaciones de poder establecidas en ciertas instituciones. Hoy en día, sin embargo, no es raro observar profesionales recién graduados en arqueología o en campos relacionados, estudiantes de posgrado y hasta pseudoarqueólogos trabajando solos en el campo, sin la necesaria supervisión de un profesional con más experiencia. Ganan por productividad y tienen que cumplir metas, como en un sistema taylorista o ford-

ta de trabajo fabril: cantidad de pozos de sondeo, distancias recorridas en kilómetros, número de cuadrículas excavadas, informes por escribir y enviar, etc. Algunas veces son contratados por sus profesores-empleadores, que realizan trabajos por contrato a través de fundaciones vinculadas a las universidades o por medio de empresas particulares. También hay casos en que son contactados para trabajar a través de redes sociales como Facebook, LinkedIn o Whatsapp. Desde temprano pasan por un proceso de alienación con respecto a la lógica del capital, el plusvalor y, por tanto, su propia tercerización precaria del trabajo. Minimizan la responsabilidad social del oficio del arqueólogo, reduciéndolo a una mera técnica, como si el campo hiciese al profesional. Aún más: reproducen discursos centrados en la excelencia técnico-científica de sus trabajos. Esta postura corrobora la tesis del desarrollo a cualquier precio, una directriz de las acciones del Gobierno de Brasil desde la década de los noventa, cuando se retomó el crecimiento económico. A esto se suma la idea ingenua de la neutralidad científica, sobre todo cuando se trata del licenciamiento de proyectos que afectan la dinámica de la vida social y la reproducción física y cultural de pueblos y comunidades tradicionales. Sin embargo, hay personas y empresas que buscan actuar con seriedad en el contrato, pero encuentran grandes dificultades en las relaciones con los empresarios, muchos de los cuales quieren, simplemente, deshacerse del “problema” asignado a la arqueología. La situación se agrava cuando los arqueólogos son llamados a toda prisa para prestar servicios que deberían haber sido prestados antes y encuentran que se han violado sus derechos de autor. En este sentido, he observado dos problemas principales relacionados con la arqueología de contrato y su uso en el licenciamiento de proyectos que afectan a los pueblos originarios, cuya crítica se puede ampliar a otros contextos similares.

El *primer problema* se refiere a la existencia de arqueólogos que realizan estudios sin interlocución simétrica con las comunidades indígenas (caciques, chamanes, trabajadores de salud, maestros, mujeres, niños). La situación se agrava cuando los trabajos son ejecutados dentro o en las proximidades de tierras indígenas aún no regularizadas por el Estado. Este problema ocurrió en la zona de ampliación de la tierra indígena Burity en Mato Grosso do Sul, afectada por una línea de transmisión de energía, y en el área de ocupación tradicional llamada Santuário dos Pajés, en Brasilia, afectada a su vez por un desarrollo inmobiliario. En esos lugares los paisajes humanizados y los sitios arqueológicos más recientes son deliberadamente ignorados, ya que los arqueólogos son profesionales con autoridad para decir qué es y qué no es un sitio arqueológico. Por eso llegan a profanar lugares sagrados y otros sitios con significado tradicional, perturbando con ella la dinámica de la vida en sociedad. Una situación similar ocurre con la edu-

cación patrimonial, a menudo confundida con la arqueología pública, reducida a llevar conocimientos al *otro* por medio de talleres, conferencias y distribución de cartillas.

El *segundo problema* tiene que ver con el hecho de que los arqueólogos se han convertido en agentes del colonialismo interno cuando trabajan sin sentido crítico en el licenciamiento de proyectos de desarrollo. Esto ocurre porque su trabajo también sirve para limitar o violar derechos étnicos, especialmente derechos territoriales. Un ejemplo de lo anterior se presenta cuando el resultado de un laudo arqueológico producido para el licenciamiento socioambiental es usado en el poder judicial para corroborar la tesis de que determinada área no es tierra indígena porque no se encuentran pruebas materiales de su ocupación tradicional. Si esa situación es preocupante, aunque es ignorada por la mayoría de los arqueólogos que trabajan en contrato, la producción de contralaudos del tipo *junk science* es simplemente inadmisibles.

A este respecto, en particular, es necesario analizar el tema de los contralaudos producidos en el ámbito de la arqueología de contrato. Para ello me valgo de las experiencias de mi participación en la elaboración de un laudo pericial de naturaleza antropológica, arqueológica e histórica sobre la tierra indígena Buriti (Eremites de Oliveira y Pereira 2012). Hice el estudio junto con un antropólogo social durante un periodo de tres meses y lo entregué a la Justicia Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a finales del 2003. Originalmente tenía 334 páginas y 10 documentos anexos, como partes del diario de campo de Roberto Cardoso de Oliveira (2002), quien estuvo en Buriti a principios de la década de los cincuenta, y documentos de la década de los cuarenta producidos por funcionarios de la agencia indigenista oficial. El trabajo también incluye datos obtenidos y analizados de forma sistemática mediante investigación etnoarqueológica, etnográfica y etnohistórica que muestran que el área periciada es, de hecho, tierra indígena⁵.

5 El artículo 231 de la Constitución Federal de 1988 define qué son tierras indígenas en Brasil: “1 – Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios aquellas en las que viven de manera permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las indispensables para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”. Esta definición no tiene que ver, por supuesto, con las tierras ocupadas, de forma continua o no, desde tiempos precoloniales hasta hoy, sino con la manera tradicional como los grupos indígenas se relacionan con sus territorios en tiempos recientes (cfr. Silva *et al.* 1994; Santos y Pacheco de Oliveira 2003; Leite 2005; Eremites de Oliveira 2007, 2012).

Ese laudo pericial fue objetado por un contralaucho de 16 páginas hecho a principios del 2004 (Martins 2004), un trabajo lleno de inconsistencias e impropiedades, especie de *junk science*, cuyo objetivo principal era construir la “verdad” que interesaba a los contratistas. Fue producido por un arqueólogo que ni siquiera fue a la región Buriti a realizar algún estudio arqueológico, etnológico o etnohistórico para apoyar su trabajo con datos empíricos, ya que se valió, principalmente, del servicio de terceros que no eran arqueólogos ni antropólogos sociales, de la autoridad científica y del poder que tenía para autorizar su discurso y defender a los grandes hacendados involucrados en la disputa. El trabajo fue una “consultoría técnico-científica, neutral, evaluativa del laudo pericial” (Martins 2004:3752), como si hubiera neutralidad científica en la arqueología u otra disciplina.

Ese contralaucho evidencia una estrategia bien conocida por los antropólogos sociales que realizan peritajes en Brasil. Primero el autor descalifica profesionalmente y acusa de intolerante y parcial al arqueólogo perito de la Justicia Federal. En este caso el mayor problema radica en el hecho de que el evaluador era “presidente nacional de la Sociedad de Arqueología Brasileña” (Martins 2004:3752). El texto desprecia la investigación etnográfica, etnoarqueológica y etnohistórica contenida en el laudo judicial. El autor del trabajo cree que debería haber habido “excavaciones sistemáticas (sin lo cual no existe una práctica arqueológica)”, sobre todo para entender el proceso de ocupación humana de la región desde tiempos precoloniales (Martins 2004:3753). Al hacerlo menosprecia a la etnoarqueología y, por lo tanto, su contribución a la arqueología y a la producción de laudos antropológicos sobre tierras indígenas, a diferencia de lo que he argumentado (e. g., Eremites de Oliveira 2012). Incluso hace referencia a una publicación de su autoría, también resultado de un contrato, cuyo tema no tiene relación directa con la presencia de los terenas en la Sierra de Maracaju, sino con la “prehistoria” de la región. Además, interpreta erróneamente la legislación indigenista sobre el tema, tergiversando el concepto de tierras indígenas como si fueran áreas ocupadas ininterrumpidamente desde tiempos precoloniales hasta la actualidad. Por otra parte, afirma sus argumentos descalificando al arqueólogo perito:

En el estudio presentado por el perito es rigurosamente inaceptable que, además de su producción científica, *dedicada exclusivamente a la realidad de los indios guató*, cuyo contexto pasado es totalmente distinto del de los terenas y de la realidad arqueológica de la región del área en disputa, no haya recurrido a la bibliografía arqueológica regional publicada en la última década, sobre todo la que existe sobre las proximidades del área en disputa. (Martins 2004:3755. Énfasis añadido)

Después sostiene, entre otras cosas, que el área en disputa habría sido ocupada simultáneamente por indígenas y hacendados que se establecieron en esa región serrana después del final de la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza (1864-1870). Al hacerlo omite discutir el hecho de que los peritos han constatado, aun por medio de la memoria social y las genealogías, que los terrenos estaban allí desde, por lo menos, la década de los cincuenta del siglo XIX. Tampoco examina el debate sobre la expulsión de familias indígenas del área en disputa en una época cuando la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) la había identificado y delimitado como tierra tradicionalmente ocupada.

Una situación de ese tipo tendría que haber sido percibida como una conducta ética inadecuada y hubiera tenido grandes repercusiones en varias categorías profesionales y asociaciones científicas. Sin embargo, en ese momento fue tratada como algo de menor importancia por algunos compañeros de la SAB que se dieron cuenta de los hechos. Este tipo de actitud testimonia, entre otras cosas, la violencia epistémica y el distanciamiento de la arqueología brasileña con respecto a la realidad de los pueblos indígenas hoy en día.

CONCLUSIÓN

La arqueología de contrato es una modalidad relativamente nueva en la historia de la disciplina a nivel mundial. Su rápido crecimiento en Brasil es resultado, principalmente, de una creciente demanda del mercado por el trabajo del arqueólogo para la elaboración de estudios inter y multidisciplinarios para el licenciamiento de diversos proyectos. Esto sucedió después de la década perdida de los ochenta, cuando la economía de América Latina registró un estancamiento significativo. El crecimiento de la década siguiente trajo consigo otras demandas con respecto a la formación de nuevos profesionales. Como respuesta, entre otras razones, se abrieron programas de pregrado y posgrado en muchas regiones del país. Por otro lado, problemas entonces inexistentes o poco conocidos y debatidos llamaron la atención y estimularon la reflexión crítica sobre el tema. Este es el caso de la compleja relación entre la arqueología empresarial, el colonialismo interno y los pueblos indígenas en Brasil.

La arqueología de contrato dentro o cerca de las tierras indígenas, estén o no regularizadas por el Estado brasileño, debe hacerse de forma participativa y simétrica para involucrar a las comunidades afectadas. Esta observación conduce a la incorporación de los conocimientos indígenas en la interpretación del registro arqueológico, incluyendo los paisajes humanizados y las evidencias materiales de la ocupación reciente. Los trabajos de este tipo tienen que ser acompañados por las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos gubernamentales (Ministerio Público

Federal, FUNAI, IPHAN, etc.). Los informes producidos para el licenciamiento de proyectos de desarrollo deben ser presentados, discutidos y aprobados formalmente por las comunidades, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y las regulaciones de la legislación nacional. Proceder de esa forma implica contribuir a la superación de la violencia epistémica y ciertas prácticas colonialistas que marcan la historia de la arqueología brasileña. En el caso específico de los contralaudos, configurados o no como trabajos del tipo *junk science*, es esencial que las asociaciones puedan investigar las denuncias sobre posibles conductas indebidas. Esto se debe hacer para garantizar los plenos derechos de defensa y para guiar conductas éticas en relación con los derechos y las obligaciones de los arqueólogos.

Los pueblos indígenas contemporáneos, cuyos antepasados estaban aquí mucho antes de que los primeros conquistadores europeos cruzaran el Atlántico, siguen siendo casi desconocidos por los arqueólogos brasileños. Sobre ellos se construyeron representaciones estereotipadas, no pocas veces guiadas por la idea de la aculturación o de las pérdidas culturales, producto del evolucionismo y de la Ilustración del siglo XVIII. Incluso se habla de un posible final de la etnoarqueología, debido al hecho de que hay pocos grupos que todavía producen vasijas de cerámica y artefactos líticos y tienen una economía basada en la caza y la recolección. Una perspectiva de ese tipo revela que muchos arqueólogos tienen más interés en los objetos que en los seres humanos. Además, sobre los antepasados precoloniales de los pueblos originarios hemos construido un conjunto de representaciones similares. Suelen ser reduccionistas, fosilizadas, exóticas y esencialistas, pensadas a partir de teorías importadas de otras latitudes, sin base etnográfica en América del Sur. De hecho, durante décadas despreciamos la observación participante, la etnología indígena y la etnohistoria, en nombre de tipologías, clasificaciones y estadísticas sobre la cultura material. Nos negamos, deliberadamente, a tener un encuentro cara a cara con el *otro*, generalmente relegado a una posición subalterna y, en consecuencia, sin derecho a la voz, la historia, el territorio y a un modo de vida diferenciado. Así que nada tendría que contribuir a la disciplina arqueológica. ¡Craso error!

A pesar de estas críticas, entiendo que el conocimiento producido por los arqueólogos puede traer cambios positivos en la construcción de otro proyecto de nación, teniendo en cuenta tres preguntas filosóficas básicas: ¿quiénes somos?; ¿de dónde venimos?; ¿a dónde vamos? En este sentido, soy escéptico en cuanto a la incorporación a la historia nacional de conocimientos producidos por la arqueología prehistórica. Esos conocimientos no servirán para dar consistencia, visibilidad y valoración a una historia indígena total y de larga duración percibida en términos espaciales y temporales; como mucho, quedará limitada al esencialismo y el exotismo de la academia y los museos.

Por eso debemos continuar con una actitud crítica con relación a la arqueología de contrato —y con respecto a la arqueología en general—, (re)pensando la formación y la praxis de los arqueólogos. También necesitamos la desobediencia epistémica, esencial para el proceso de descolonización de la disciplina en Brasil.

REFERENCIAS CITADAS

- Atalay, Sonia
 2006 Indigenous Archaeology as Decolonizing Practice. *The American Indian Quarterly* 30(3-4):280-310.
- Balandier, George
 1993 A noção de situação colonial. *Cadernos de Campo* 3:107-131. [1951].
- Barreto, Cristiana
 2000 A construção de um passado pré-colonial: uma breve história da arqueologia no Brasil. *Revista USP* 44:32-51.
- Bezerra, Marcia
 2011 As moedas dos índios: um estudo de caso sobre os significados do patrimônio arqueológico para os moradores da Vila de Joanes, Marajó, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - Ciências Humanas* 6:57-70.
- Brand, Antonio
 1997 O impacto da perda da terra sobre a tradição Kaiowá / Guarani: os difíceis caminhos da palavra. Disertación doctoral, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Cabral, João de Pina
 2004 Uma história de sucesso: a antropologia brasileira vista de longe. En *O campo da antropologia no Brasil*, editado por Wilson Trajano Filho y Gustavo Lins Ribeiro, pp. 249-265. Contra Capa; ABA, Río de Janeiro.
- Caldarelli, Solange (editora)
 1997 *Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural*. IGPA-UCG; Fórum Interdisciplinar para o Avanço da Arqueologia, Goiânia.
- Caldarelli, Solange y Maria dos Santos
 2000 Arqueologia de contrato no Brasil. *Revista USP* 44:52-73.
- Cardoso de Oliveira, Roberto
 1978 *A sociologia do Brasil indígena*. Editora UnB, Brasília. [1966].
 2002 *Os diários e suas margens: viagem aos territórios Terêna e Tükúna*. Editora UnB, Brasília.

Cavalcante, T. L. V.

- 2013 Colonialismo, território e territorialidade: a luta pela terra dos Guarani e Kaiowa em Mato Grosso do Sul. Disertación doctoral, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Assis.

Chesnais, François

- 1996 *A mundialização do capital*. Xamã, São Paulo.

Cooper, Frederick

- 2005 *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. University of California Press, Berkeley.

Dias, Adriana Schmidt

- 1995 Um projeto para a arqueologia brasileira: breve histórico da implementação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa). *Revista do CEPA* 19(22):25-39.

Dirks, Nicholas (editor)

- 1995 *Colonialism and Culture*. The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Eremites de Oliveira, Jorge

- 2002 A Arqueologia Brasileira da década de 1980 ao início do século XXI: uma avaliação histórica e historiográfica. *Estudos Ibero-Americanos* 28(2):25-52.
- 2007 Cultura material e identidade étnica na arqueologia brasileira: um estudo por ocasião da discussão sobre a tradicionalidade da ocupação Kaiowá da Terra Indígena Sucuri'y. *Cultura e Sociedade* 10(1):95-113.
- 2010 Sobre a necessidade do trabalho antropológico para o licenciamento ambiental: avaliação dos impactos gerados a partir da pavimentação asfáltica da Rodovia BR-384 sobre a comunidade Kaiowa de Nãnde Ru Marangatu. *Revista Eletrônica História em Reflexão* 4:1-24.
- 2012a A história indígena no Brasil e em Mato Grosso do Sul. *Espaço Ameríndio* 6(2):178-218.
- 2012b O uso da arqueologia para a produção de laudos antropológicos sobre terras indígenas em Mato Grosso do Sul, Brasil. *Tellus* 12(22):27-48.
- 2014 Jus sperniandi: proposta de criação de uma graduação em antropologia em Mato Grosso do Sul, Brasil. *Cadernos do LEPAARQ* 9(21):1-37.

Eremites de Oliveira, Jorge y Levi Marques Pereira

- 2009a *Nãnde ru marangatu: laudo antropológico e histórico de uma terra Kaiowa na fronteira do Brasil como Paraguaí, município de Antônio João, Mato Grosso do Sul*. Editora UFGD, Dourados.
- 2009b Relatório antropológico complementar dos impactos socioambientais do Projeto São Francisco, atual Serra da Borda Mineração e Metalurgia, sobre os Katitauru das terras indígenas Sararé e Paukalirajausu, em Mato Grosso. Manuscrito sin publicar.
- 2011 Estudos antropológicos de complementação dos impactos socioambientais gerados pelo empreendimento Linha de Transmissão em 230 KV Chapadão do Sul (SE Chapadão) Campo Grande (SE Imbirussu) Sidrolândia (SE Sidrolândia) Anastácio (SE Anastácio) sobre os Terena das Terras Indígenas Buriti e Tereré ou Buritizinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Manuscrito sin publicar.

2012 *Terra Indígena Buriti: perícia antropológica, arqueológica e histórica sobre uma terra terena na Serra de Maracaju, Mato Grosso do Sul*. Editora UFGD, Dourados.

Eremites de Oliveira, Jorge, Levi Marques Pereira y Sandra Regina Dambrós

2011a Estudos antropológicos e ambientais complementares sobre os impactos socioambientais gerados pelas obras de ampliação da capacidade e reordenamento do tráfego da rodovia estadual MS 156, trecho Dourados-Itaporã, Lote II, Km 7,800, sobre os Guarani, Kaiowa e Terena das Terras Indígenas Dourados e Panambizinho, município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Manuscrito sin publicar.

Eremites de Oliveira, Jorge, Levi Marques Pereira y Lilian Santos Barreto

2011b Laudo antropológico referente à diligência técnica realizada em parte da área da antiga Fazenda Bananal, mais conhecida como Santuário dos Pajés, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Relatório. Manuscrito sin publicar.

Fabian, Johannes

2013 *O tempo e o outro: como a antropologia estabelece seu objeto*. Vozes, Petrópolis.

Ferreira, Lúcio Menezes

2013 Essas coisas não lhes pertencem: relações entre legislação arqueológica, cultura material e comunidades. *Revista de Arqueologia Pública* 7:87-106.

Funari, Pedro

1989 Brazilian Archaeology and World Archaeology: Some Remarks. *World Archaeological Bulletin* 3:60-68.

1994 Arqueologia brasileira: visão geral e reavaliação. *Revista de História da Arte e Arqueologia* 1:23-41.

Gnecco, Cristóbal

2009 Caminos de la arqueología: de la violencia epistémica a la relacionalidad. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - Ciências Humanas* 4(1):15-26.

Gnecco, Cristóbal y Carl Langebaek (editores)

2006 *Contra la tiranía tipológica en arqueología: una visión desde Suramérica*. Universidad de los Andes, Bogotá.

González, Pablo

1963 Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo en América Latina. *Revista del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales* 6(3):15-32.

1995 *O colonialismo global e a democracia*. Civilização Brasileira, Río de Janeiro.

2002 *Exploração, colonialismo e luta pela democracia na América Latina*, Vozes-LPP, Petrópolis-Río de Janeiro.

2006 Colonialismo interno [una redefinición]. En *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas*, editado por Atilio Borón, A. A. et al., pp. 409-434. Clacso, Buenos Aires.

Himes, Dell (editor)

1972 *Reinventing Anthropology*. University of Michigan Press, Ann Arbor.

Lander, Edgardo (editor)

- 2005 *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.* Clasco, Buenos Aires.

Leite, Ilka Boaventura (editora)

- 2005 *Laudos periciais antropológicos em debate.* Florianópolis, NUER / ABA.

Martins, G. R.

- 2004 Parecer sobre o laudo pericial na área de Arqueologia, relativo a proposta de ampliação da Reserva Indígena Buriti, em MS. In: *Processo nº. 2001.60.00.003866-3 - 3ª Vara da 1ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul.* Campo Grande, Justiça Federal, p.3752-3767. Inédito.

Mignolo, Walter

- 2008 Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. *Cadernos de Letras da UFF* 34:287-324.

Moraes, Irislane Pereira de

- 2012 Do tempo dos Pretos d'antes aos Povos do Aproaga: patrimônio arqueológico e territorialidade quilombola no vale do rio Capim (pa). Tesis de maestría, Universidade Federal do Pará, Belém.

Moro, Óscar

- 2006 The History of Archaeology as a "Colonial Discourse". *Bulletin of the History of Archaeology* 16(2):4-17.

Pacheco de Oliveira, João

- 2006 Entre la ética del diálogo intercultural y una nueva modalidad de colonialismo. Los pueblos indígenas en las directrices del Banco Mundial. En *Hacia una antropología del indigenismo: estudios críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas políticas actuales de los indígenas en Brasil*, editado por João Pacheco Oliveira, pp. 181-200. Contra Capa; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Río de Janeiro; Lima.

Peirano, Mariza

- 2000 A antropologia como ciência social no Brasil. *Etnográfica* 4(2):219-232.

Pels, Peter

- 1997 The Anthropology of Colonialism: Culture, History, and the Emergence of Western Governmentality. *Annual Reviews of Anthropology*, Palo Alto, 26:163-183.
- 2008 What has Anthropology Learned from the Anthropology of Colonialism? *Social Anthropology* 16(3):280-290.

Prous, André

- 1992 *Arqueologia brasileira.* Editora UnB, Brasília.

Roberto de Paula, Luis

2010 Antropologia, desenvolvimento e estudos de impacto ambiental: a responsabilidade social do antropólogo revisitada. *R@U – Revista dos Alunos do PPGAS-UFSCar* 2(2):252-281.

Rocha, Bruna Cigaran da, Camila Jácome, Guilherme Mongeló, Francisco Forte Stuchi y Raoni Valle

2013 Arqueologia pelas gentes: um manifesto. Constatações e posicionamentos críticos sobre a arqueologia brasileira em tempos de PAC. *Revista de Arqueologia* 26(1):130-140.

Trigger, Bruce

2004 *História do pensamento arqueológico*. Odysseus, São Paulo.

SAB (Sociedade de Arqueologia Brasileira)

2002 *Anais do Simpósio A Arqueologia no Meio Empresarial – 2000*. SAB / UCG-IGPA, Goiânia.

Santos, Ana Moreira y João Pacheco de Oliveira

2003 *Reconhecimento étnico em exame: dois estudos sobre os Caxixó*. Contra Capa, Rio de Janeiro.

Silva, Fabíola Andrea, Eduardo Bsepalez, Francisco Forte Stuchi y Frederic Pouget

2008 Arqueologia, etnoarqueologia e história indígena. Um estudo sobre a trajetória histórica da ocupação indígena em territórios do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul: a Terra Indígena Kaiabi e a Aldeia Lalima. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia* 17:509-514.

Silva, Fabíola Andrea, Eduardo Bsepalez y Francisco Forte Stuchi

2011 Arqueologia colaborativa na Amazônia: Terra Indígena Koatinemu, Rio Xingu, Pará. *Amazônica* 3(1):32-59.

Silva, Orlando Sampaio, Lídia Luz y Cecília Maria Helm

1994 *A perícia antropológica em processos judiciais*. Edufsc, Florianópolis.

Smith, Linda Tuhiwai

2005 *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books, Londres.

Souza, Alfredo Mendonça de

1991 História da arqueologia brasileira. *Pesquisas* 46:1-157.

Stuchi, Francisco Forte

2010 A ocupação da Terra Indígena Kaiabi: etnoarqueologia e história indígena. Tesis de maestría, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Wanderley, Elaine Cristina Guedes

2013 “É pote de parente antigo!” A relação dos indígenas Apurina da Terra Indígena Caititu com os sítios e objetos arqueológicos, Lábrea / AM. Tesis de maestría, Universidade Federal do Pará, Belém.

Wichers, C. A. de M.

2010 *Museus e Antropofagia do Patrimônio Arqueológico: caminhos da prática brasileira*. Tese de Doutorado em Museologia, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, Lisboa.

Zanettini, Paulo

2009 *Projetar o futuro para a arqueologia brasileira: um desafio de todos*. *Revista de Arqueologia Americana* 27:71-87.

Zhour, Andréa y Raquel Oliveira

2007 *Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas*. *Ambiente & Sociedade* 10(2):119-135.

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ANTROPÓLOGOS Y ARQUEÓLOGOS: SOBRE CONTRATOS, REPRESAS Y ALGUNAS OTRAS COSAS¹

Carlos Fausto

Traducido del portugués por Cristóbal Gnecco

EN UN TEXTO RECIENTE TITULADO “LA CIENCIA DE CONTRATO Y EL CONTRATO DE LA CIENCIA” CRITIQUE el trabajo realizado por la empresa Documenta en el contexto de construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Paranatinga II en el río Culuene, principal fuente del río Xingú. Cuestioné puntos específicos sobre las conclusiones del laudo y los métodos utilizados, así como sobre la competencia de la antropóloga contratada para llevar a cabo el estudio, Gláucia Buratto Rodrigues de Mello. Esta última respondió públicamente a mis críticas en un texto breve y vehemente, mientras que Erika Robrahn-González, responsable del trabajo, escribió una larga nota de aclaración sobre el asunto. Retomo el tema, no tanto para responderles como para señalar los dilemas y peligros involucrados en lo que llamé “ciencia de contrato”. Es necesario discutir el tema en profundidad y corresponde a las asociaciones científicas establecer una agenda positiva para examinar los asuntos que desarrollo.

Este texto está organizado de la siguiente manera: primero contextualizo la discusión; después discuto la naturaleza del trabajo realizada por Documenta para Paranatinga S.A. Luego regreso al problema del conocimiento específico en antropología para detenerme en el contenido del informe. Por último considero, brevemente, el desafío que tenemos ante nosotros.

UN POCO DE CONTEXTO²

Ningún antropólogo puede desconocer el contexto social en el que está inmerso un problema científico y no debe dejar de reflexionar sobre las consecuencias sociales de

1 Este texto fue escrito en noviembre del 2006 y se publica sin cambios. Lo que era entonces reciente es hoy pasado y la PCH está en operación hace ya algunos años.

2 Agradezco a Bernardo Heurich Perondi por sus valiosos comentarios e informaciones.

su actividad. Tomar un tema polémico que involucra poblaciones minoritarias y tratarlo como si fuera una mera cuestión técnica no solo es temerario, sino irresponsable.

El trabajo de Documenta se inserta en un contexto de conflicto social. En 2004 los pueblos del Xingú fueron sorprendidos por la construcción de una represa en el río Culuene. Los indígenas irrumpieron en el sitio de construcción y pidieron su cierre, argumentando que el lugar es sagrado porque allí se realizó el primer *quarup*³ y que el impacto ambiental causaría perjuicios a los pueblos del Parque Indígena del Xingú que viven, principalmente, del consumo de pescado. También señalaron que no fueron consultados antes del inicio de la obra, que solo la conocieron cuando el lecho del Culuene comenzó a cambiar y el río fue afectado. Cuando estuvieron allí por primera vez, en octubre de 2004, la obra ya había alterado el lecho del río. Entonces se celebró una reunión en Canarana con la presencia del gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, algunos de sus secretarios, autoridades locales, el procurador Mario Lucio Avelar y el gerente de Patrimonio Arqueológico y Natural del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), Rogério José Días. Esa reunión contó con la presencia de unos 150 indígenas, que entregaron a las autoridades un documento pidiendo la suspensión de la obra de la PCH Paranatinga II.

Después de esa reunión algunos líderes indígenas del Alto Xingú fueron llevados a Cuiabá por el gobernador y visitaron, según la revista *Época*, “una planta instalada en una de las haciendas de Maggi”. Las negociaciones culminaron con la firma de un “acuerdo de compromiso” en el que las partes son el gobierno del Estado de Mato Grosso, las “etnias de la comunidad del Parque Indígena del Xingú” y la compañía Paranatinga Energía S.A. En el acuerdo, firmado el 22 de diciembre de 2004, las “etnias” se comprometen, entre otras cosas, a “no oponerse a la implementación de la PCH Paranatinga II, debido a su importancia socioeconómica”.

El documento fue rechazado después en una reunión del consejo político de la Asociación de la Tierra Indígena del Xingú (ATIX), ocurrida en el Puesto Indígena Leonardo Villas Boas el 17 y 18 de febrero de 2005. En la reunión los dirigentes informaron de su viaje a Cuiabá y la visita realizada a otras represas, así como la firma del acuerdo de compromiso en presencia de representantes de la empresa y el gobierno estatal. Puesto que afirmaron haberse sentido presionados a firmar el acuerdo el consejo político de la ATIX decidió rechazarlo. Aún así, algunos de los compromisos firmados fueron llevados a cabo por la empresa y el gobierno estatal: por ejemplo, se creó el IPEAX (Instituto de

3 El *quarup* es el principal ritual interétnico de los pueblos del Alto Xingú.

Investigación Etno-Ambiental del Alto Xingú) que, según el acuerdo, implica la destinación por la empresa de recursos por valor de hasta 250.000 reales. No puedo decir, sin embargo, si fueron implementados todos los compromisos firmados.

En octubre de 2005 la revista *Época* informó del acuerdo y sus efectos sobre los líderes del Xingú. La noticia fue titulada “La moneda de la discordia” y tenía el siguiente subtítulo: “Acuerdo de 1.3 millones de reales entre los caciques del Xingú, el gobierno de Mato Grosso y la compañía eléctrica provoca grietas históricas en el parque indígena”. La noticia señaló que “El acuerdo que dividió al Xingú establece que el gobierno de Mato Grosso transferirá 300.000 reales a las aldeas y que Paranatinga liberará más de un millón de reales y otras 50 hectáreas de tierra”.

DE MI PAPEL COMO ANTROPÓLOGO

Mi participación en este caso se limitó a la elaboración de un laudo para el Ministerio Público Federal, cuyo objetivo era apoyar una acción civil tendiente a paralizar las obras de la PCH Paranatinga II. Cuando el gobernador anunció la necesidad de un laudo antropológico para zanjar el asunto fui llamado por los caciques Aritana Yawalapiti, Tabata Kuikuro, Kugikagé Kalapalo y Makupa Kayabi, entre otros, que me pidieron que escribiera un texto explicando la posición indígena, es decir, que tradujese al lenguaje técnico de un laudo el conocimiento que afirmaban tener sobre el curso alto del Culue-ne, desde la frontera sur del Parque Indígena hasta el lugar de la obra. El procurador Mario Lucio Avelar me pidió que escribiera un laudo con evidencias para que pudiera asegurarse de la justeza y procedencia de la reivindicación indígena con el fin de presentar una acción civil. Eso fue lo que hice. Traté de demostrar que la reivindicación de los indígenas tenía fundamento arqueológico, histórico y cultural y que debería ser objeto de atención de los poderes públicos.

Con base en ese laudo el Ministerio Público Federal presentó la acción (proceso 2005.36.00.000267-2), solicitando una medida cautelar que fue otorgada el 18 de febrero de 2005 por el juez Julier Sebastião da Silva, de la Primera Circunscripción de Mato Grosso, suspendiendo las obras. La decisión del juez se basó en el “patente vicio de forma en el procedimiento de licenciamiento ambiental” realizado por la Fundación Estatal del Medio Ambiente y no por el Instituto Brasileiro del Medio Ambiente (Ibama). El 3 de octubre de 2005, sin embargo, la medida cautelar fue revocada por el Tribunal Federal de la 1.^a Región; la revocatoria fue publicada a finales de diciembre, lo que permitió la reanudación de las obras en enero de 2006. El 11 de abril la justicia federal de

la Primera Circunscripción decidió a favor de las comunidades indígenas y ordenó la suspensión de las obras y la demolición de la represa.

En junio unos 200 indígenas, representando a las 14 etnias del Xingú, ocuparon la PCH Paranatinga II. Después de tensas negociaciones los líderes del Movimiento Indígena por la Defensa del Xingú fueron a Brasilia y recibidos por el presidente de la Cámara, el diputado Aldo Rebelo. Los líderes pidieron que el IPHAN protegiera las áreas sagradas del Culuene y que el Ibama asumiera el licenciamiento ambiental del proyecto. En una carta a las autoridades estatales y federales señalaron que “la empresa y el gobierno estatal tratan de comprar nuestro silencio con dinero, carros y casas” pero que todavía están luchando por la paralización definitiva de la obra y la “recuperación del daño que se ha hecho”.

En agosto de 2006 el informe de la empresa Documenta, completado en mayo, obtuvo espacio en la prensa. El día 27 el *Correio Braziliense* publicó un artículo titulado “La controversia en el Xingú” y subtítulo “Construcción de la hidroeléctrica Paranatinga II, en Mato Grosso, es blanco de críticas. La planta se estaría construyendo en el lugar sagrado de los pueblos del Xingú pero el estudio indica que el sitio arqueológico está en otra parte”. La noticia señaló:

Hace pocos meses un equipo multidisciplinar integrado por 21 antropólogos, arqueólogos e historiadores, entre otros estudiosos, entregó al IPHAN un informe, encabezado por la antropóloga Erika Marion Robrahn-González, de la Universidad de São Paulo (USP). El documento preparado por el equipo de “Documenta Antropología y Arqueología”, contratada por Paranatinga Energía S.A, al cual tuvo acceso el *Correio*, incluye indicios de la localización exacta de Sagihenhu, que no es más que el tercero de los cuatro pasajes sagrados de la mitología de los pueblos del Xingú. Fue en ese lugar donde se realizó, en tiempos inmemoriales, la primera fiesta del *quarup* y donde nació la humanidad. Comparativamente el lugar sagrado tiene la misma importancia para los indígenas que la ciudad de Jerusalén, en Israel, para cristianos, judíos y musulmanes. Por el trabajo de los especialistas Sagihenhu está situado fuera del Parque del Xingú, en un lugar conocido como Camino de Avelino. (pp 13-14)

El Camino de Avelino (o Adelino) está aguas abajo del eje de la represa. La versión de que éste sería el lugar sagrado y no el de la zona de la obra surgió antes, incluso en diciembre de 2004, cuando los líderes indígenas estaban en Cuiabá invitados por la empresa y el gobierno del Estado de Mato Grosso. Sin embargo, antes del estudio de Documenta esta hipótesis no tenía fuerza.

A pesar de que ya conocía el informe de Documenta solo entonces pensé que debía cuestionar sus conclusiones pues me parecía evidente qué usos podrían darle. Por lo

tanto, escribí el texto “Ciencia de contrato y el contrato de la ciencia: Observaciones sobre el laudo de la empresa Documenta sobre la PCH Paranatinga II (río Culuene, MT)”, publicado en *Notícias Socioambientais*, del Instituto Socioambiental el 9 de junio de 2006⁴. En ese texto intenté mostrar lo frágiles que eran los fundamentos antropológicos que habían permitido concluir que Sagihengu no se encontraba en el eje de la represa; al mismo tiempo, traté de plantear el problema de la relación entre ciencia y contrato.

Poco después, el 20 de septiembre, el juez federal João Batista Moreira del Tribunal Regional Federal de la 1.^a Región suspendió los efectos de la sentencia (dada en primera instancia), permitiendo la construcción de la PCH Paranatinga II hasta la sentencia de apelación. El recurso de reposición (n.º 2006.01.00.020856-8/TM), del 12 de junio, cita los argumentos presentados en la apelación de la sentencia por parte de Paranatinga S.A. Entre ellos está, precisamente, la “ausencia de obras en tierras indígenas o en los sitios sagrados de las comunidades indígenas locales, tal como el del primer ritual *quarup*”. Más adelante veremos cómo la decisión del Tribunal Regional Federal fue influenciada por el informe de Documenta.

¿QUIÉN CONTRATA A QUIÉN?

Paso ahora al carácter del trabajo realizado por Documenta. No discuto su protección legal sino su naturaleza y origen. Comienzo por el segundo aspecto: ¿quién escoge y quién contrata a una empresa de consultoría?

Según Erika Robrahn-González en abril de 2005 inició el “Programa de diagnóstico antropológico y patrimonio cultural de la PCH Paranatinga II”,

[...] que tuvo como objetivo fundamental atender los asuntos señalados por el Ministerio Público Federal/Procuraduría de la República de Mato Grosso en oficios enviados al IPHAN (oficio 187 de 26.11.04) y a la Subprocuraduría General de la República (oficio 221 de 26.11.04), incluyendo la Información Técnica registrada por la 4^a Cámara de Revisión/Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, el tres de febrero de 2005 (Nota de aclaración, septiembre de 2006).

De hecho, el Ministerio Público señaló deficiencias en los estudios para el licenciamiento de la obra pero, según pude averiguar, no hubo ninguna determinación del Mi-

4 www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2317

nisterio Público Federal para que se realizaran nuevos estudios. El oficio 187 enviado al IPHAN no solicita un análisis del componente indígena en el licenciamiento; solo señala las fallas. El oficio 221 enviado a la Subprocuraduría remite para análisis el Estudio de Impacto Ambiental. La Información Técnica n.º 021 de 2005 de la 4.ª Cámara de Coordinación y Revisión, del 3 de febrero de 2005, solo concluye que el Informe de Impacto Ambiental que permitirá el licenciamiento de la obra “tiene innumerables contradicciones e incoherencias... con insuficiencia de datos primarios, especialmente sobre las características culturales de los pueblos del área de influencia considerada”, no siendo “capaz de evaluar los posibles impactos ambientales impuestos a las comunidades indígenas del Parque del Xingú y de las tribus Parabubure y Ubawawe por no haber diagnosticado a esas comunidades en sus estudios ambientales” (p. 24).

Es evidente, pues, que en el transcurso del proceso la empresa sintió la necesidad de complementar los estudios para defender sus intereses, ya que los realizados para el licenciamiento de la obra se habían vuelto insuficientes. Eso quedó claro en la reunión de Canarana en octubre de 2004, tanto así que al final de ese año, mientras los líderes del Xingú eran llevados a Cuiabá para reunirse con representantes de la empresa y el gobierno estatal, Paranatinga S.A. encargó un laudo a Miguel Baía Brito, Samuel Vieira Cruz y Teresa de Jesús Cruz Rodrigues (“Laudo etnohistórico y evaluación jurídica y antropológica”). Ese laudo concluyó que la reivindicación indígena no tenía fundamento pero no fue suficiente para evitar que, en febrero de 2005, la justicia determinara la paralización de la obra.

Fue solo entonces que, en mayo de 2005, el IPHAN emitió el permiso de investigación (Resolución 127 del 2 de mayo de 2005) a favor de Documenta para la realización del “Programa de diagnóstico antropológico y patrimonio cultural de la PCH Paranatinga II”. Aunque he sido informado de que hubo entendimientos previos con el IPHAN para la realización del estudio, desconozco cualquier documento formal anterior a esa Resolución.

Hasta donde puedo juzgar no hay vicio formal o legal en ese proceso. Tampoco impugno la legitimidad de Paranatinga S.A. al responder, mediante un estudio, los aspectos más cuestionados por el Ministerio Público. Es un derecho de la empresa y, en Brasil, ya es un paso adelante que el tema esté siendo discutido en foros apropiados a través de los instrumentos previstos por la ley. Lo importante, sin embargo, es entender que fue la empresa la que contrató a la firma consultora y ésta presentó el proyecto de diagnóstico al IPHAN, que luego expidió un permiso de investigación. Bueno, pero ¿no es así como funciona la “arqueología de contrato”?

Como veremos más adelante el contexto que estoy analizando es ligeramente distinto. De todos modos, es hora de que se comience a discutir la legislación y las condicio-

nes en que son realizados estos estudios de manera general: ¿quién es responsable de la designación de la empresa de consultoría o del profesional que realizará estudios arqueológicos y antropológicos para esos proyectos? ¿Quién protege a los arqueólogos y antropólogos que, acaso, lleguen a conclusiones contrarias a los intereses del contratista? ¿Cuáles son los mecanismos públicos que impiden la producción de un círculo vicioso entre los contratistas y las empresas de consultoría? ¿Cuál debe ser el papel de los órganos públicos y de las asociaciones científicas en este proceso?

Estas son las preguntas que los antropólogos y arqueólogos debemos enfrentar para mejorar la legislación, garantizar el libre ejercicio de la profesión, proteger el patrimonio cultural nacional y defender a la sociedad civil, en particular a las poblaciones minoritarias, las más afectados por nuestra actuación.

¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO?

Ahora paso al carácter del estudio realizado por Documenta para Paranatinga S.A., llamado (según dice en la portada) Informe Final del “Programa de patrimonio cultural - PCH Paranatinga II” o (según la resolución del IPHAN) “Programa de diagnóstico antropológico y patrimonio cultural de la PCH Paranatinga II”. Fue criticado por haberlo llamado “laudo”. No voy a entrar en discusiones semánticas porque la definición simple de laudo, según el diccionario Houaiss, es “texto que contiene dictamen técnico”. Pero para que no se piense que se trata de un mero vicio de lenguaje de mi parte recuerdo que esa ambigüedad ya se había manifestado en la noticia de *Época* publicada el 31 de octubre de 2005, en la que Erika Robrahn-González fue identificada como “jefa del equipo, que habla en nombre de Paranatinga” y afirma que “el laudo de Paranatinga solo estará listo en enero”. Por tanto, existe una ambivalencia clara sobre la naturaleza del estudio. Pero ¿por qué ocurrió?

Lo que generalmente se denomina “diagnóstico” es un estudio hecho antes de cualquier intervención de una empresa en un sitio. Después sigue la prospección, en la cual se localizan los sitios y, acaso, se identifican aquellos que serán preservados. A partir de ahí se elabora el programa de rescate (“salvamento”) y, solo entonces, la empresa puede ser autorizada a iniciar las obras. El contexto que da origen al “diagnóstico” de Documenta es diferente. El proyecto de rescate arqueológico ya está en marcha (ECOOS — Resoluciones del IPHAN n.º 15 del 21 de enero de 2005 y n.º 171 del 9 de mayo de 2005), aunque limitado a la zona directamente afectada por la represa. Además, *la obra ya se encuentra en ejecución y hay un fuerte conflicto de intereses, que se expresa en una acción judicial. En este contexto el “diagnóstico” termina siendo, inapropiadamente, un peritaje.*

La consulta del proceso judicial demuestra, claramente, que ese desliz sí ocurrió. La “copia del recurso de apelación” (pp 48-92), del 2 de mayo, acompaña el recurso de reposición, siendo clasificada como “pieza opcional”. La apelación de Paranatinga S.A. comenta el laudo que produjo para el Ministerio Público Federal e indica que no es concluyente. Después recuerda la contratación de aún otro laudo que señaló que Morená, en la confluencia de los principales tributarios del Xingú, fue lugar del primer *quarup*. Sugiere, además, que ese habría sido el motivo por el que los indígenas aceptaran firmar el famoso “acuerdo de compromiso”:

No fue por otra razón que los líderes de las comunidades indígenas del Xingú firmaron el acuerdo de compromiso con el gobierno del Estado de Mato Grosso y la empresa, aceptando la construcción de la hidroeléctrica. El acuerdo extrajudicial resultante (“Acuerdo de compromiso”) buscó poner fin a la acción de nulidad citada por la sentencia (n.º 2004.36.00.009630-0), cuya medida cautelar a favor de la empresa se abstuvo de cumplir en pro de una solución amistosa, negociada con quienes habían entrado en su propiedad indebidamente [...]

Sin embargo, como los cuestionamientos continuaron,

[...] coherente con este pensamiento y para cumplir, de una vez por todas, cualquier exigencia de los organismos relacionados con el proyecto, *Paranatinga* *contrató nuevos estudios antropológicos y arqueológicos* y de preservación del patrimonio cultural e histórico de la región con la participación directa y efectiva y decisiva de los pueblos indígenas. El resultado final del minucioso trabajo distribuido en más de 400 páginas sopesó los laudos anteriores y los relatos de los líderes indígenas de la región para concluir la inexistencia de sitios arqueológicos en el lugar del proyecto. (p. 76; cursivas añadidas)

Finalmente, la apelación cita algunas partes del informe de Documenta, en particular la conclusión de la página 390 y el reconocimiento sobre el terreno (p. 204). Comentaré esas partes en las siguientes secciones. Por ahora solo quiero destacar cómo, *incluso antes de ser examinado por el IPHAN, el informe de Documenta ya se utilizaba en la acción judicial de Paranatinga S.A., produciendo efectos legales*. Esa es la ambigüedad. En la práctica ¿se trata de un diagnóstico o de un laudo de una de las partes?

PERITAJE, PROGRAMA, CIENCIA

Ahora comento la conclusión del informe, citada en la apelación de Paranatinga S.A. Según se lee los objetivos del estudio eran “apoyar acciones por la integridad cultural de

los pueblos indígenas que ocupan el Parque Indígena del Xingú y de las tribus Parabubure y Ubawawê”, “identificar los sitios considerados sagrados por los pueblos indígenas del Xingú (especialmente Sagihenhu, objeto de este estudio), para garantizar su preservación para las generaciones futuras”, “conocer la cultura material e inmaterial de dichos grupos indígenas con el fin de elaborar estrategias de valorización y conservación” e “identificar y caracterizar los municipios del área de influencia de la PCH” (p. 21).

El extenso informe tiene una sección conclusiva llamada “Análisis final y recomendaciones”, donde uno esperaría encontrar un resumen de las acciones necesarias para cumplir con esos objetivos loables. Pero de pronto se lee:

Cabe destacar aquí la confluencia de estudios y análisis científicos realizados para localizar el paisaje cultural relacionado con el mito de Sagihenhu que, a través de métodos relacionados con la antropología, arqueología, etnohistoria y ciencias de la Tierra, ha tenido éxito en señalar el camino conocido regionalmente como “Camino de Adelino” como el territorio en cuestión (situado 7 kilómetros aguas abajo de la ubicación del eje de la PCH Paranatinga II). *En esta identificación se contó, ciertamente, con el argumento final (y más determinante) de la propia comunidad indígena, que allí reconocieron [sic] su Sagrado.* (p. 390; cursivas añadidas).

Esta es, precisamente, la parte del informe retomada en la apelación. No es de extrañar que así sea, pues el programa de diagnóstico concluye como si fuera un peritaje técnico, capaz de determinar la ubicación exacta donde se realizó el primer *quarup*. Un laudo, según el Diccionario Electrónico Aurelio, es una “pieza escrita fundamentada en la cual los peritos exponen las observaciones y estudios que hicieron y registran las conclusiones del peritaje.” Ese peritaje “tuvo éxito” en identificar, “con su ubicación geográfica precisa” (p. 391), el “Sagrado” de la comunidad indígena con base en métodos científicos interdisciplinarios. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto (y del contexto) permite asegurar que no es posible tener certeza sobre el “éxito” proclamado. Volveré sobre este asunto más adelante.

¿Cuáles son las sugerencias del informe para lograr el objetivo de preservar ese “Sagrado” para las generaciones futuras? Puesto que parte del sitio ya está dentro de la Reserva Ecológica del Culuene “se sugiere la posibilidad de que sea ampliada en su dirección, integrando al patrimonio ambiental que preserva también el patrimonio cultural aquí identificado” (p. 392). Una propuesta similar, según lo informó la revista *Época*, había sido hecha en 2004 por Paranatinga S.A., que se disponía a adquirir y preservar un área alrededor del sitio de la represa. Esta propuesta está expresada en el punto 1.1. del acuerdo de compromiso, que dice que la empresa, “para la implementación de

actividades dirigidas a la preservación de la cultura”, se ha comprometido a “adquirir un área de hasta 50 hectáreas, elegida de común acuerdo con la comunidad indígena”.

Es necesario recordar que no estamos hablando, solamente, del patrimonio arqueológico de pueblos desaparecidos. Documenta localizó una decena de sitios arqueológicos a lo largo del río Culuene, aguas arriba del límite sur del Parque Indígena del Xingú, y registró el reconocimiento indígena de esa región como parte de su territorio cultural. Sin embargo, solamente sugiere reservar un pequeño tramo alrededor del sitio del Camino de Adelino para preservar el patrimonio cultural identificado. Pero este patrimonio ¿sería, solamente, un punto aislado en el territorio? ¿Cuál es la noción subyacente de patrimonio? ¿Qué hacer con todo el aparato teórico de la “arqueología de paisaje” que fue movilizadado en el informe?

Por último, es inevitable hacer una pregunta que no tiene que ver con el IPHAN pero sí con la FUNAI y el Ministerio Público Federal. Si, en efecto, se trata de un territorio reconocido por los indígenas y con marcas de ocupación secular, ¿no se debería aplicar el artículo 231, capítulo VIII, de la Constitución de 1988, a saber, que “son reconocidos a los indígenas... los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y garantizar el respeto de todos sus bienes”? Los derechos originales preceden el reconocimiento estatal y no se extinguen en caso de que las tierras no se hayan demarcado. ¿En qué términos, después de todo, hay que abordar la cuestión, según la Resolución 230 del IPHAN o según la Constitución Federal?

La segunda recomendación del informe es que se realice un “Programa de investigación y valoración del patrimonio cultural”, de acuerdo con la citada resolución del IPHAN. Por ello el informe sugiere la continuidad de las actividades de investigación y documentación que deben ser financiadas por Paranatinga en un ambicioso proyecto que involucra “una recopilación sistemática de la historia oral”, “estudios arqueológicos en la cuenca del Culuene”, “estudios de cultura material”, “documentación de los estudios mitológicos”, desarrollados en un “período de 10 meses, con 2 meses de trabajo de campo y los otros ocho meses de estudios y análisis” (p. 396) y también se debe “garantizar que el conocimiento generado por la investigación sea incorporado, efectivamente, por los grupos culturales implicados” (p. 394).

Es muy difícil no sorprenderse con esta propuesta. Un científico sabe que no se hace todo eso en 10 meses, mucho menos en dos meses de trabajo de campo —sobre todo tratándose de un sistema multilingüe y multiétnico como el del alto Xingú (y sin olvidar que el Parque Indígena también incluye a los ikpeng, los suyá, los kayabi y los juruna)—. Desde la década de los cuarenta investigadores de diversas instituciones nacionales e internacionales se dedican al estudio de esas culturas. Son 10 lenguas dife-

rentes (o 14, si se cuentan los dialectos), con historias diversas y variaciones culturales significativas. La propuesta es, por tanto, inaplicable. No conozco ninguna metodología en el mundo que permita hacer lo que está siendo sugerido, especialmente con la ambición de contribuir a la “comprensión de quién son ellos (los habitantes del alto Xingú) para ellos mismos” (p. 394). Así, solo puedo concluir, una vez más, que *en la ciencia de contrato lo más importante es el contrato y no la ciencia*.

ESPECIALISTAS Y ESPECIALIDADES

Antes de detenerme en el contenido del informe final quiero volver al problema de la especialización, sobre todo la del antropólogo, para la realización de laudos, peritajes o, si se quiere, programas de diagnóstico. No era mi intención juzgar el trabajo científico general de la antropóloga contratada ni desacreditarla. Solo utilicé los datos públicos del currículo Lattes para dejar en claro que no tenía ninguna experiencia de investigación o conocimiento previo sobre el tema del informe. Me parece temerario usar el título de antropólogo como un salvoconducto para realizar estudios que impliquen asuntos como este. Cuando hice la comparación con “un ortopedista que acepta realizar un informe sobre un problema neurológico” no lo hice por retórica. Estamos hablando de situaciones que implican conflictos sociales y riesgos socioambientales —no se puede improvisar en esa área—. Yo conozco la obra de Caetano Veloso pero no tengo ninguna legitimidad para apoyar estudios relativos, por ejemplo, a un conflicto sobre derechos de autor en su repertorio. Tampoco tengo conocimiento para discutir la legitimidad o legalidad de ciertas prácticas de una comunidad religiosa. Conozco bien la mitología amerindia pero no me sentiría capaz de hacer un peritaje sobre, por ejemplo, la ubicación de un sitio considerado sagrado por un pueblo melanésico solo porque también cuenta mitos.

El título de antropólogo, en particular, o de doctor, no nos da un salvoconducto para actuar como especialistas en áreas que no son las nuestras, especialmente cuando lo que escribimos tiene consecuencias sociales significativas. Insisto en que si los médicos tienen un compromiso con la vida nuestro compromiso es con las minorías con las que trabajamos y a quienes apoyamos dentro de los límites de nuestro conocimiento y de los límites impuestos por nuestro compromiso con el conocimiento.

El primer laudo encargado por Paranatinga S. A. inmediatamente después de la reunión de Canarana, en octubre de 2004, no “perjudica realmente a los indígenas” —al contrario de lo que fue sugerido en respuesta a mi primer texto— ya que carece de legitimidad académica. En veinte años de investigación en la Amazonía he enfrentado

situaciones similares. El riesgo existe, de hecho, cuando antropólogos con doctorados terminan legitimando proyectos que impactan a las poblaciones minoritarias. Por eso es necesario que no se omita la ética de los especialistas y que éstos analicen la sustancia científica de aquello que puede estar siendo oscurecido por títulos, jerga y dispositivos técnicos.

En cualquier caso, este problema debe ser tratado en el ámbito de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) y otras asociaciones científicas. Es necesario afrontarlo de frente y con valentía. Por un lado, el número de antropólogos ha crecido en los últimos años y, por otro, hay asuntos socioambientales importantes que afectarán nuestra actividad a corto plazo. Uno de estos asuntos implica, precisamente, el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Xingú. Además de las hidroeléctricas previstas para los ríos que forman el Xingú (si no recuerdo mal, un total de 6) tenemos que tomar posición frente a la construcción de Belo Monte, en el medio Xingú, un hecho que ya está movilizándolo a las comunidades indígenas de la región.

¿Es admisible que antropólogos sin conocimiento específico actúen en tales contextos? ¿Es legítimo que un antropólogo acepte consultorías encomendadas por las empresas responsables de esas obras? Si es así, ¿cómo vamos a garantizar la libertad de nuestros colegas para, llegado el caso, contrariar los intereses de los contratistas? ¿Cómo garantizar la transparencia de las contrataciones? ¿Quién debe fiscalizar y evaluar esos trabajos? La ABA tiene que estar preparada para hacer frente a estos desafíos.

Estos asuntos afectan, especialmente, a la arqueología. Hoy en día gran parte de la arqueología brasileña es realizada gracias a los contratos de “rescate”. Yo no estoy en contra de esta actividad; es necesaria y los arqueólogos deben cumplir la función que les corresponde para garantizar el patrimonio cultural. Pero deben entender, en primer lugar, que su compromiso básico es con ese patrimonio y no con el contratista; segundo, que la disciplina científica no puede acomodarse a los estándares de la actividad del contrato, realizada con plazo y por pedido. *Si toda la arqueología fuera de contrato no se perdería solo en el conocimiento; también se perdería la legitimidad para actuar en la preservación del patrimonio.* ¿O es que en Brasil el contrato se convirtió en un fin en sí mismo?

Los arqueólogos deben, además, dedicarse a mejorar la legislación, como hicieron los antropólogos, junto con otros actores sociales, durante la Asamblea Constituyente, hecho que dio lugar a una de las constituciones más avanzadas del mundo en materia de derechos de los pueblos autóctonos. Es necesario establecer normas más estrictas para el licenciamiento y mecanismos de control social sobre la calidad de los trabajos realizados. Debemos tratar de hacer *más públicos y más transparentes* los mecanismos de elección de las empresas de consultoría y los resultados resultantes de esas actividades.

La ABA y la SAB (Sociedad Brasileira de Arqueología) deben tomar la iniciativa en este proceso. Necesitamos un código de ética que establezca límites a lo que se puede y no se puede hacer en esta área. Por un lado, debemos enfrentar la proliferación de la “industria de laudos” en antropología; por otro, hay que regular las actividades contractuales que ahora representan gran parte de la investigación arqueológica en Brasil. La omisión en este asunto equivale a penalizar a las poblaciones minoritarias, poner en peligro el patrimonio cultural y desacreditar nuestra actividad científica.

FINALMENTE, ¿DÓNDE QUEDA SAGIHENGU?

La respuesta es compleja. En el informe queda claro que hay dos puntos del Culuene en los que se encuentran formaciones rocosas características que son identificadas por los indígenas como marcadores de su cartografía sagrada: “Uno, en menor medida, en el eje de la PCH Paranatinga II; y otro siete kilómetros en línea recta aguas abajo, llamado Chorrera de Avelino” (p. 180). En la página 187 se informa que en la región se encontraron diez sitios arqueológicos, dos de ellos asociados con el camino junto al eje de la represa. Los sitios denominados Culuene 1 y Culuene 2 “están asociados con uno de los dos escenarios del Taugi Ogo y Sagihengu, es decir, el área del eje de la PCH Paranatinga II”. En la página 193 se refuerza el hecho de que “los caminos de la Chorrera de Adelino y del eje de Paranatinga II tienen características favorables para la constitución del paisaje cultural de Taugi-ogogu (o Ogo) y, por asociación, de Sagihengu”. A partir de la página 199, sin embargo, el informe comienza a comparar los dos sitios y a inclinarse por la ubicación del sitio en el Camino de Adelino. En la página 204, finalmente, se decide por este último con base en el reconocimiento sobre el terreno de los líderes Kalapalo —esta es una de las partes del informe a que hace referencia la apelación—.

Los autores del estudio señalan que este es el hecho decisivo: “En esta identificación se contó, ciertamente, con el argumento final (y más determinante) de la propia comunidad indígena, que allí reconocieron [*sic*] su Sagrado” (p. 390). El argumento también se recoge en la apelación, donde se lee que en ese trabajo hubo la “participación directa y efectiva y decisiva de los pueblos indígenas” (p. 76). Según el informe los líderes que hicieron el reconocimiento fueron “elegidos por 12 etnias del alto Xingú durante la reunión general en el Puesto Leonardo” el 25 de noviembre de 2005. Sin embargo, el informe no anexa el acta de esa reunión.

Puesto que ese hecho fue considerado decisivo en la ubicación del sitio en mi texto anterior cité una parte de la “entrevista” con uno de esos líderes, ocurrida durante el reconocimiento sobre el terreno. No la voy a citar de nuevo pero invito a los interesa-

dos a leer, atentamente, las páginas 128 y 136 del informe, donde se transcribieron las entrevistas. Les pido que consideren, también, las conclusiones derivadas de ellas. Seamos francos: si estas entrevistas representan el “método de la antropología”, estamos en problemas. Eso ya sería preocupante si se tratara de un artículo académico pero es muy grave tratándose de un trabajo con tal impacto socioambiental.

Está claro, pues, que *no* pellizqué una parte cualquiera del informe, una parte poco feliz, sin importancia para el contexto global. Seleccioné las partes que los autores (y los abogados de Paranatinga) consideran decisivas para llegar a la conclusión final, a saber, que el lugar sagrado no se encuentra en el eje de la represa sino siete kilómetros aguas abajo. En el informe, sin embargo, no hay entrevistas similares realizadas en el sitio de la PCH Paranatinga II, aunque se diga que los líderes fueron llevados primero allí, “tratando de proporcionar elementos de referencia y comparación” (p. 127). Tampoco se tiene en cuenta la posibilidad de que gran parte de esa formación rocosa ya hubiese sido destruida. El informe, que contiene cientos de fotos a color, no incluye imágenes panorámicas de la construcción. Solo incluye imágenes puntuales (véanse las fotos de la p. 191, fechadas el 20 de octubre de 2005).

Afortunadamente, en su “Nota de aclaración” Erika Robrahn-González nos tranquiliza afirmando que “el camino asociado al eje de Paranatinga II no fue destruido y todavía está muy bien preservado, aunque el agua no corra por su lecho” (p. 23). Pero si es así, ¿por qué, entonces, no se realizaron entrevistas en el lugar con los líderes indígenas o, por lo menos, no se transcribieron en el informe? ¿Qué hubiese sucedido si los indígenas también hubieran afirmado que era el lugar del primer *quarup* o que los dos lugares hacen parte de un mismo complejo?

No estoy sacando conclusiones sobre la ubicación exacta de Sagihengu; solo estoy mostrando que nada garantiza que el estudio lo haya situado con precisión geográfica. Si el reconocimiento sobre el terreno es el factor decisivo hay que tener en cuenta que los pueblos del Xingú parecen estar en desacuerdo con la interpretación del estudio. Tanto es así que en junio de 2006, dos meses después de la finalización del informe, unos 200 indígenas ocuparon las obras de construcción de la PCH Paranatinga pidiendo su demolición y la declaratoria de protección de Sagihengu.

Por último, un antropólogo no puede ignorar el contexto en el que lleva a cabo su trabajo. Se sabe, como ya se ha informado en la prensa, que la actuación de la empresa y el gobierno del Estado junto con los líderes indígenas ha provocado diferencias internas en el Parque Indígena del Xingú. Algunos consideran que la represa es un hecho consumado y que solo deben hacer cumplir las promesas contenidas en el acuerdo de compromiso firmado en 2004 mientras que otros piensan que no pueden cambiar la

protección de los sitios sagrados y del medio ambiente por dádivas de corta duración. Por consiguiente, la situación es compleja. En resumen, todo lo que se puede decir acerca de la ubicación de Sagihengu es que el estudio de Documenta *escogió entre dos posibilidades y que esta elección se basó en estrategias diferentes de elucidación conforme al sitio en cuestión.*

¿PERO ESO ES TODO?

El problema no solo involucra la relación entre los pueblos indígenas y los referentes culturales marcados en el espacio. También es un problema ambiental de interés nacional. El Informe de Impacto Ambiental que permitió el licenciamiento de la obra fue muy criticado por el Ministerio Público y fue considerado insuficiente según la Información Técnica n.º 021 de 2005 de la 4.ª Cámara de Coordinación y Revisión. Se desconocen los impactos ambientales reales en la región. Hay muchas dudas sobre las medidas de mitigación propuestas por Paranatinga S.A., inclusive sobre la eficiencia de la llamada “escalera de peces” que tendría como objetivo garantizar su desove y reproducción. En un artículo publicado en *Noticias Sociambientais* el 13 de noviembre de 2006 Juárez Pezzuti, de la Universidad Federal de Pará y que participó en los estudios de Documenta, afirma que “los impactos negativos [de la represa] sobre la pesca son sustanciales” y que “no existe comprobación de la efectividad de los sistemas de transposición, inclusive de la escalera de peces”.

No me aventuro en ese campo porque no tengo la competencia para hacerlo. Pido a los especialistas que examinen el problema y se pronuncien, públicamente, como lo hizo Juárez Pezzuti. De todos modos, me parece que se trata de un asunto de sentido común: obras como ésta, que afectan una cuenca hidrográfica interestatal de la importancia del Xingú y que atraviesa numerosas tierras indígenas que son de dominio de la Unión, deben estar autorizadas por el Ibama y no por las fundaciones estatales del medio ambiente, como ocurrió en este caso.

Por último, no se puede olvidar el contexto socioambiental general. El momento es decisivo para la supervivencia de la cuenca del Xingú. La región de los ríos que lo forman ya ha sido muy afectada por la tala de la vegetación ribereña, la sedimentación y la contaminación con pesticidas. Debemos revertir ese proceso o sus efectos adversos —sociales, ambientales y económicos— se sentirán pronto. La campaña *sos Xingú* o *Ykatu* (“agua buena”, en tupí) representa una esperanza. Pero impedir la degradación del medio ambiente en la región, que no solo interesa a los indígenas, depende de todos nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros piense y sopesa las consecuencias de sus acciones.

Hay mucho en juego en esa disputa: el destino de las minorías, la preservación del medio ambiente, la expansión de la base energética de Brasil, la expansión de la agroindustria, el papel de las empresas y de las agencias gubernamentales. En este contexto macro la antropología y la arqueología están llamadas a realizar, dentro de los límites de sus conocimientos, tareas técnicas que pueden influir la toma de decisiones en una dirección u otra. Por esa razón no podemos permitirnos el lujo de la frivolidad ni eludir nuestras responsabilidades.

SOBRE LOS AUTORES

Patricia Ayala es arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en Antropología de la Universidad Católica del Norte. Sus temas de interés son la patrimonialización, las políticas del pasado, el multiculturalismo neoliberal, las relaciones entre pueblos indígenas y arqueólogos, la historia de la arqueología, así como las arqueologías pública, colaborativa, descolonial, indígena y relacional. Actualmente es investigadora asociada del Abbe Museum en Bar Harbor. Junto a su esposo David y sus hijos Sabattus y Natanis, vive en la Reserva Passamaquoddy de Sipayik, en el noreste de Estados Unidos.

Marcia Bezerra es licenciada en Arqueología de la Faculdades Integradas Estácio de Sá, magíster en Historia Antigua y Medieval de la Universidade Federal do Rio de Janeiro y doctora en Arqueología de la Universidade de São Paulo. Es profesora en el programa de posgrado en Antropología de la Universidade Federal do Pará y profesora asociada en el Departamento de Antropología de la Indiana University. Fue presidenta de la Sociedad Brasileña de Arqueología (SAB) (2013-2015) y representante de América del Sur en el Congreso Arqueológico Mundial (WAC) (2008-2016). Desde el 2001 se dedica al estudio de las relaciones entre arqueología, arqueólogos y comunidades locales. En el 2008 comenzó a investigar el estatuto de las cosas del pasado en la vida de las personas en la actualidad, con énfasis en la Amazonía paraense.

Jorge Eremites de Oliveira es profesor de la Universidade Federal de Pelotas e investigador del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Tiene experiencia en las áreas de la etnoarqueología, la etnología indígena y la etnohistoria, así como en la producción de laudos administrativos y judiciales sobre tierras indígenas. Es autor de varios trabajos publicados en Brasil y en otros países como Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Portugal y Uruguay. Parte de su producción intelectual está disponible en Academia.edu.

Adriana Schmidt Dias es profesora del Departamento de Historia de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y del posgrado en Antropología y Arqueología de la Uni-

versidade Federal de Pelotas (Brasil). Es investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Sus áreas de interés son la arqueología precolonial suramericana, la historia indígena de Brasil y las políticas patrimoniales.

Carlos Fausto es profesor de antropología en el Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, además de investigador-becario del CNPq y de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Desde 1988 realiza investigaciones entre poblaciones indígenas de la Amazonía. Es autor de *Os índios antes do Brasil* (Jorge Zahar Editor, Río de Janeiro, 2000), *Inimigos fiéis. História, guerra e xamanismo na Amazônia* (EDUSP, São Paulo, 2001) y *Warfare and Shamanism in Amazonia* (Cambridge University Press, Cambridge, 2012). Coeditó, con Michael Heckenberger, *Time and Memory* (University Press of Florida, Gainesville, 2007); con Carlo Severi, *L'image rituelle* (Cahiers 10 d'Anthropologie Sociale, París, 2014) y *Paroles en images. Écritures, corps et mémoires* (OpenEdition Press, Marsella, 2016); y con Marc Brightman y Vanessa Grotti, *Ownership and Nurture. Studies in Native Amazonian Property Relations* (Berghahn, Nueva York, 2016).

Cristóbal Gnecco es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, donde trabaja sobre economía política de la arqueología, geopolíticas del conocimiento y discursos sobre la alteridad. Recientemente editó los libros *Ethics and Archaeological Praxis* (Springer, Nueva York, 2014), con Dorothy Lippert, y *Challenging the Dichotomy: The Licit and the Illicit in Archaeological and Heritage Discourses*, con Les Field y Joe Watkins (University of Arizona Press, Tucson, 2016). Acaba de publicar *Antidecálogo. Diez ensayos (casi) arqueológicos* (Universidad del Cauca-JAS Arqueología-Ediciones del Signo, Popayán-Madrid-Buenos Aires, 2017) y, junto con Nick Shepherd y Alejandro Haber, *Arqueología y decolonialidad* (Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2016).

Alejandro Haber es arqueólogo y antropólogo argentino de la Universidad Nacional de Catamarca y Conicet. Su foco regional está en los Andes y está interesado en la colonialidad, tal y como se encuentra codificada por las disciplinas académicas. Ahora está involucrado en in-disciplinar a la arqueología como una no metodología para la investigación cultural y social.

Yannis Hamilakis es profesor de arqueología y de estudios griegos modernos en Brown University, Estados Unidos. Durante el periodo 1996-2000 enseñó en University of Wales Lampeter y entre el 2000 y el 2016 en University of Southampton. Investiga y

escribe sobre las políticas de la arqueología y el patrimonio, sobre arqueología sensorial, sobre prácticas decoloniales y sobre las relaciones entre fotografía y arqueología. Sus libros recientes incluyen *Arqueología y los sentidos. Experiencia, memoria y afecto* (IAS Arqueología, Madrid, 2015) y, con Fotis Ifantidis, *Camera Calaurea: An Archaeological Photo-Ethnography* (Archaeopress, Oxford, 2016). Codirige el proyecto Koutroulou Magoula de arqueología, etnografía arqueológica y etnografía.

Richard Hutchings es director-fundador del Institute for Critical Heritage and Tourism en Columbia Británica, Canadá, y autor de varios artículos sobre arqueología aplicada y manejo del patrimonio, incluyendo “Teaching Anti-colonial Archaeology” (*Archaeologies* 10(1):27-69, 2014), “Commercial Archaeology in British Columbia” (*The Midden* 44(2):8-16, 2012), “Why Archaeologists Misrepresent their Practice” (*Journal of Contemporary Archaeology* 2(2):S11-S17, 2015) y “What Makes us Squirm: A Critical Assessment of Community-Oriented Archaeology” (*Canadian Journal of Archaeology* 40(1):164-180, 2016), escritos con Marina La Salle. Su libro *Maritime Heritage in Crisis: Indigenous Landscapes and Global Ecological Breakdown* (Routledge, Londres, 2016) es parte de la serie *Archaeology and Indigenous Peoples*, del World Archaeological Congress.

Ivana Carina Jofré es indígena descendiente warpe, licenciada en arqueología y doctora en Ciencias Humanas (con mención en Estudios Sociales y Culturales) de la Universidad Nacional de Catamarca. Cursó seminarios de formación de posgrado en Argentina y Senegal y realizó estudios posdoctorales en la Universidad del Cauca, en colaboración con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y es profesora en la Universidad Nacional de La Rioja. Integra el Colectivo Cayana. Es fundadora y presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología (Ceiaa) y coordinadora de proyectos del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de San Juan. También es miembro fundador de la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio (Ridap). En los últimos años dedicó sus investigaciones al estudio de los impactos socioculturales de la megaminería, la producción de conocimientos en territorios fronterizos y a las materialidades arqueológicas de la violencia política producida por el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Marina La Salle es profesora de antropología en Vancouver Island University, Canadá, y directora-fundadora del Institute for Critical Heritage and Tourism. Es autora

de varios artículos académicos sobre arqueología comunitaria y manejo del patrimonio, incluyendo “Community Collaboration and Other Good Intentions” (*Archaeologies* 6(3):401-422, 2010), “Teaching Anti-colonial Archaeology” (*Archaeologies* 10(1):27-69, 2014), “Commercial Archaeology in British Columbia” (*The Midden* 44(2):8-16, 2012), “Why Archaeologists Misrepresent their Practice” (*Journal of Contemporary Archaeology* 2(2):S11-S17, 2015) y “What Makes Us Squirm: A Critical Assessment of Community-Oriented Archaeology” (*Canadian Journal of Archaeology* 40(1):164-180, 2016); estos cuatro últimos en colaboración con Rich Hutchings.

Carlos Marín es doctor en Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado trabajos de investigación sobre la prehistoria reciente del norte de la península ibérica, así como sobre las trazas materiales de conflictos contemporáneos (arqueología de la Guerra Civil española y el franquismo). También ha trabajado en arqueología de contrato en numerosas ocasiones. Ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de investigación arqueológica en África (Etiopía y Guinea Ecuatorial), dirigidos por Alfredo González Ruibal, y en Suramérica, vinculados a las trazas materiales del terrorismo de Estado (Uruguay, Argentina y Chile), como parte de un contrato de investigación posdoctoral en Uruguay.

Eva Parga Dans es socióloga y doctora en economía. Su trayectoria de investigación se ha centrado en las implicaciones socioeconómicas de la gestión del patrimonio cultural. Concretamente, analizó la emergencia y desmoronamiento de la arqueología comercial en España durante el periodo 2006-2016. Actualmente es investigadora posdoctoral de la Xunta de Galicia (España), adscrita al Grupo de Estudios Territoriales, Universidade da Coruña, y al Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociales, Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA), y continúa estudiando las dinámicas patrimoniales y sectoriales estratégicas para las personas y el territorio, en esta ocasión a través del caso vitivinícola en Galicia y Portugal.

Loredana Ribeiro es arqueóloga e historiadora y profesora en el Departamento de Antropología y Arqueología y en el posgrado en Antropología de la Universidade Federal de Pelotas. Comenzó su carrera en arqueología investigando ocupaciones precoloniales en el centro de Brasil. Actualmente sus estudios se centran en la relación entre el género y el mundo material en el siglo XIX (arqueología histórica) y en la minería colectiva tradicional (etnoarqueología).

Nick Shepherd es profesor asociado de arqueología y estudios africanos en la University of Cape Town, donde dirige el posgrado en Patrimonio y Cultura Pública en África. Ha publicado numerosos artículos sobre arqueología y sociedad en África y sobre historia y patrimonio público. Sus libros recientes son *After Ethics: Ancestral Voices and Postdisciplinary Worlds in Archaeology* (Springer, Nueva York, 2014), coeditado con Alejandro Haber; *The Mirror in the Ground: Archaeology, Photography and the Making of a Disciplinary Archive* (Centre for Curating the Archive, Ciudad del Cabo, 2015); y *Arqueología y decolonialidad*, con Cristóbal Gnecco y Alejandro Haber (Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2016).

Fabiola Andrea Silva es profesora del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidade de São Paulo e investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ha escrito varios artículos, publicados en Brasil y en el exterior, sobre etnoarqueología, etnología indígena, cultura material y curaduría de colecciones etnográficas. Desarrolla investigaciones arqueológicas en tierras indígenas de los estados de Mato Grosso y Pará entre los pueblos asurini del Xingú, terena y kayabi.

Nicolas Zorzin recibió su doctorado en arqueología en el 2011 en la University of Southampton, en el Reino Unido. En el 2011 fue nombrado profesor de Ética en Arqueología en el Departamento de Historia de la Université Laval, en Quebec. Entre el 2012 y el 2015 participó en varios programas de investigación para estudiar la economía política de la arqueología mundial contemporánea. Desde el 2009 está trabajando en el Proyecto Arqueológico Koutroulou en Grecia Central. Recientemente ha ganado la beca Taiwán MOFA (Ministry of Foreign Affairs) y ahora enseña arqueología pública en la Universidad Nacional de Taiwán, en Taipei.

La arqueología de contrato —es decir, la arqueología pagada por las empresas por medio de contratos de servicio para cumplir con las exigencias de las leyes ambientales— es un fenómeno relativamente reciente que ha tenido un tremendo impacto global, tanto así que un porcentaje mayoritario de quienes hacen arqueología en el mundo trabaja para ese mercado creciente. La arqueología de contrato ha dado lugar a profundas transformaciones curriculares: han surgido programas de pregrado de corta duración (no más de tres años) y énfasis técnico para producir en masa arqueólogos que satisfagan las exigencias de una agresiva expansión capitalista en varios campos (la infraestructura para transporte y la minería son los más salientes, pero no los únicos). En el proceso, los vínculos entre la arqueología y la antropología, ya débiles, han sido prácticamente cortados. Los efectos colaterales de la entrega de la arqueología al mercado de contrato han sido varios: se ha cancelado una actitud crítica hacia el orden global, se ha profundizado la conversión del pasado y el patrimonio en mercancía y, asimismo, ha disminuido la posibilidad de que la disciplina deje atrás su orden jerárquico y colonial. La relación manifiesta de la arqueología de contrato con el desarrollo, el descendiente contemporáneo de la teleología del tiempo occidental, profundiza la larga relación de la disciplina con la modernidad. No la traiciona. De hecho, las críticas que ha recibido la arqueología de contrato están dentro de los límites de la práctica disciplinaria, es decir, se mide y se juzga por lo que es (o no es) desde una perspectiva disciplinaria, incluso profesional, por lo general vinculada a la retórica de la ciencia. Rara vez es medida y juzgada desde un punto de vista contextual, como hacen los artículos reunidos en este libro, cuyos autores buscan posicionarse ante una práctica que creen perjudicial para la arqueología, por no decir para la vida de mucha gente y el destino de la naturaleza. Por eso no ofrecen una visión balanceada de la arqueología de contrato sino la perspectiva posicionada que mejor sirve a una reflexión crítica y transformadora.

